



ADAPTACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Propuesta de mejora de gestión administrativa de la Agencia Valenciana de Movilidad a través de la adaptación de sus procedimientos a la Administración Electrónica y a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

E-GOV

Director: *Vicent Giménez Chornet*
Autor: *Marcelino García Giménez*



AGRADECIMIENTOS:

Mi agradecimiento a las personas que me han facilitado la elaboración de este Trabajo Fin de Carrera, en especial a mi pareja Noelia Palma Torres por su paciencia al consentir que le quitase tiempo de dedicación a ella para invertirlo en la redacción de este trabajo. A mi jefe del Área Económico Administrativa de la aVM, F. José Moltó Orduña por su apoyo y confianza incondicional. A Gregorio Haro Javaloyes, jefe del Área de Sistemas de Peaje, Comunicaciones e Informática de la aVM, sin cuyo apoyo y ayuda no habría conseguido terminar este proyecto y como no, a mi Director de TFC, Vicent Giménez Chornet por su trabajo y sus enseñanzas.

Citar como: **GARCÍA GIMÉNEZ**, Marcelino (2012). *Adaptación de la Agencia Valenciana de Movilidad a la Administración Electrónica*. Director: Vicent Giménez Chornet. Universidad Politécnica de Valencia. Gestión y Administración Pública.

ÍNDICE:

CAPÍTULO 1. PRÓLOGO.....	1
1.1. Introducción:	1
1.2. Objeto	3
1.3. Objetivos.....	3
1.4. Metodología	4
1.5. Justificación de las asignaturas relacionadas	5
CAPÍTULO 2. la administración electrónica	7
2.1. Marco Normativo europeo.....	7
2.1.1. Plan de acción sobre Administración Electrónica i2010	9
2.1.2. Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015	13
2.2. Marco Normativo estatal.....	18
2.3. Marco normativo autonómico	26

PARTE I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA aVM

CAPÍTULO 3. La Agencia Valenciana de Movilidad	30
3.1. Marco normativo	30
3.2. Ámbito territorial.....	30
3.3. Competencias	31
3.3.1. Transporte de viajeros en autobús.....	31
3.3.2. Transporte de viajeros en taxi	37
3.4. Sistemas de peaje	37
3.5. Gestión documental	38

PARTE II: PROPUESTA DE MEJORA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO 4. EL ARCHIVO	39
4.1. Inventario del archivo.....	39
4.2. Catálogo del archivo	40
4.3. Gestión del archivo	41
4.4. Valoración de riesgos.....	42
4.5. Comisión de valoración documental	42

4.6. Tabla de valoración documental	42
CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.....	43
5.1. Catálogo de procedimientos administrativos	43
5.2. Formularios normalizados	44
CAPÍTULO 6. INTEROPERABILIDAD	44
6.1. Interoperabilidad con otras Administraciones autonómicas.....	45
6.2. Interoperabilidad con la Administración General del Estado	45
CAPÍTULO 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.....	46
7.1. Gestor Documental.....	46
7.2. Seguridad	47
7.3. Sede electrónica	49
7.4. Registro electrónico.....	50
7.5. Carpeta ciudadano.....	52
7.6. Notificación electrónica.....	53
7.7. Pasarela de pagos	55
7.8. Trámite telemático de expedientes	55
CAPÍTULO 8. CONDICIONES ECONÓMICAS	56
8.1. Servicios	56
8.2. Software.....	57
8.3. Hardware	57
8.4. Totales	57
CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES y recomendaciones.....	58
9.1. Conclusiones	58
9.2. Recomendaciones.....	59
BIBLIOGRAFÍA	60

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES, TABLAS Y FIGURAS:

ILUSTRACIÓN 1: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES.....	8
ILUSTRACIÓN 2: PERSONAS QUE USAN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA POR PAÍS, PERIODO Y PROPÓSITO.....	9
ILUSTRACIÓN 3: COMUNICACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES DE TRABAJADORES EMIGRANTES.	16
ILUSTRACIÓN 4: LISTADO DE CONCESIONES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. .	32
ILUSTRACIÓN 5: MODELO DE INTERFACE DE BÚSQUEDA DEL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DE LA AVM	43
ILUSTRACIÓN 6: EJEMPLO DE BUSCADOR DEL GESTOR DOCUMENTAL.....	46
ILUSTRACIÓN 7: EJEMPLO DE DATOS DE REGISTRO ELECTRÓNICO.....	51
ILUSTRACIÓN 8: EJEMPLO DE BUZÓN DE DOCUMENTOS REGISTRADOS DE LA CARPETA CIUDADANO.	52
ILUSTRACIÓN 9: COSTE DE LOS SERVICIOS.	56
ILUSTRACIÓN 10: COSTE DE LOS PRODUCTOS DE LA MEJORA.	57
ILUSTRACIÓN 11: COSTE DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA.	57
ILUSTRACIÓN 12: COSTE TOTAL DE LA MEJORA.	57

ÍNDICE DE ANEXOS:

ANEXO I

AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA	62
--	----

ANEXO II

LEY DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.....	79
---	----

ANEXO III

LEY DE MOVILIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA	113
---	-----

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS:

<i>24/7</i>	<i>Veinticuatro horas al día, los siete días de la semana</i>
<i>AEAT</i>	<i>Agencia Tributaria</i>
<i>AGE</i>	<i>Administración General del Estado</i>
<i>Back office</i>	<i>Tareas administrativas que se efectúan de forma transparente para la ciudadanía</i>
<i>DOCV</i>	<i>Diario Oficial de la Comunidad Valenciana</i>
<i>eAdministración</i>	<i>Administración Electrónica</i>
<i>eIDM</i>	<i>Gestión interoperable de la identificación electrónica</i>
<i>ENI</i>	<i>Esquema Nacional de Interoperabilidad</i>
<i>ENS</i>	<i>Esquema Nacional de Seguridad</i>
<i>FAQ</i>	<i>Preguntas Frecuentes</i>
<i>Front office</i>	<i>Tareas administrativas que son visibles por la ciudadanía</i>
<i>GVA</i>	<i>Generalitat Valenciana</i>
<i>INE</i>	<i>Instituto Nacional de Estadística</i>
<i>LAECSP</i>	<i>Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.</i>
<i>LAECV</i>	<i>Ley de la Administración Electrónica en la Comunidad Valenciana</i>
<i>LRJAPPAC</i>	<i>Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.</i>
<i>PAI</i>	<i>Plan de actuación integral</i>
<i>PIB</i>	<i>Producto Interior Bruto</i>
<i>PYME</i>	<i>Pequeña y Mediana Empresa</i>
<i>SOA</i>	<i>Arquitecturas orientadas al Servicio</i>
<i>TIC</i>	<i>Tecnologías de la Información y la Comunicación</i>
<i>UE</i>	<i>Unión Europea</i>
<i>UPV</i>	<i>Universidad Politécnica de Valencia</i>
<i>Workflow</i>	<i>Carga de trabajo administrativo de los procedimientos</i>

CAPÍTULO 1. PRÓLOGO

1.1. INTRODUCCIÓN:

Las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC), han llegado a un punto muy avanzado de desarrollo e integración en la sociedad, hace veinte años poca gente tenía ordenador en casa y hace sólo diez años casi nadie tenía teléfono móvil, hoy en día la mayoría tienen no sólo un ordenador en casa sino varios, más un Smartphone y en algunos casos una Tablet, y en la mayor parte de los casos, todos con conexión inalámbrica a internet. Esta expansión de la tecnología era ineludible aplicarla a la Administración pública en su gestión diaria y también en sus relaciones con la ciudadanía.

La chispa que desencadenó la realización de este trabajo, se dio por dos factores determinantes, uno es el estar cursando la titulación universitaria de diplomado en Gestión y Administración Pública en la Universidad Politécnica de Valencia, en esa carrera he observado las mejoras que pueden impulsar las TIC en la Administración pública, no sólo en su gestión administrativa interna sino también en las relaciones con la ciudadanía facilitando su participación en los asuntos públicos. Como ejemplo nos puede servir el poder contactar con las autoridades políticas a través de las redes sociales, hoy en día la mayoría de autoridades están en las redes sociales, en Facebook y twitter podemos encontrar no sólo a la Generalitat como perfil genérico sino además a la mayoría de las Consellerias y empresas del sector público, la ciudadanía tiene la posibilidad incluso de ver el perfil público en Facebook de un Conseller y dejar un comentario en su muro o enviarle un Twit en tiempo real. Esto representa un gran avance en las relaciones de la Administración con la ciudadanía.

El otro factor que ha influido en la decisión de optar por este trabajo, es el hecho de estar prestando mis servicios en la Agencia Valenciana de Movilidad (aVM) desde que se creó en 2001. La aVM es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia, sujeta en alguna de sus actuaciones al derecho privado. Depende directamente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA).

Cuando se creó la aVM, heredamos de la Dirección General de Transportes su forma de gestionar los trámites administrativos, los responsables procedían de esa Dirección General y era lógico seguir con el mismo procedimiento. Esto sucedió en el año 2001, en esos primeros años del sXXI, no se contemplaba la Administración electrónica pues eran pocos los hogares con ordenador y menos los que tenían conexión a internet. Durante los once años siguientes de funcionamiento de la aVM se optimizaron muchos de sus trámites haciéndolos mucho más eficaces y eficientes pero sin utilizar posibilidades que ofrecían las TIC.

A finales de 2010, se publicó el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. La aVM no había informatizado la mayoría de sus trámites y no se disponían de medios técnicos ni humanos para adaptarse a las exigencias del Decreto, por ejemplo, el artículo 5 prohíbe expresamente la petición de fotocopia del DNI (entre otros), a la ciudadanía en sus trámites con la Administración.

Los responsables de la aVM me encargaron gestionar la adaptación al Decreto denominado Plan SIRCA. Organicé una Comisión de trabajo compuesta por un responsable de cada servicio de la aVM, con reuniones ordinarias cada dos meses. También nos reunimos con el órgano competente en la materia de la Generalitat que en ese momento era la Dirección General de Modernización, hoy Dirección General de Tecnologías de la Información, así como con la Autoridad de Certificación de la Comunitat Valenciana (ACCV). A finales de 2011 ya habíamos cumplido con el 95% del plan SIRCA.

Durante esos contactos con las distintas Administraciones, surgió la idea de ir más allá del Plan SIRCA y adaptar la aVM a la Administración Electrónica dando un salto cualitativo en la gestión administrativa y en las relaciones con la ciudadanía. Debo agradecer el apoyo prestado por Gregorio Haro Javaloyes, Jefe del Área de Sistemas de Peaje, Comunicaciones e Informática de la aVM, que me apoyó en esta iniciativa consiguiendo concertar las reuniones con las empresas tecnológicas especializadas en implantar la Administración electrónica a las que también asistió para darme soporte. También nos sirvió de gran ayuda, tanto a mí como al proyecto, la colaboración desinteresada de Vicent Giménez Chornet en los inicios del proyecto, iluminándonos con sus conocimientos sobre la materia en aquellos primeros pasos, aceptando la dirección de este trabajo fin de carrera.

Fueron más de veinte reuniones con empresas tecnológicas a lo largo de 2011, más las reuniones de la Comisión, ordinarias y extraordinarias. He incluido en el presupuesto de esta mejora sólo las horas aproximadas que se pueden invertir al redactar el trabajo, seguro que son muchos más los recursos y el esfuerzo invertidos en este proyecto, pero se hizo con la ilusión de hacerlo realidad y ponerlo algún día en producción.

1.2. OBJETO

El objeto de este trabajo es un documento que recoge las investigaciones realizadas para implantar la Administración electrónica en la aVM, esa implantación consiste en cumplir con lo dispuesto en la Ley 3/2010 de Administración electrónica. El documento consta de 180 páginas que incluyen en el inicio un índice general, uno de imágenes, uno de anexos y un glosario de abreviaturas y acrónimos. En el interior del documento encontraremos varias tablas, imágenes y gráficos, algunos de elaboración propia y otros fruto de la investigación realizada.

Al final del documento, además de las conclusiones, podemos encontrar la bibliografía que incluye todas las fuentes usadas por si es necesario indagar en profundidad sobre alguno de los aspectos del trabajo.

También se adjuntan al final del trabajo, tres anexos que he creído conveniente que estuviesen presentes en el documento final para posibles consultas del lector, no he considerado necesario incluir toda la normativa que afecta a la mejora, pero si la más relevante como es la Ley 3/2010 de la Administración electrónica, la Ley 6/2010 de Movilidad por la que se crea la aVM y donde están reflejadas sus competencias y una auditoría de gestión realizada por la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana sobre el grado de implantación de la Administración electrónica en la Comunitat Valenciana, ese informe es muy actual al estar realizado en el año 2012.

Este informe constara de varias copias, como establece la normativa de los Trabajos Fin de Carrera de la UPV, más una en formato digital también entregaré copia a la aVM para su archivo en la biblioteca de la entidad.

1.3. OBJETIVOS

Resulta difícil resumir los objetivos que pretendo con la realización de este trabajo de investigación, voy a tratar de resumirlos en dos objetivos principales, uno sería el objetivo académico que me conducirá, si el trabajo es aprobado, a titularme en Gestión y Administración Pública. El otro objetivo es profesional, con el propósito de ponerlo en funcionamiento, efectuando la mayor parte de la mejora propuesta.

Respecto al objetivo académico, intentaré con este trabajo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, efectuando una propuesta lo más profesional posible, que sea claro y de fácil lectura, pero a la vez riguroso y realizable.

Durante la redacción de esta mejora, a través de los procesos de investigación y las entrevistas con expertos en la materia, pretendo terminar de adquirir esos conocimientos que sólo un ejercicio práctico de las materias estudiadas pueden darte.

Por poner un símil que pueda servir de ejemplo, en palabras de la profesora Ester Guijarro de la asignatura de Gestión Administrativa II, “el trabajo final de carrera es como meter todos los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas en una coctelera y moverla hasta conseguir una mezcla homogénea de aspecto profesional”.

El segundo objetivo es el profesional, que no es otro que lograr poner en marcha la mejora propuesta haciéndola efectiva. Trataré, a lo largo de este documento, de describir cada una de las partes de la mejora de forma detallada, analizando la normativa que regula cada uno de sus aspectos y exponiendo cómo debería llevarse a cabo para cumplir con la legalidad vigente. Conseguir llevar a buen puerto este proyecto, poniendo en marcha la propuesta, sería haber logrado hacer realidad este objetivo.

1.4. METODOLOGÍA

Para realizar este trabajo fin de carrera, el primer movimiento fue decidir una mejora de gestión administrativa que se pudiese aplicar a una Administración, que mejorase sustancialmente su eficiencia y que pudiesen verse implicadas la mayor parte de las asignaturas cursadas durante la carrera. Una vez decidido el tema, lo propuse a quien consideré más indicado de entre mis profesores para dirigir mi TFC. A continuación elaboré una propuesta de TFC que incluía un índice, seguido de una pequeña introducción y una relación de las asignaturas relacionadas. Esa propuesta se entregó a la Comisión de Trabajos Fin de Carrera el 31 de enero de 2012, siendo aceptada en su reunión de 09 de febrero de 2012, según consta en el oficio que me remitieron de fecha 10 de febrero de 2012, número de registro de salida 69.

Para comenzar la redacción del TFC, comencé por realizar una intensa tarea de investigación en internet, buscando artículos de fuentes académicas que me pudiesen inspirar. No encontré demasiadas, pero si algunas bastante ilustrativas que me aconsejaban un reto de investigación aún mayor en los portales web oficiales de las distintas Administraciones que regulan la materia (Unión Europea, Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España y Generalitat Valenciana).

Al parecerme una mejora realizable que mejoraría exponencialmente la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa de la aVM y de sus relaciones con la ciudadanía, le propuse la mejora a mi compañero de trabajo, Gregorio Haro, Jefe del Área de Sistemas de Peaje, Comunicaciones e Informática de la aVM. Le pareció una magnífica propuesta y comenzamos a trabajar en el impulso del proyecto para que tomase forma.

Se creó una comisión de trabajo con reuniones periódicas, que yo moderé, compuesta por un responsable de cada unidad de la aVM. Paralelamente Gregorio Haro consiguió reuniones con un gran número de empresas tecnológicas especializadas en implantar mejoras de Administración Electrónica.

De forma frecuente, mantuve al tanto de mis avances en el TFC a mi Director, con el que he tenido varias reuniones en las que me iba corrigiendo y dirigiendo para conseguir un TFC de aspecto lo más profesional posible.

Toda la información, es con la que he redactado este TFC en el que explico paso a paso la primera fase de implantación de la mejora, la siguiente sería la implantación en si y eso ya sería objeto de otro trabajo distinto.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS RELACIONADAS

Siguiendo el esquema de la propuesta, indicaré cual es la relación de las asignaturas de la carrera con este trabajo:

En lo referente a la maquetación del trabajo, la forma de realizar los índices, las referencias bibliográficas, etc. ha sido de gran ayuda los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Información y Documentación Administrativa I y II, en Gestión Administrativa II, sobre todo en las prácticas de laboratorio y en la asignatura de Información y Documentación Administrativa, Informática Básica.

El capítulo I del trabajo, donde se hace la introducción, objeto, objetivos, etc. esta relacionado con la asignatura de Sistema Económico y Financiero III por la referencia a los presupuestos y las dotaciones de las entidades públicas que ayudan a confeccionar el presupuesto de la mejora. También esta relacionada la asignatura de Información y Documentación Administrativa, Informática Básica en lo que se refiere al uso de las aplicaciones ofimáticas. Gestión Administrativa II y III por la metodología de redacción de este capítulo. Información y Documentación Administrativa I, esta relacionada con este capítulo, al igual que las anteriores, por la metodología utilizada en la redacción. Gestión de Servicios Públicos por Sociedades Mercantiles esta relacionada con este capítulo por tratarse la aVM de una entidad del sector público empresarial. Por último hacer mención a la relación existente con la asignatura de Instituciones Europeas por la comprensión del funcionamiento de la Unión Europea como impulsora de la implantación de la Administración electrónica en todos los países miembros.

En el capítulo II sobre la Administración electrónica, se explica de forma rigurosa cual es la normativa de aplicación de la Unión Europea, del Gobierno de España y de la Comunitat Valenciana. En este capítulo influyen directamente, como no podía ser de otra manera, las asignaturas de Derecho Administrativo I y II, pero también están relacionadas las asignaturas de Derecho Constitucional I y II, Estructuras Políticas-Administraciones Públicas, Estructuras Políticas-Formas Políticas, Derecho autonómico y Local, Información y Documentación Administrativa I y II e Instituciones Europeas.

El capítulo III, trata sobre la Agencia Valenciana de Movilidad, su historia, su normativa y su funcionamiento interno. Esta relacionado con todas las asignaturas de Derecho de

la carrera; Derecho Administrativo I y II, Derecho Autonómico y Local, Estructuras Políticas-Administraciones Públicas y Estructuras Políticas-Formas Políticas, e incluso con las de Derecho Constitucional I y II. También guardan relación con Gestión de Servicios Públicos por Entidades Mercantiles y la de Sistema Económico y Financiero II.

El capítulo IV trata sobre el archivo, desde este capítulo empieza la parte II de la propuesta que se centra más en la propuesta en sí una vez expuesta la normativa de aplicación. Las asignaturas relacionadas son la de Información y Documentación Administrativa, Informática Básica y las de Información y Documentación Administrativa I y II al estar directamente relacionadas con la gestión de archivos.

El capítulo V trata sobre la normalización de procedimientos administrativos, en este capítulo están relacionadas muchas de las asignaturas; Información y Documentación Administrativa II y III, Derecho Administrativo I y II, Calidad en la Gestión Pública, Dirección de Organizaciones, Marketing del Sector Público, Teoría Social I y II, Ética en las Organizaciones, Derecho Autonómico y Local y Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Son muchos los conocimientos de las distintas asignaturas que se pueden aplicar en este capítulo al tratar de la reorganización y optimización de todas las tareas y procedimientos, afectando directamente al personal de la aVM.

El capítulo VI, sobre la interoperabilidad, se relaciona con las asignaturas de Información y Documentación Administrativa II y III, Derecho Administrativo I y II, Dirección de Organizaciones, Marketing del Sector Público, Ética en las Organizaciones, Derecho Autonómico y Local, Información y Documentación Administrativa, Informática Básica, Derecho Constitucional I y II e Instituciones Europeas.

El capítulo VII, sobre el sistema de gestión de documentos electrónicos, esta relacionado con las asignaturas de Información y Documentación Administrativa II y III, Derecho Administrativo I y II, Dirección de Organizaciones, Ética en las Organizaciones, Derecho Autonómico y Local, Información y Documentación Administrativa, Informática Básica, Derecho Constitucional I y II e Instituciones Europeas.

El capítulo VIII trata sobre las condiciones económicas de la mejora, las asignaturas relacionadas son Información y Documentación Administrativa, Informática Básica, Gestión Administrativa II y III, Derecho Autonómico y Local, Derecho Administrativo I y II, Gestión de Servicios Públicos por Entidades Mercantiles, Sistema Económico y Financiero I, II y III, Gestión Financiera y Contabilidad, I, II y III, Estadística I y II y Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

Por último, el capítulo IX recoge las conclusiones y recomendaciones del trabajo, las asignaturas relacionadas son prácticamente todas, en especial y por citar algunas serían las de Información y Documentación Administrativa II y III, Derecho Administrativo I y II, Dirección de Organizaciones, Marketing del Sector Público, Ética en las Organizaciones, Derecho Autonómico y Local, Información y Documentación

Administrativa, Informática Básica, Derecho Constitucional I y II, Instituciones Europeas, Estructuras Políticas-Administraciones Públicas, Estructuras Políticas-Formas Políticas, Sistema Económico y Financiero I, II y III, Gestión Financiera y Contabilidad, I, II y III, Estadística I y II, Gestión de Calidad en los Servicios Públicos, Teoría Social I y II, Valenciano para la Administración y Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

CAPÍTULO 2. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2.1. MARCO NORMATIVO EUROPEO

Como ya he explicado en el capítulo anterior, la importancia de la Administración electrónica es crucial en el desarrollo de una Administración dinámica y moderna. El legislador de la Unión Europea es consciente de ello y desde la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya observó el potencial que tenían al aplicarlas a las relaciones de los ciudadanos-cliente con la Administración.

Es un dato significativo a tener en cuenta que los países que más destacan en cuanto a apertura y eficiencia del sector público y a preparación para la Administración electrónica, sean también los primeros en cuanto a rendimiento económico y competitividad.

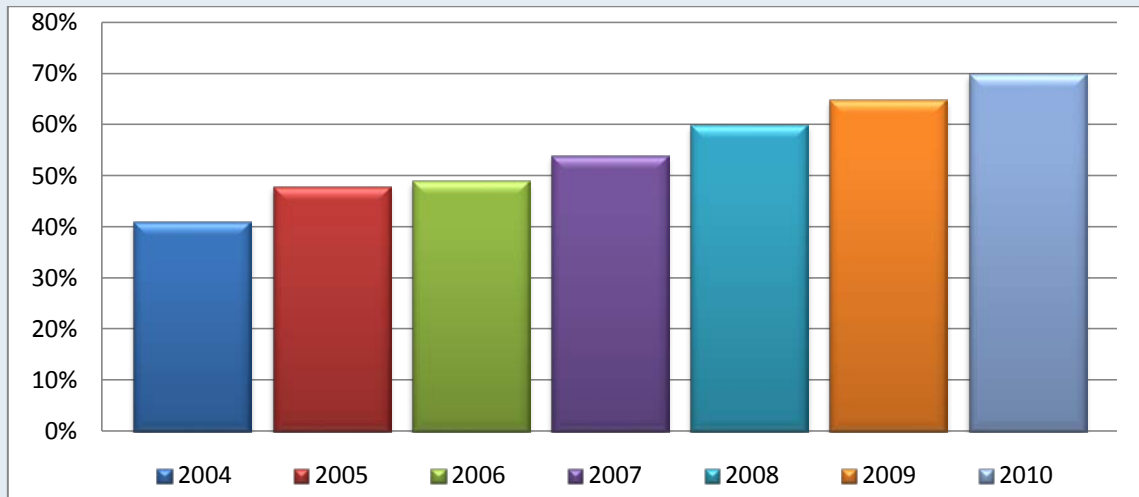
En esta primera parte del capítulo 2, voy a mostrar las directrices marcadas desde la Unión Europea que han servido de aliento e inspiración a los gobiernos nacionales para impulsar la Administración Electrónica.

Para conseguir ese impulso, la Unión Europea (UE) ha creado dos planes de acción, uno que abarca el periodo 2006 a 2010 y otro que le sucede y que va desde 2011 a 2015.

Veamos en unos gráficos la evolución de las TIC en la Unión Europea:

En primer lugar podemos ver en el siguiente gráfico el porcentaje de hogares que tienen acceso a internet en la UE. Se consideran aquellos hogares con al menos un miembro entre 16 y 74 años de edad.

Ilustración 1: Tecnologías de la información y comunicación en los hogares.

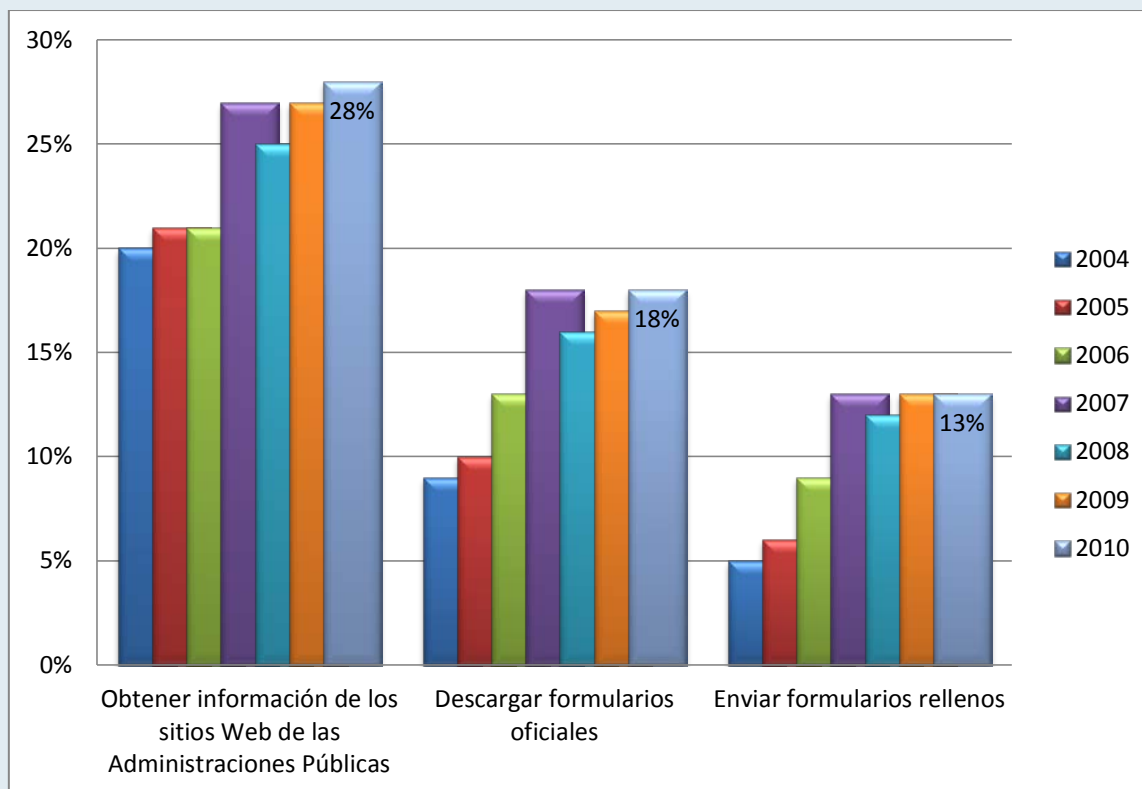


Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística, <<http://www.ine.es/>>.

En el siguiente gráfico podemos observar la relación que tienen los hogares con la Administración pública utilizando las TIC, para este análisis EUROSTAT que es la fuente inicial de los datos, analiza una muestra compuesta de personas con edades entre 16 y 74 años residentes en alguno de los 27 países de la Unión Europea. Como podemos ver la mayoría de los usuarios que interactúan a través de las TIC con las Administraciones públicas, lo hacen mayoritariamente para obtener información, pero para los siguientes supuestos de descargar formularios y enviarlos rellenos, desde 2007 hasta 2010 existe un estancamiento que contrasta con el aumento de hogares con acceso a internet que aumenta en casi un 20% en ese mismo periodo.

Este es el gráfico que refleja los resultados del estudio:

Ilustración 2: Personas que usan la Administración Electrónica por país, periodo y propósito.



Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística, <<http://www.ine.es/>>.

Para contrarrestar ese estancamiento en el uso de las TIC para relacionarse con las Administraciones, la UE ha puesto en marcha dos planes de acción, uno que finalizó en 2010 cuyo resultado, como hemos observado en los gráficos, ha promovido otro plan más ambicioso de 2011 a 2015. Voy a describir a continuación cada uno de esos planes.

2.1.1. PLAN DE ACCIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (2010)

Este plan de acción se estructura en torno a cinco grandes objetivos en materia de Administración Electrónica cuyas metas llegaban hasta 2010.

1. Ningún ciudadano debe quedarse atrás: Promover la inclusión a través de la Administración Electrónica.

- En primer lugar está el reto de combatir la **brecha digital**.

Existen muchas definiciones de la brecha digital, yo he seleccionado la que me parece más fácil y clara:

“La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países...) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben como utilizarlas.” (Arturo Serrano; Evelio Martínez, 2003, 8).

- Políticas de inclusión apoyadas en las TIC.

Los servicios públicos que las TIC pueden ofrecer, garantizan que las personas desfavorecidas encuentren menos obstáculos en sus relaciones con la Administración. Los países miembros se han comprometido a alcanzar unos objetivos que aseguren que los ciudadanos más desprotegidos puedan acceder a través de las TIC a los servicios públicos y la información que le ofrecen las Administraciones.

2. *Hacer realidad la eficiencia y la efectividad.*

Los estados miembros esperan que la Administración Electrónica contribuya a que los usuarios estén más satisfechos de los servicios públicos y alivie considerablemente la carga administrativa impuesta a empresas y ciudadanos. Además, se aspiró a que el sector público consiguiera una mejora considerable de la eficiencia y un incremento de la transparencia y de la rendición de cuentas mediante un uso innovador de las TIC para 2010.

Esos beneficios deberían hacerse notar en tres niveles:

- a. Ciudadanos y empresas
- b. Administraciones
- c. La sociedad y la economía en general

Estos objetivos básicos, pretendidos en el plan i2010, se han conseguido parcialmente si lo miramos con la perspectiva que nos ofrece estar actualmente a mitad del año 2012, pero queda de manifiesto que aún hay mucho camino que recorrer.

3. *Servicios clave de gran impacto para ciudadanos y empresas.*

El programa de la Administración Electrónica está avanzando a través de la modernización de centenares de servicios públicos. Aun cuando la mayoría tienen carácter local, regional y nacional, cierto número de servicios transfronterizos resultando de gran importancia para ciudadanos, empresas y administraciones y pueden actuar como «buques insignia» de la Administración Electrónica europea.

Uno de estos servicios de gran impacto es la contratación pública electrónica. Los ingresos de la administración pública suponen un 45 % aproximadamente del PIB y las autoridades públicas compran del 15 al 20 % del PIB, lo que significa de 1,5 a 2 billones de euros al año en Europa. La contratación y la facturación electrónicas podrían generar un ahorro aproximado del 5 % en los costes totales de la contratación y una reducción de los costes de transacción del 10 % o más, lo que se traduciría en un ahorro anual de decenas de miles de millones de euros. Las PYME, en particular, podrían beneficiarse de un acceso más fácil a los mercados de la contratación.

4. *Establecer las herramientas clave.*

La administración electrónica está en una encrucijada crítica. La realización de nuevos avances sustanciales exige la presencia de determinadas herramientas clave, en particular para hacer efectivos los servicios de elevado impacto. Se consideran herramientas clave críticas la gestión interoperable de la identificación electrónica (eIDM) para el acceso a los servicios públicos, la autenticación de documentos electrónicos y el archivado electrónico.

Los estados miembros ya establecieron en 2006, con objetivo 2010, crear las bases de la eIDM para garantizar que los ciudadanos y las empresas de Europa puedan beneficiarse de unos medios electrónicos seguros y cómodos, expedidos a nivel local, regional o nacional y respetuosos de la normativa sobre protección de datos, que les permitan identificarse ante los servicios públicos en su propio Estado miembro o en cualquier otro.

5. *Refuerzo de la participación y de la adopción de decisiones democráticas en Europa.*

Los ciudadanos cada día están mejor informados y demandan una mayor participación. Los gobiernos buscan un apoyo amplio e incluyente para las políticas públicas que permita garantizar su aplicación efectiva y evitar nuevas fracturas democráticas y sociales. La cohesión de la sociedad europea exige una mejor adopción de decisiones y una mayor participación de los ciudadanos en todas las fases de la adopción de decisiones democráticas, también a nivel europeo.

Con las nuevas oportunidades que surgen a través de las TIC, que permiten implicar a un gran número de ciudadanos en el debate público y la adopción de decisiones a todos los niveles, desde el municipal al europeo.

El legislador en este plan 2006-2010 ya intuyó la importancia que tendrían en la sociedad las redes sociales que en aquel momento se manifestaban a través de los blogs.

La ejecución del plan, para conseguir llegar al mayor porcentaje posible de logro de los objetivos fijados, se apoyó en buena medida en la cooperación con los Estados miembros y las demás partes interesadas.

A nivel de la Unión Europea, el plan de acción se sustentó en programas como los siguientes:

“**Modnis**”: Modinis se proponía garantizar el seguimiento del plan de acción i2010 mediante la difusión de las buenas prácticas, la comparación de los resultados de los Estados miembros y el apoyo a las acciones de sensibilización destinadas a reforzar la seguridad de las redes y de la información.

“**eTEN**”: Inscrito en el marco de la política de las redes transeuropeas de la Unión Europea (UE), el programa eTEN (formalmente «TEN-Telecom», abreviatura inglesa de Trans-european Telecommunication Networks) apoyó la instauración y el despliegue transeuropeo de servicios y aplicaciones electrónicas. Muy centrado en los servicios públicos, el programa eTEN fomentó el uso innovador de servicios en línea y contribuyó a establecer un modelo económicamente viable para este tipo de servicios. El programa eTEN resultó ser un instrumento esencial del plan de acción i2010, encaminado a fomentar el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos electrónicos, y a acelerar el despliegue del acceso seguro de banda ancha a Internet.

“**IST**”: (Information Society Technologies – Tecnologías de la Sociedad de la Información).

“**IDABC**”: El programa IDABC (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens - prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos) tuvo por objeto prestar servicios paneuropeos de administración electrónica a las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. El objetivo consistía en mejorar la eficacia de las administraciones públicas europeas y la colaboración entre ellas.

“**CIP**”: El Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP), dirigido fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (PYME), apoyó las actividades de innovación (incluida la ecoinnovación), facilitó el acceso a la financiación y ofreció servicios de apoyo a las empresas en las regiones. El Programa fomentó la implantación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el desarrollo de la sociedad de la información.

2.1.2. PLAN DE ACCIÓN EUROPEO SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 2011-2015

Ahora que hemos visto lo que han sido las líneas generales de actuación de la UE en la historia mas reciente de la Administración Electrónica, pasemos a observar cuales son las políticas públicas planteadas en la actualidad.

La ejecución del plan i2010, ha hecho realidad el intercambio de buenas prácticas entre las administraciones de todos los Estados miembros. La disponibilidad de tecnologías innovadoras, tales como las redes sociales e internet móvil que proporciona conexión 24/7, ha dispuesto que los ciudadanos sean más exigentes en cuanto a lo que esperan cuando acceden a todo tipo de servicios en línea.

La aparición de tecnologías innovadoras tales como las «arquitecturas orientadas al servicio» (SOA) o la «nube» de servicios, junto con unas especificaciones más abiertas que facilitan la puesta en común, la reutilización y la interoperabilidad que refuerzan la capacidad de las TIC para desempeñar un papel clave en esta búsqueda de la eficiencia en el sector público.

El presente plan, se fija tres objetivos para promover una economía sostenible e integradora para la Unión Europea, siguiendo lo previsto en la estrategia “**Europa 2020**” y la “**Agenda Digital**” para Europa, a saber:

1. Antes de 2015 deberán estar disponibles servicios públicos transfronterizos esenciales, permitiendo que los empresarios creen y exploten un negocio en cualquier lugar de Europa, con independencia de su localización original, y que los ciudadanos estudien, trabajen y se jubilen en cualquier lugar de la Unión Europea.
2. Antes de 2015, el 50% de los ciudadanos de la UE habrán utilizado alguna vez los servicios de Administración Electrónica.
3. Antes de 2015, el 80% de las empresas habrán usado la Administración Electrónica.

El plan 2011-2015, se basa en trece intenciones o directrices básicas, voy a resumirlas pues me parece muy interesante saber cuales son esas directrices por las que se guía el plan actual:

1. *Servicios diseñados en torno a las necesidades de los usuarios y servicios incluyentes.*

Incrementar la eficacia de la administración electrónica significa que los servicios estén diseñados en torno a las necesidades de los usuarios y proporcionen medios flexibles y personalizados de interactuar y efectuar transacciones con las administraciones públicas, por ejemplo, hacer un seguimiento de la concesión de subsidios y prestaciones, matricularse en centros escolares o universitarios, solicitar y recibir certificados civiles en línea o presentar declaraciones de impuestos en línea. Además, debe mejorarse la

utilizabilidad de los servicios de eAdministración y el acceso a los mismos, prestándolos a través de múltiples canales (internet, televisión, teléfono, dispositivos móviles o, cuando proceda, intermediarios).

2. *Producción de servicios en colaboración.*

Las redes sociales y las herramientas de colaboración, por ejemplo las tecnologías Web 2.0, permiten a los ciudadanos desempeñar un papel activo en el diseño y la producción de servicios públicos.

Es necesario llevar a cabo un análisis de las técnicas de producción en colaboración basadas en las TIC, de su eficacia en función de los costes y de su capacidad para prestar servicios públicos fiables y de alta calidad. Una vez averiguado esto, el objetivo debería ser comprometer a terceros en el desarrollo de estos servicios.

3. *Reutilización de la información del sector público.*

La información que posee el sector público constituye una auténtica mina de oro. La Comisión y los Estados miembros están empeñados en maximizar el valor de la reutilización de la información del sector público (La Comisión y los Estados miembros han reconocido este valor durante muchos años y adoptado una Directiva sobre la reutilización de la información del sector público “Directiva ISP”).

4. *Mejora de la transparencia.*

La transparencia de las administraciones en la adopción de decisiones y en el uso que hacen de los datos personales contribuirá a reforzar la confianza de los ciudadanos y a una mejor rendición de cuentas por parte de quienes elaboran las políticas. Aunque muchos Estados miembros cuentan con objetivos en materia de transparencia, no existen aún unos objetivos europeos comunes.

5. *Participación de los ciudadanos y las empresas en los procesos de elaboración de políticas.*

Los Estados miembros están comprometidos con el desarrollo y la promoción de métodos mejores y más útiles, basados en las soluciones de TIC, para que empresas y ciudadanos participen en las consultas sobre política pública, en los debates y en los procesos de elaboración de políticas.

Las nuevas herramientas para la Gobernanza, mejorarán la capacidad de las personas para hacer oír su voz y sugerir medidas políticas en los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto.

6. *Servicios sin discontinuidades para las empresas.*

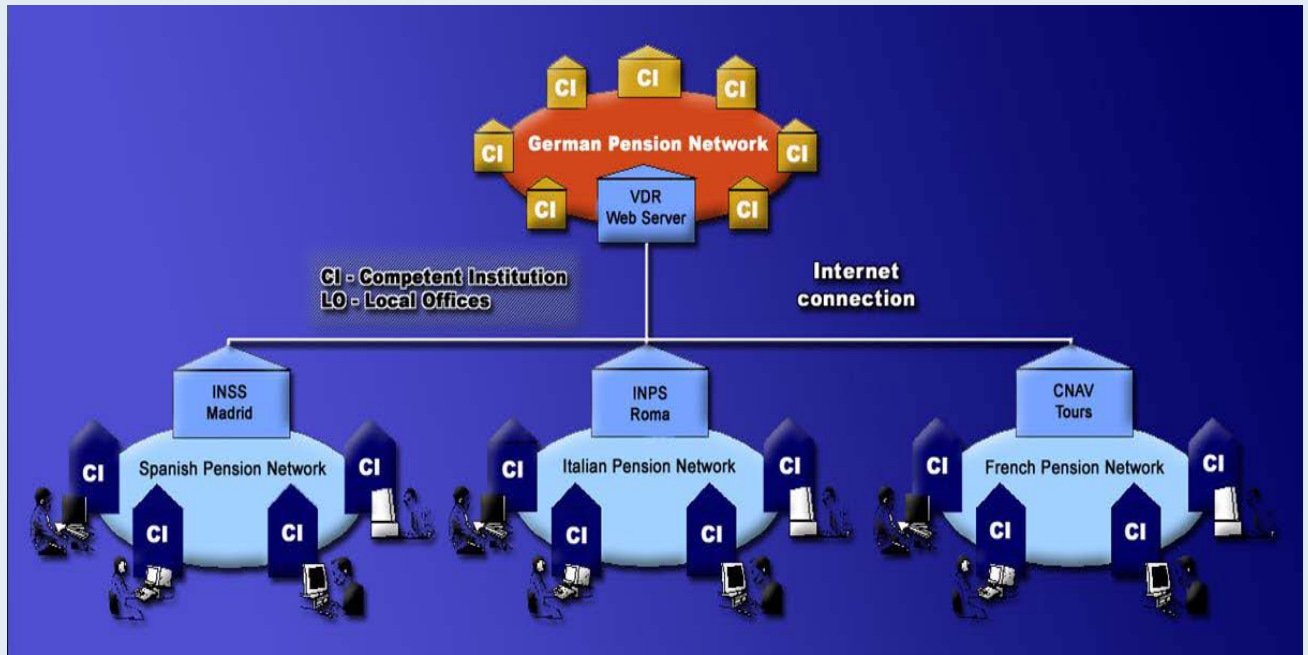
Conviene que las empresas estén en condiciones de vender y suministrar servicios y productos en toda la UE, gracias a una contratación pública electrónica sencilla y a la implantación efectiva de servicios que ofrezcan una ventanilla única para la interacción de empresas y administraciones.

7. *Movilidad de las personas.*

Los ciudadanos de Europa deben estar en condiciones de circular y residir libremente en toda Europa. En este ámbito, los Estados miembros y la Comisión colaborarán en el desarrollo de servicios para incrementar la movilidad de las personas que deseen trasladarse de un país europeo a otro, por ejemplo, por motivos de estudio, trabajo, atención sanitaria, residencia y/o jubilación. Las acciones previstas deben garantizar el desarrollo de servicios interoperables que permitan a los ciudadanos comunicarse, llevar a cabo transacciones y enviar y recibir documentos e información electrónica con origen o destino en las administraciones públicas de toda la UE.

Estas permitirán unos intercambios transfronterizos seguros y un almacenamiento seguro de la información electrónica (entrega electrónica de documentos e información). Las personas podrán acceder a documentos personales tales como las partidas de nacimiento desde toda Europa, optar a derechos de pensiones y recibirlos cuando se jubilen en un país distinto a aquel en que trabajaron o matricularse por vía electrónica en cualquier universidad europea.

Ilustración 3: Comunicaciones para el reconocimiento de pensiones de trabajadores emigrantes.



Fuente: Observatorio de la Administración Electrónica (OBSAE). *Los servicios públicos Europeos de Administración Electrónica: Programa ISA y estado de situación de la integración de la Administración* (Octubre 2011). <http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P1200618801339581167607&langPae=es>

8. Mejora de los procesos organizativos.

La Administración Electrónica representa un instrumento de cambio para mejorar los procesos organizativos en las administraciones y limitar los costes. Así, se puede reducir el coste de la facturación en los procesos de contratación pública electrónica, al tiempo que se incrementa la eficacia, por ejemplo en virtud de la rapidez de la tramitación. Los funcionarios saldrán beneficiados por la mejora de sus aptitudes electrónicas y por la posibilidad de aprender de experiencias adquiridas en otras partes de Europa sobre la manera de mejorar los procesos organizativos.

9. Reducción de las cargas administrativas.

Para muchas personas y empresas, el mejor gobierno es el que pasa desapercibido. En la práctica, no obstante, la multiplicidad de procedimientos y requisitos hace que las interacciones con las administraciones públicas resulten engorrosas, consumiendo tiempo y recursos. Por lo tanto, la simplificación o eliminación de los procesos administrativos debe ser un objetivo importante, según se expone en el Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea.

10. *Administración Pública ecológica.*

Las acciones previstas tendrán por objetivo reducir la huella de carbono de las administraciones de los Estados miembros, por ejemplo mediante la implantación del archivado electrónico, la sustitución de los viajes por videoconferencias, etc.

11. *Especificaciones abiertas e interoperabilidad.*

La interoperabilidad es la capacidad de sistemas y máquinas para intercambiar, procesar e interpretar correctamente la información. Representa algo más que un mero reto técnico, ya que la manipulación de los datos comporta aspectos jurídicos, organizativos y semánticos. La interoperabilidad es una condición previa esencial para una prestación abierta y flexible de los servicios de administración electrónica y para hacer posible la colaboración entre las administraciones europeas.

12. *Habilitadores clave.*

En muchos servicios en línea, resulta esencial identificar y autenticar a la persona física o jurídica a la que se van a prestar. Las tecnologías de identificación electrónica (eID) y los servicios de autenticación son fundamentales para la seguridad de las transacciones electrónicas (tanto en el sector público como en el privado). Actualmente, la manera más corriente de autenticar es utilizar contraseñas, pero cada vez resulta más necesario contar con soluciones más seguras que protejan la intimidad. Europa necesita una mejor cooperación administrativa para desarrollar e implantar servicios públicos transfronterizos en línea, incluidas unas soluciones prácticas de identificación y autenticación. Se han puesto ya en marcha iniciativas tales como el proyecto piloto a gran escala STORK, que se propone establecer una plataforma europea de interoperabilidad de la identificación electrónica que permita a los ciudadanos acceder a los servicios de administración electrónica dentro y fuera de su país de origen utilizando su identificación electrónica nacional.

13. *Administración electrónica innovadora.*

La nueva generación de servicios de administración electrónica tendrá que apoyarse en planteamientos técnicos innovadores, tales como las nubes de servicios públicos y la arquitectura orientada al servicio (SOA), y beneficiarse de ellos para construir unos servicios de administración electrónica abiertos, flexibles y en colaboración, al mismo tiempo que se reducen los costes de las TIC. Se pondrán en marcha proyectos piloto para fomentar la disponibilidad y el uso de un acceso cómodo y a la carta a unos recursos y servicios compartidos para la prestación de servicios de administración electrónica. Además, visto el agotamiento de las direcciones IPv4, las administraciones tendrán que tomar medidas para poner al día, en relación con la IPv6, la infraestructura de

administración electrónica (portales, sitios web, aplicaciones, etc.) y los servicios en línea de interés público. La adopción de la IPv6 resultará beneficiosa para que las autoridades públicas de los Estados miembros fomenten unas aplicaciones y servicios innovadores, eficientes y accesibles.

Las acciones previstas se proponen descubrir y difundir soluciones seguras y verificadas para las nubes de servicios públicos, SOA y estrategias de transición para el paso de la IPv4 a la IPv6.

2.2. MARCO NORMATIVO ESTATAL

Tras analizar las disposiciones de la Unión Europea sobre la Administración Electrónica, en este apartado abordaré las disposiciones normativas creadas por el Gobierno Español una vez realizadas la trasposición de las directrices de la Unión Europea, sobre todo en lo que afecta a la posible adaptación de la aVM a la Administración Electrónica.

El sistema de análisis que voy a utilizar, es resumir las distintas normativas de la Administración General del Estado (AGE) por piezas, que me permitan hacer la misma sintetización con la normativa de la Generalitat Valenciana (GVA), que analizaré en el apartado 2.3.

Las piezas o partes son las siguientes, tanto para la AGE como más adelante para la GVA:

1. Identificación y autenticación.
2. Interoperabilidad
3. Seguridad
4. El registro electrónico
5. Las comunicaciones y la notificación electrónica
6. Documentos y archivos electrónicos
7. Gestión electrónica de los procedimientos
8. La sede electrónica

La normativa básica de este análisis, sin perjuicio de otras normas complementarias, son:

- LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

1. Identificación y autenticación.

La regulación de la Identificación y autenticación, tanto de la ciudadanía como de la Administración pública, esta desarrollada el capítulo II de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Podemos diferenciar dos tipos de identificación electrónica, la que identifica a la persona física o jurídica que se relaciona con la Administración pública por medios electrónicos, y la identificación electrónica de la propia Administración.

La forma de identificarse electrónicamente con la Administración, son los sistemas de firma electrónicos establecidos en la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. Esos sistemas de firma electrónica son los certificados reconocidos expedidos por un prestador de servicios de identificación, además, en todo caso, se admitirá el documento nacional de identidad electrónico (eDNI).

La identificación electrónica de la Administración se realizará mediante certificados de dispositivo seguro, sello electrónico de Administración pública y código seguro de verificación.

Los certificados de dispositivo seguro, son certificados que permiten identificar en Internet y de forma fiable a los servidores web que establecen comunicaciones seguras mediante el protocolo SSL (Secure Socket Layer). Se pueden identificar porque se accede a ellos a través de direcciones del tipo https://.

El sello electrónico de Administración pública, son certificados de Sello de Órgano que se utilizan para identificar y firmar actos administrativos por medio de sistemas informáticos sin intervención directa de la persona física competente.

El código seguro de identificación, es el código generado en un documento electrónico, mediante el cuál, al acceder a la Sede Electrónica correspondiente, se puede comprobar la veracidad e integridad de ese documento.

2. Interoperabilidad.

Si entendemos la interoperabilidad como la capacidad de los de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Inmediatamente nos daremos cuenta de su importancia para lograr que cualquier organismo público se convierta en una Administración Electrónica.

Los datos electrónicos que poseen las Administraciones, son muy valiosos y a la vez muy sensibles por ser en muchos casos información personal y confidencial. Cada una los ámbitos territoriales de la Administración, Estatal, Autonómica y

Local, disponen de bases de datos que pueden agilizar los trámites de la ciudadanía.

Resulta necesaria la cooperación entre Administraciones para la transferencia de datos y tecnología y reutilización de aplicaciones en beneficio de una mayor eficiencia.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y se refiere a ella como uno de los aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes y debe ser, por tanto, abordado por la regulación del Estado. La interoperabilidad se recoge dentro del principio de cooperación en el artículo 4 y tiene un protagonismo singular en el título cuarto dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la Administración Electrónica.

Dada la importancia que tiene para la ejecución de esta propuesta de la interoperabilidad entre las distintas Administraciones, he dedicado enteramente el Capítulo 6 al desarrollo de la interoperabilidad en la **aVM**, sobre todo en la que se refiere a interoperar con bases de datos corporativas (AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social, varias Consellerías, etc.).

Siguiendo lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 11/2007, el Estado crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad mediante el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el **Esquema Nacional de Interoperabilidad** en el ámbito de la Administración Electrónica, cuya finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunde en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

3. Seguridad

Otro pilar importante en el que se asienta la Administración Electrónica, es la seguridad. En la medida en la que esa seguridad sea más efectiva, más confiará la ciudadanía en sus relaciones con la Administración a través de medios electrónicos.

El artículo 42.2 de la Ley 11/2007, estableció la creación del Sistema Nacional de Seguridad, que se hizo efectiva mediante el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a

través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.

En el aspecto en el que más incide el ENS es en la seguridad de las redes, se entiende por seguridad de las redes y de la información, la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles.

En esta propuesta de mejora, dentro del Capítulo 7 dedicado al sistema de gestión de documentos electrónicos, en el apartado 7.2 aplicaré los principios de seguridad establecidos en el ENS como parte integrante, como no podía ser de otra manera, de la adaptación a la Administración Electrónica. El ENS se limita a establecer los requisitos mínimos de seguridad que deberán tener los sistemas de información.

4. El registro electrónico

Todo documento que entra o sale de la Administración, ha de ser registrado de entrada o salida y si es el caso, darle copia sellada y numerada al ciudadano-cliente. Esta obligación de la Administración está regulada en el Capítulo I “normas generales”, artículo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC).

Cumplir con este imperativo legal, implica el uso de gran cantidad de papel en la gestión administrativa diaria. Una de las mejoras que se pueden conseguir utilizando las tecnologías de la información y la comunicación es convertir ese registro de documentación en un registro electrónico que continúe estando a la luz de la LRJAPPAC de la misma forma y con las mismas garantías para los ciudadanos-cliente y para la Administración, que tiene el sistema tradicional.

La regulación de los registros electrónicos se hace en el capítulo III, sección 1ª de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP). Los artículos 24, 25 y 26 establecen las normas básicas por la que deben regirse los registros electrónicos, voy a exponer esas normas básicas:

En primer lugar la ley establece que los registros electrónicos deben admitir documentos electrónicos normalizados, cumplimentados en formatos prestablecidos conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro.

Pero también establece que se deberá admitir cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de las anteriores y que no haya sido normalizada.

La creación del registro electrónico y sus normas de funcionamiento, serán objeto de publicación en el diario oficial correspondiente, siendo las normas de publicación accesibles a la ciudadanía a través de la Sede Electrónica del organismo. Esa norma de funcionamiento establecerá quien es el órgano responsable, cuál es la fecha y hora oficial por la que se registrará el registro así como los el calendario de días hábiles.

El registro electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito presentado, incluyendo al igual que el sistema tradicional, fecha, hora y número de registro. También podrán aportarse documentos que acompañen a la solicitud.

Los registros electrónicos se registrarán, a efectos de plazos, por la fecha y hora que figure en la Sede Electrónica de acceso. Un aspecto importante de la regulación por la LAECSP es la disponibilidad del registro las 24 horas del día, los siete días de la semana (7/24). Un documento presentado un día inhábil, se considerará presentado la primera hora del siguiente día hábil. En cualquier caso, se deberá comunicar a la persona que presentó el documento en el registro, la fecha efectiva de inicio de plazos.

5. Las comunicaciones y la notificación electrónica

El artículo 27 de la LAECSP, establece que los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, además establece que La opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido. La LAECSP dispone que las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. Se da la posibilidad de establecer la obligatoriedad de comunicarse con la Administración utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivas de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Las Administraciones públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones públicas.

Uno de los puntos más sensibles y que ha levantado más polémica es la práctica de la notificación electrónica por existir corrientes de opinión que creen que no puede en ningún caso ser tan garantista como el sistema tradicional establecido en la LRJAPPAC. El legislador, consciente de este

extremo ha querido regular en la LAECSP la notificación electrónica de forma que sea incluso más garantista que el sistema tradicional.

El artículo 28 de la LAECSP es el encargado de regular esta práctica, voy a exponer sus rasgos más importantes: En primer lugar, se establece que para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización de forma expresa. El sistema debe ser capaz de acreditar la fecha y hora en la que se pone la notificación a disposición del interesado, así como el momento de su lectura que se considerará notificado a todos los efectos. Cuando existiendo constancia de haber iniciado la notificación y transcurridos diez días naturales desde ésta no se haya producido su lectura, se entenderá que la notificación ha sido rechazada a todos los efectos.

La LAECSP, teniendo en cuenta los posible fallos que puedan tener los sistemas electrónicos y pretendiendo, como he comentado antes, que este sistema de notificación sea incluso más garantista que el tradicional, establece que la notificación no será válida si se demuestra por parte del interesado o de oficio que la notificación no se pudo realizar comprobada la imposibilidad técnica o material del acceso.

Durante la tramitación de un procedimiento el interesado podrá solicitar a la Administración que no se continúe notificando por este sistema y tendrá la opción de volver al sistema tradicional. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.

6. Documentos y archivos electrónicos

La LAECSP establece en los artículos 29 a 32, cómo deben tratarse los documentos y los archivos electrónicos. Como regla general dispone que las Administraciones Públicas podrán emitir válidamente por medios electrónicos documentos administrativos siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas.

También regula que las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán la consideración de copias auténticas, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración.

Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad,

integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia.

El artículo 30.4 regula una parte importante de la mejora propuesta, y es que en los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas, podrá procederse a la destrucción de los originales.

La LAECSP dispone sobre la seguridad de los documentos de archivo que los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. Además de esto deberemos tener en cuenta lo regulado en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

La definición de expediente electrónico que da la LAECSP es la siguiente “expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan”. El artículo 32 de la LAECSP, establece la obligatoriedad del foliado del expediente garantizando la integridad del expediente. La remisión de expedientes se producirá mediante el acceso al expediente electrónico lo que agilizará los trámites y evitará el gasto de papel.

7. Gestión electrónica de los procedimientos

La LAECSP aborda la gestión electrónica de los procedimientos bajo criterios de simplificación administrativa, buscando el principio de eficiencia, impulsando la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo, a la gestión de los procedimientos y a la actuación administrativa.

Los criterios que establece son la supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos para lo que tendremos que hacer uso de la interoperabilidad con otras Administraciones, la previsión de medios de participación de la ciudadanía, la reducción de plazos y de tiempo de respuesta, y no menos importante la racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

Los artículos 35 a 39 de la LAECSP, regula la tramitación electrónica del procedimiento. En el artículo 35 establece el procedimiento de inicio, que a solicitud del interesado pro medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de formularios normalizados, aspecto este que trataré en el apartado 5.2 de la mejora. El sistema deberá garantizar el control de fechas y plazos, la identificación de los órganos responsables de los

procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

El órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información.

8. La sede electrónica

En el artículo 10 de la LAECSP, se define la sede electrónica de la siguiente forma: “La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”. La sede electrónica debe responder a la veracidad, integridad, actualización de la información y de los servicios que puedan realizarse a través de ella, también debe precisar la fecha y hora oficial del organismo.

El apartado tres de este artículo, delega en las distintas Administraciones la regulación de las sedes electrónicas pero si establece los principios por los que deberán regirse en cualquier caso:

- Principio de publicidad oficial
- Principio de responsabilidad
- Principio de calidad
- Principio de seguridad
- Principio de disponibilidad
- Principio de accesibilidad
- Principio de neutralidad
- Principio de interoperabilidad

En el siguiente apartado abordaré con más detalle la sede electrónica, al haber sido regulada en la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (LAECV).

2.3. MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO

En el año 2010, El Consell de la Comunidad Valenciana publicó la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (LAECV). Esta Ley recoge la normativa de la Unión Europea y del Estado Español sobre la materia y la adapta a las peculiaridades de la Comunidad Valenciana.

La LAECV mejora en varios aspectos al resto de normativa comunitaria y estatal al estar redactada varios años después. Respecto a la normativa estatal lleva cuatro años de ventaja desde que se promulgó la LAECSP en el año 2007, es mucho tiempo en el vertiginoso mundo de las TIC. Respecto a la normativa de la UE, la nueva Ley tiene en cuenta además del plan i2010, algunos apartados del actual plan 2011-2015 al incluirse algunas de las líneas de actuación que ya eran conocidas a través de su borrador y recomendaciones del Consejo y de la Comisión de la UE que fueron surgiendo mientras estaba en vigor el plan i2010.

Entre otras mejoras que iré extrayendo, una de las más significativas es el establecimiento de los principios generales de la Administración Electrónica en la Comunitat:

- Principio de cambio cultural organizativo.
- Principios de innovación, calidad, modernización y actualización permanente de la Administración electrónica.
- Principios de cooperación interadministrativa y de participación de la ciudadanía.
- Principio de fomento del capital intelectual.
- Principio de gratuidad general de la Administración electrónica.
- Principio de información eficiente, es decir, accesible, usable, completa, exacta, actualizada, segura, clara, íntegra, correcta y veraz, de consulta sencilla, organización y estructuración jerarquizada, homogénea e interoperable.
- Principio de estabilidad de la información ofrecida sobre vías electrónicas.
- Principio de celeridad en la tramitación y en la notificación de los actos administrativos.
- Principio de responsabilidad general por los contenidos e información propios difundidos electrónicamente.
- Principio de orientación total a la ciudadanía.
- Principio de administración común.
- Principio de libertad de elección tecnológica en el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos o a procedimientos administrativos.
- Principio de inalterabilidad de la relación jurídica administrativa.
- Principio de progresivo ejercicio de los derechos derivados de la relación electrónica.

El otro aspecto que trata esta Ley de una forma diferente al del resto de normativa, es la definición del ciudadano-cliente, pasando a denominarse en esta Ley “ciudadanía”.

Al igual que en los apartados de normativa de aplicación europea y estatal, en este apartado de normativa de la Comunidad Valenciana voy a desarrollarla por conceptos, haciendo especial énfasis en los aspectos que afecten directamente a la implantación de esta propuesta de mejora:

1. La sede electrónica de la Generalitat

Supletoriamente a lo establecido en la LAECSP sobre las sedes electrónicas, esta Ley regula en su artículo 9 que las entidades podrán tener una dirección propia de internet accesible a través de la sede electrónica de la Generalitat. Cada entidad será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios publicitados.

Se establecen unas obligaciones de contenidos mínimos en las sedes electrónicas de las entidades:

- Datos identificativos, estructura, organización y mapa de la sede electrónica, y datos de contacto.
- Estructura organizativa y funcional de la entidad titular de la sede electrónica, las normas básicas de su organización y funcionamiento y las modificaciones que se operen en dicha estructura y normativa.
- Información de interés general en relación con el ámbito territorial, funcional o personal, en que preste servicios o desarrolle su acción pública, como pueda ser la Comunitat Valenciana, el municipio o la provincia de la administración titular de la sede electrónica.
- Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, referida a aspectos económicos, contables, presupuestarios, tributarios, jurídicos y de participación de la ciudadanía.
- Directorio del personal dependiente, con especial indicación de los funcionarios y funcionarias a quienes se haya habilitado por cada administración pública para la identificación o autenticación de los ciudadanos y ciudadanas.
- Relación de servicios y procedimientos electrónicos disponibles y de documentos normalizados.
- Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede electrónica.
- Registro electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica, así como la disposición o disposiciones de su creación, con indicación del órgano responsable del mismo, documentos que se pueden presentar así como derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por parte de la ciudadanía.
- Perfil de contratante.
- Publicación electrónica de diarios, boletines y tablones de anuncios

- La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y sugerencias.
- Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la información que figure en ésta. Los titulares de sede electrónica publicarán en ella la carta de servicios de sede.
- Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés relevante en relación con el ámbito competencial del titular de la sede electrónica.
- Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ).
- Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo.

2. Acreditación electrónica

Se admitirán todos los certificados electrónicos relacionados en la LAECSP, también se admitirán los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV).

Se deberá disponer de registros actualizados de personal público habilitado para identificar y autenticar a ciudadanos y ciudadanas mediante los sistemas de firma electrónica.

Se podrán crear y regular registros de representación electrónica, en que se inscriban los poderes que habiliten al ejercicio ante ellas de dicha representación en nombre y por cuenta de personas físicas o jurídicas privadas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

3. Registro electrónico:

Los organismos de la Generalitat Valenciana (GVA), deberán disponer de un registro electrónico asociado a un registro general. En los registros presenciales de los organismos, deberá haber acceso al registro electrónico por medio de cajeros automáticos u otro dispositivo que permita interoperar con el registro electrónico. Esos cajeros electrónicos están regulados en el artículo 34.2 de la LAECV, ese artículo dice textualmente: *“se habilitarán espacios físicos para la instalación de terminales de gestión, comunicación, relación y tramitación electrónica de los ciudadanos y ciudadanas con las administraciones públicas, en régimen de autoservicio a través de acceso sencillo, seguro y exclusivo a las sedes electrónicas o a determinados servicios o procedimientos dentro de ellas, en especial aquellos que permitan la obtención inmediata de lo solicitado.”*

Mediante convenio podrá acordarse la interconexión con otros registros de otras Administraciones.

Los archivos electrónicos deberán archivar en soporte electrónico. En caso de digitalización de la documentación en papel, ésta sólo podrá ser destruida

previo informe de Administración Electrónica llevado a cabo por la Consellería u órgano competente en la materia. Se deberá estar sujeto a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos. Sobre todo en lo referente a los documentos susceptibles de formar parte del Patrimonio Documental Valenciano.

Uno de los recientes avances sobre registro electrónico, es la puesta en marcha del registro electrónico de la UPV a través de RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2012, del rector de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica la normativa de creación del Registro Electrónico de la Universitat Politècnica de València aprobada por el Consejo de Gobierno en sus sesiones de 11 de marzo de 2010 y de 1 de febrero de 2012. Publicado en el DOCV de 16 de febrero de 2012 y que entró en vigor el 17 de febrero de 2012.

4. Comunicaciones electrónicas.

La LAECV establece que la ciudadanía tiene derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración para formular todo tipo de solicitudes, recursos, reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, etc.

Se podrá establecer reglamentariamente la obligación de comunicarse exclusivamente por medios electrónicos cuando las personas interesadas sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas.

La comunicación entre Administraciones se realizará preferentemente por medios electrónicos.

5. Notificaciones electrónicas.

La notificación electrónica de cualquier acto administrativo se realizará a través del Registro Electrónico.

La LAECV implanta una novedad sustancial en el artículo 31.2, establece la posibilidad de consultar telefónicamente el estado de la tramitación de la ciudadanía, suministrando la administración una contraseña personal que permita la identificación del interesado. Respecto al resto, no presenta ninguna otra novedad importante remitiéndose a lo establecido en LAECSP

PARTE I: SITUACIÓN ACTUAL DE LA aVM

CAPÍTULO 3. LA AGENCIA VALENCIANA DE MOVILIDAD

3.1. MARCO NORMATIVO

La Agencia Valenciana de Movilidad (aVM), es una entidad de Derecho público sometida a Derecho privado, de las previstas en el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y en el Anexo IV de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, queda adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

La aVM se creó a partir de la Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de Constitución de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia. Modificada en lo que ahora es la aVM por la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana.

El marco normativo de la aVM queda de la siguiente manera:

- Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de Constitución de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia.
- Acuerdo de 5 de octubre de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia.
- Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
- Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana.

3.2. ÁMBITO TERRITORIAL

El ámbito de territorial de actuación de la aVM es la Comunitat Valenciana, por lo tanto ejercerá sus funciones en las tres provincias: Castellón, Alicante y Valencia.

3.3. COMPETENCIAS

Las competencias, como podremos ver más adelante, son muy extensas y abarcan toda la movilidad de la Comunitat Valenciana. Los tres grandes núcleos de competencias son en el transporte de viajeros por carretera en autobús, el servicio de taxi y la coordinación tarifaria de sistemas de peaje.

La Ley de Movilidad también atribuye a la aVM competencias en materia de movilidad peatonal y en bicicleta así como los futuros planes de actuación integral (PAI), donde se establece la obligatoriedad de entregar un plan de movilidad a la aVM del que será preceptiva su aprobación para poder ejecutar el PAI. Como aún no están asumidas esas competencias, las dejaremos como futuras líneas de actuación que deberá contemplar la adaptación a la e-administración.

3.3.1. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOBÚS

La Ley de Movilidad, asigna a la aVM las competencias en materia de transporte de viajeros en autobús de toda la Comunitat Valenciana, sólo exceptúa el transporte discrecional de viajeros entendido como aquel que se presta a grupos homogéneos de viajeros de forma puntual (Excursiones en autobús, viajes, etc.).

En la actualidad, podemos diferenciar las actuaciones de la aVM en materia de transporte de viajeros en autobús en dos grandes bloques:

- Gestión administrativa de las concesiones de transporte de viajeros: cambios de itinerarios, cambios de paradas, cambios de material móvil, actualización de tarifas, etc.
- Diseño y adjudicación de nuevas concesiones de transporte de viajeros.

La gestión administrativa de las concesiones contempla trámites ordinarios que se hacen todos los años con carácter general, actualización de tarifas por ejemplo, y otros que se efectúan con carácter extraordinario iniciado de oficio o a instancia de parte por los concesionarios.

En la Comunitat hay 86 concesiones de transporte de viajeros por carretera que son competencia de la aVM.

Por otro lado, constantemente se están estudiando mejoras en la red de transporte diseñando nuevas concesiones que si llegan a materializarse se convertirán en más concesiones de transporte de viajeros.

A continuación, relaciono en un listado las concesiones de la Comunitat Valenciana mencionando sólo su denominación, que por si misma ya permite intuir por donde discurre su trayecto:

Ilustración 4: Listado de concesiones de transporte de viajeros por carretera de la Comunitat Valenciana.

Matrícula	CONCESIÓN
CVA-001	ORIHUELA - GUARDAMAR - ALICANTE
CVA-002	CALLOSA - TORREVIEJA - ELCHE E HIJUELAS
CVA-003	CALLOSA DE SEGURA - HOSPITAL COMARCAL - ORIHUELA E HIJUELAS
CVA-004	HURCHILLO - TRES PUENTES Y ARNEVA - MOLINS
CVA-005	RELLEU - FINESTRAT - VILLAJYOYOSA
CVA-006	BENIDORM-RINCO DE LOIX-ALTEA-L'ALFAS-GUADALEST-CALA FINESTRA
CVA-007	DENIA - LES ROTES Y PLATJES
CVA-008	CREVILLENTE - PLAYA DEL PINET
CVA-009	JAVEA - PUERTO DE JAVEA - CALABLANCA
CVA-010	ABANILLA - ORIHUELA
CVA-011	XALO - EL VERGER
CVA-012	DENIA - JAVEA
CVA-013	BENIDOLEIG - DENIA CON PROLONGACION A BENIMAURELL
CVA-014	ALICANTE - ELCHE - CREVILLENTE

CVA-015	ALCOI - ALICANTE E HIJUELAS
CVA-016	SANTA POLA - ALICANTE
CVA-017	RELLEU - ALACANT
CVA-018	ALCOY - PEGO - VERGEL
CVA-019	ELCHE - ELCHE
CVA-020	ALICANTE - TORRELLANO
CVA-021	ORIHUELA - SAN JAVIER
CVA-022	BANYERES - YECLA E HIJUELAS
CVA-023	ALICANTE - VILLENA E HIJUELAS
CVA-024	ELCHE - SANTA POLA
CVA-025	ALICANTE - CERCANIAS
CVA-026	AGOST - ALICANTE
CVA-027	ELCHE - BAYA BAJA
CVA-028	ESTACIO DE CALP - PENYAL D'IFAC E HIJUELAS
CVA-029	ELCHE - ARENALES DEL SOL
CVA-090	ALICANTE - ORIHUELA
CVCS-101	ALCALA DE CHIVERT Y ALCOCEBER



CVCS-102	CASTELLON-VALENCIA CON PROLONGACION A VINAROSZ
CVCS-103	VILLAFRANCA DEL CID - MORELLA
CVCS-104	MONTANEJOS - VALENCIA
CVCS-105	CASTELLON-ALCAÑIZ Y CASTELLON-VINAROSZ
CVCS-106	BEJIS-VALL D'UIXO-VALENCIA
CVCS-107	VILLAFRANCA DEL CID - VALENCIA
CVCS-108	PUEBLA DE ARENOSO - ONDA - CASTELLON - VALENCIA
CVV-201	CASTIELFABIB - VALENCIA
CVV-202	REAL DE GANDIA - PLAYA DE GANDIA
CVV-203	XATIVA - BARXETA
CVV-204	CULLERA - MARENY DE SAN LORENZO
CVV-205	CORBERA - LLAURI - VALENCIA CON PROLONGACIONES
CVV-206	MILLARES - VALENCIA POR TORRENT
CVV-207	RAFELGUARAF - XATIVA
CVV-208	BICORP - SUMACARCER - VALENCIA
CVV-209	CARCAIXENT-ALGEMESI
CVV-210	TOUS - ALBERIC CON PROLONGACION A ALZIRA

CVV-211	CARCELEN - XATIVA
CVV-212	CATADAU - ALZIRA
CVV-213	TAVERNES DE VALLDIGNA - VALENCIA
CVV-214	ONTINYENT - GANDIA ; ALCOI - GANDIA
CVV-215	CARCAIXENT - POLINYA XUQUER - VALENCIA
CVV-216	CARCER - XATIVA
CVV-217	VENTA DEL MORO - REQUENA
CVV-218	SALVACAÑETE - LANDETE - VALENCIA
CVV-219	FUENTERROBLES - UTIEL
CVV-220	ALICANTE - TORRELLANO
CVV-221	PLAYA DE OLIVA - MOLINELL
CVV-222	ANTELLA - ALBERIC - ALZIRA
CVV-223	PINET - BENICOLET - XATIVA
CVV-224	VILLALONGA - ADOR - GANDIA
CVV-225	GANDIA - XERACO E HIJUELAS
CVV-226	ATZENETA D'ALBAIDA - XATIVA
CVV-227	XATIVA-CARCAIXENT-SIMAT DE LA VALLDIGNA-GANDIA



CVV-228	POBLA DEL DUC - VALENCIA
CVV-229	CULLERA - VALENCIA
CVV-230	ALGEMESI - CULLERA CON PROLONGACION A ALZIRA
CVV-231	PATRO - PEGO - GANDIA
CVV-232	BOCAIRENT - ONTINYENT
CVV-233	GATOVA - MARINES - OLOCAU NUEVO - MARINES - LLIRIA
CVV-234	BARX - GANDIA
CVV-235	REQUENA - UTIEL CON LA ESTACIÓN DEL AVE "REQUENA UTIEL"
CVV-250	VALENCIA - ALAQUÀS - ALDAIA CON PROLONG. A TORRENT Y MANISES
CVV-251	VALENCIA - GESTALGAR - SERRA
CVV-252	VALENCIA - ALBAL CON PROLONGACIÓN A SILLA Y PICASSENT
CVV-253	VALENCIA - SEDAVÍ
CVV-254	VALENCIA - TURÍS - YÁTOVA
CVV-255	VALENCIA - MONCADA
CVV-256	VALENCIA - SAGUNT
CVV-257	VALENCIA - EL PERELLÓ CON PROLONGACIÓN AL FARO DE CULLERA
CVV-258	CHESTE - LLÍRIA

CVV-259	VALENCIA - BENIFAÍÓ CON PROLONGACIÓN A BENIMODO Y LLOMBAI
CVV-260	BÉTERA - HOSPITAL DOCTOR MOLINER
CVV-401	YECLA - VALENCIA CON HIJUELAS
CVV-402	ALCOI - VALENCIA
CVV-403	ALICANTE - VALENCIA

[Fuente:] Elaboración propia.

3.3.2. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN TAXI

El otro núcleo de trámites que se realizan en el sector del transporte de viajeros es en el servicio de Taxi. Genera un flujo importante de tramitaciones administrativas (workflow), actualmente en la Comunitat Valenciana existen más de 4.000 licencias de taxi y unos 9.000 conductores habilitados. Las licencias de taxi tienen un trámite ordinario anual que es el visado de la autorización, más varios trámites extraordinarios que generan gran flujo de documentación administrativa.

Los conductores habilitados deben revisar su permiso cada 4 años y es competencia de la aVM gestionar los exámenes de capacitación de los profesionales del taxi, estableciéndose al menos, dos convocatorias al año con unos 500 aspirantes cada convocatoria.

3.4. SISTEMAS DE PEAJE

Los sistemas de peaje gestionados por la aVM son coordinados entre los distintos operadores, se gestionan los “bonos-transbordo” con diez viajes en los que se puede combinar dos tipos distintos de transporte en el mismo viaje, los “abono-transporte” que tienen una validez de 30 días sin límite de viajes ni límite de intercambio entre medios de transporte, tarjetas turísticas de uno, dos y tres días sin límite de viajes ni de medios de transporte y varios títulos especiales.

El sistema de coordinación en los sistemas de peaje, requiere un control de los viajes, usos y ventas de los títulos para proceder a la compensación económica a los proveedores y operadores de transporte.

La aVM recauda el precio de esos títulos a través de varias redes de venta (estancos, quioscos, estaciones de FGV), a las que les entrega la comisión que les corresponde

según haya sido su volumen de ventas y compensando después a los operadores de transporte por los usos realizados con esos títulos en sus respectivas redes de transporte.

Todas esas operaciones de coordinación tarifaria y financiera, se realizan utilizando una arquitectura tecnológica propia creada al efecto que tiene su sistema de mantenimiento y gestión informatizada, este sistema de gestión, control, mantenimiento y compensación genera un gran volumen de trámites necesarios para gestionar los datos (Entre 400.000 y 500.000 operaciones/día).

3.5. GESTIÓN DOCUMENTAL

La gestión documental de todo el flujo diario de tramites que realiza la aVM, viene heredado del sistema de gestión administrativa que usaba la Conselleria de Transportes en el año 2.000, al ser quien tenía las competencias antes de la creación de la aVM. El sistema no ha evolucionado mucho desde entonces pero si han ido aumentando las competencias de la aVM, la cantidad de trámites diarios y la complejidad de éstos.

En la actualidad el sistema de gestión documental es en formato papel y el sistema de archivo esta sin normalizar controlándolo cada uno de los empleados en función de las tareas que realiza. Por supuesto tampoco existe ningún plan de seguridad de archivo, tablas de valoración documental ni sistema de digitalización y custodia.

Este sistema, un poco caótico, es debido a que al heredar el sistema de gestión documental de una Conselleria no se transmiten también sus sistemas de archivo y seguridad ni se adaptaron en su momento las instalaciones de la aVM.

Tras la exposición anterior, esta suficientemente justificada la adaptación de la aVM a la Administración Electrónica, aprovechando ese impulso para implantar un sistema de archivo y gestión documental normalizado. Esta mejora contribuirá a conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos que presta la aVM.

Durante el último trimestre de 2011 y enero de 2012, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana realizó una auditoria de gestión sobre la medida en que se había implantado la Administración Electrónica y su grado de eficacia en el sector público valenciano. El resultado de la auditoría refleja lo expresado en este trabajo instando a la aVM a adaptarse lo más pronto posible a la e-Administración.

En la siguiente parte del trabajo expondré la propuesta de mejora llegando más allá de las indicaciones de la Sindicatura de Comptes, aplicando una mejora mucho más ambiciosa que convierta la aVM en un organismo puntero en cuanto a su sistema de gestión utilizando las TIC.

PARTE II: PROPUESTA DE MEJORA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO 4. EL ARCHIVO

La normativa de aplicación de este capítulo, además de la citada anteriormente, será la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos.

4.1. INVENTARIO DEL ARCHIVO

Para construir algo, lo primero que debemos hacer es proveernos de unos buenos cimientos si pretendemos algo estable y duradero, los cimientos de nuestra mejora será el archivo y el primer paso que debemos dar es inventariar todo el archivo de la aVM.

En la definición de sistema de gestión de documentos de la Ley 3/2005, se define de forma muy clara y concisa lo que pretendo desarrollar en este capítulo: *“Sistema de gestión de documentos: es el conjunto de operaciones técnicas, integradas en la gestión administrativa general, que, basadas en el análisis de la producción, tramitación y valor de la documentación, se dirigen a la planificación, el control, el uso, la transferencia y la conservación o eliminación de la documentación.”*

Para crear el inventario del archivo, en primer lugar debemos identificar las unidades que generan flujo de archivos, esas unidades son:

- Taxi
 - Gestión
 - Visados
 - Rehabilitaciones
 - Suspensiones
 - Transmisiones
 - Cambio de material
 - Tarifas
 - Subvenciones
 - Capacitación profesional
 - Renovaciones
 - Exámenes
 - Tarjetas de conductor
- Viajeros
 - Nuevas concesiones/autorizaciones
 - Modificaciones concesionales

- Planificación
 - Diseño de recorridos concesionales
 - Paradas de las concesiones
 - Control de horarios
- Administración
 - Gabinete de dirección
 - Jefatura de Áreas
 - Contabilidad
- Sistemas de peaje
 - Control de usuarios de tarjetas personalizadas
 - Gestión de recaudación y compensaciones
 - Gestión administrativa del sistema de peaje
- Informática
 - Mantenimiento de equipos uso interno
 - Mantenimiento de equipos peaje
- Atención al usuario
 - Oficina de atención empalme
 - Oficina de atención colón
 - Registro
- Inspección
 - Inspección y sanciones taxi
 - Inspección y sanciones viajeros
 - Control de calidad del servicio

En el inventario habrá que relacionar los archivos generados en cualquier soporte diferenciando el soporte y el origen que lo generó.

4.2. CATÁLOGO DEL ARCHIVO

Con la información recogida en el inventario del archivo, elaboraremos un catálogo del archivo con la estructura definida en el punto anterior, en el caso del catálogo tendremos que definir un mayor detalle creando recipientes para colocar los documentos generados, recipientes que deberán ser tanto virtuales como físicos, como ejemplo usaré los trámites de “Inspección y sanciones taxi”:

- Inspección y sanciones taxi
 - Documentación general
 - Expedientes sancionadores

Se creará una sección del archivo físico donde se colocaran los expedientes sancionadores en formato papel evitando acumular documentos innecesarios, a la vez se creará un espacio virtual que alojará los trámites asociados a cada expediente siguiendo la jerarquía documental establecida en el catálogo del archivo, clasificando la documentación activa, la documentación semiactiva y la documentación histórica.

4.3. GESTIÓN DEL ARCHIVO

Cada unidad de la aVM deberá mantener el inventario tanto del archivo físico como del virtual de los distintos archivos que se estructuraran según la frecuencia de uso de la documentación;

- El Archivo de Gestión será el que esta constituido por la documentación activa y en su formato en papel estará físicamente en las dependencias de cada unidad. Se designará un administrador del archivo de cada unidad.
- El Archivo Central estará constituido por la documentación semiactiva de uso frecuente, su situación física estará también en las dependencias de las unidades correspondientes siempre y cuando exista disponibilidad de espacio.
- El Archivo Intermedio reunirá la documentación administrativa semiactiva de uso escaso.
- El Archivo Histórico reunirá la documentación que posee valor cultural, con el objeto de conservarla permanentemente.

La Comisión de Valoración Documental determinará la documentación que formará parte del archivo histórico en la Tabla de Valoración Documental.

Todos los documentos del archivo deberán estar digitalizados siguiendo los estándares establecidos por la Agencia Tributaria. Se nombrará un administrador general del archivo (archivero), de entre los miembros de la Comisión de Valoración Documental, cuyas funciones serán, entre otras, la supervisión de la gestión del archivo de las distintas unidades de la aVM asegurándose que se mantienen correctamente cada uno de los archivos.

4.4. VALORACIÓN DE RIESGOS

Se establecerá un Plan de Valoración de Riesgos de archivo, estableciendo las características técnicas, los sistemas de extinción de incendios, riesgos de agua, la ubicación física efectiva de cada uno de los archivos y los materiales que deben utilizarse para archivar la documentación (tipo de carpetas, estanterías, etc.).

En el informe se incluirán las posibles obras de remodelación de las instalaciones para adaptarlas a las exigencias del Plan y la periodicidad con la que se revisaran las instalaciones.

4.5. COMISIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el Archivo, será la Comisión de Valoración Documental, compuesta por los responsables de cada unidad administrativa de la aVM a la que asistirá el Archivero con voz pero si voto, asumiendo las funciones de moderador, coordinador y secretario de la Comisión.

La Comisión será la encargada de emitir los informes necesarios para la Junta Calificadora de Documentos Administrativos de la Consellería con competencias en materia de cultura.

4.6. TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL

En la Tabla de Valoración Documental se contemplaran todos los tipos de documentos que se generan por la aVM siguiendo la estructura ya definida en el inventario y en el catálogo del archivo, además incluirá los periodos de validez de la documentación y la vida que debe tener cada documento, estableciendo si debe destruirse o conservarse una unidad documental y pasar a considerarse archivo histórico.

La Tabla de Valoración Documental deberá ser aprobada por la Junta Calificadora de Documentos Administrativos y publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO 5. NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El Catálogo de Procedimientos Administrativos es el inventario de procedimientos administrativos que gestiona la aVM. El catálogo debe estar dividido en los siguientes apartados:

- Tema: Transporte de viajeros, Taxi, tarjeta Móvilis, Subvenciones, etc.
- Perfil: Ciudadano, empresa, administración.
- Tipo de procedimiento: Sanciones, exámenes, licencia taxi, tarifas autobuses, etc.
- Unidad administrativa: Viajeros, Taxi, Peaje, Sanciones, Atención Ciudadanía, Registro.

En él se deben recoger todos los procedimientos, su descripción, plazos, efecto del silencio, formularios asociados, etc. El catálogo será accesible desde el portal de la aVM y será visible a los ciudadanos 24 h. al día, 7 días a la semana aunque la tramitación de algunos procedimientos no podrá efectuarse completamente por cumplir con el calendario del Registro Electrónico.

El Catálogo debe tener como soporte una aplicación informática que permita su gestión, la realización de consultas, el acceso a los modelos normalizados y además, la puesta a disposición de los datos necesarios para el inicio telemático de los procedimientos.

Ilustración 5: Modelo de interface de búsqueda del Catálogo de Procedimientos de la aVM

The screenshot shows a web interface titled 'Buscador avanzado'. It features a search input field labeled 'En Título' with the placeholder text 'Introduzca el texto'. Below the input field are four dropdown menus: 'Todos los temas', 'Todos los perfiles', 'Todos los tipos de Procedimientos', 'Todos los Departamentos', and 'Todos los Órganos gestores'. A yellow 'Buscar' button is located at the bottom right of the search area.

[Fuente:] [Catálogo de Procedimientos Administrativos del Gobierno de Canarias.](http://www.gobiernodecanarias.org/tramites/tramites)
<<http://www.gobiernodecanarias.org/tramites/tramites>>

Se creará un protocolo de actualización del Catálogo en el que se identificará y describirán los procesos de alta, baja y modificación de los procedimientos administrativos incluidos en el Catálogo y a sus responsables. En ese protocolo se hará constar el carácter perceptivo de la inclusión de la información de cualquier tramitación antes de proceder a su publicación en el DOCV, así se asegura la inclusión

de todos los futuros trámites en el Catálogo. Una vez publicado el trámite en el DOCV se incluirá éste en el Gestor Único de Contenidos de la Generalitat (GUC).

5.2. FORMULARIOS NORMALIZADOS

Para los trámites administrativos que realiza la aVM, en los que sea necesaria la cumplimentación de cualquier tipo de documentación, se crearán formularios normalizados siguiendo las directivas establecidas en el Manual de Formularios Normalizados de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Generalitat. Los formularios deben dar al usuario de la plataforma la opción de tramitarlos telemáticamente o de imprimirlos para presentarlos de forma presencial en el Registro de la aVM.

CAPÍTULO 6. INTEROPERABILIDAD

Si tenemos en cuenta la descripción de interoperabilidad que hace el Gobierno de España: *“La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las Administraciones públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la realización de diferentes principios y derechos; para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios; todo ello facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información.”*

Uno de los objetivos de la mejora es facilitar a la ciudadanía herramientas con las que pueda agilizar sus trámites con la aVM y a la vez reducir la carga administrativa que soporta. Desde el Consell se ha impulsado la reducción de esas cargas administrativas a través del Decreto 165/2010 de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público.

Una de las medidas introducidas es la prohibición de pedir a la ciudadanía fotocopias de los documentos que debían ser aportados junto con los originales en vigor para su cotejo, en su lugar se establece una autorización expresa para que la administración compruebe los datos del solicitante por medios telemáticos.

Para comprobar esos datos, la aVM debe ser capaz de comunicarse telemáticamente con las bases de datos de las distintas Administraciones, los datos del Documento Nacional de Identidad deberán comprobarse desde una aplicación informática del Ministerio del Interior. Los datos de residencia se comprobarán desde una aplicación del Instituto Nacional de Estadística a través del Padrón de habitantes. La situación deudora con la Seguridad Social se comprobará a través de las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además de estos trámites se pueden

incorporar todos los que sean susceptibles de reducir la documentación adjunta a la tramitación, ese es el fin de esta mejora, conseguir que el ciudadano sólo tenga, en el mejor de los casos, que rellenar un formulario on-line sin tener que presentar ninguna documentación adjunta, esto nos llevaría a un ahorro de recursos por parte de la ciudadanía y por parte de la Administración que se traducirían en una mayor eficiencia.

Podemos deducir que la interoperabilidad con otras Administraciones es crucial para la adaptación a la Administración electrónica. Diferenciaré a continuación, la interoperabilidad con las distintas Administraciones en función de su ámbito territorial.

6.1. INTEROPERABILIDAD CON OTRAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS

El sistema debe ser capaz de interactuar con las bases de datos de otras Administraciones autonómica, sobre todo de la Comunitat Valenciana. Para realizar muchos de los trámites es necesario conectar con bases corporativas de GVA, por ejemplo para verificar el estado de las deudas tributarias con la Conselleria de Hacienda, gestionar las autorizaciones de Taxi, etc.

Para realizar esos trámites, en la actualidad se trabaja con varias aplicaciones corporativas, la misión de la plataforma eAdministración sería interactuar con una sola aplicación mejorando considerablemente la eficiencia en la gestión.

6.2. INTEROPERABILIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Al igual que con la Administración autonómica, con la AGE también se intercambian datos en los trámites que gestiona la aVM, por ejemplo la base de datos SITRANBUS que gestiona las concesiones de transporte de viajeros por carretera, SITRANGESTIÓN que gestiona las autorizaciones de transporte de todo el país, Tesorería de la Seguridad Social para comprobar si los interesados están al corriente con sus obligaciones fiscales, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, etc.

En este caso, la plataforma también debe ser capaz de interactuar con las distintas aplicaciones de forma transparente para el usuario, centralizando el uso en una sola pantalla de inserción de datos.

CAPÍTULO 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

7.1. GESTOR DOCUMENTAL

Los documentos generados por el sistema de registro, expedientes, sede electrónica, etc. serán custodiados en el Gestor Documental, debe permitir que diferentes usuarios, mediante un completo sistema de perfiles, puedan acceder a los documentos custodiados por el Gestor Documental. La información se almacenará de forma estructurada por ámbitos de gestión.

El sistema dispondrá de un acceso web que permitirá al usuario previa identificación acceder desde un navegador a los documentos. Mediante la inclusión de una serie de reglas, se automatizarán ciertas tareas como la de envío de emails, transformación de ficheros y copia automática.

Los documentos serán transformados a PDF/A y se les aplicará la firma electrónica en formato de larga duración XL que permitirá garantizar, la integridad, accesibilidad, autenticidad y fiabilidad de los documentos a lo largo del tiempo. Para todos los documentos aunque no estén firmados electrónicamente en la base de datos se almacena la huella digital (HASH) que garantiza la integridad del mismo.

Los documentos tendrán metadatos que permitirán la búsqueda compuesta por contenidos, las búsquedas que permitirá el Gestor Documental son:

- Por contenido (texto libre)
 - Búsqueda de las palabras dentro del texto (múltiples formatos).
 - Rankin determinado por número de consultas

- Índices de metadatos
 - Categorías
 - Rango de fechas
 - Propiedades

Ilustración 6: Ejemplo de buscador del Gestor Documental

Buscar:

▼ **Mostrarme resultados para**

- Todos los elementos
- Nombres de fichero y contenido
- Sólo nombres de fichero
- Sólo nombres de espacio

▼ **Buscar en**

- Raíz del repositorio
- Espacio específico:
- Incluir espacios hijo

► **Mostrarme resultados en las categorías**

▼ **Buscar también**

Tipo de Carpeta:

Tipo de contenido:

Formato del Contenido:

Título:

Descripción:

Autor:

Fecha de modificación:

Desde:

A:

Fecha de creación:

Desde:

A:

► **Opciones Adicionales**

[Fuente]: Modelo de buscador de una sede electrónica. Indenova. 2011.

Los documentos estarán alojados en entorno web cumpliendo con todas las especificaciones del Esquema Nacional de Seguridad, con ello además de facilitar el acceso minimizará la infraestructura necesaria para alojar esos datos.

Cada usuario, mediante un perfil personal, podrá acceder a los apartados que tenga habilitados según sus funciones y necesidades, en esos permisos se delimitará las áreas del gestor a las que pueda acceder y los permisos de edición e impresión de documentos. Se dará acceso también a otras Administraciones para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.

Todos los documentos generados por la aVM deberán ser informatizados e incluidos en el Sistema, los documentos que no genere la aVM y entren por registro deberán también ser informatizados y clasificados.

7.2. SEGURIDAD

La seguridad de la mejora la podemos diferenciar en dos partes; una sería la parte física del sistema y otra la digital.

Respecto a la parte física, podemos inspirarnos en la normativa existente sobre seguridad del archivo físico. Los sistemas de prevención de incidentes que tomaremos en los distintos archivos físicos de la aVM serán los siguientes:

El Archivo de Gestión: en esta parte del archivo están los expedientes administrativos vivos de uso diario, es conveniente que estén ubicados en los despachos de cada una de las Unidades de la aVM, se colocarán en carpetas de un material que no sea muy ácido, el modelo de la carpeta lo indicará la Comisión de Valoración Documental (CVD), con el fin de que las carpetas estén normalizadas para todas las Unidades, cuando el expediente sea muy extenso deberá pasarse a un soporte que tenga más capacidad y se seguirá custodiando en la Unidad mientras siga estando vivo. La situación de las estanterías deberá ser en un sitio donde no le de la luz directa del sol y lo más cerca posible de los detectores de humos, tampoco deberán estar muy cerca del suelo, debiendo existir una separación mínima entre la última balda de la estantería y el suelo que precisará la CVD.

El Archivo General: los expedientes que dejen de estar activos porque por ejemplo ya se ha resuelto un asunto pero aún es susceptible de reabrirse con un recurso, pasarán a este archivo. La situación física de ese expediente será en el espacio dispuesto para tal fin en el sótano de la aVM que esté debidamente acondicionado según el plan de riesgos dictado por la CVD. El responsable del archivo (archivero) será quien determine en que estantería debe situarse cada expediente.

El Archivo Intermedio: Cuando los expedientes ya están cerrados y no se prevé su uso más que para consulta, se eliminará de los expedientes las grapas, clips, gomas y cualquier otro elemento extraño que pueda deteriorar el material. El expediente se

foliará en orden inverso, la página más antigua que se supone será una solicitud en la mayoría de los casos, será el documento número uno, siendo el último documento el que lleve el número más alto, esto nos permitirá añadir nueva documentación al expediente si fuese necesario.

Archivo Histórico: los expedientes que pasen a este archivo deberán ser objeto de análisis por parte de la CVD, que acordará si el expediente se conserva o no y en caso de conservarse que parte del expediente será objeto de expurgo. El archivo histórico estará diferenciado físicamente del resto de archivos y será informada la Junta Superior de Valoración Documental de la Generalitat por si fuese conveniente pasar a formar parte del archivo histórico de la Comunitat.

El otro apartado de la seguridad del sistema esta contemplado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en el ámbito de la Administración Electrónica. La información personal de la ciudadanía es un elemento en el que debemos volcar toda nuestra prudencia y celo, más incluso en los temas relacionados con la eAdministración debido al recelo que produce en la población el uso de la TIC. Esa información personal es parte de la intimidad e independencia y por lo tanto forma parte del principio universal de libertad que recoge nuestra Constitución de 1978.

En el preámbulo del ENS se indica cual es su finalidad u objetivo: “La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios.”

El Esquema Nacional de Seguridad busca la confianza de la ciudadanía en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas.

La definición que el ENS hace de la seguridad de la redes y de la información, nos ayudará a comprender mejor cuál es su función: “se entiende por seguridad de las redes y de la información, la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles”.

El resto del ENS debe ser respetado por el sistema de eAdministración de la aVM, sin perjuicio del cumplimiento del resto de normativa que lo regula.

7.3. SEDE ELECTRÓNICA

En la página inicial de la Sede electrónica se encuentran una serie de servicios que permitirán al ciudadano localizar cualquier trámite que se pueda realizar con Agencia Valenciana de Movilidad. Dichos servicios serán los relacionados en el catálogo de trámites administrativos.

De forma general, la ciudadanía podrá consultar desde el cuadro de búsquedas cualquier información que desee encontrar sin la necesidad de introducir los términos exactos de la búsqueda, el sistema incorporará un buscador semántico basado en la utilización de palabras clave, gestión de plurales y singulares, eliminación de palabras no importantes, etc.

Además de poder localizar los trámites desde el buscador, el sistema dispondrá de una categorización de los mismos en secciones, con lo que la ciudadanía podrá acceder a la sección “Taxi”, donde se listarán todos los trámites que se encuentren en dicha sección.

Una vez localizado un trámite, se podrá acceder a la ficha de información del mismo, pudiendo disponer de una completa información y consultar todos los datos referentes al trámite como descripción, normativa, documentación a aportar, requisitos, recursos, tasas, formas de pago, canales disponibles, etc.

Se puede iniciar un trámite en cualquier momento, ya sea para finalizar la presentación de forma telemática o para preparar toda la documentación necesaria, para imprimirla y entregarla en el Agencia Valenciana de Movilidad de forma presencial.

El sistema presentará, de forma automática al usuario, los documentos que debe aportar en función de las opciones que haya seleccionado en el primer paso del tramitador. Por otro lado, el usuario tendrá diversas opciones para especificar cómo quiere presentar el documento.

Una vez cumplimentados todos los pasos por parte del ciudadano, se le mostrará la instancia que ha construido el asistente en función de las respuestas realizadas por el ciudadano y que, en caso de estar conforme, procederá a firmar electrónicamente (en caso de haber seleccionado la opción de presentación on-line) o a imprimir la instancia con un número de resguardo para presentarla en papel en la Agencia Valenciana de Movilidad (en el caso de haber seleccionado en el primer paso la opción de presentación presencial).

Para las presentaciones telemáticas, una vez firmada electrónicamente la instancia por parte del ciudadano, la documentación se envía al registro telemático, el cual procede a registrar su entrada en la Agencia Valenciana de Movilidad y a firmarlo electrónicamente con un certificado de sello de órgano de la unidad registral, certificando la fecha y hora de presentación mediante el sellado de tiempo de la operación.

Finalmente se le entrega al ciudadano un justificante electrónico de la presentación del trámite incorporando un cajetín final con la información de las firmas electrónicas realizadas, el número de registro, la fecha de entrada y el identificador único de la operación (HASH) con su código de barras.

Sería conveniente que el sistema descrito dispusiera de un módulo de avisos vía correo electrónico o SMS que permitiese complementar el canal de comunicación con el ciudadano, enviándole ciertos avisos importantes por estos canales de forma adicional a la publicación en la Sede Electrónica.

La presentación telemática de solicitudes estará basada en un asistente virtual de presentación de trámites el cual guía al ciudadano, una vez inicie un trámite en el proceso de presentación, mediante una serie de preguntas y opciones que le presenta el sistema y que le prepara la documentación final a presentar. Cada trámite dispondrá de un formulario asociado. Como se ha mencionado anteriormente los trámites disponibles serán los del Catálogo de Trámites Administrativos de la aVM que deberá ser creado y aprobado por la dirección de la aVM.

7.4. REGISTRO ELECTRÓNICO

El sistema permitirá registrar documentos de forma electrónica, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. El registro podrá realizarse por la ciudadanía y por los empleados públicos de la aVM, permitiendo el registro de entrada y de salida sin perjuicio de la posibilidad de presentar por parte de la ciudadanía el registro de forma presencial.

Con esta medida se persiguen dos objetivos, por un lado que la ciudadanía pueda presentar documentación on-line sin necesidad de desplazarse disponiendo de un servicio 24/7, y por otro lado ahorrar papel en el registro de salida al no tener que imprimir los documentos para registrarlos.


Después de crear el trámite telemático por parte de la ciudadanía o preparar el documento a comunicar o notificar por parte de la aVM, se deberá confirmar firmándolo digitalmente, el sistema le solicitará seleccionar el certificado e introducir el PIN. Tras la firma aparecerá el acuse de recibo (mismo documento presentado al firmar), pero firmado digitalmente que incluirá los siguientes datos:

- Número de registro: número de anotación en el Registro telemático de entrada que ha generado la instancia presentada. No se mostrará en el caso de trámites para los que no sea necesario certificado digital, ya que no se registrarán.
- Fecha de registro: fecha y hora hábil, a partir de la cual comienzan a computar los plazos. Si la solicitud se presenta en un día inhábil, esta tendrá fecha de registro del siguiente día hábil a la presentación de la solicitud. No se mostrará

en el caso de trámites para los que no sea necesario certificado digital, ya que no se registrarán.

- Fecha de presentación: fecha en la que se presenta la solicitud, independientemente de que sea un día hábil o no.
- Identificador único del documento: código identificativo único del documento.
- Datos de la firma del solicitante: donde se incluyen el nombre de la persona firmante, la fecha y hora de la firma y la validez del certificado digital con el que se ha firmado el documento. No se mostrará en el caso de trámites para los que no sea necesario certificado digital.
- Datos de la firma de corporación: en los que se incluyen el organismo que realiza el sellado de tiempo, la fecha del sello de tiempo y la entidad certificadora que lo aplica.

Ilustración 7: Ejemplo de datos de registro electrónico.

Firmado por: Nombre Apellido	Fecha Firma: jueves, 08 abril 2010, 09:15	Validez: Des d 13/05/2008 10:34:50 Fins a 13/05/2010 10:44:50
Organismo de sello: Informática	Sello de tiempo: 08/04/2010 9:15:54	Aplicada por: Root CA
Num. registro: 2010300005	Fecha registro: 12/01/2010 12:35:40	Fecha presentacion: 12/01/2010 12:35:40
 loLU qqas vFZP UNky HNq7 COK3 vRI=		

[Fuente]: Documento registrado electrónicamente. Indenova. 2011.

Los documentos presentados de forma presencial deberán incluirse en el sistema como si se tratase de una presentación telemática, en este caso serán los empleados de registro los encargados de digitalizar y registrar el documento.

El documento generado por el registro electrónico, en cualquiera de sus modalidades, será incluido en el sistema de gestión de trámites electrónico y de gestión documental además de incluirse en la carpeta ciudadano correspondiente en caso de una presentación de entrada por parte de la ciudadanía. En el siguiente punto veremos en que consiste la carpeta ciudadano.

7.5. CARPETA CIUDADANO

La nueva Sede Electrónica, dispondrá de un servicio especial de Carpeta de la Ciudadanía en el cual, tras la correspondiente identificación, se accederá a toda la información, avisos, notificaciones, expedientes/trámites, registros que el Cliente disponga del ciudadano. El acceso a la Carpeta Ciudadano se realizará mediante alguno de los certificados digitales reconocidos:

- DNI electrónico
- ACCV (ciudadano, empleado público, persona jurídica)
- Camerfirma (pertenencia, representante, persona jurídica),...

El espacio llamado Carpeta Ciudadano podrá ser titularidad de una persona física, de una persona jurídica (gestorías, operadores, otras Administraciones, etc.) o de un empleado público de la aVM, el sistema identificará a cada uno de ellos por su DNI o NIF.

Una vez autenticado en el sistema, se le mostrará un panel de información donde podrá localizar toda la información que se disponga de él o de sus representados (datos personales, datos del padrón, pagos y gestión tributaria), así como todos los trámites, avisos y notificaciones realizadas.

Una vez presentado un trámite éste estará disponible en la ficha de Mis expedientes de la Carpeta Ciudadano, permitiendo disponer de un canal de comunicación. Esto permite ajustarse a los niveles de interoperabilidad marcados por la Unión Europea, permitiendo al ciudadano aportar cualquier documento, subsanar, recibir comunicaciones y documentos por parte de la Administración, etc.

Ilustración 8: Ejemplo de buzón de documentos registrados de la Carpeta Ciudadano.

Mis expedientes	En representación	Mis registros	Tributos	Mis avisos	Ver padrón	Configuración	Notificaciones electrónicas
Número anotación	Fecha	Expone					
2010000295	08/04/2010 9:14:53	Presentación electrónica del Trámite Licencia de obras menores: canalizaciones...					
2010000294	06/04/2010 17:23:34	Presentació electrònica del Tràmit Certificats Urbanístics...					
2010000293	06/04/2010 0:0:1	campo expone instancia general...					
2010000292	06/04/2010 0:0:1	Presentació electrònica del Tràmit Certificats Urbanístics...					
2010000288	06/04/2010 0:0:1	Presentació electrònica del Tràmit Llicència d'obra major...					
2010000290	06/04/2010 0:0:1	Presentación electrónica del Trámite Licencia de obra mayor...					
2010000287	06/04/2010 0:0:1	Presentació electrònica del Tràmit Llicència d'obra major...					
2010000286	06/04/2010 0:0:1	Presentació electrònica del Tràmit Certificats Urbanístics...					
2010000289	06/04/2010 0:0:1	Presentación electrónica del Trámite Licencia de obra mayor...					
2010000291	06/04/2010 0:0:1	Presentación electrónica del Trámite Licencia de obra mayor...					

| < << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> > |

[Fuente]: Carpeta Ciudadano. Indenova. 2011.

Desde la Carpeta Ciudadano se podrá realizar el seguimiento de todos los expedientes propios, asociados a los trámites presentados, tanto las que lleven expediente asociado, como las que no, así como a sus sanciones, trámites o recursos, solicitudes, etc. Estos expedientes podrán estar iniciados o no.

El sistema utilizará un código de colores para cada uno de los expedientes a modo de semáforo:

- Estado **Presentado**: se ha aportado toda la documentación necesaria y está a la espera de ser iniciado el expediente.
- Estado **Paralizado**: falta aportar algún documento a la solicitud.

Pulsando sobre alguno de los expedientes podrán comprobarse los detalles del mismo: en que estado está, quién está tramitando en ese momento el expediente, en caso de estar paralizado se expondrá el motivo, etc.

Al darse de alta en la Carpeta Ciudadano, se indicará el correo electrónico que servirá de comunicación con la aVM, de forma supletoria también podrá indicarse el número de teléfono móvil con lo que además de la comunicación por correo electrónico recibirá un SMS.

Cada comunicación o notificación que el sistema de forma automática o algún empleado público de la aVM incluya en la Carpeta Ciudadano, será comunicada por correo electrónico y SMS, si es el caso, a la persona interesada titular de esa Carpeta Ciudadano. Con esto se cumple lo establecido en la normativa vigente sobre notificaciones y comunicaciones electrónicas que conlleva el aumento de la eficiencia de los trámites y el ahorro de recursos de la aVM:

7.6. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

La notificación electrónica esta regulada en el capítulo IV de la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. Al principio del capítulo hace una definición muy acertada de las comunicaciones electrónicas entre la ciudadanía y la Administración: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para formular todo tipo de solicitudes, recursos, reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, oposiciones y consultas, así como para recibir notificaciones y todo tipo de comunicaciones de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.”

Cuando desde la aVM sea necesario comunicar o notificar algún asunto a la ciudadanía, el sistema de eAdministración colocará el documento en el apartado notificaciones de la Carpeta Ciudadano

El servicio Notificaciones Electrónicas presentará las siguientes características:

Un ciudadano podrá en todo momento suscribirse y cancelar la suscripción de los trámites que desea recibir notificaciones telemáticas. Las personas jurídicas, asociaciones, otras Administraciones, etc. deberán recibirlas únicamente de forma telemática.

Dependiendo del estado de una Notificación electrónica, se desencadenará una acción determinada. Estos estados pueden ser:

- “Pendiente de lectura”. Cuando se lance una Notificación Electrónica, el ciudadano recibirá un correo electrónico y SMS avisando que la ha recibido y ésta habrá quedado almacenada y marcada como que el ciudadano no la ha leído todavía. La acción que se desencadenará al hacer clic sobre una Notificación en este estado es como sigue:
 - Se redirige al ciudadano a la página del acuse de recibo para la notificación, donde encontrará el texto legal que corresponde, y se le dará a elegir entre “aceptar” o “rechazar” la notificación.
 - “Aceptando la notificación”. La aceptación del acuse de recibo, permitirá leer la notificación y descargar el documento que en ella se adjunta.
 - “Rechazando la notificación”. Si existiera algún motivo por el cual no se quisiera aceptar la Notificación, cabe la posibilidad de rechazarla (siempre antes de haberla leído, una vez leída no es posible rechazarla). Se seleccionaría el motivo de rechazo y se firmaría el acuse como rechazo.
- “Leída”. Al hacer clic sobre una Notificación Leída, se redirige al ciudadano a una página donde se podrá descargar la documentación adjunta a la notificación.
- “Rechazada”. Si se rechaza una Notificación, se enviaría al ciudadano a una página donde se le informaría de la fecha en la que se rechazó la notificación.
- “Rechazada automáticamente”. Existe un caso especial de rechazo que realiza el sistema. Cuando las notificaciones están en el estado “Pendiente de lectura” y pasa el plazo legal de exposición establecido en la legislación vigente pasan a un estado de rechazo por omisión, al hacer clic en ellas se remite al ciudadano a una página donde se le informa de la fecha en la que se produjo el rechazo.

7.7. PASARELA DE PAGOS

El sistema debe incorporar las funcionalidades del pago telemático seguro con la entidad o entidades bancarias que se determinen, para ello se crearán cuantas cuentas bancarias sean necesarias para facilitar el pago telemático de sanciones, tasas, fianzas, etc.

En caso de que el pago del trámite en cuestión no este delegado en la aVM, se ofrecerá a la ciudadanía el acceso a la pasarela de pagos general de la Generalitat aceptando, previa comprobación, el justificante de pago que emite.

7.8. TRÁMITE TELEMÁTICO DE EXPEDIENTES

Este es un apartado muy importante del sistema por el volumen de workflow que soporta. La tramitación telemática va enlazada e interactúa con el resto de partes de la aplicación.

El Gestor de Trámites inicia con la puesta en funcionamiento del Catálogo de Trámites Administrativos de la aVM, en el Catálogo se harán constar los empleados que intervienen en cada una de las partes de los procedimientos estableciéndose una jerarquía de permisos de usuario para cada empleado público de la aVM.

Para acceder al Gestor de Trámites será necesario identificarse mediante certificado digital, una vez identificado al empleado público le aparecerá en pantalla la interface de la aplicación donde se mostrarán todas las tareas pendientes e históricas. Al seleccionar un trámite que figure como pendiente se le ofrecerá realizar varias operaciones:

- **Aceptar el trámite:** con esto el trámite pasa al siguiente empleado público que tiene que intervenir en el proceso o se tramita automáticamente para archivo, notificación o comunicación. El trámite pasa a figurar como histórico.
- **Modificar:** se abrirá el expediente completo para modificar o añadir cualquiera de los documentos asociados.
- **Rechazar:** en el caso de que el empleado público encuentre alguna incidencia en el expediente, lo rechazará. El sistema le pedirá que rellene un texto explicando cuál es el motivo y el trámite pasará al empleado del que procedió el trámite. También se podrá seleccionar mediante una lista desplegable a quien se le envía el trámite rechazado.
- **Avisar:** también existirá la posibilidad de mandar copia del trámite a cualquier empleado de la aVM para revisión. Sólo podrá devolverlo a quien le avisó añadiendo una nota con sus observaciones.

CAPÍTULO 8. CONDICIONES ECONÓMICAS

Con la publicación del Decreto 165/2010 de reducción de cargas administrativas, la dirección de la aVM me encomendó investigar sobre la posibilidad de adaptarnos a la eAdministración, sobre todo si era económicamente viable y si mejoraría la eficacia de la gestión de la aVM. Junto con el Jefe del Área de Sistemas de Peaje, Telecomunicaciones e Informática de la aVM, iniciamos una ronda de consultas a las empresas especializadas en soluciones de eAdministración. (Indenova, Comunycarse, MASmedios, Capgemini, Therefore-CANON, SOLAR, RICOH, NEORIS, Gmv y Daman Software. Con los datos que nos ofrecieron y los presupuestos he previsto un presupuesto promedio de condiciones económicas y el coste que supondría aplicar la mejora. El presupuesto lo he dividido en tres apartados:

- Servicios: coste de preparación y elaboración del proyecto, análisis y consultoría, coste de la integración de la aplicación, la implantación, la formación y el mantenimiento y soporte.
- Software: coste de las licencias de las aplicaciones, parametrización, adaptación, etc.
- Hardware: coste de los equipos necesarios para implantar la aplicación.

Todos los precios son sin IVA y son orientativos, el sector de las TIC cambia constantemente y junto con ese cambio va también sus costes.

8.1. SERVICIOS

Ilustración 9: Coste de los servicios.

Servicios de la mejora		
Elaboración de la mejora	50 h.	5.000 €
Gestión del proyecto	50 h.	5.000 €
Análisis y Consultoría	40 h.	4.800 €
Personalización e integración	100 h.	5.500 €
Implantación	80 h.	4.800 €
Formación al administrador y a los usuarios	40 h.	2.400 €
Tareas de consultoría y diagramación de procedimientos	160 h.	9.600 €
Mantenimiento y soporte anual		13.500 €
SUBTOTAL	520 h.	50.600 €

[Fuente]: Elaboración propia.

8.2. SOFTWARE

Ilustración 10: Coste de los productos de la mejora.

Productos	
Gestor de expedientes y gestor documental	81.000 €
Sede electrónica y registro electrónico	100.000 €
Adaptación de la aplicación para la operación con dispositivos móviles	46.000 €
Elementos necesarios de digitalización	15.300 €
SUBTOTAL	242.300 €

[Fuente]: Elaboración propia.

8.3. HARDWARE

Ilustración 11: Coste de la infraestructura informática.

Hardware necesario	
Servidor	600 €
Monitor y periféricos	100 €
SUBTOTAL	700 €

[Fuente]: Elaboración propia.

8.4. TOTALES

Ilustración 12: Coste total de la mejora.

Totales	
Servicios	50.600 €
Software	242.300 €
Hardware	700 €
TOTAL	293.600 €

[Fuente]: Elaboración propia.

CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES

La realización de esta propuesta de mejora, ha significado muchas horas de investigación en las fuentes de información, el análisis de toda la normativa que regula esta materia que ya es bastante extenso hoy en día, así como muchas reuniones con especialistas tecnológicos y de gestión administrativa. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa y como establecía en los objetivos al inicio del trabajo, el objetivo académico creo que se ha cumplido con creces, al menos yo profesionalmente he crecido mucho desde que empecé este TFC en el mes de enero de 2012. Con ese aprendizaje, me siento satisfecho de haber conseguido el objetivo marcado y haber conseguido poner en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos en la carrera, me encuentro lo suficientemente animado para asumir cualquier proyecto de mejora de gestión administrativa que se me encomiende en mi vida profesional.

El objetivo académico de este trabajo, con la dedicación necesaria, era sencillo de conseguir, simplemente era cuestión de dedicarle muchas horas de investigación y de redacción, el único factor adverso era buscar el hueco necesario entre mis obligaciones laborales y familiares para dedicárselo al proyecto. El objetivo profesional, que significaría poner en práctica esta mejora, ya no es tan sencillo de conseguir por influir en él muchos factores adversos externos que son difíciles e incluso imposibles de mejorar. Aun así, y sabiendo durante la conclusión de este trabajo, que este sería muy complicado que se pusiese en marcha, conseguí que la mejora fuese del todo realizable, reuniendo varios presupuestos de empresas tecnológicas de las que ya habíamos hasta hecho una selección y teníamos ya el presupuesto final a falta de la autorización de la directora de la aVM. Este proyecto fin de carrera recoge cada uno de los pasos que se debían tomar para poner en marcha el proyecto, pasos desde el enfoque de la gestión administrativa pero que concluirían en la puesta en marcha de la Administración electrónica en la aVM. Con esto doy por conseguido el segundo de los objetivos considerando esta mejora cien por cien realizable.

9.2. RECOMENDACIONES

Las funcionalidades que puede aportar la eAdministración en una entidad pública como la aVM, son muchas y muy significativas. Con esas nuevas funcionalidades o mejoras se aumentaría exponencialmente la eficiencia en la gestión administrativa y en las relaciones con la ciudadanía y el coste de la implantación se amortizaría en un corto plazo al conseguirse un gran ahorro en el funcionamiento interno, sirva de muestra por ejemplo que una notificación por correo ordinario con acuse de recibo cuesta unos 3€ de media, a lo que debemos añadir los costes de papel, impresión, etc. Económicamente el proyecto es viable, pero si tenemos en cuenta que además de los motivos económicos están las mejoras en las relaciones con la ciudadanía al acortar los plazos administrativos y facilitar la participación en los asuntos públicos, la mejora se presenta como prácticamente necesaria.

En las reuniones mantenidas durante la fase de elaboración del proyecto, he observado que las distintas empresas tecnológicas especializadas en la implantación de una solución de eAdministración son un poco laxas en cuanto a las garantías legales que debe ofrecer la aplicación. Sin embargo creo que no solo se deberían ofrecer las mismas garantías que con el sistema tradicional sino que además deberían ser más exigentes para conseguir la confianza de la ciudadanía. También he podido observar que se pasa de puntillas por el tema del archivo centrando el foco en la parte de la mejora que es visible por la ciudadanía. Las soluciones de eAdministración deben tener como pilares en los que sustentarse un buen sistema de archivo y de gestión documental, debiendo ser esos pilares unos cimientos sólidos. También se debe cumplir con la legislación vigente en la materia, de manera que sea lo más garantista posible con los derechos de la ciudadanía, para conseguir esos dos puntos fuertes en todo proyecto de eAdministración no debería faltar, además de los técnicos necesarios en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, un Documentalista y un Titulado en Gestión y Administración Pública.

BIBLIOGRAFÍA

COMUNITAT VALENCIANA (2010). Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. *Diario Oficial de la Comunidad Valenciana*, 7 de mayo de 2010, núm. 6262, p. 18206 a 18238 (33 p). [En línea]. Disponible en: <http://www.docv.gva.es/datos/2010/05/07/pdf/2010_4857.pdf> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

COMUNITAT VALENCIANA (2010). Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público. *Diario Oficial de la Comunidad Valenciana*, núm. 6376, p. 38206 a 18216 (11 p). [En línea]. Disponible en: <http://www.docv.gva.es/datos/2010/10/14/pdf/2010_11021.pdf> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

ESPAÑA (1999). Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 298, p. 43088 a 43099 (12 p). [En línea]. Disponible en: <<http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf>> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

ESPAÑA (2003). Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 304, p. 45329 a 45343 (15 p). [En línea]. Disponible en: <<http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf>> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

ESPAÑA (2007). Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 150, p. 27150 a 27166 (17 p). [En línea]. Disponible en: <<http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf>> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

ESPAÑA (2007). Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 312, p. 53701 a 53719 (19 p). [En línea]. Disponible en: <<http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf>> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

ESPAÑA (2010). Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 25, p. 8139 a 8156 (18 p). [En línea]. Disponible en: <<http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1331.pdf>> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

ESPAÑA (2010). Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 25, p. 8089 a 8138 (50 p). [En línea]. Disponible en: <<http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/29/pdfs/BOE-A-2010-1330.pdf>> [Consulta: 21 de febrero de 2012].

GOBIERNO DE ESPAÑA (2012). Madrid. *Portal de la Administración Electrónica*. [En línea]. Disponible en: <http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_Inicio&langPae=es> [Consulta: 21 de febrero de 2012]

INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION (1987). Documentation Références bibliographiques- contenu, forme et structure. *Norme internationale ISO 690:1987 (F)*. 2a ed. Genève: ISO, 11 p.

INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION (1997). Information Références bibliographiques. Partie 2: Documents électroniques, documents ou parties de documents. *Norme internationale ISO 690-2: 1997 (F)*. Genève: ISO, 18 p.

SERRANO, Arturo y MARTÍNEZ, Evelio (2003). *La Brecha Digital: Mitos y Realidades*, México, Editorial UABC, 175 páginas. [En línea]. Disponible en: <http://www.labrechadigital.org/labrecha/LaBrechaDigital_MitosyRealidades.pdf> [Consulta: 22 de febrero de 2012].

UNIÓN EUROPEA (2006). *Plan de acción sobre administración electrónica i2010: acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos*. (Bruselas). Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2006. [En línea]. Disponible en: <http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226j_es.htm> [consulta: 21 de febrero de 2012].

UNIÓN EUROPEA (2010). *Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 2011-2015. Aprovechamiento de las TIC para promover una administración pública inteligente, sostenible e innovadora*. Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2010. [En línea]. Disponible en: <http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0021_es.htm> [consulta: 21 de febrero de 2012].

UNIVERSIDAD CARLOS III (2012), (Madrid). *Como citar bibliografía*, 12 p. [En línea]. Disponible en: <http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia/como-citar-bibliografia.pdf> [Consulta: 21 de febrero de 2012].



ANEXO I

AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

**AUDITORIA OPERATIVA DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA (eAdministración): Medida del grado de eficacia en
su implantación.**

Auditoría Operativa de Indicadores de Administración Electrónica (eAdministración)

INDICE DE ABREVIATURAS

Administración, organismos autónomos y entidades públicas

- Cuenta de la Administración (GV)
- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA)
- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. (EPSAR)
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
- Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)
- Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos (GTP)
- Grupo Radiotelevisión Valenciana (RTVV)
- Agencia Valenciana del Turismo (AVT)
- Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana (AVMM) (antes Entidad de Transporte Metropolitano de Valencia)

Sociedades mercantiles y fundaciones del sector público

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV (CIEGSA)
- Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA)
- Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV)
- Televisión Autónoma Valenciana, S.A. (TVV)
- Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, S.A. (SPTCV)
- Ciudad de la Luz, S.A. (CDL)
- Aeropuerto de Castellón, S.L. (ACSL)
- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. (VAERSA)
- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA)
- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA (CMPD)
- Palau de les Arts Reina Sofía, F. de la CV (FPA)
- Fundación de la CV para la Investigación del H Clínico Valencia (FIHC)
- Fundación de la CV La Luz de las Imágenes (FLI)
- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la CV (FOM)
- Fundación de la CV Ciudad de las Artes y de las Ciencias (FCAC)
- Fundación de la CV Universidad Internacional de Valencia (FUIV)

Nota: Las entidades están relacionadas de acuerdo con el orden seguido en los cuadros del Informe.

0. RESUMEN

1. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, exige a las Administraciones que se comprometan y ofrezcan a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene.

2. Igualmente, la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, además de las finalidades señaladas con carácter básico en la Ley 11/2007, también persigue el ejercicio de la competencia de desarrollo general de los preceptos básicos, en aplicación del principio constitucional y estatutario de autoorganización, e impulsar una administración electrónica moderna de manera homogénea, coordinada y colaboradora en el marco de la Comunitat Valenciana y de todas las administraciones y organizaciones públicas propias de ese ámbito territorial, promoviendo, a la par, la inmersión tecnológica de ciudadanos, empresas y organizaciones sociales.

3. El Consejo de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el Programa de Actuación de 2011 (PAA 2011) determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que se incluyó el relacionado con los indicadores de administración electrónica (eAdministración).

4. En el presente Informe, se muestran los resultados del trabajo realizado en una primera fase que ha consistido, básicamente, en la verificación para determinadas entidades del sector público valenciano del grado de eficacia alcanzado respecto de las principales obligaciones de información de sus sedes electrónicas, señaladas por la Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (que cumplirá dos años de vigencia en mayo de 2012).

5. En fases posteriores, se irán ampliando por parte de la Sindicatura las verificaciones a realizar, tanto en lo que se refiere al ámbito de las entidades que conforman el sector público valenciano, como al tipo de comprobaciones a llevar a cabo, de acuerdo con los hitos que acontezcan a medida que se desarrolla la admi-

nistración electrónica en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

6. De acuerdo con todo lo señalado, el objetivo concreto de la auditoría se define en términos de la siguiente pregunta que el desarrollo de la auditoría deberá responder para poder evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el área o actividad que se está revisando:

¿Cumple la entidad pública ..."X"... con las obligaciones de información de su sede electrónica señaladas por la Ley 3/2010?

7. En el ámbito subjetivo, el presupuesto de tiempo asignado y la evaluación del riesgo realizada, aconsejan que la auditoría se focalice en esta primera fase sobre las entidades del sector público autonómico que, según el Plan Anual de Actuación para 2011 de esta Institución, se encuentran sujetas tanto a control general como de áreas específicas (ver apartado III.4).

8. Los criterios de auditoría fijados (ver apartado III.2) para medir el grado de eficacia logrado respecto de las principales obligaciones de información de las sedes electrónicas señaladas por la Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, se han determinado en función de las características de la entidad que ha sido evaluada, dado el distinto grado de aplicación de la Ley 3/2010 según cual sea la entidad.

9. A continuación, se detallan las principales conclusiones que surgen de las observaciones que se han puesto de manifiesto como consecuencia del trabajo realizado, y que figuran detalladas en los apartados siguientes del presente Informe:

- a) Transcurridos 18 meses de la entrada en vigor de la Ley 3/2010 existen, al menos, tres entidades (un organismo autónomo y dos sociedades mercantiles) que no disponen de dirección electrónica propia, tal como exigen los artículos 2.3 y 11 de la Ley.
- b) Las entidades analizadas (incluida la propia administración de la Generalitat) no han implantado a la fecha de nuestra revisión el

Auditoría Operativa de Indicadores de Administración Electrónica (eAdministración)

Registro Electrónico General previsto en los artículos 15.1.h) y 23, que debe ser de acceso libre y gratuito en las sedes electrónicas.

- c) Por lo general, el grado de eficacia alcanzado es todavía insuficiente ya que fallan por implantarse a la fecha de este Informe, algunas de las obligaciones de información establecidas en las distintas disposiciones legales, encaminadas a impulsar una administración electrónica moderna, transparente y sencilla, en el marco de la Comunitat Valenciana, promoviendo la inmersión tecnológica de ciudadanos, empresas y organizaciones sociales, tal como indica el preámbulo de la Ley 3/2010.

En resumen, debería acelerarse la implantación de medios electrónicos que permitan a los ciudadanos y empresas ejercer sus derechos y utilizar los servicios y procedimien-

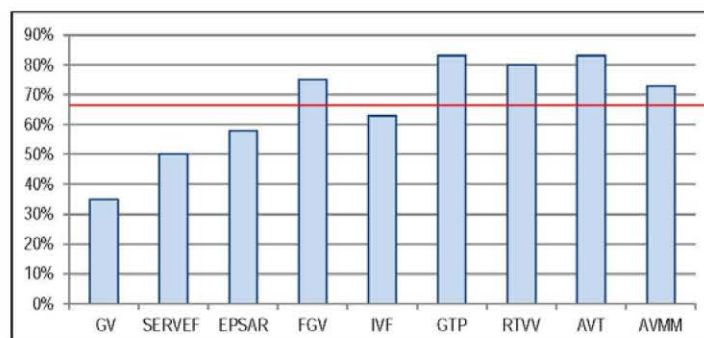
tos con lo cual mejoraría el grado de eficacia que la Ley contempla.

Entendemos por otra parte, que es positivo destacar que la administración de la Generalitat es la que menos incidencias muestra (35%) de entre todas las entidades analizadas.

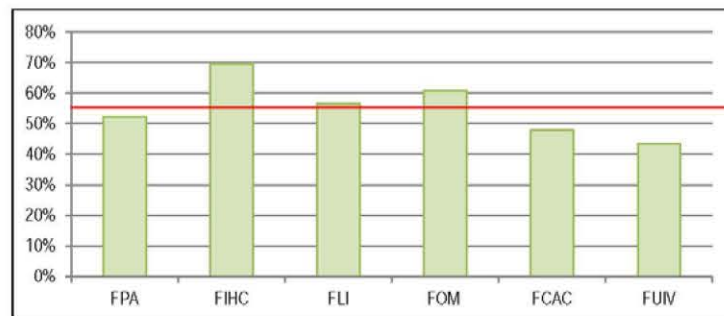
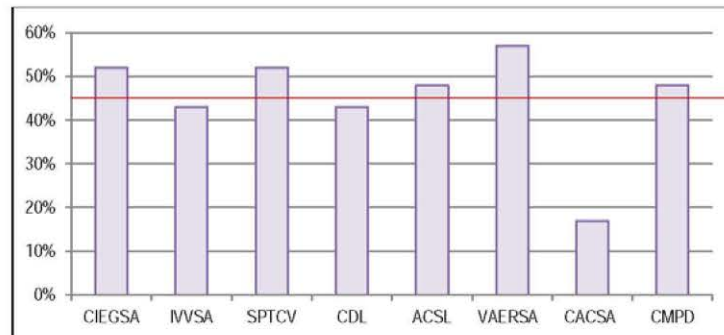
10. En este sentido, se muestran a continuación de forma resumida las incidencias observadas respecto de las cuestiones planteadas, que nos han permitido evaluar el grado de eficacia de la administración electrónica en las entidades analizadas.

Se define como incidencia, la no implantación a la fecha de nuestra revisión (cuarto trimestre 2011) por parte de la entidad analizada, de los requisitos de información de su sede electrónica, que exigiría un grado óptimo de eficacia.

% incidencias sobre cuestiones planteadas	Administración, organismos autónomos y entidades públicas									
	GV	SERVEF	EPSAR	FGV	IVF	GTP	RTVV	AVT	AVMM	Media
	35%	50%	58%	75%	63%	83%	80%	83%	73%	66%
	Empresas (Sociedades mercantiles) públicas									
	CIEGSA	IVVSA	SPTCV	CDL	ACSL	VAERSA	CACSA	CMPD	Media	
	52%	43%	52%	43%	48%	57%	17%	48%	45%	
	Fundaciones públicas									
	FPA	FIHC	FLI	FOM	FCAC	FUIV	Media			
	52%	70%	57%	61%	48%	43%	55%			



Auditoría Operativa de Indicadores de Administración Electrónica (eAdministración)



Indica la media del porcentaje de incidencias sobre las cuestiones planteadas

11. De acuerdo con estos resultados, recomendamos que siendo conscientes de la actual situación económica, y precisamente por ello, es más urgente si cabe acelerar los procesos de cambio en las distintas entidades, organismos, sociedades y fundaciones públicas, para conseguir un grado de eficacia óptimo en lo que a la administración electrónica se refiere.

12. En este sentido, esta nueva configuración como centros de servicios, transparentes y sencillos requiere la implantación:

✓ del Registro Electrónico General previsto en la legislación, de acceso libre y gratuito en las sedes electrónicas.

✓ de la tramitación electrónica de procedimientos administrativos por los ciudadanos, la notificación a los mismos, la contratación o el pago electrónico, así como la realización de comunicaciones electrónicas.

✓ de la utilización de los certificados electrónicos reconocidos emitidos o admitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, y del acceso o uso de la Plataforma Ge-factura.

✓ de la publicación de los datos relativos al presupuesto anual, las cuentas anuales o informe de auditoría (cuando es obligatorio), así como otras informaciones de carácter tributario, jurídico o económico.

Auditoria Operativa de Indicadores de Administración Electrónica (eAdministración)

- ✓ de la vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y sugerencias, la Carta de Servicios de Sede Electrónica (CSE) o los servicios de consultas más frecuentes (FAQ).
 - ✓ de la accesibilidad a personas con capacidad disminuida, estándares visuales y pluri-lingüismo.
- 13.** Así mismo, esta nueva configuración supondría un ahorro de costes, tanto en los ciudadanos y empresas, como en las propias entidades del sector público valenciano.

I. INTRODUCCIÓN

I.1 Antecedentes

14. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, exige a las Administraciones que se comprometan y ofrezcan a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.

15. El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos, y tiene como contrapartida de ese derecho la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse.

16. Por otra parte, el impulso de la administración electrónica y de los servicios públicos en línea es uno de los objetivos estratégicos de la Unión Europea, que se recoge fundamentalmente en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, programa «i2010 - Sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo», de 1 de junio de 2005. Con ello se pretende consolidar a Europa en la economía más competitiva basada en el conocimiento y que actualmente se encuentra en fase de revisión para el período 2011-2015 a través de las estrategias post-i2010.

17. En este sentido, la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, además de las finalidades señaladas con carácter básico en la Ley 11/2007 antes citada, también persigue los siguientes objetivos:

- a) La plasmación y concreción de la voluntad de la Generalitat de realizar una regulación propia, específica y expresa, de los aspectos no básicos de la citada Ley.
- b) El ejercicio de la competencia de desarrollo general de los preceptos básicos, en aplicación del principio constitucional y estatutario de autoorganización.
- c) La intención de impulsar una administración electrónica moderna de manera homogénea, coordinada y colaboradora en el marco de la Comunitat Valenciana y de todas las administraciones y organizaciones públicas propias de ese ámbito territorial, promoviendo, a la par, la inmersión tecnológica de ciudadanos, empresas y organizaciones sociales.
- c) La dotación de cobertura legal a normas y principios en materia tecnológica, fundamentalmente a través del Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Consell, por el que se regulan la organización de la función informática, la utilización de los sistemas de información y el Registro de Ficheros Informatizados en el ámbito de la administración de la Generalitat.

I.2 Objeto de la auditoria

18. El artículo 5 de la Ley 6/1985 de la Sindicatura de Comptes incluye entre sus funciones, además de las referidas al control externo de la gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, aquellas que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sean convenientes para asegurar adecuadamente el cumplimiento de los principios financieros, de legalidad, de eficacia y de economía, exigibles al sector público.

19. Por otra parte, el artículo 8.3 de la misma Ley determina que los informes habrán de pro-

Auditoría Operativa de Indicadores de Administración Electrónica (eAdministración)

nunciarse, entre otros, sobre si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente, y evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos.

20. De conformidad con la citada Ley, el Consejo de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el Programa de Actuación de 2011 determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que se incluyó el relacionado con los indicadores de administración electrónica.

1.3 Análisis previo del entorno de la administración electrónica (eadministración).

21. Para llevar a cabo esta auditoría operativa de indicadores de administración electrónica, se ha realizado previamente un análisis del entorno en el que se desenvuelven las distintas administraciones públicas en relación con la eAdministración.

22. Para ello, se ha consultado y analizado la documentación más relevante en este ámbito referida básicamente a la legislación aplicable, estudios realizados e informes emitidos por diversas instituciones públicas y privadas, artículos de opinión y estadísticas.

23. Con objeto de delimitar el trabajo a realizar para que la auditoría operativa a llevar a cabo sea útil y viable de acuerdo con los medios y recursos disponibles por la Sindicatura de Comptes, el trabajo previo ha puesto de manifiesto como cuestiones más significativas las siguientes:

- a) Una dificultad esencial con la que tropiezan los modelos explicativos del impacto de la implantación de la administración electrónica es que, por lo general, no se suelen encontrar buenas definiciones de los objetivos de los programas de eAdministración.

En este sentido, la primera y más importante condición que debe cumplir un marco de medida es que los indicadores que se utilicen sean relevantes y midan claramente el valor de los objetivos perseguidos.

Otra de las condiciones es que estos indicadores permitan medir el rendimiento organizativo en términos de objetivos alcanzados, e igualmente sirvan para ayudar a los directivos/políticos en el proceso de decisión estratégica.

- b) La necesidad de escapar del determinismo tecnológico que supone analizar simplemente cuantos usuarios se conectan o que porcentaje de servicios públicos están disponibles.
- c) El trabajo a realizar debe considerar a los indicadores un elemento esencial de la comprensión amplia de la eAdministración en su parte más cercana a la realidad:

- para qué se usa la red,
- qué impacto tiene en los ciudadanos usuarios, y
- cómo mejora la efectividad de las diversas administraciones en su relación con terceros (proveedores, acreedores, fundamentalmente).

24. Estas observaciones preliminares relativas al entorno en que se desenvuelve la eAdministración, y otros aspectos específicos relacionados con el sector público valenciano, han servido de base para determinar el objetivo y el alcance de la auditoría operativa que se ha realizado.

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA

25. Como se ha señalado en el apartado 1.2 anterior, el Consejo de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el Programa de Actuación de 2011 determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que se incluyó el relacionado con los indicadores de administración electrónica.

26. En el presente Informe se muestran los resultados del trabajo realizado en una primera fase que ha consistido, básicamente, en la verificación para determinadas entidades del sector público valenciano del grado de eficacia alcan-

zado respecto de las principales obligaciones de información de sus sedes electrónicas señaladas por la Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (que cumple dos años de vigencia en mayo de 2012).

27. En fases posteriores, esta Sindicatura irá ampliando las verificaciones a realizar, tanto en lo que se refiere al ámbito de las entidades que conforman el sector público valenciano, como al tipo de comprobaciones a llevar a cabo, de acuerdo con los hitos que acontezcan a medida que se desarrolla la administración electrónica en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

28. Conviene recordar que la citada Ley tiene por objeto, según indica su artículo 1, el desarrollo del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, para acceder a los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos.

29. Regula dicha Ley el régimen jurídico de la administración electrónica y de los procedimientos administrativos electrónicos en dicho ámbito subjetivo, y pretende impulsar la plena incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad administrativa al objeto de favorecer una mayor transparencia en la actividad administrativa y la apertura de nuevos cauces a la participación ciudadana y de la sociedad civil.

En este sentido, constituye un adelanto de lo que actualmente contempla el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que en su artículo 4 señala que "Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este Título, publicarán en formato electrónico, en sus sedes electrónicas o páginas web, información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les es de aplicación así como su estructura organizativa."

30. De acuerdo con todo lo señalado anteriormente, el objetivo de la auditoría se define en términos de la siguiente pregunta, que el desarrollo de la auditoría deberá responder para poder eva-

luar en términos de eficiencia, eficacia y economía el área o actividad que se está revisando:

¿Cumple la entidad pública ..."X"... con las obligaciones de información de su sede electrónica señaladas por la Ley 3/2010?

31. Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, el presupuesto de tiempo asignado y la evaluación del riesgo realizada (ver apartado III.1), aconsejan que la auditoría se focalice en esta primera fase sobre las entidades del sector público autonómico que, según el Plan Anual de Actuación para 2011 de esta Institución, se encuentran sujetas tanto a control general como de áreas específicas.

32. Como se ha señalado anteriormente, en fases posteriores, se ampliarán los ámbitos objetivo y subjetivo de la auditoría a todo el sector público de la Comunidad Valenciana.

III. ENFOQUE METODOLÓGICO

III.1 Evaluación del riesgo

33. Como complemento de lo señalado en el apartado anterior, se ha realizado una evaluación de los riesgos relacionados con el área o actividad a auditar, "Indicadores de administración electrónica", con el fin de identificar aquellas áreas sobre las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para reducir éste a un nivel adecuado.

34. Para ello, se ha aplicado la metodología desarrollada para la auditoría financiera en las Normas Técnicas del ICAC y en el Manual de fiscalización (MF) de esta Sindicatura, en las secciones 340 y siguientes, y que es plenamente aplicable a la auditoría operativa con las adaptaciones necesarias por los objetivos particulares de ésta: la eficiencia, la economía y la eficacia.

35. En este sentido, se han evaluado por el equipo de auditoría los riesgos derivados de los cambios experimentados en el sector público valenciano durante el año 2011 como consecuencia de las elecciones autonómicas y locales celebradas, que implican, en muchos casos, un

cambio de gestores, estructuras y organigramas.

36. Del mismo modo, se ha evaluado el riesgo derivado de las diversas características de los entes y organismos que componen el sector público valenciano, y su nivel de desarrollo de la eAdministración, en función de sus características, tamaño, presupuesto, etc.

37. Por todo ello, la realización de la auditoría, condicionada por la complejidad de su ejecución y amplitud del objetivo general, se llevará a cabo en distintas fases temporales (varios ejercicios) contemplando el ámbito sectorial y los alcances y objetivos específicos definidos en cada una de dichas fases.

III.2 Criterios de auditoría y sus fuentes

38. Una vez concretado el objetivo de la auditoría, el ámbito y el alcance de la misma, una parte fundamental en el desarrollo de ésta es la definición de los criterios de auditoría que se utilizarán.

39. Los criterios de auditoría son unidades de medida que sirven para evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía del área o actividad auditada, mediante la comparación con su situación real.

40. De acuerdo con la definición del objetivo de la auditoría, los criterios de auditoría fijados para medir el grado de eficacia respecto de las principales obligaciones de información de las sedes electrónicas señaladas por la Ley 3/2010 de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, se han determinado en función de la entidad que ha sido evaluada, dado el distinto grado de aplicación de la Ley 3/2010 a las diversas entidades.

41. En este sentido, en un **primer grupo**, se han incluido todas aquellas entidades que tienen el carácter de administración de la Generalitat (la propia administración de la Generalitat, los organismos autónomos y los entes públicos). El alcance ha comprendido, tal como se indica en el apartado II, a las entidades que se encuentran sujetas tanto a control general como

de áreas específicas en el PAA 2011 de la Sindicatura.

42. Para este grupo, los criterios de auditoría que nos han permitido medir la eficacia surgen, básicamente, de los siguientes artículos de la Ley 3/2010: artículo 15.1 (obligaciones de información de las sedes electrónicas), artículo 23.4 (registros electrónicos), artículo 31.1 (notificaciones electrónicas) y artículo 34.1 (autoadministración).

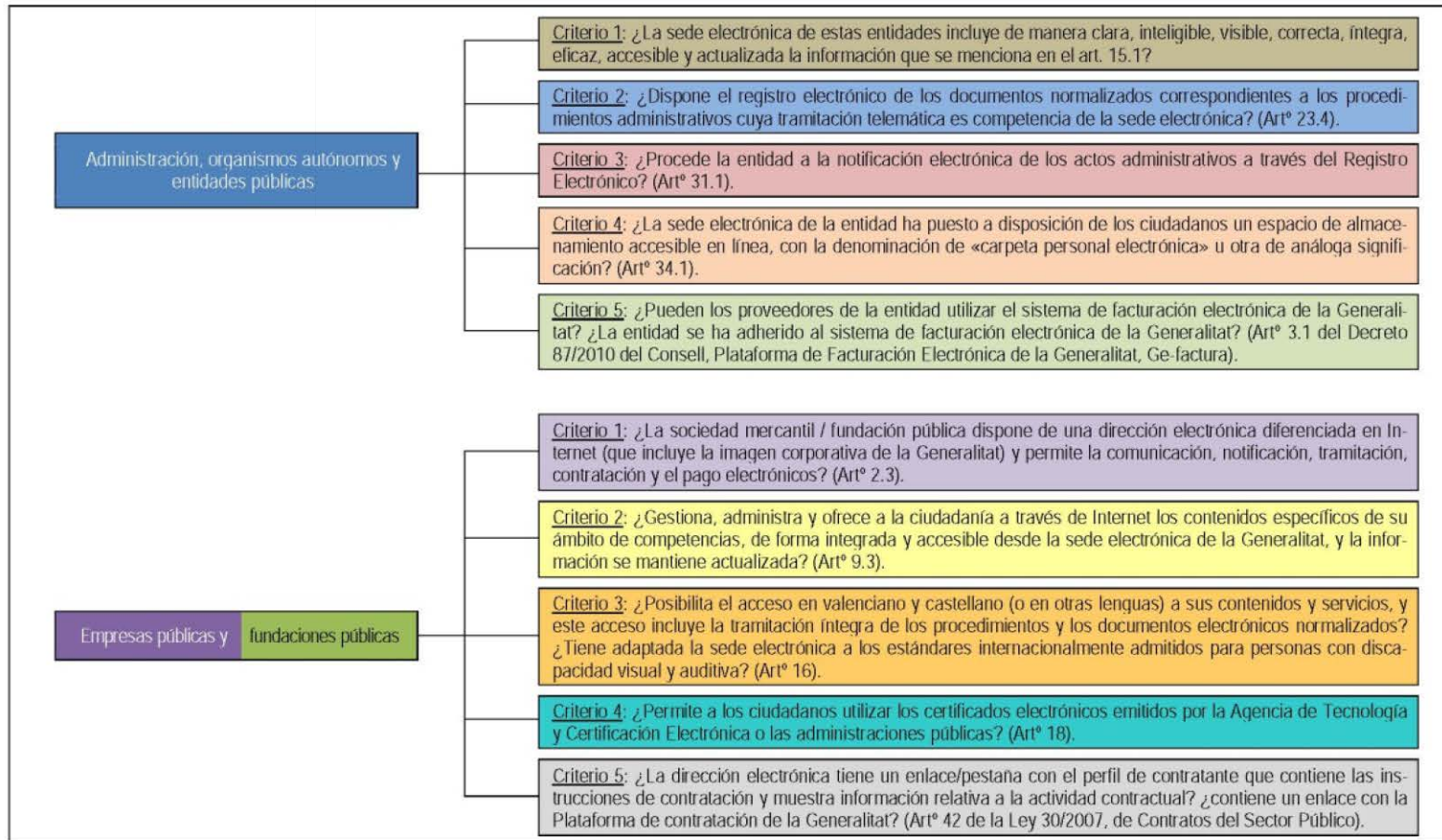
43. Adicionalmente, y por considerar la cuestión relevante como medida del impacto que puede tener en la mejora de la competitividad de las empresas, se ha verificado si las entidades del sector público valenciano analizadas facilitan a sus proveedores, o se han adherido con tal fin, al sistema de facturación electrónica de la Generalitat, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 del Decreto 87/2010 del Consell, por el que se establecen las condiciones técnicas y normativas para el uso de la Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, Ge-factura.

44. En el **segundo grupo**, se incluyen las sociedades mercantiles públicas y las fundaciones del sector público de la Generalitat que en el PAA 2011 se encuentran igualmente sujetas a control general o de áreas significativas.

45. Para este grupo, los criterios de auditoría que nos han permitido medir la eficacia surgen, básicamente, de los siguientes artículos de la Ley 3/2010: artículo 2.3 (disposición de medios electrónicos), artículo 9.3 (sede electrónica), artículo 16 (utilización de las lenguas oficiales) y artículo 18 (acreditación electrónica).

46. Igualmente, por tener una relación directa con la materia auditada, para este segundo grupo hemos verificado algunos aspectos relacionados con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (perfil de contratante).

47. Se muestran en el cuadro siguiente los criterios de auditoría fijados para cada uno de los grupos de entidades.



Cuadro 1

Auditoría Operativa de Indicadores de Administración Electrónica (eAdministración)

48. Cada criterio de auditoría está sombreado con un color diferente, para identificarlos con las incidencias detectadas para cada uno de ellos (ver apartado IV, Observaciones)

49. Para verificar estos criterios de auditoría, se ha elaborado un cuestionario para cada uno de los grupos de entidades que detallan las comprobaciones realizadas en sus sedes electrónicas.

50. En este sentido, los anexos 1 y 2 de este Informe, incluyen los cuestionarios que detallan las comprobaciones realizadas para verificar los criterios de auditoría y las incidencias detectadas para cada una de las entidades.

51. Los resultados globales de estas comprobaciones se muestran en el apartado IV, Observaciones, de este Informe.

III.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y obtención de evidencia.

52. Para la realización de la auditoría se ha utilizado el enfoque basado directamente en los resultados obtenidos para cada una de las entidades seleccionadas, en relación con el objetivo fijado, según se define en el apartado 2 de este Informe.

53. En cuanto a la metodología y la naturaleza de las pruebas, se han aplicado técnicas de revisión analítica mediante la exploración a través de las sedes electrónicas de las entidades seleccionadas, sin entrevistas directas con los gestores, cumplimentando los cuestionarios mencionados en el apartado anterior. El trabajo ha sido llevado a cabo durante el cuarto trimestre de 2011 y enero de 2012.

54. Por otra parte, con el fin de obtener una visión de conjunto sobre la situación que presentan las entidades revisadas, se han elaborado resúmenes, por tipos de entidades, que muestran los aspectos más relevantes puestos de manifiesto respecto del objetivo de auditoría fijado y su representatividad sobre el total de las entidades analizadas.

III.4 Entidades objeto de la auditoría

III.2 anterior, las entidades seleccionadas para su revisión han sido las siguientes:

55. De acuerdo con lo indicado en el apartado

<i>Administración, organismos autónomos y entidades públicas</i>
Cuenta de la Administración
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Instituto Valenciano de Finanzas
Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos
Grupo Radiotelevisión Valenciana
Agencia Valenciana del Turismo
Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana

<i>Empresas (Sociedades mercantiles) públicas</i>
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV.
Instituto Valenciano de Vivienda
Radio Autonomía Valenciana, S.A.
Televisión Autónoma Valenciana, S.A.
Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, S.A.
Ciudad de la Luz, S.A.
Aeropuerto de Castellón, S.L.
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.

<i>Fundaciones públicas</i>
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundación de la CV.
Fundación de la CV para la Investigación del H. Clínico Valencia
Fundación de la CV La Luz de las Imágenes
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la CV.
Fundación de la CV Ciudad de las Artes y de las Ciencias
Fundación de la CV Universidad Internacional de Valencia

Cuadro 2

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV.1 Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana

A continuación, se detallan las principales conclusiones y recomendaciones para la entidad que surgen del trabajo realizado de acuerdo con lo señalado en los apartados anteriores.

Estas conclusiones y recomendaciones surgen de las comprobaciones realizadas en base al cuestionario que se adjunta en el **anexo 1**.

En relación con el criterio de auditoría 1:

- No incluye de manera clara, inteligible, visible, correcta, íntegra, eficaz, accesible y actualizada la siguiente información:
 - Los datos identificativos, de contacto de la administración titular y el mapa de la sede electrónica.
 - Las normas básicas de su organización y funcionamiento.
 - Información del titular de la sede electrónica referida a aspectos económicos, presupuesto anual, cuentas anuales e informe de auditoría, aspectos tributarios y jurídicos o de participación de la ciudadanía
 - Directorio del personal dependiente y funcionarios habilitados para autenticación de ciudadanos con firma electrónica.
 - Relación de los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse, y de los medios y canales electrónicos que puede utilizar la ciudadanía.
 - Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede electrónica.
 - Registro Electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica, disposición o disposiciones de su creación, indicación del órgano responsable del mismo, documentos que se pueden presentar por parte de la ciudadanía y derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por parte de la ciudadanía.
 - Publicación electrónica de diarios, boletines, tablones de anuncios, etc.
 - La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y sugerencias, Carta de Servicios de Sede Electrónica (CSE), o buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ)

En relación con el criterio de auditoría 2:

- El Registro Electrónico no dispone de los documentos normalizados correspondientes a los procedimientos administrativos cuya tramitación telemática es de competencia de la sede electrónica dado que, tal como se indica en las observaciones al criterio 1, la sede electrónica no dispone de Registro Electrónico.

En relación con el criterio de auditoría 3:

- Igualmente, AVM no procede a la notificación electrónica de los actos administrativos a través del Registro Electrónico.

En relación con el criterio de auditoría 4:

- La sede electrónica de la entidad no ha puesto a disposición de los ciudadanos un espacio de almacenamiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de análoga significación.

En relación con el criterio de auditoría 5:

- En la sede electrónica de AVM no hallamos evidencia de que sus proveedores pueden utilizar el sistema de facturación electrónica de la Generalitat, ni de que la entidad se haya adherido a dicho sistema de facturación electrónica.

Como consecuencia de estas incidencias, respecto de las cuales los responsables de la entidad deben adoptar medidas correctoras, recomendamos que, siendo conscientes de la actual situación económica, y precisamente por ello, es más urgente si cabe acelerar los procesos de cambio, para conseguir adaptar la configuración de la sede electrónica a las exigencias legales en lo que a la administración electrónica se refiere.

En este sentido, esta nueva configuración como centro de servicios, transparente y sencillo requiere la implantación:

- ✓ del Registro Electrónico General previsto en la legislación, de acceso libre y gratuito en las sedes electrónicas.
- ✓ de la tramitación electrónica de procedimientos administrativos por los ciudadanos, la notificación a los mismos, la contratación o el pago electrónico, así como la realización de comunicaciones electrónicas.
- ✓ de la utilización de los certificados electrónicos reconocidos emitidos o admitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, y del acceso o uso de la Plataforma Ge-factura.
- ✓ de la publicación de los datos relativos al presupuesto anual, las cuentas anuales o informe de auditoría (cuando es obligatorio), así como otras informaciones de carácter tributario, jurídico o económico.
- ✓ de la vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y sugerencias, la Carta de Servicios de Sede Electrónica (CSE) o los servicios de consultas más frecuentes (FAQ).

Así mismo, esta nueva configuración supondrá un ahorro de costes, tanto en los ciudadanos y empresas, como en las propias entidades del sector público valenciano.

Anexo 1 Cuestionario para verificar los criterios de auditoría relacionados con la Administración de la Generalitat, organismos autónomos y entidades públicas: **Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana**

¿La sede electrónica de estas entidades incluye de manera clara, inteligible, visible, correcta, íntegra, eficaz, accesible y actualizada la siguiente información? (Artº 15.1)	
1. a) Datos identificativos	SI
2. Estructura	NO
3. Organización	NO
4. Mapa de la sede electrónica	NO
5. Datos de contacto de la administración titular	NO
6. b) La estructura organizativa y funcional de la administración titular de la sede electrónica.	SI
7. Las modificaciones que se operen en dicha estructura y normativa	SI
8. Las normas básicas de su organización y funcionamiento	NO
9. c) Información de interés general en relación con el ámbito territorial, funcional o personal en que preste servicios o desarrolle su acción pública, como pueda ser la Comunitat Valenciana, el municipio o la provincia de la administración titular de la sede electrónica.	SI
d) Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, referida a:	
10. Aspectos económicos	NO
11. Publicación del presupuesto anual	NO
12. Publicación de las cuentas anuales	NO
13. Publicación del informe de auditoría (cuando es obligatorio)	NO
14. Tributarios y jurídicos	NO
15. De participación de la ciudadanía	NO
16. e) Directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica	NO
17. Especial indicación de los funcionarios y funcionarias a quienes se haya habilitado para la identificación o autenticación de los ciudadanos y ciudadanas mediante los sistemas de firma electrónica.	NO
18. f) Relación de servicios disponibles que pueden ejercerse por la ciudadanía	SI
19. De procedimientos electrónicos disponibles	SI
20. De documentos normalizados	SI
21. De los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse	NO
22. De los medios y canales electrónicos que puede utilizar la ciudadanía	NO
23. g) Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede electrónica.	NO
24. h) Registro electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica	NO
25. Disposición o disposiciones de su creación	NO
26. Indicación del órgano responsable del mismo	NO
27. Documentos que se pueden presentar por parte de la ciudadanía	NO
28. Derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por parte de la ciudadanía.	NO

29. i) Perfil de contratante.	SI
30. j) Publicación electrónica de diarios, boletines, tabloneros de anuncios y edictos oficiales editados por el titular de la sede electrónica.	NO
31. k) La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y sugerencias.	NO
32. l) Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la información que figura en ésta.	SI
33. Carta de Servicios de Sede Electrónica (CSE)	NO
34. m) Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés relevante en relación con el ámbito competencial del titular de la sede electrónica.	SI
35. n) Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ).	NO
36. o) Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo.	SI
37. ¿Dispone el registro electrónico de los documentos normalizados correspondientes a los procedimientos administrativos cuya tramitación telemática es de competencia de la sede electrónica? (Artº 23.4)	NO
38. ¿Procede La Entidad a la notificación electrónica de los actos administrativos a través del Registro Electrónico? (Artº 31.1)	NO
39. ¿La sede electrónica de La Entidad ha puesto a disposición de los ciudadanos un espacio de almacenamiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de análoga significación? (Artº 34.1)	NO
40. ¿Pueden los proveedores de la entidad utilizar el sistema de facturación electrónica de la Generalitat? ¿La entidad se ha adherido al sistema de facturación electrónica de la Generalitat? (Artº 3.2 del Decreto 87/2010 del Consell, Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, Ge-factura)	NO

ANEXO II

LEY DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Presidència de la Generalitat

LLEI 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. [2010/4857]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

PREÀMBUL

I

Les organitzacions avançades, tant públiques com privades, són aquelles que dipositen el valor més gran en els seus recursos humans, en les persones i, singularment, en allò que les caracteritza: el seu cabal de coneixements. En definitiva, són aquelles que posen en valor l'anomenat capital intel·lectual, que dinamitzen la creació del coneixement i fomenten la seua transferència per tal d'aprofitar les sinergies, reduir costos, oferir millors productes i prestar millors servicis i, per tant, guanyar en qualitat i competitivitat.

Per això, la societat del coneixement, caracteritzada per la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació, singularment representada en Internet, ha provocat que qualsevol informació estiga disponible en qualsevol moment i que es puga accedir-hi des de pràcticament qualsevol lloc i a través de diversos dispositius o terminals electrònics. Una revolució tecnològica en constant canvi que també ha determinat transformacions estructurals en les relacions humanes, en les societats i en les seues organitzacions. Des de l'anterior perspectiva del canvi continu i de preeminència del coneixement, les administracions públiques no poden quedar-se al marge, sinó que estan cridades a imprimir un impuls a les pròpies transformacions, però també a ser prescriptores i impulsors dels avanços i les novetats en matèria tecnològica, que el canvi transformador estiga a l'abast de tota la ciutadania, de les empreses, de totes les organitzacions productives i de la societat civil, per a promoure i aconseguir que la progressió tecnològica sostinguda siga per a totes les persones.

II

D'acord amb els supòsits anteriors, l'anomenada administració electrònica és el concepte sintètic amb el qual es pretén caracteritzar l'actual estadi d'evolució de les organitzacions públiques modernes en la seua missió de procurar uns millors servicis públics i una atenció a la ciutadania sustentada sobre el valor del coneixement, de la transferència i del compartiment i, també, de l'excel·lència, l'adaptació permanent al canvi i, tot això, a partir de la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L'administració electrònica es tradueix internament en allò que hauriem de qualificar com a immersió tecnològica, fet que comporta un canvi cultural organitzatiu, tant a nivell corporatiu general com en el pla de cadascun dels empleats i empleades públics que hi treballen per a servir a la ciutadania. Canvi que ha d'impulsar el trànsit d'una administració procedimental, compartimentada, opaca i complexa, cap a una configuració de l'administració com a centre de servicis, comuna, transparent i senzilla.

Externament, la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions que mantenen els ciutadans i les ciutadanes amb les seues administracions públiques són sempre de caràcter instrumental, de manera que esdevenen impulsors o afavoridores de l'objectiu de transformar les estructures organitzatives i funcionals de caràcter burocràtic per tal d'aconseguir una autèntica administració totalment orientada a la ciutadania: primer, a través de la conceptualització com a administració de servicis; segon, com a administració de permanència, en esdevenir un centre de servicis 24 hores, durant tots els dies de l'any, més enllà del concepte «d'administració de guàrdia»; i, tercer, una administració per a les persones, que puga individualitzar les demandes, peticions, sol·licituds o reclamacions de cadascuna d'elles, inclús anticipant-les de manera activa i proveint la solució o resposta que satisfaga plenament les seues pretensions.

Presidencia de la Generalitat

LEY 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. [2010/4857]

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomia, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

Las organizaciones avanzadas, tanto públicas como privadas, son aquellas que depositan el mayor valor en sus recursos humanos, en las personas, y, singularmente, en lo que las caracteriza: su caudal de conocimientos. En definitiva, son aquellas que ponen en valor el denominado capital intelectual, dinamizando la creación de conocimiento y fomentando la transferencia de éste para aprovechar sinergias, reducir costos, ofrecer mejores productos y prestar mejores servicios y, por tanto, ganar en calidad y competitividad.

En el anterior sentido, la sociedad del conocimiento, caracterizada por la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, singularmente representada en internet, ha provocado que cualquier información esté disponible en cualquier momento y que se pueda acceder a ella desde prácticamente cualquier lugar y a través de variados dispositivos o terminales electrónicos. Una revolución tecnológica en constante cambio que ha determinado también transformaciones estructurales en las relaciones humanas, en las sociedades y en sus organizaciones. Desde la anterior perspectiva de continuo cambio y de preeminencia del conocimiento, las administraciones públicas no deben quedarse al margen, estando llamadas a imprimir impulso a sus propias transformaciones, pero también a ser prescriptoras e impulsoras de que los avances y novedades en materia tecnológica, de que el cambio transformador esté al alcance de toda la ciudadanía, de las empresas, de todas las organizaciones productivas y de la sociedad civil, promoviendo que se alcance la progresión tecnológica sostenida para todas las personas.

II

Conforme a los anteriores presupuestos, la denominada administración electrónica es el concepto sintético con el que se pretende caracterizar el actual estadio de evolución de las modernas organizaciones públicas en su misión de procurar mejores servicios públicos y una atención a la ciudadanía sustentada sobre el valor del conocimiento, de su transferencia y de compartirlo, así como sobre la excelencia, la adaptación permanente al cambio, y todo ello a partir de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación.

La administración electrónica se traduce internamente en lo que cabría calificar como inmersión tecnológica, lo que significa un cambio cultural organizativo, tanto a nivel corporativo general como en el plano de cada uno de los empleados y empleadas públicas que trabajan en ella para servir a la ciudadanía. Cambio que debe impulsar el tránsito de una administración procedimental, compartimentada, opaca y compleja, hacia su configuración como centro de servicios, común, transparente y sencillo.

Externamente, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones que mantienen los ciudadanos y ciudadanas con sus administraciones públicas es siempre de carácter instrumental, de tal grado que aquellas son impulsoras o favorecedoras del objetivo de transformar las estructuras organizativas y funcionales de carácter burocrático para alcanzar una auténtica administración totalmente orientada a la ciudadanía: primero, a través de su concepción como administración de servicio; segundo como administración de permanencia, al convertirla en un centro de servicios 24 horas durante todos los días del año, más allá del concepto de «administración de guardia»; y, tercero, una administración para las personas, que debe individualizar las demandas, peticiones, solicitudes o reclamaciones de cada una de ellas, incluso anticipándolas de manera activa y proveyendo la solución o respuesta que satisfaga plenamente sus pretensiones.

L'administració electrònica prevista en la llei se sustenta sobre els anteriors principis i objectius, i procura contribuir, a més a més, a la sostenibilitat mediambiental i al desenvolupament econòmic, a partir de l'estalvi en energia, paper, temps i costos, amb la qual cosa es fomenta la inversió en l'economia productiva del país. Una administració electrònica que, a més, ha d'estar coordinada, ser interoperable i plenament col·laboradora. Es tracta, finalment, de progressar cap a l'administració comuna tecnològica, integradora de totes les administracions que residencien o despleguen el seus efectes dins de la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera, la Comunitat Valenciana, a través de la ciutadania, de les empreses i organitzacions de la societat civil, també han avançat en la implantació i desplegament de les tecnologies de la informació i la comunicació de manera eficient dins dels seus respectius àmbits d'actuació, per la qual cosa, amb un important nivell d'immersió tecnològica aconseguit, sembla oportú promoure l'aprovació del present text legal, com a punt de trobada sociotecnològica i com a un nou compromís públic de les administracions amb la societat valenciana.

III

La llei té el seu fonament justificatiu, tant d'oportunitat com de legalitat, en un ampli elenc d'iniciatives legislatives i de planificació o projecció estratègica, tant en el nivell autonòmic com estatal, europeu i internacional.

L'impuls de l'anomenat eGovernment, de l'administració electrònica i dels serveis públics en línia és una de les línies estratègiques de la Unió Europea, el qual es recull fonamentalment dins de la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, programa «2010 – Societat de la informació europea per al creixement i l'ocupació», de data 1 de juny de 2005, amb la qual es pretén consolidar Europa com l'economia més competitiva basada en el coneixement i que, a hores d'ara, està en fase de revisió per al període 2011-2015, a través de les estratègies post-2010. La iniciativa esmentada s'entronca dins de les propostes contingudes en els plans d'acció eEurope 2002 i eEurope 2005, en l'últim dels quals expressament s'apela al foment de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per part de les administracions públiques, per a explicitar el modern concepte d'administració electrònica.

Cal destacar que la Comissió de la Unió Europea, en la Comunicació de 26 de setembre de 2003, «El paper de l'administració electrònica en el futur d'Europa», adopta un concepte d'administració electrònica que coincideix amb l'esperit i la lletra d'esta llei, quan la defineix com la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les administracions públiques, associada a canvis en l'organització i noves aptituds del personal, i amb l'objectiu de millorar els serveis públics, reforçar els processos democràtics i recolzar les polítiques públiques.

La Comunicació de la Comissió, de 25 d'abril de 2006, «Pla d'acció sobre administració electrònica i 2010: accelerar l'administració electrònica a Europa en benefici de tots», en la mateixa línia abans assenyalada, reincideix en una sèrie de desafiaments i d'exigències per a l'eficient instauració de l'administració electrònica.

Finalment, la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions anomenada «Preparar el futur digital d'Europa – Revisió intermèdia de la iniciativa i2010», de 17 d'abril de 2008, reincideix en la necessitat de potenciar els serveis públics en Internet, d'impulsar la I+D+I en les TIC des de les administracions i, també, promoure dins de la Unió Europea l'anomenada «cinquena llibertat»: la lliure circulació de coneixements i innovacions, especialment al si de les organitzacions públiques.

IV

En el pla intern, la present llei es fonamenta en la moderna regulació que realitza el marc constitucional i estatutari en referència a les administracions públiques, a la prestació eficient dels serveis públics i

La administració electrònica contemplada en la llei se sustenta sobre los anteriores principios y objetivos, procurando contribuir, además, a la sostenibilidad medioambiental y al desarrollo económico, a partir del ahorro en energía, papel, tiempo y costes que supone, con lo que se fomenta la inversión en la economía productiva del país. Una administración electrónica que, además, debe estar coordinada, ser interoperable y plenamente colaboradora. Se trata, en fin, de progresar hacia la administración común tecnológica, integradora de todas las administraciones que se residencian o despliegan efectos dentro de la Comunitat Valenciana.

De igual manera, la Comunitat Valenciana, a través de su ciudadanía, de sus empresas y organizaciones de la sociedad civil, también han avanzado en la implantación y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación de manera eficiente dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, por lo que, con el relevante nivel de inmersión tecnológica alcanzado, parece oportuno promover la aprobación del presente texto legal, como punto de encuentro sociotecnológico, y como nuevo compromiso público de sus administraciones para con la sociedad valenciana.

III

La ley encuentra su fundamento justificativo, tanto de oportunidad como de legalidad, en un amplio elenco de iniciativas legislativas y de planificación o proyección estratégica, tanto en el nivel autonómico como estatal, europeo e internacional.

El impulso del denominado eGovernment, de la administración electrónica y de los servicios públicos en línea es una de las líneas estratégicas de la Unión Europea, que se recoge fundamentalmente dentro de la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, programa «2010 – Sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo», de fecha 1 de junio de 2005, con la que se pretende consolidar a Europa en la economía más competitiva basada en el conocimiento, y que actualmente se encuentra en fase de revisión para el período 2011-2015 a través de las estrategias post-2010. Dicha iniciativa se entronca dentro de las propuestas contenidas en los planes de acción eEurope 2002 y eEurope 2005, en el último de los cuales expresamente se apelaba al fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las administraciones públicas, dando lugar al moderno concepto de administración electrónica.

Es de destacar que la Comisión de la Unión Europea, en su Comunicación de 26 de septiembre de 2003, «El papel de la administración electrónica en el futuro de Europa», adopta un concepto de administración electrónica con el que coincide el espíritu y la letra de la ley, al definirla como la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las administraciones públicas, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal, y con el objetivo de mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las políticas públicas.

La Comunicació de la Comissió, de 25 de abril de 2006, «Plan de acción sobre administración electrónica i2010: acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos», en la misma línea señalada, reincide en una serie de desafíos y exigencias para la eficiente instauración de la administración electrónica.

Finalmente, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones denominada «Preparar el futuro digital de Europa – Revisión intermedia de la iniciativa i2010», de 17 de abril de 2008, se reincide en la necesidad de potenciar los servicios públicos en Internet, de impulsar la I+D+I en TIC desde las administraciones, así como de promover dentro de la Unión Europea la denominada «quinta libertad»: la libre circulación de conocimientos e innovaciones, especialmente en el seno de las organizaciones públicas.

IV

En el plano interno, la presente ley se fundamenta en la moderna regulación que realiza el marco constitucional y estatutario en referencia a las administraciones públicas, a la prestación eficiente de los ser-

a l'impuls d'una moderna administració electrònica, plenament inclusiva, participativa i accessible per a tots.

Des del punt de vista constitucional, cal recordar els articles 9, 18, 49, 103, 105.b, i 149.1.18.^a, on es recullen i apunten les característiques i trets essencials d'una administració pública moderna, democràtica i transparent, que interpretats a la llum del context actual, determinen la configuració d'una organització orientada totalment a la ciutadania, de servei, i en la qual s'incorporen permanentment els canvis necessaris per a adequar-se i adaptar-se a les noves demandes i exigències de la ciutadania i de les organitzacions socials i productives que integra. En esta adequació i adaptació permanents de les seues estructures organitzatives i funcionals, les tecnologies de la informació i la comunicació, amb les limitacions de l'article 18.4, constitueixen un element important per a l'erectió de l'autèntica administració electrònica.

L'atribució de la competència sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats derivades de l'organització pròpia de les comunitats autònomes, tanca, a través de l'article 149.1.18.^a la distribució competencial en la matèria entre l'administració general de l'Estat i les comunitats autònomes.

V

La present llei es justifica substancialment en l'habilitació consignada en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, en la disposició final vuitena de la qual s'assenyala la capacitat normativa de desplegament de les comunitats autònomes en l'àmbit de les seues competències respectives, sense perjudici de les remissions, expresses o tàcites, que realitza a una altra normativa, legal o reglamentària, en especial, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A més de les finalitats assenyalades amb caràcter bàsic en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, la present llei també pretén els objectius següents:

1. La plasmació i concreció de la voluntat de La Generalitat de realitzar una regulació pròpia, específica i expressa, dels aspectes no bàsics de la Llei 11/2007, de 22 de juny, en aplicació del principi constitucional d'autonomia.

2. L'exercici de la competència de desplegament general dels preceptes bàsics de l'esmentada llei que, no obstant esta naturalesa, realitzen un crida expressa a les administracions públiques perquè els concreten i els adapten a les seues estructures pròpies, en aplicació del principi constitucional i estatutari d'autoorganització.

3. La intenció d'impulsar una administració electrònica moderna de manera homogènia, coordinada i col·laboradora en el marc de la Comunitat Valenciana i de totes les administracions i organitzacions públiques pròpies d'eixe àmbit territorial i, alhora, promoure, a la immersiò tecnològica dels ciutadans i les ciutadanes, empreses i organitzacions socials.

4. La dotació de cobertura legal a normes i principis en matèria tecnològica que tan sols revestien vestidura reglamentària, fonamentalment a través de l'important Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Consell, pel qual es regulen l'organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el Registre de Fitxers Informatitzats en l'àmbit de l'administració de La Generalitat.

VI

A més de les habilitacions constitucionals i legals ressenyades, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana consagra una clara competència exclusiva de La Generalitat en matèria tecnològica en l'article 49.3.16.^a, quan li atribueix la referent al règim de les noves tecnologies relacionades amb la societat de la informació i del coneixement, sense perjudici del que disposa l'article 149 de la Constitució i, si fa el cas, de les bases i ordenació de l'activitat econòmica general de l'Estat.

Una atribució competencial que s'ha de complementar amb altres més genèriques, també exclusives, consignades en els articles 49.1.3.^a (normes processals i de procediment administratiu derivades de les

vicios públicos y al impulso de una moderna administración electrónica, plenamente inclusiva, participativa y accesible para todos.

Desde el punto de vista constitucional, baste recordar los artículos 9, 18, 49, 103, 105.b, y 149.1.18.^a, donde se recogen y apuntan las características y rasgos esenciales de una administración pública moderna, democrática y transparente, que interpretados a la luz del contexto actual, determinan la configuración de una organización orientada totalmente a la ciudadanía, de servicio y en la que permanentemente se incorporan los cambios necesarios para adecuarse y adaptarse a las nuevas demandas y exigencias de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y productivas en que se integra. En dicha adecuación y adaptación permanentes de sus estructuras organizativas y funcionales, las tecnologías de la información y la comunicación, con las limitaciones del artículo 18.4, constituyen un elemento importante para la erección de la auténtica administración electrónica.

La atribución de la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, cierra, a través del artículo 149.1.18.^a la distribución competencial en la materia entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas.

V

la presente ley se justifica sustancialmente en la habilitación consignada en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que en su disposición final octava señala la capacidad normativa de desarrollo de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las remisiones, expresas o tácitas, que realiza a otra normativa, legal o reglamentaria, en especial, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Además de las finalidades señaladas con carácter básico en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la presente ley también persigue los siguientes objetivos:

1. La plasmación y concreción de la voluntad de La Generalitat de realizar una regulación propia, específica y expresa, de los aspectos no básicos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en aplicación del principio constitucional de autonomía.

2. El ejercicio de la competencia de desarrollo general de los preceptos básicos de la citada ley que, no obstante tal naturaleza, realizan un llamamiento expreso a las administraciones públicas para que los concreten adaptándolos a sus estructuras propias, en aplicación del principio constitucional y estatutario de autoorganización.

3. La intención de impulsar una administración electrónica moderna de manera homogénea, coordinada y colaboradora en el marco de la Comunitat Valenciana y de todas las administraciones y organizaciones públicas propias de ese ámbito territorial, promoviendo, a la par, la inmersión tecnològica de ciudadanos y ciudadanas, empresas y organizaciones sociales.

4. La dotación de cobertura legal a normas y principios en materia tecnològica que tan solo revestían ropaje reglamentario, fundamentalmente a través del importante Decreto 96/1998, de 6 de julio, del Consell, por el que se regulan la organización de la función informàtica, la utilización de los sistemas de información y el Registro de Ficheros Informatizados en el ámbito de la administración de La Generalitat.

VI

Además de las habilitaciones constitucionales y legales reseñadas, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana consagra una clara competencia exclusiva de La Generalitat en materia tecnològica en su artículo 49.3.16.^a, al atribuirle la relativa al régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica general del Estado.

Una atribución competencial que se ha de complementar con otras más genéricas, también exclusivas, consignadas en los artículos 49.1.3.^a (normas procesales y de procedimiento administrativo deriva-

particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de La Generalitat), 49.1.6.^a (arxius) i 49.1.8.^a (règim local, sense perjudici del que disposa el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola) i 50.1 (desplegament legislatiu i d'execució en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i, si fa el cas, en els termes que estableix, referida al règim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de La Generalitat, així com el règim estatutari dels seus funcionaris).

Però la fonamentació jurídica de la present llei no se circumscriu a la invocació dels títols competencials esmentats, siguen estos constitucionals, estatutaris o legals, sinó que entronca amb tot el que cal anomenar com a model tecnològic de la Comunitat Valenciana, al qual fa referència l'article 3.1 de la llei.

Però, sens dubte, el precepte clau per a la delimitació del contingut, espenit i desplegat realitzat en la present llei, és l'article 19 de l'Estatut d'Autonomia, el qual esdevé el fonament sobre el qual construir la política estratègica de La Generalitat en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i de societat del coneixement, per tant, també en relació amb la regulació de l'aplicació d'aquelles i d'èsta a l'administració electrònica. Certament, l'article 19 conté els elements constitutius bàsics del modern dret al coneixement, una de les primeres fites normatius del qual esdevé esta llei.

VII

La llei s'estructura en cinc títols, dotze disposicions addicionals, una disposició transitòria, una derogatòria i set disposicions finals, amb un total de cinquanta-set articles.

El títol preliminar fa referència a l'objecte de la llei, al règim jurídic, l'àmbit d'aplicació, els principis generals i una remissió general en matèria de definicions a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. Cal destacar en este títol la delimitació que efectua de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la llei, el qual queda concretat en funció del criteri de la presència del gir o tràfic administratiu o públic de les entitats o relacions jurídiques concurrents. Igualment, estableix una enumeració de principis, tant d'organització interna com d'orientació al ciutadà, que constitueixen el contingut pràctic del model tecnològic de la Comunitat Valenciana sustentat sobre el concepte de tecnologia social, el qual s'esmenta expressament.

El títol I està dedicat a regular un dels objectius fonamentals de la llei, com és el relatiu a la consagració i desplegament dels drets derivats del reconeixement del dret a relacionar-se electrònicament dels ciutadans i ciutadanes amb les seues administracions públiques. Es fa també una referència genèrica que introdueix l'articulat referida als deures, entesos com l'expressió d'una societat que, per fer efectius els seus drets, també ha d'assumir la seua responsabilitat en la matèria.

El títol II està destinat, íntegrament, a la regulació del règim jurídic de l'administració electrònica, entesa com un servei públic per a l'eficàcia de l'exercici dels drets de les persones que tenen com a usuaris o usuàries dels mitjans electrònics de comunicació o relació amb l'administració.

En el capítol I s'aborden les seues electròniques de les diferents administracions i entitats de l'àmbit d'aplicació de la llei, els nivells d'integració o incorporació de continguts i serveis, la configuració de la seua electrònica de La Generalitat com a punt d'accés electrònic general de la Comunitat Valenciana, així com l'aplicació pràctica dels principis de col·laboració i cooperació o d'interoperabilitat i de solidaritat tecnològica interadministrativa, a fi que les entitats locals amb menor capacitat o disponibilitat pressupostària puguen atendre les obligacions establides en l'esmentat capítol.

La llei fa referència a l'accessibilitat en general de les seues electròniques en l'article 14. I, així, realitza una enumeració de les obligacions d'informació de les seues electròniques en l'article 15, en promoure una homogeneïtat entre estes i la garantia de compliment dels drets de la ciutadania en tant que consumidora o usuària de béns i serveis de l'administració. L'article 16 regula la utilització de les llengües oficials

de las particularidades del derecho sustantivo valenciano o de las especialidades de la organización de La Generalitat), 49.1.6.^a (archivos), 49.1.8.^a (régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española) y 50.1 (desarrollo legislativo y de ejecución en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que establezca, referida al régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la administración de La Generalitat, así como el régimen estatutario de sus funcionarios).

Però la fundamentació jurídica de la presente ley no se circumscribe a la invocación de los títulos competenciales citados, sean éstos constitucionales, estatutarios o legales, sino que entronca con todo lo que cabe denominar como modelo tecnológico de la Comunitat Valenciana, al que hace referencia el artículo 3.1 de la ley.

Però, sin duda, el precepto clave para la delimitación del contenido, espíritu y desarrollo realizado en la presente ley, es el artículo 19 del Estatut d'Autonomia, que constituye el fundamento sobre el que construir la política estratègica de La Generalitat en materia de tecnologías de la información y la comunicación y de sociedad del conocimiento, por tanto, también en relación con la regulación de la aplicación de aquellas y de ésta a la administración electrónica. En fin, el artículo 19 contiene los elementos constitutivos básicos del moderno derecho al conocimiento, uno de cuyos primeros hitos normativos lo constituye la presente ley.

VII

La ley se estructura en cinco títulos, doce disposiciones adicionales, una disposición transitòria, una derogatòria i siete disposiciones finales, con un total de cincuenta y siete artículos.

En el título preliminar se hace referencia al objeto de la ley, régimen jurídico, ámbito de aplicación, principios generales y una remisión general en materia de definiciones a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Es de destacar en este título la delimitación que efectúa del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, el cual queda concretado en función del criterio de la presencia del giro o tráfico administrativo o público de las entidades o relaciones jurídicas concurrentes. Asimismo, se opera una enumeración de principios, tanto de organización interna como de orientación al ciudadano, que constituyen el contenido práctico del modelo tecnológico de la Comunitat Valenciana sustentado sobre el concepto de tecnología social, que es expresamente mencionado.

El título I es el dedicado a regular uno de los objetos fundamentales de la ley, cual es el relativo a la consagració i desenvolupament dels drets derivats del reconeixement del dret a relacionar-se electrònicament els ciutadans i ciutadanes amb les seues administracions públiques. Se efectua també una referència genèrica que introdueix el articulat referida a los deberes, entendidos éstos como la expresión de una sociedad que para hacer efectivo sus derechos, debe también asumir su responsabilidad en la materia.

El título II se destina íntegramente a la regulació del règim jurídic de la administració electrònica, entendida como un servicio público para la eficacia del ejercicio de los derechos de las personas que les asisten como usuarios o usuarias de los medios electrónicos de comunicación o relación con la administración.

En el capítol I se abordan las sedes electrónicas de las diferentes administraciones y entidades del ámbito de aplicación de la ley, los niveles de integración o incorporación de contenidos y servicios, la configuración de la sede electrónica de La Generalitat como punto de acceso electrónico general de la Comunitat Valenciana, así como la aplicación práctica de los principios de colaboración y cooperación o de interoperabilidad y de solidaridad tecnológica interadministrativa, a fin de que las entidades locales con menor capacidad o disponibilidad presupuestaria puedan atender las obligaciones señaladas en dicho capítulo.

La ley se refiere a la accesibilidad en general de las sedes electrónicas en el artículo 14. Asimismo, realiza una enumeración de las obligaciones de información de las sedes electrónicas en el artículo 15, promoviendo una homogeneidad de todas ellas, así como la garantía de cumplimiento de los derechos de la ciudadanía en cuanto consumidora o usuaria de bienes y servicios de la administración. También

de la Comunitat Valenciana, la possibilitat d'incorporar altres llengües oficials dins de l'Estat o d'idiomes estrangers, i de l'obligatorietat de la llengua de signes.

El capítol II està dedicat a l'acreditació electrònica, açò és, la identificació i autenticació a través dels sistemes de firma electrònica. L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica adquireix així un important paper en l'àmbit del sector públic de La Generalitat.

El capítol III està destinat a la regulació dels registres electrònics i estableix l'obligatorietat de l'existència d'un de caràcter general o comú i la possibilitat que es creen registres auxiliars integrats en aquell. La regulació dels documents electrònics normalitzats existents a les seues electròniques per a la tramitació telemàtica dels procediments administratius s'efectua posant un èmfasi especial en l'obligació d'informació dels seus drets al ciutadà o ciutadana. L'emmagatzemament, remissió i arxiu electrònic de documents i expedients administratius electrònics és objecte també de l'atenció de la llei, quan contempla expressament l'obligació d'arxivar les versions de les seues electròniques a mesura que siguen substituïdes per noves.

El capítol IV tracta de les anomenades comunicacions electròniques en sentit ampli. Este capítol s'inicia amb l'enunciat i reconeixement del dret a la comunicació i accés per mitjans electrònics i a la intermodalitat, per a continuar amb la regulació de les comunicacions interadministratives i les notificacions electròniques.

El capítol V, intitulat Administració integral, incorpora la majoria d'aspectes relacionats amb el canvi cultural organitzatiu o de naturalesa extratecnològica. El capítol comença amb el reconeixement del principi de la multicanalitat, per a comprendre els aspectes d'autoadministració, és a dir, administració a la carta, o administració personalitzada, amb la introducció de la carpeta personal electrònica o els caixers electrònics d'autoadministració. S'aprofundix igualment en aspectes de col·laboració, cooperació i interoperabilitat en l'article 35, per a configurar una administració comuna electrònica.

Els aspectes de qualitat, de formació de les empleades i els empleats públics, de seguretat tecnològica i de sostenibilitat mediambiental tanquen el capítol, que ofereix un apèndix particularitzat per a La Generalitat, en enunciar un sistema integral multicanal d'atenció ciutadana, el qual serà el que tradueixca en este àmbit tots els principis de la llei, en concret, els ressenyats en l'esmentat capítol.

El títol III està dedicat a la regulació del procediment administratiu a través dels mitjans electrònics.

El capítol I, referit a les disposicions generals, introdueix dos elements estratègics. El primer, queda regulat en l'article 41, i fa referència a sengles documents fonamentals per a la transformació de l'administració i la garantia del canvi cultural organitzatiu: l'anàlisi i l'informe d'administració electrònica, que ha de precedir a l'aprovació o modificació de qualsevol procediment administratiu o procés de treball o, si fa el cas, de prestació d'un servei públic. El segon, de l'article 42, refereix tota la matèria d'accés a les dades de les persones interessades per part de les administracions públiques, sense necessitat de requerir-ne la seua aportació.

En el capítol II s'efectua un recorregut per les diferents fases del procediment administratiu comú tramitat per mitjans electrònics. Cal destacar les regulacions de les actuacions administratives automatitzades, de la pràctica de prova per mitjans electrònics o audiovisuals, i del desistiment, de la renúncia o de la terminació convencional pels mitjans esmentats.

El capítol III formula una breu regulació dels procediments especials relatius a inscripció, dipòsit i certificats de registres públics de persones físiques o jurídiques, a la inscripció i matriculació en centres de les xarxes públiques docent i assistencial, al procediment de queixes i suggeriments, així com al règim de funcionament dels òrgans col·legiats.

El títol IV es refereix a l'organització general de l'administració electrònica en l'àmbit de La Generalitat i de la Comunitat Valenciana i preveu l'existència de l'Observatori i del Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

La llei clou amb dotze disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria i set finals. Cal destacar les disposicions finals prime-

se regula en el artículo 16 la utilización de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, la posibilidad de incorporar otras lenguas oficiales dentro del Estado o de idiomas extranjeros, y de la obligatoriedad de la lengua de signos.

El capítulo II se dedica a la acreditación electrónica, esto es, la identificación y autenticación a través de sistemas de firma electrónica, adquiriendo la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica un importante papel en el ámbito del sector público de La Generalitat.

El capítulo III se destina a la regulación de los registros electrónicos, estableciendo la obligatoriedad de existencia de uno de carácter general o común, así como la posibilidad de que se creen registros auxiliares integrados en aquél. La regulación de los documentos electrónicos normalizados existentes en las sedes electrónicas para la tramitación telemática de procedimientos administrativos se efectúa poniendo especial énfasis en la obligación de información de sus derechos al ciudadano o ciudadana. El almacenamiento, remisión y archivo electrónico de documentos y expedientes administrativos electrónicos es objeto también de la atención de la ley, contemplándose expresamente la obligación de archivar las versiones de sedes electrónicas a medida que vayan siendo sustituidas por nuevas.

El capítulo IV aborda las denominadas comunicaciones electrónicas en sentido amplio. Dicho capítulo se inaugura con el enunciado y reconocimiento del derecho a la comunicación y acceso por medios electrónicos y a la intermodalidad, para continuar con la regulación de las comunicaciones interadministrativas y las notificaciones electrónicas.

El capítulo V, intitolado Administración integral, es el que incorpora la mayoría de aspectos relacionados con el cambio cultural organizativo o de naturaleza extratecnológica. El capítulo comienza con el reconocimiento del principio de la multicanalidad, para abarcar los aspectos de autoadministración, es decir, administración a la carta, o administración personalizada, con la introducción de la carpeta personal electrónica o los cajeros electrónicos de autoadministración. Se profundiza igualmente en aspectos de colaboración, cooperación e interoperabilidad en el artículo 35, configurando una administración común electrónica.

Los aspectos de calidad, de formación de las empleadas y empleados públicos, de seguridad tecnológica y de sostenibilidad medioambiental cierran el capítulo, que ofrece un apéndice particularizado para La Generalitat, al enunciar un sistema integral multicanal de atención ciudadana, que será el que traduzca en dicho ámbito todos los principios de la ley, en concreto, los reseñados en dicho capítulo.

El título III se dedica a la regulación del procedimiento administrativo a través de medios electrónicos.

El capítulo I, referido a las disposiciones generales, introduce dos elementos estratégicos. El primero de ellos se regula en el artículo 41, y se refiere a sendos documentos fundamentales para la transformación de la administración y la garantía del cambio cultural organizativo: el análisis y el informe de administración electrónica, que debe preceder a la aprobación o modificación de cualquier procedimiento administrativo o proceso de trabajo o, en su caso, de prestación de un servicio público. El segundo, del artículo 42, refiere toda la materia de acceso a datos de las personas interesadas por parte de las administraciones públicas, sin necesidad de requerir su aportación por éstas.

En el capítulo II se efectúa un recorrido por las diferentes fases del procedimiento administrativo común tramitado por medios electrónicos, siendo de destacar las regulaciones de las actuaciones administrativas automatizadas, de la práctica de prueba por medios electrónicos o audiovisuales, y del desistimiento, de la renuncia o de la terminación convencional por dichos medios.

En el capítulo III se formula una breve regulación de los procedimientos especiales relativos a inscripción, depósito y certificaciones de registros públicos de personas físicas o jurídicas, a inscripción y matriculación en centros de las redes públicas docente y asistencial, al procedimiento de quejas y sugerencias, así como al régimen de funcionamiento de los órganos colegiados.

El título IV se refiere a la organización general de la administración electrónica en el ámbito de La Generalitat y de la Comunitat Valenciana, previendo la existencia del Observatorio y del Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

La ley se cierra con doce disposiciones adicionales, una transitòria, una derogatòria y siete finals. Son de destacar las disposiciones

ra i segona, referides al règim jurídic d'aplicació de la llei a les entitats incloses dins del seu àmbit subjectiu.

Finalment, cal destacar també l'obligació que s'imposa al Consell d'impulsar i fomentar les iniciatives de la societat civil i emprenedora de la Comunitat Valenciana que vulguen el reconeixement del nom de domini sota el «cva».

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto de la ley y régimen jurídico

La presente ley tiene por objeto:

1. El desarrollo del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, para acceder a los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos.

2. La regulación del régimen jurídico de la administración electrónica y de los procedimientos administrativos electrónicos en dicho ámbito subjetivo.

3. El impulso de la incorporación plena de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad administrativa con el objetivo de favorecer una mayor transparencia en la actividad administrativa y la apertura de nuevas vías a la participación ciudadana y de la sociedad civil.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. La presente ley será aplicable a:

a) La administración de La Generalitat.
b) Las instituciones de La Generalitat reguladas en el capítulo VI del título III del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

c) Las entidades que integran la administración local de la Comunitat Valenciana, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éstas, entendiéndose incluidos los consorcios, con o sin participación de la administración de La Generalitat.

d) Las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales de la Comunitat Valenciana.

2. La ley se aplica igualmente a las actividades y relaciones jurídicas que realicen o mantengan entre sí o con la ciudadanía todas las entidades a que se refieren las letras a a d del apartado anterior de este artículo, siempre que estas actividades o relaciones no estén sometidas al derecho privado.

3. Las sociedades mercantiles en las que exista participación mayoritaria de la administración de La Generalitat y las fundaciones del sector público de La Generalitat, reguladas en el título III de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de La Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, así como las asociaciones constituidas por La Generalitat y otras administraciones, además de las obligaciones establecidas en la legislación mercantil o en la de asociaciones y fundaciones, quedarán sujetas a la presente ley en los términos siguientes:

a) Deberán disponer, como mínimo, de una dirección electrónica diferenciada en Internet que incluya la imagen corporativa de La Generalitat, la cual estará sujeta a los términos y condiciones de la Ley 9.3 de esta ley. Reglamentariamente se determinará y desarrollará el contenido mínimo informativo que han de ofrecer a la ciudadanía, y se regulará el grado de integración en la sede electrónica de La Generalitat.

b) Deberán disponer de medios electrónicos que habiliten la comunicación y notificación y, en su caso, la tramitación, la contratación y el pago electrónicos.

c) La ley será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 y en el capítulo II del título II de esta ley.

Lo señalado en las letras anteriores de este apartado 3 será de aplicación supletoria para el resto de sociedades mercantiles y fundaciones públicas o asociaciones dependientes, constituidas o integradas por otras administraciones distintas de La Generalitat, en defecto de normativa propia reguladora. No obstante, el artículo 16 de la presente ley será de aplicación directa a todas ellas.

1. El desarrollo del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, para acceder a los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos.

2. La regulación del régimen jurídico de la administración electrónica y de los procedimientos administrativos electrónicos en dicho ámbito subjetivo.

TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto de la ley y régimen jurídico

La presente ley tiene por objeto:

1. El desarrollo del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, para acceder a los servicios públicos y en la tramitación de los procedimientos administrativos.

2. La regulación del régimen jurídico de la administración electrónica y de los procedimientos administrativos electrónicos en dicho ámbito subjetivo.

3. El impulso de la plena incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad administrativa con el objetivo de favorecer una mayor transparencia en la actividad administrativa y la apertura de nuevos cauces a la participación ciudadana y de la sociedad civil.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. La presente ley será aplicable a:

a) La administración de La Generalitat.
b) Las instituciones de La Generalitat reguladas en el capítulo VI del título III del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

c) Las entidades que integran la administración local de la Comunitat Valenciana, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éstas, entendiéndose incluidos los consorcios, con o sin participación de la administración de La Generalitat.

d) Las corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales de la Comunitat Valenciana.

2. La ley se aplica igualmente a las actividades y relaciones jurídicas que realicen o mantengan entre sí o con la ciudadanía todas las entidades a que se refieren las letras a a d del apartado anterior de este artículo, siempre que dichas actividades o relaciones no se hallen sometidas al derecho privado.

3. Las sociedades mercantiles en las que exista participación mayoritaria de la administración de La Generalitat y las fundaciones del sector público de La Generalitat, reguladas en el título III de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de La Generalitat, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, así como las asociaciones constituidas por La Generalitat y otras administraciones, además de las obligaciones establecidas en la legislación mercantil o en la de asociaciones y fundaciones, quedarán sujetas a la presente ley en los términos siguientes:

a) Deberán disponer, como mínimo, de una dirección electrónica diferenciada en Internet que incluya la imagen corporativa de La Generalitat, y que se sujetará a los términos y condiciones de la Ley 9.3 de esta ley. Reglamentariamente se determinará y desarrollará el contenido mínimo informativo que deben ofrecer a la ciudadanía, y se regulará el grado de integración en la sede electrónica de La Generalitat.

b) Deberán disponer de medios electrónicos que habiliten la comunicación y notificación y, en su caso, la tramitación, la contratación y el pago electrónicos.

c) La ley será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 y en el capítulo II del título II de esta ley.

Lo señalado en las letras anteriores de este apartado 3 será de aplicación supletoria para el resto de sociedades mercantiles y fundaciones públicas o asociaciones dependientes, constituidas o integradas por otras administraciones distintas de La Generalitat, en defecto de normativa propia reguladora. No obstante, el artículo 16 de la presente ley será de aplicación directa a todas ellas.

4. Les persones físiques i jurídiques privades amb domicili a la Comunitat Valenciana que subscriguen convenis de finançament amb les administracions públiques (europees, estatal, autonòmiques o locals), i les quanties de les quals superen els 30.000 euros, hauran de disposar d'una adreça electrònica en internet, en la qual a més de les obligacions que els puga imposar la legislació específica en matèria de serveis de societat de la informació, oferiran informació suficient sobre el caràcter i el contingut fonamental del conveni, i inclourà la referència a l'administració que subseriu aquest. Tot açò en els termes i amb l'abast que es determine reglamentàriament.

5. A les empreses concessionàries de serveis públics i, en general, a les empreses que contracten amb les administracions públiques per a la realització d'activitats, lliurament de béns o prestació de serveis de naturalesa pública, se'ls aplicarà aquesta llei en els termes i amb l'abast que es determine reglamentàriament.

Les administracions públiques recolliran, en els plecs tècnics de les contractacions que pretenguen dur a terme, les prescripcions d'aquesta llei i, en especial, tot allò referit al reconeixement dels drets ciutadans que s'hi inclouen.

CAPÍTOL II

Principis generals i definicions

Article 3. Model tecnològic de l'administració electrònica

1. La Generalitat promou un model tecnològic de la Comunitat Valenciana sustentat sobre el concepte de tecnologia social que, en matèria d'administració electrònica, se centra en els principis generals enunciatos en el present capítol, a més dels esmentats amb caràcter bàsic en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.

2. La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos de treball i procediments administratius, en els serveis públics i en les relacions entre les administracions i d'estes amb la ciutadania, se sustentarà sobre el respecte, protecció i foment dels drets constitucionals de la persona, afavorirà el seu desplegament i remourà qualsevol obstacle que impedisca o dificulte la plenitud del seu exercici i evitar-hi qualsevol tipus d'exclusió.

3. Les polítiques d'administració electrònica que implemente La Generalitat dins de la seua planificació estratègica en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i de la societat del coneixement tendiran a garantir i impulsar el dret dels valencians i les valencianes a la formació tecnològica i a un ús accessible, eficient, equitatiu i sostenible de les noves tecnologies en les seues relacions amb les administracions públiques.

4. De la mateixa manera, estes polítiques s'adrecaran a aprofundir en una administració comuna de qualitat de la Comunitat Valenciana, especialitzada, amb empleades i empleats públics en formació i actualització permanent, de servici objectiu a l'interés general i orientada totalment a la ciutadania, tot invertint en una atenció excel·lent a cada persona per a la satisfacció òptima de les seues pretensions, interessos i drets o per a la facilitació del compliment dels seus deures.

5. La Generalitat facilitarà al teixit associatiu, pymes, i ciutadania en general els formularis, o les eines de desenvolupament de la comunicació electrònica amb l'administració a través de les seues electròniques.

Article 4. Principis generals de l'administració electrònica

1. Els principis generals de l'administració electrònica a la Comunitat Valenciana són els següents:

a) Principis d'organització de l'administració electrònica

1.º Principi de canvi cultural organitzatiu, pel qual s'entén la immersió tecnològica com a instrumental i coadjuvant de l'autèntica transformació de l'administració.

2.º Principis d'innovació, qualitat, modernització i actualització permanents de l'administració electrònica.

3.º Principis de cooperació interadministrativa i de participació de la ciutadania, de les servidores i servidors públics i de les seues organitzacions sindicals representatives dins de les administracions públiques, així com dels sectors i col·lectius implicats en l'administració electrònica.

4. Las personas físicas y jurídicas privadas con domicilio en la Comunitat Valenciana que suscriban convenios de financiación con las administraciones públicas (europeas, estatal, autonómicas o locales), y cuyas cuantías superen los 30.000 euros, deberán disponer de una dirección electrónica en internet, en la que además de las obligaciones que le pueda imponer la legislación específica en materia de servicios de sociedad de la información, ofrecerán información suficiente sobre el carácter y contenido fundamental del convenio, e incluir la referencia a la administración que suscribe el mismo. Todo ello en los términos y con el alcance que se determinen reglamentariamente.

5. A las empresas concesionarias de servicios públicos y, en general, a las empresas que contraten con las administraciones públicas para la realización de actividades, entrega de bienes o prestación de servicios de naturaleza pública, les será de aplicación la presente ley en los términos y con el alcance que se determinen reglamentariamente.

Las administraciones públicas recogerán, en los pliegos técnicos de las contrataciones que pretendan llevar a cabo las prescripciones de la presente ley, y en especial todo lo referido al reconocimiento de los derechos ciudadanos que en ésta se incluyen.

CAPÍTULO II

Principios generales y definiciones

Artículo 3. Modelo tecnológico de administración electrónica

1. La Generalitat promueve un modelo tecnológico de la Comunitat Valenciana sustentado sobre el concepto de tecnología social que, en materia de administración electrónica, se centra en los principios generales enunciatos en el presente capítulo, además de en los que con carácter básico se citan en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de trabajo y procedimientos administrativos, en los servicios públicos y en las relaciones entre las administraciones y de éstas con la ciudadanía, se sustentará sobre el respeto, protección y fomento de los derechos constitucionales de la persona, favoreciendo su desarrollo y removiendo cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de su ejercicio evitando cualquier tipo de exclusión.

3. Las políticas de administración electrónica que implemente La Generalitat dentro de su planificación estratégica en materia de tecnologías de la información y la comunicación y de sociedad del conocimiento tenderán a garantizar e impulsar el derecho de los valencianos y valencianas a la formación tecnológica y a un uso accesible, eficiente, equitativo y sostenible de las nuevas tecnologías en sus relaciones con las administraciones públicas.

4. De igual manera, dichas políticas se dirigirán a profundizar en una administración común de calidad de la Comunitat Valenciana, especializada, con empleadas y empleados públicos en permanente formación y actualización, de servicio objetivo al interés general y orientada totalmente a la ciudadanía, invirtiendo en una atención excelente a cada persona para la óptima satisfacción de sus pretensiones, intereses y derechos o para la facilitación del cumplimiento de sus deberes.

5. La Generalitat facilitará al tejido asociativo, pymes y ciudadanía en general los formularios o las herramientas de desarrollo de la comunicación electrónica con la administración, a través de sus sedes electrónicas.

Artículo 4. Principios generales de administración electrónica

1. Son principios generales de administración electrónica en la Comunitat Valenciana los siguientes:

a) Principios de organización de la administración electrónica

1.º Principio de cambio cultural organizativo, entendiendo la inmersión tecnológica como instrumental y coadyuvante de la auténtica transformación de la administración.

2.º Principios de innovación, calidad, modernización y actualización permanentes de la administración electrónica.

3.º Principios de cooperación interadministrativa y de participación de la ciudadanía, de las servidoras y servidores públicos y de sus organizaciones sindicales representativas dentro de las administraciones públicas, así como de los sectores y colectivos implicados en la administración electrónica.

4.¹ Principi de foment del capital intel·lectual.

5.⁶ Principi de gratuïtat general de l'administració electrònica, de manera que només podran establir-se per la seua utilització contraprestacions econòmiques a càrrec de la ciutadania amb caràcter excepcional, i sense que aquestes puguin superar el cost derivat de l'ús. A més, en la mesura que la implantació de l'administració electrònica redueisca l'impacte econòmic derivat de la incorporació dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius, es promourà la correlativa reducció dels tributs o els preus públics existents que s'exiguesquen per la utilització o l'accés.

b) Principis d'orientació a la ciutadania

1.¹ Principi d'informació eficient, és a dir, accessible, usable, completa, exacta, actualitzada, segura, clara, íntegra, correcta i veraç, de consulta senzilla, d'organització i estructuració jerarquitzada, homogènia i interoperable.

2.² Principi d'estabilitat de la informació oferida sobre vies electròniques, entès com a valor de seguretat informativa i també jurídica.

3.³ Principi de celeritat en la tramitació i en la notificació dels actes administratius, el qual promou la reducció dels terminis màxims quan el procediment es gestione per mitjans electrònics.

4.⁴ Principi de responsabilitat general pels continguts i informació propis difosos electrònicament.

5.⁵ Principi d'orientació total a la ciutadania.

6.⁶ Principi d'administració comuna, concebuda com a administració integrada i íntegral, amb vocació de servei únic, senzill i eficient al ciutadà o ciutadana, amb independència de quin siga l'òrgan o entitat en concret que li preste els serveis o de quin mitjà s'utilitze a l'efecte.

7.⁷ Principi de llibertat d'elecció tecnològica en l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics o als procediments administratius.

8.⁸ Principi d'inalterabilitat de la relació jurídica administrativa mantinguda a través dels mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

9.⁹ Principi d'exercici progressiu dels drets derivats de la relació electrònica, correlativament a la seua implantació gradual en els procediments.

2. Els principis generals assenyalats en els apartats anteriors d'este article inspiren la interpretació normativa i l'actuació de les administracions públiques de l'àmbit d'aplicació de la present llei.

Article 5. Definicions

1. A l'efecte de la present llei, s'entén per «administracions» o «administracions públiques» les administracions, institucions, entitats i corporacions assenyalades en l'apartat 1 de l'article 2 de la present llei, tret que pel context en què s'esmenten s'inferisca un àmbit diferent, bé més estricte o bé més ampli.

D'igual manera i amb la mateixa excepció del paràgraf anterior, dins del terme «entitats» que s'utilitza al llarg de la present llei, s'entenen englobades totes les esmentades o al·ludides en tots els apartats de l'article 2 d'esta llei.

A l'efecte, s'entendrà per sector públic de La Generalitat, el conjunt d'entitats esmentades en els apartats 1, lletres a i b, i 3, paràgraf primer, de l'article 2 de la present llei.

2. A més a més, s'entenen incorporats, amb el sentit allí expressat, els termes que figuren relacionats en l'annex de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. En particular, dins del terme «ciutadà» que incorpora l'esmentada llei, s'íntegra, igualment, el de «ciutadania» que s'utilitza en la present llei.

TÍTULO I ELS DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA EN LES SEUES RELACIONS ELECTRÒNIQUES AMB LES ADMINISTRACIONS

Article 6. Drets

A més dels drets reconeguts en l'article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, els

4.⁹ Principio de fomento del capital intelectual.

5.⁹ Principio de gratuidad general de la administración electrónica, de tal manera que solo podrán establecerse por su utilización contraprestaciones económicas a cargo de la ciudadanía con carácter excepcional, y sin que éstas puedan superar el coste derivado de dicho. Además, en la medida en que la implantación de la administración electrónica vaya reduciendo el impacto económico derivado de la incorporación de los medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos administrativos, se promoverá la correlativa reducción de los tributos o precios públicos existentes que se exijan por su utilización o acceso.

b) Principios de orientación a la ciudadanía

1.¹ Principio de información eficiente, es decir, accesible, usable, completa, exacta, actualizada, segura, clara, íntegra, correcta y veraz, de consulta sencilla, organización y estructuración jerarquizada, homogénea e interoperable.

2.² Principio de estabilidad de la información ofrecida sobre vías electrónicas, entendido como valor de seguridad informativa y también jurídica.

3.³ Principio de celeridad en la tramitación y en la notificación de los actos administrativos, que promueve la reducción de los plazos máximos cuando el procedimiento se gestione por medios electrónicos.

4.⁴ Principio de responsabilidad general por los contenidos e información propios difundidos electrónicamente.

5.⁵ Principio de orientación total a la ciudadanía.

6.⁶ Principio de administración común, concibiéndose como administración integrada e íntegral, con vocación de servicio único, sencillo y eficiente al ciudadano o ciudadana, con independencia de qué órgano o entidad en concreto le preste los servicios o de qué medio utilice a tal efecto.

7.⁷ Principio de libertad de elección tecnológica en el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos o a procedimientos administrativos.

8.⁸ Principio de inalterabilidad de la relación jurídica administrativa mantenida a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

9.⁹ Principio de progresivo ejercicio de los derechos derivados de la relación electrónica, correlativamente a su implantación gradual en los procedimientos.

2. Los principios generales señalados en los apartados anteriores de este artículo inspirarán la interpretación normativa y la actuación de las administraciones públicas del ámbito de aplicación de la presente ley.

Artículo 5. Definiciones

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por «administraciones» o «administraciones públicas» las administraciones, instituciones, entidades y corporaciones señaladas en el apartado 1 del artículo 2 de la presente ley, salvo que por el contexto en que se mencionen se infiera un ámbito diferente, bien más estricto o más amplio.

De igual manera, y con la misma salvedad del anterior párrafo, dentro del término «entidades» que se utilice a lo largo de la presente ley, se entenderán englobadas todas las citadas o aludidas en todos los apartados del artículo 2 de la misma.

A los mismos efectos, se entenderá por sector público de La Generalitat el conjunto de entidades mencionadas en los apartados 1, letras a y b, y 3, párrafo primero, del artículo 2 de la presente ley.

2. Además, se entienden incorporados, con el sentido allí expresado, los términos que figuran relacionados en el anexo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En particular, dentro del término allí recogido de «ciudadano» se comprenderá igualmente el de «ciudadanía» que se utiliza en la presente ley.

TÍTULO I DERECHOS Y DEBERES DE LA CIUTADANÍA EN SUS RELACIONES ELECTRÒNICAS CON LAS ADMINISTRACIONES

Artículo 6. Derechos

Además de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a

ciutadans i les ciutadanes són també titulars dels drets que s'enuncien en els apartats següents en els termes de la present llei, els quals seran exercits tots ells en el marc de la implantació dels servicis i relacions electròniques i de progressivitat en el seu ple exercici:

1. Dret a sol·licitar informació i orientació sobre requisits tècnics i jurídics i a formular consultes a les administracions públiques per canals i mitjans electrònics.
2. Dret a no utilitzar mitjans o tècniques electròniques que no hagen sigut prèviament aprovats o homologats i publicitats degudament per l'administració actuant en la seua electrònica de la seua titularitat, sense perjudi del dret reconegut en l'article 6.2, lletra k, de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.
3. Dret a obtenir gratuïtament una adreça de correu electrònic facilitada per La Generalitat Valenciana.
4. Dret a utilitzar lliure i gratuïtament els mitjans i servicis generals electrònics que es posen a la seua disposició per a l'ús en les relacions amb les administracions públiques.
5. Dret a la utilització dels procediments electrònics disponibles d'una forma personalitzada i directa.
6. Els que es reconeguen i regulen en altres articles de la present llei o en la resta de la normativa vigent.

Article 7. Deures

Amb la finalitat de facilitar l'exercici ple dels drets assenyalats en l'article anterior, en els termes que es recullen en l'article 8.1 d'aquesta llei, els ciutadans i les ciutadanes, en les relacions amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, sols estaran obligats al compliment d'aquells deures que s'establisquen expressament en la normativa vigent, de manera que es garantezca l'exercici de bona fe dels drets d'accés electrònic i se n'evite un ús abusiu.

Article 8. Garanties de l'exercici dels drets reconeguts en la llei

1. Els drets reconeguts en l'article 6 i despleats al llarg de la present llei seran exercits en els termes que s'assenyalen en les seues disposicions finals primera i segona, i des d'eixe moment obliguen totes les administracions públiques de l'àmbit d'aplicació d'esta llei, no només al compliment d'allò expressat en els esmentats preceptes, sinó a totes les conseqüències que, segons siga la seua naturalesa, es deriven de la bona fe i d'un exercici legítim i no abusiu dels drets.
2. Per a impulsar i garantir l'exercici ple dels drets de la ciutadania que es reconeixen i despleguen en esta llei, o la restauració i reparació d'aquell quan s'haja produït qualsevol contravençió de l'ordenament jurídic regulador en la matèria, podrà acudir-se a qualsevol dels mitjans de defensa o protecció establits en la present llei o en altres, sense perjudi del recurs a la tutela jurisdiccional de l'orde corresponent.
3. L'actuació dels òrgans i entitats previstes en el títol IV d'esta llei es guiarà en tot moment pel principi de preferència o prevalença del tractament més favorable al ciutadà o ciutadana.

TÍTOL II RÈGIM JURÍDIC DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

CAPÍTOL I Seu electrònica

Article 9. La seu electrònica de La Generalitat

1. La seu electrònica de titularitat de La Generalitat és el seu portal o lloc web institucional en Internet, en l'adreça electrònica sota el nom de domini <www.gva.es>, d'acord amb el que s'establisca reglamentàriament respecte de les característiques, requisits, contingut i règim jurídic general del nom de domini de la seu electrònica de La Generalitat.

La gestió, administració i modificació de la seu electrònica de La Generalitat, d'acord amb els principis assenyalats en l'article 10.3 de

los Servicios Públicos, los ciudadanos y ciudadanas serán también titulares de los derechos que se enuncian en los siguientes apartados en los términos de la presente ley, ejerciéndose todos ellos en el marco de la implantación de servicios y relaciones electrónicas y de progresividad en el pleno ejercicio de los mismos:

1. Derecho a solicitar información y orientación sobre requisitos técnicos y jurídicos y a formular consultas a las administraciones públicas por canales y medios electrónicos.
2. Derecho a no utilizar medios o técnicas electrónicas que no hayan sido previamente aprobados u homologados y publicitados debidamente por la administración actuante en la sede electrónica de su titularidad, sin perjuicio del derecho reconocido en el artículo 6.2, letra k, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
3. Derecho a obtener gratuitamente una dirección de correo electrónico facilitado por La Generalitat Valenciana.
4. Derecho a utilizar libre y gratuitamente los medios y servicios generales electrónicos que se pongan a su disposición para su empleo en las relaciones con las administraciones públicas.
5. Derecho a la utilización de los procedimientos electrónicos disponibles de una forma personalizada y directa.
6. Los que se reconozcan y regulen en otros artículos de la presente ley o en el resto de la normativa vigente.

Artículo 7. Deberes

Con la finalidad de facilitar el pleno ejercicio de los derechos señalados en el anterior artículo, en los términos que se recogen en el artículo 8.1 de esta ley, los ciudadanos y ciudadanas, en sus relaciones con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, sólo estarán obligados al cumplimiento de aquellos deberes que vengan establecidos expresamente en la normativa vigente, de tal manera que se garantice el ejercicio de buena fe de los derechos de acceso electrónico, evitando un uso abusivo de los mismos.

Artículo 8. Garantías del ejercicio de los derechos reconocidos en la ley

1. Los derechos reconocidos en el artículo 6 y desarrollados a lo largo de la presente ley serán ejercidos en los términos que se señalan en sus disposiciones finales primera y segunda, y desde ese momento obligan a todas las administraciones públicas del ámbito de aplicación de la misma, no solo al cumplimiento de lo expresado en dichos preceptos, sino a todas las consecuencias que, según su naturaleza, se deriven de la buena fe y de un ejercicio legítimo y no abusivo de los derechos.
2. Para impulsar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía que se reconocen y desarrollan en esta ley, o la restauración y reparación de aquél cuando se haya producido cualquier contravençió del ordenamiento jurídic regulador en la matèria, podrà acudir-se a cualquiera de los medios de defensa o protección establecidos en la presente o en otras leyes, sin perjuicio del recurso a la tutela jurisdiccional del orden que corresponda.
3. La actuación de los órganos y entidades previstas en el título IV de esta ley se guiará en todo momento por el principio de preferencia o prevalencia del tratamiento más favorable al ciudadano o ciudadana.

TÍTULO II RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

CAPÍTULO I Sede electrónica

Artículo 9. La sede electrónica de La Generalitat

1. La sede electrónica de titularidad de La Generalitat es su portal o sitio web institucional en Internet, en la dirección electrónica bajo el nombre de dominio <www.gva.es>, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente respecto de las características, requisitos, contenido y régimen jurídico general del nombre de dominio de la sede electrónica de La Generalitat.

La gestión, administración y modificación de la sede electrónica de La Generalitat, conforme a los principios señalados en el artículo

la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, correspon a la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals de La Generalitat en matèria d'administració electrònica.

2. La seu electrònica de La Generalitat gaudirà de publicitat oficial en els termes que s'assenyalen en esta llei.

3. Cada conselleria o entitat de l'administració de La Generalitat, així com, si fa el cas, els òrgans que les integren, podrà gestionar, administrar i oferir a la ciutadania a través d'Internet els continguts específics del seu àmbit de competències. La informació, serveis i tramitacions que oferisquen quedaran plenament integrats dins de la seu electrònica de La Generalitat i seran accessibles directament des d'esta seu sense pèrdua de la identitat i homogeneïtat corporativa, amb independència que puguen tindre una adreça electrònica diferenciada d'accés per a la ciutadania.

L'obtenció d'una adreça electrònica diferenciada al si de La Generalitat requerirà d'un informe previ favorable de l'administració electrònica emès per la conselleria a què fa referència l'apartat 1 d'este article respecte del compliment dels requisits previstos a l'efecte d'esta llei, així com dels que s'establisquen reglamentàriament en el seu desplegament.

Cada conselleria o entitat de l'administració de La Generalitat serà responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis publicitats a través d'Internet.

4. Els registres administratius o oficines registrals públiques de persones físiques o jurídiques, de titularitat de La Generalitat, com els registres d'associacions, fundacions, cooperatives, col·legis professionals, organitzacions no governamentals per al desenvolupament, i altres d'anàloga naturalesa, disposaran d'adreces electròniques específiques d'accés lliure i gratuït per a la ciutadania, en els termes assenyalats en el número 3 d'este article, i oferiran la informació i el contingut bàsic actualitzat que s'establisca reglamentàriament.

Article 10. Seus electròniques de l'administració local

1. Cada entitat local de les referides en l'article 2.1, lletra c, disposarà d'una seu electrònica institucional on s'integraran tota la informació i els serveis que oferisquen i presten a la ciutadania, sense perjudici que pugua integrar corporativament altres seus electròniques locals de nivell inferior, sectorials o departamentals, o constituir o integrar-se en seus electròniques d'àmbit territorial superior.

2. La Generalitat, a través de la conselleria a què es referix l'article 9.1 d'esta llei, i les diputacions provincials dins del seu àmbit territorial, sempre que ho permeten les seues disponibilitats pressupostàries, prestaran l'assistència tècnica necessària per a la creació, manteniment i actualització de les seus electròniques de les entitats locals que no puguen atendre pels seus propis mitjans l'obligació consignada en l'anterior apartat.

A l'efecte assenyalat, les entitats locals mencionades podran recórrer a qualsevol de les fórmules arrellegades en l'article 63.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, o a la constitució de consorcis o altres formes associatives previstes en la legislació de règim local per a la gestió d'interessos i serveis comuns, o a la utilització d'altres fórmules de cooperació intermunicipal. Per això poden crear seus electròniques comarcals, mancomunals o supramunicipals, sempre que queden clarament identificades cadascuna de les entitats locals que s'hi inclouen.

Les administracions exposades anteriorment aprovaran un pla d'actuació coordinat en què es definiran l'estratègia i els objectius per a facilitar la implantació efectiva de l'administració electrònica en les entitats locals. Aquest pla especificarà els objectius, les estratègies, les línies d'actuació i els compromisos que les parts determinen.

3. Les ordenances, decrets o disposicions de caràcter general local que regulen els aspectes d'administració i participació electròniques establiran els requisits, condicions i continguts de les seus electròniques, així com la publicitat a donar a la seua creació i modificació, sense perjudici del que estableix l'article 15 d'esta llei.

4. La seu electrònica de La Generalitat, conforme a l'article 13 d'esta llei, facilitarà en la seua pàgina d'inici un accés directe, senzill i periòdicament actualitzat a la informació de les seus electròniques de les entitats locals.

5. Mitjançant convenis de col·laboració entre La Generalitat i les entitats locals titulars de seus electròniques, s'acordaran els sistemes

10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, corresponde a la conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales de La Generalitat en materia de administración electrónica.

2. La sede electrónica de La Generalitat gozará de publicidad oficial en los términos que se señalan en esta ley.

3. Cada conselleria o entidad de la administración de La Generalitat, así como, en su caso, los órganos que las integren, podrá gestionar, administrar y ofrecer a la ciudadanía a través de Internet los contenidos específicos de su ámbito de competencias. La información, servicios y tramitaciones que ofrezcan quedarán plenamente integrados dentro de la sede electrónica de La Generalitat y serán accesibles directamente desde dicha sede sin pérdida de la identidad y homogeneidad corporativa, con independencia de que puedan tener una dirección electrónica diferenciada de acceso para la ciudadanía.

La obtención de una dirección electrónica diferenciada en el seno de La Generalitat requerirá del previo informe favorable de administración electrónica emitido por la conselleria a que se refiere el apartado 1 de este artículo respecto del cumplimiento de los requisitos previstos al efecto en esta ley, así como de los que se establezcan reglamentariamente en su desarrollo.

Cada conselleria o entidad de la administración de La Generalitat será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios publicitados a través de Internet.

4. Los registros administrativos u oficinas registrales públicas de personas físicas o jurídicas, de titularidad de La Generalitat, como los registros de asociaciones, fundaciones, cooperativas, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, y otros de análoga naturaleza, dispondrán de direcciones electrónicas específicas de acceso libre y gratuito para la ciudadanía, en los términos señalados en el número 3 de este artículo, ofreciendo la información y el contenido básico actualizado que se establezca reglamentariamente.

Artículo 10. Sedes electrónicas de la administración local

1. Cada entidad local de las referidas en el artículo 2.1, letra c, dispondrá de una sede electrónica institucional donde se integrarán toda la información y los servicios que ofrezcan y presten a la ciudadanía, sin perjuicio de que pueda integrar corporativamente otras sedes electrónicas locales de nivel inferior, sectoriales o departamentales, o constituir o integrarse en sedes electrónicas de ámbito territorial superior.

2. La Generalitat, a través de la conselleria a que se refiere el artículo 9.1 de esta ley, y las diputaciones provinciales dentro de su ámbito territorial, siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias, prestarán la asistencia técnica necesaria para la creación, mantenimiento y actualización de las sedes electrónicas de las entidades locales que no puedan atender por sus propios medios la obligación consignada en el anterior apartado.

A los mismos efectos señalados, las entidades locales mencionadas podrán recurrir a cualquiera de las fórmulas recogidas en el artículo 63.3 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, o a la constitución de consorcios u otras formas asociativas previstas en la legislación de régimen local para la gestión de intereses y servicios comunes, o a la utilización de otras fórmulas de cooperación intermunicipal, pudiendo incluso crear sedes electrónicas comarcals, mancomunales o supramunicipales, siempre que queden claramente identificadas cada una de las entidades locales que se incluyan en ellas.

Las administraciones antes expuestas aprobarán un plan de actuación coordinado en el que se definirá la estrategia y objetivos para facilitar la efectiva implantación de la administración electrónica en las entidades locales. Dicho plan especificará los objetivos, estrategias, líneas de actuación y compromisos que las partes determinen.

3. Las ordenanzas, decretos o disposiciones de carácter general local que regulen los aspectos de administración y participación electrónicas establecerán los requisitos, condiciones y contenidos de las sedes electrónicas, así como la publicidad a dar a su creación y modificación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de esta ley.

4. La sede electrónica de La Generalitat, conforme al artículo 13 de esta ley, facilitará en su página de inicio un acceso directo, sencillo y periódicamente actualizado a la información de las sedes electrónicas de las entidades locales.

5. Mediante convenios de colaboración entre La Generalitat y las entidades locales titulares de sedes electrónicas, se acordarán los sis-

de comunicació que garanteixen la integració tècnica de les seues electròniques de les administracions públiques.

Article 11. Seus electròniques institucionals

Les seues electròniques de les institucions a què es referix l'article 2.1, lletra *b*, de la present llei quedaran integrades dins de la seua electrònica de La Generalitat en els termes que s'establixen reglamentàriament i d'acord amb les seues lleis de creació i normativa reguladora. En tot cas, hauran d'informar clarament del seu caràcter d'institució de La Generalitat i disposar d'un vincle visiblement i fàcilment accessible a la seua electrònica de La Generalitat, sense perjudici del compliment de les obligacions d'informació arrellegades en l'article 15 d'esta llei.

Article 12. Les seues electròniques de les corporacions de dret públic

Les seues electròniques dels col·legis professionals, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació o dels seus consells autonòmics, així com de la resta de corporacions de dret públic de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a les quals fa referència l'article 2.1, lletra *d*, d'aquesta llei, tindran un enllaç en la seua electrònica de La Generalitat en els termes que s'establixen reglamentàriament, sense perjudici de l'obligació de donar publicitat de la seua creació i modificació, així com de consignar la informació que es determine d'acord amb el que estableix l'article 15.2 d'esta llei i la resta de la legislació vigent en la matèria.

Article 13. Punt d'accés electrònic general

La seua electrònica de La Generalitat serà punt d'accés electrònic general de totes les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació descrit en l'article 2 de la present llei. A l'efecte, tots els responsables de les seues electròniques a què es referixen els articles anteriors d'esta llei hauran de comunicar immediatament a la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals de La Generalitat en matèria d'administració electrònica, la creació d'aquelles, les modificacions que es produïsquen o la seua supressió.

Article 14. Accessibilitat de les seues electròniques

Les seues electròniques regulades en este capítol, així com la informació, continguts i servicis que oferisquen a través d'Internet totes les entitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la present llei, assenyalat en l'article 2, hauran de complir amb les normes reguladores de l'accessibilitat establides en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, i la resta de la legislació aplicable.

Article 15. Obligacions d'informació de les seues electròniques

1. Les seues electròniques referides en els anteriors articles hauran d'incloure de manera clara, intel·ligible, visible, correcta, íntegra, eficaç, accessible i actualitzada la informació següent:

a) Les dades identificatives, estructura, organització i mapa de la seua electrònica, i dades de contacte de l'administració titular.

b) L'estructura organitzativa i funcional de l'administració titular de la seua electrònica, les normes bàsiques de la seua organització i funcionament i les modificacions que s'operen en la seua estructura i normativa.

c) La informació d'interés general en relació amb l'àmbit territorial, funcional o personal, que preste servicis o realitze la seua acció pública, com puga ser la Comunitat Valenciana, el municipi o la província de l'administració titular de la seua electrònica.

d) La informació i documentació rellevant del titular de la seua electrònica, referida a aspectes econòmics, comptables, pressupostaris, tributaris, jurídics i de participació de la ciutadania.

e) El directori del personal dependent del titular de la seua electrònica, amb especial indicació dels funcionaris i les funcionàries que hagen sigut habilitats per cada administració pública per a la identificació o autenticació dels ciutadans i les ciutadanes, d'acord amb l'article 21 d'esta llei.

temas de comunicación que garanticen la integración técnica de las sedes electrónicas de las administraciones públicas.

Artículo 11. Sedes electrónicas institucionales

Las sedes electrónicas de las instituciones a las que se refiere el artículo 2.1, letra *b*, de la presente ley quedarán integradas dentro de la sede electrónica de La Generalitat en los términos que se establezcan reglamentariamente y de acuerdo con sus leyes de creación y normativa reguladora. En todo caso, deberán informar claramente de su carácter de institución de La Generalitat y disponer de un vínculo visible y fácilmente accesible a la sede electrónica de La Generalitat, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de información recogidas en el artículo 15 de esta ley.

Artículo 12. Sedes electrónicas de las corporaciones de derecho público

Las sedes electrónicas de los colegios profesionales, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación o de sus consejos autonómicos, así como del resto de corporaciones de derecho público del ámbito de la Comunitat Valenciana, a las que se refiere el artículo 2.1, letra *d*, de esta ley, contarán con un enlace en la sede electrónica de La Generalitat en los términos que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de la obligación de dar publicidad de su creación y modificación, así como de consignar la información que se determine conforme a lo establecido en el artículo 15.2 de esta ley y en el resto de la legislación vigente en la materia.

Artículo 13. Punto de acceso electrónico general

La sede electrónica de La Generalitat será punto de acceso electrónico general de todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación descrito en el artículo 2 de la presente ley. A tal efecto, todos los responsables de las sedes electrónicas a que se refieren los artículos anteriores de esta ley deberán comunicar inmediatamente a la conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales de La Generalitat en materia de administración electrónica, la creación de aquellas, las modificaciones que se produzcan o la supresión de las mismas.

Artículo 14. Accesibilidad de sedes electrónicas

Las sedes electrónicas reguladas en este capítulo, así como la información, contenidos y servicios que ofrezcan a través de Internet todas las entidades incluidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, señalado en su artículo 2, deberán cumplir con las normas reguladoras de la accesibilidad recogidas en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, y en el resto de la legislación aplicable.

Artículo 15. Obligaciones de información de las sedes electrónicas

1. Las sedes electrónicas referidas en los anteriores artículos deberán incluir de manera clara, inteligible, visible, correcta, íntegra, eficaz, accesible y actualizada la siguiente información:

a) Datos identificativos, estructura, organización y mapa de la sede electrónica, y datos de contacto de la administración titular de la misma.

b) La estructura organizativa y funcional de la administración titular de la sede electrónica, las normas básicas de su organización y funcionamiento y las modificaciones que se operen en dicha estructura y normativa.

c) Información de interés general en relación con el ámbito territorial, funcional o personal, en que preste servicios o desarrolle su acción pública, como pueda ser la Comunitat Valenciana, el municipio o la provincia de la administración titular de la sede electrónica.

d) Información y documentación relevante del titular de la sede electrónica, referida a aspectos económicos, contables, presupuestarios, tributarios, jurídicos y de participación de la ciudadanía.

e) directorio del personal dependiente del titular de la sede electrónica, con especial indicación de los funcionarios y funcionarias a quienes se haya habilitado por cada administración pública para la identificación o autenticación de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con el artículo 21 de esta ley.

f) La relació de servicis i procediments electrònics disponibles i de documents normalitzats, i dels drets d'accés electrònic que puguen exercir-se sobre els uns i els altres, en especial, els mitjans i canals electrònics que puga utilitzar la ciutadania.

g) La relació de sistemes de firma electrònica avançada admesos en la seu electrònica.

h) El registre electrònic amb indicació de la data i hora oficial de la seu electrònica i, també, la disposició o disposicions de la seua creació, amb indicació de l'òrgan responsable, els documents que es poden presentar i els drets exercitables electrònicament en eixe registre per part de la ciutadania.

i) El perfil de contractant.

j) La publicació electrònica de diaris, butlletins, taulers d'anuncis i edictes oficials editats pel titular de la seu electrònica.

k) La via per a la presentació i tramitació telemàtica de queixes i suggeriments.

l) Les clàusules obligatòries de responsabilitat, protecció de dades i de qualitat, en relació amb el titular de la seu electrònica i amb la informació que hi figure. Els titulars de seu electrònica publicitaran la carta de servicis de la seu a què es refereix l'article 36.2 d'esta llei.

m) Els enllaços amb altres seus o adreces electròniques en Internet, d'interés rellevant en relació amb l'àmbit competencial del titular de la seu electrònica.

n) Els cercadors i el servici de consultes més freqüents (FAQ).

o) La informació sobre accessibilitat, estàndards visuals i plurilingüisme.

2. Mitjançant un decret del Consell es concretaran i regularan les obligacions d'informació mínimes, entre les anteriors, que hagen de complir les seus electròniques de titularitat de les entitats locals i de les corporacions de dret públic, a les quals fan referència, respectivament, els articles 10.2 i 12 d'esta llei.

3. Les seus electròniques hauran de publicar, a més a més, aquella altra informació que estiguen obligades en virtut de prescripció legal, judicial o reglamentària.

4. Les seus electròniques hauran de mantindre actualitzada la informació anterior amb la periodicitat que garantisca la prestació d'un servici de societat de la informació de qualitat, eficient, vàlid, segur i que, en tot cas, no podrà per acció o omisió induir a error o confusió sobre el contingut o prestacions que s'hi oferisquen. A l'efecte, hauran d'indicar-hi expressament la data de l'última actualització realitzada o la periodicitat amb què esta es duga a terme, així com procurar adoptar una nomenclatura homogènia que facilite l'accés a la informació i els servicis per part de la ciutadania.

Article 16. Utilització de llengües oficials, d'idiomes estrangers i de llengües de signes

1. Les seus electròniques de titularitat de les entitats relacionades en l'article 2.1 i 2.3 d'esta llei hauran de possibilitar l'accés en valencià i en castellà als seus continguts i servicis, inclosa la tramitació íntegra dels procediments i, per tant, han de disposar de documents electrònics normalitzats en ambdós idiomes. S'exceptuen els continguts íntegrats que provenen de seus electròniques externes, sempre que estes no tinguen obligació d'oferir-los en ambdós idiomes. Si existira esta obligació, tot ciutadà o ciutadana podrà exigir a qualsevol de les dues seus el compliment del requisit lingüístic regulat en este apartat.

En tot cas, el Consell, en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, impulsarà i fomentarà la implantació efectiva i preferent del valencià en les seus electròniques i prestarà, especialment, l'assistència necessària per a fer efectiu el dret dels ciutadans i les ciutadanes a relacionar-se vàlidament i eficaç en valencià i castellà amb qualsevol de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera, les seus electròniques podran integrar o incorporar sistemes o aplicacions automatitzades de traducció, amb l'advertiment del caràcter automatitzat i de les precaucions en relació amb el contingut concret traduït, el seu possible caràcter funcional i la no responsabilitat per raó de propietat intel·lectual.

2. En els termes que es determine en les normes de creació o modificació de les seus electròniques, en funció de l'interés general concur-

f) Relación de servicios y procedimientos electrónicos disponibles y de documentos normalizados, y de los derechos de acceso electrónico que puedan ejercerse sobre unos y otros, en especial, los medios y canales electrónicos que pueda utilizar la ciudadanía.

g) Relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en la sede electrónica.

h) Registro electrónico con indicación de la fecha y hora oficial de la sede electrónica, así como la disposición o disposiciones de su creación, con indicación del órgano responsable del mismo, documentos que se pueden presentar así como derechos ejercitables electrónicamente en dicho registro por parte de la ciudadanía.

i) Perfil de contratante.

j) Publicación electrónica de diarios, boletines, tablonas de anuncios y edictos oficiales editados por el titular de la sede electrónica.

k) La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas y sugerencias.

l) Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de calidad, en relación con el titular de la sede electrónica y con la información que figure en ésta. Los titulares de sede electrónica publicitarán en ella la carta de servicios de sede a que se refiere el artículo 36.2 de esta ley.

m) Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés relevante en relación con el ámbito competencial del titular de la sede electrónica.

n) Buscadores y servicio de consultas más frecuentes (FAQ).

o) Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo.

2. Mediante decreto del Consell se concretarán y regularán las obligaciones de información mínimas, de entre las anteriores, que hayan de cumplir las sedes electrónicas de titularidad de las entidades locales y de las corporaciones de derecho público, a las que se refieren, respectivamente, los artículos 10.2 y 12 de esta ley.

3. Las sedes electrónicas deberán publicar, además, aquella otra información a la que vengan obligadas en virtud de prescripción legal, judicial o reglamentaria.

4. Las sedes electrónicas deberán mantener actualizada la anterior información con la periodicidad que garantice la prestación de un servicio de sociedad de la información de calidad, eficiente, válido, seguro y que, en todo caso, no podrá por acción u omisión inducir a error o confusión sobre el contenido o prestaciones que se ofrezcan en las mismas. A los anteriores efectos, deberán indicar expresamente la fecha de la última actualización realizada o la periodicidad con que se lleve a cabo ésta, así como procurar adoptar una nomenclatura homogénea que facilite el acceso a la información y servicios por parte de la ciudadanía en cualquiera de ellas.

Artículo 16. Utilización de lenguas oficiales, de idiomas extranjeros y de lenguas de signos

1. Las sedes electrónicas de titularidad de las entidades relacionadas en el artículo 2.1 y 2.3 de esta ley deberán posibilitar el acceso en valenciano y en castellano a sus contenidos y servicios, incluida la tramitación íntegra de los procedimientos, debiendo disponer de documentos electrónicos normalizados en ambos idiomas. Se exceptúan los contenidos integrados en aquellas que provengan de sedes electrónicas externas, siempre que éstas no tengan obligación de ofrecerlos en ambos idiomas. Si existiera dicha obligación, todo ciudadano o ciudadana podrá exigir a cualquiera de las dos sedes el cumplimiento del requisito lingüístico regulado en este apartado.

En todo caso, El Consell, en colaboración con la Academia Valenciana de la Lengua, impulsará y fomentará la implantación efectiva y preferente del valenciano en las sedes electrónicas, especialmente prestando la asistencia necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a relacionarse válida y eficazmente en valenciano y castellano con cualquiera de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana.

De igual manera, las sedes electrónicas podrán integrar o incorporar sistemas o aplicaciones automatizadas de traducción, advirtiendo debidamente de tal carácter automatizado y de las precauciones en relación con el contenido concreto traducido, su posible carácter funcional y la no responsabilidad por razón de propiedad intelectual.

2. En los términos que se determine en las normas de creación o modificación de sedes electrónicas, en función del interés general con-

rent i dels particulars drets dels ciutadans i les ciutadanes potencialment destinataris, podran oferir la seua informació i els servicis que presten, també en altres llengües, tant oficials dins de l'Estat com a estrangeres, especialment quan es tracte d'informació, continguts, procediments o servicis que es referisquen a:

- a) Turisme.
- b) Activitats d'intercanvi o promoció cultural.
- c) Immigració.
- d) Persones dependents o víctimes potencials o efectives de violència de gènere o sobre menors, i qualsevol altra situació d'anàloga significació.
- e) Relacions de qualsevol naturalesa en què siga previsible o real una elevada freqüència de les relacions plurilingües.

3. Totes les entitats de l'àmbit d'aplicació d'esta llei, esmentades en l'article 2, adaptaran les seues electròniques que en siguen titulars als estàndards internacionalment admesos per a aconseguir la seua accessibilitat a les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordocegues, mitjançant la posada a disposició dels sistemes d'accés a la informació corresponents, a la prestació electrònica dels servicis, a la realització de comunicacions electròniques i a la tramitació dels procediments administratius que incorporen, a través de les llengües de signes aplicables en l'àmbit lingüístic de la Comunitat Valenciana.

Article 17. Publicacions oficials electròniques

1. El *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* serà publicat en la seua electrònica de La Generalitat en format electrònic, com a única versió, la qual tindrà la consideració d'oficial i autèntica. Reglamentàriament es regularan les condicions i garanties de la seua publicació.

2. La publicació electrònica dels diaris o butlletins oficials de les entitats que integren l'administració local de la Comunitat Valenciana es realitzarà en les seues electròniques d'estes i podrà substituir l'edició impresa, amb els mateixos efectes assenyalats en l'apartat anterior. Correspondrà al Ple de la Corporació Local l'aprovació de la disposició general que regule les condicions i garanties de la publicació electrònica, així com la data a partir de la qual serà l'única versió oficial i autèntica.

CAPÍTOL II Acreditació electrònica

Article 18. Principis generals

1. A més dels sistemes de firma electrònica que siguen conformes amb el que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic als Servicis Públics, els ciutadans i les ciutadanes podran utilitzar, en les seues relacions amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana els certificats electrònics reconeguts emesos o admesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica o per les administracions públiques.

En tot cas, els certificats electrònics expedits a entitats amb o sense personalitat jurídica emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, seran admesos en l'àmbit de totes les entitats assenyalades en l'article 2 d'esta llei.

2. Els ciutadans i les ciutadanes podran utilitzar altres sistemes d'identificació, com ara, claus concertades en un registre previ, aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics únicament en els casos en què l'administració pública corresponent ho haja autoritzat expressament quan haja aprovat la norma reguladora general del procediment administratiu o la seua modificació, o ho autoritze amb posterioritat per a la tramitació d'un procediment específic, amb un informe previ d'administració electrònica emès per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, en el cas del sector públic de La Generalitat, o per l'òrgan amb competències en la matèria dins de l'administració pública actuant, en la resta de casos.

En aquells supòsits en què s'utilitzen estos sistemes per a confirmar la informació, propostes o esborranys remesos o exhibits per l'administració pública actuant, esta haurà de garantir la integritat i el no rebuig per ambdues parts dels documents electrònics concernits, i han d'estar verificats i aprovats aquells sistemes per l'entitat o l'òrgan que tinga atribuïdes estes competències dins de l'administració pública actuant.

corrente y de los particulares derechos de los ciudadanos y ciudadanas potencialmente destinatarios, aquéllas podrán ofrecer su información y los servicios que presten, también en otras lenguas, tanto oficiales dentro del Estado como extranjeras, especialmente cuando se trate de información, contenidos, procedimientos o servicios que se refieran a:

- a) Turismo.
- b) Actividades de intercambio o promoción cultural.
- c) Inmigración.
- d) Personas dependientes o víctimas potenciales o efectivas de violencia de género o sobre menores, y cualquier otra situación de análoga significación.
- e) Relaciones de cualquier naturaleza en las que sea previsible o real una elevada frecuencia de las relaciones plurilingües.

3. Todas las entidades del ámbito de aplicación de esta ley, mencionadas en su artículo 2, adaptarán las sedes electrónicas de las que sean titulares a los estándares internacionalmente admitidos para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, mediante la puesta a disposición dentro de aquéllas de los correspondientes sistemas de acceso a la información, a la prestación electrónica de los servicios, a la realización de comunicaciones electrónicas y a la tramitación de los procedimientos administrativos que incorporen, a través de las lenguas de signos aplicables en el ámbito lingüístico de la Comunitat Valenciana.

Artículo 17. Publicaciones oficiales electrónicas

1. El *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* se publicará en la sede electrónica de La Generalitat en formato electrónico, como única versión, que tendrá la consideración de oficial y auténtica. Reglamentariamente se regularán las condiciones y garantías de su publicación.

2. La publicación electrónica de los diarios o boletines oficiales de las entidades que integran la administración local de la Comunitat Valenciana se realizará en las sedes electrónicas de las mismas y podrá sustituir la edición impresa, con los mismos efectos señalados en el apartado anterior. Corresponderá al Pleno de la Corporación Local la aprobación de la disposición general que regule las condiciones y garantías de la publicación electrónica, así como la fecha a partir de la cual será la única versión oficial y auténtica.

CAPÍTULO II Acreditación electrónica

Artículo 18. Principios generales

1. Además de los sistemas de firma electrónica que sean conformes con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, los ciudadanos y ciudadanas podrán utilizar, en sus relaciones con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana los certificados electrónicos reconocidos emitidos o admitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica o por las administraciones públicas.

En todo caso, los certificados electrónicos expedidos a entidades con o sin personalidad jurídica emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, serán admitidos en el ámbito de todas las entidades señaladas en el artículo 2 de esta ley.

2. Se podrán utilizar por los ciudadanos y ciudadanas otros sistemas de identificación, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos únicamente en los casos en que la administración pública correspondiente lo haya autorizado expresamente al aprobar la norma reguladora general del procedimiento administrativo o su modificación, o lo autorice con posterioridad para la tramitación de un procedimiento específico, previo informe de administración electrónica emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, en el caso del sector público de La Generalitat, o por el órgano con competencias en la materia dentro de la administración pública actuante, en el resto de casos.

En aquellos supuestos en los que se utilicen dichos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por la administración pública actuante, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos, debiendo estar verificados y aprobados aquellos sistemas por la entidad u órgano que tenga atribuidas tales competencias dentro de la administración pública actuante.

Quan calga, el responsable de l'aplicació dins de l'administració pública actuant certificarà l'existència i el contingut de les actuacions dels ciutadans en què s'hagen usat formes d'identificació i autenticació a què es referixen els paràgrafs anteriors.

Reglamentàriament es desplegarà el que disposen els apartats anteriors d'este número.

3. A més a més dels casos previstos per la llei, no caldrà l'acreditació electrònica prèvia, per a accedir a la informació de caràcter general de la seu electrònica, ni a les dades públiques contingudes en esta, o en els supòsits de participació electrònica ciutadana que es prevegen legislativament, ni tampoc quan s'exercisca el dret a què es referix l'article 6.1, d'aquesta llei.

Igualment, per via de reglament podran determinar-se els servicis i les relacions electròniques respecte dels quals s'admeta la possibilitat d'ús anònim o sota pseudònims dels mitjans d'identificació i autenticació. En tot cas, la delimitació dels servicis i les relacions electròniques, així com l'autorització d'esta utilització no podran perjudicar els drets i interessos legítims dels usuaris o de tercers de bona fe, tot això sense perjudici del que establix amb caràcter general en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 19. Acreditació electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i del sector públic de La Generalitat

1. L'acreditació electrònica en l'àmbit del sector públic de La Generalitat es regirà pel que disposa l'article 120 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de La Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de La Generalitat, així com per l'Estatut de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, aprovat pel Decret 149/2007, de 7 de setembre, del Consell.

Reglamentàriament es regularan els punts següents:

a) Identificació electrònica i autenticació de documents electrònics a través de certificats de seu electrònica, d'aplicació i d'empleat públic.

b) Sistemes de firma electrònica de seus electròniques que garanteixen una comunicació segura amb estes.

c) Condicions i garanties mínimes i necessàries d'integritat, seguretat i protecció de dades per les quals s'han de regir amb caràcter general els entorns tancats de comunicació per a l'intercanvi electrònic de dades.

d) Acreditació de l'exercici de la competència de les entitats del sector públic de La Generalitat en actuacions administratives automatitzades a través de segells electrònics, la relació dels quals, incloent les característiques dels certificats electrònics, haurà de ser pública i accessible a través de la seu electrònica de La Generalitat. La relació de segells electrònics en l'àmbit de la resta d'entitats de l'article 2 de la llei estarà igualment disponible a través de les seus electròniques corresponents de les quals siguen titulars.

e) Sistemes de firma electrònica basats en certificats reconeguts d'empleat públic, els quals identificaran el tipus de certificat, l'empleat o l'empleada públics i l'administració, entitat o òrgan en què presta els seus servicis.

2. La relació de sistemes de firma electrònica admesos en l'àmbit del sector públic de La Generalitat estarà disponible en la seu electrònica de La Generalitat i han d'oferir informació suficient dels elements d'identificació utilitzats amb caràcter general, la relació dels certificats electrònics admesos, els prestadors que els expedixen i les especificacions de la firma electrònica que poden realitzar-se amb eixos certificats.

La relació de sistemes de firma electrònica admesos en l'àmbit de la resta d'entitats de l'article 2 de la llei estarà disponible, amb la mateixa informació mínima assenyalada en l'apartat anterior, en les respectives seus electròniques, a més de ser accessible també des de la de La Generalitat.

3. La Generalitat fomentarà que la resta d'entitats assenyalades en l'article 2 d'esta llei usen els sistemes de firma electrònica de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica o validats per ell, així com dels certificats emesos o admesos per l'Ens.

Quando resulte preciso, el responsable de la aplicació dentro de la administración pública actuante certificará la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación a las que se refieren los párrafos anteriores.

Reglamentariamente se desarrollará lo dispuesto en los apartados anteriores de este número.

3. Además de en los casos previstos por la ley, no será necesaria la acreditación electrónica previa, para acceder a la información de carácter general de la sede electrónica, ni a los datos públicos contenidos en la misma, o en los supuestos de participación electrónica ciudadana que se prevean legislativamente, ni tampoco cuando se ejerza el derecho al que se refiere el artículo 6.1 de la presente ley.

Asimismo, reglamentariamente podrán determinarse los servicios y relaciones electrónicas respecto de los cuales se admita la posibilidad de uso anónimo o bajo pseudónimos de los medios de identificación y autenticación. En todo caso, la delimitación de servicios y relaciones electrónicas, así como la autorización de tal utilización no podrán perjudicar los derechos e intereses legítimos de los usuarios de los mismos o de terceros de buena fe, todo ello sin perjuicio de lo establecido con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 19. Acreditación electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana i del sector públic de La Generalitat

1. La acreditación electrónica en el ámbito del sector público de La Generalitat se regirá por lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de La Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de La Generalitat, así como en el Estatuto de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, aprobado por el Decreto 149/2007, de 7 de septiembre, del Consell.

Reglamentariamente se regularán los siguientes extremos:

a) Identificación electrónica y autenticación de documentos electrónicos a través de certificados de sede electrónica, de aplicación y de empleado público.

b) Sistemas de firma electrónica de sedes electrónicas que garanticen una comunicación segura con las mismas.

c) Condiciones y garantías mínimas y necesarias de integridad, seguridad y protección de datos por las que deban regirse con carácter general los entornos cerrados de comunicación para el intercambio electrónico de datos.

d) Acreditación del ejercicio de la competencia de las entidades del sector público de La Generalitat en actuaciones administrativas automatizadas a través de sellos electrónicos, cuya relación, incluyendo las características de los certificados electrónicos, deberá ser pública y accesible a través de la sede electrónica de La Generalitat. La relación de sellos electrónicos en el ámbito del resto de entidades del artículo 2 de la ley estará igualmente disponible a través de las correspondientes sedes electrónicas de las que sean titulares.

e) Sistemas de firma electrónica basados en certificados reconocidos de empleado público, identificando el tipo de certificado, al empleado o empleada públicos y a la administración, entidad u órgano en la que presta sus servicios.

2. La relación de sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito del sector público de La Generalitat estará disponible en la sede electrónica de La Generalitat, debiendo ofrecer información suficiente de los elementos de identificación utilizados con carácter general, la relación de certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que pueden realizarse con esos certificados.

La relación de sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito del resto de entidades del artículo 2 de la ley estará disponible, con la misma información mínima señalada en el anterior apartado, en sus respectivas sedes electrónicas, además de ser accesible también desde la de La Generalitat.

3. La Generalitat fomentarà la utilización por el resto de entidades señaladas en el artículo 2 de esta ley, de los sistemas de firma electrónica de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica o validados por él, así como de los certificados emitidos o admitidos por dicho Ente.

Article 20. Interoperabilitat de la identificació i autenticació mitjançant certificats electrònics

1. Els certificats electrònics reconeguts emesos pels prestadors de serveis de certificació seran admesos per les administracions públiques com a vàlids per a relacionar-s'hi, sempre que estes puguen comprovar la informació continguda en estos certificats a través de plataformes de validació i que això no supose un cost.

2. La plataforma de validació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, mitjançant la qual es garanteix la verificació de l'estat de revocació de tots els certificats admesos en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, estarà disponible en la seu electrònica de La Generalitat i serà de lliure accés dins de l'àmbit d'aplicació d'esta llei.

Article 21. Identificació i autenticació dels ciutadans i ciutadanes pel personal funcionari públic

Totes les administracions públiques de l'àmbit d'aplicació de la present llei hauran de disposar de registres actualitzats del personal funcionari públic habilitat per a identificar i autenticar els ciutadans i les ciutadanes mitjançant els sistemes de firma electrònica que estiguen dotats basats en els certificats d'empleat públic de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica o altres que garanteixen la seguretat d'esta habilitació.

Article 22. Representació electrònica

1. Les administracions públiques sotmeses a l'àmbit d'aplicació d'esta llei podran crear i regular registres de representació electrònica, en els quals s'inscriuen els poders que habiliten a l'exercici davant les administracions d'eixa representació en nom i a compte de les persones físiques o jurídiques privades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent i sense perjudici del que preveu l'apartat següent.

2. Es crea el Registre de Representació Electrònica de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de les funcions assenyalades en l'anterior paràgraf en l'àmbit de les entitats integrants del sector públic de La Generalitat, sense perjudici que, mitjançant els convenis corresponents, pugua oferir estos serveis i exercir les seues competències respecte de la resta d'entitats enunciades en l'article 2 de la present llei. Reglamentàriament es regularà l'organització, estructura i funcionament del Registre de Representació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL III
Registres i documentació

Article 23. Registres electrònics

1. En els termes establits en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, cada administració pública haurà de disposar d'un Registre Electrònic General o Comú, d'accés lliure i gratuït en la seu electrònica, sense perjudici de la possibilitat de disposar de registres electrònics de naturalesa auxiliar integrats en aquell, per a un millor funcionament de la recepció i remissió de sol·licituds, escrits, comunicacions, consultes i documents que es transmeten telemàticament.

En els registres existents en les oficines administratives d'atenció presencial els ciutadans i les ciutadanes podran accedir-hi directament a través dels caixers electrònics d'autoadministració regulats en l'article 34.2 així com, si fa el cas, a través dels mecanismes regulats en els articles 21 i 22 d'esta llei.

2. La presentació, a través del registre electrònic que corresponga en cada supòsit, de sol·licituds, escrits, peticions, reclamacions, consultes o un altre tipus de comunicació, iniciarà preceptivament el còmput de terminis.

Quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu dels sistemes, les aplicacions, els canals o els mitjans electrònics de titularitat de l'administració actuant, es podrà suspendre temporalment la possibilitat d'exercir la relació jurídicoadministrativa per via electrònica. Així mateix, es determinarà d'ofici les ampliacions de terminis derivades de les suspensions del servei en els supòsits que es determine reglamentàriament i en els termes establerts legalment.

Artículo 20. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos

1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán admitidos por las administraciones públicas como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando éstas puedan comprobar la información contenida en tales certificados a través de plataformas de validación y no suponga un coste para ellas.

2. La plataforma de validación de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, por medio de la cual se garantiza la verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, estará disponible en la sede electrónica de La Generalitat y será de libre acceso dentro del ámbito de aplicación de esta ley.

Artículo 21. Identificación y autenticación de los ciudadanos y ciudadanas por personal funcionario público

Todas las administraciones públicas del ámbito de aplicación de la presente ley deberán disponer de registros actualizados de personal funcionario público habilitado para identificar y autenticar a ciudadanos y ciudadanas mediante los sistemas de firma electrónica de que estén dotados basados en certificados de empleado público de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica u otros que garanticen la seguridad de dicha habilitación.

Artículo 22. Representación electrónica

1. Las administraciones públicas sometidas al ámbito de aplicación de esta ley podrán crear y regular registros de representación electrónica, en que se inscriban los poderes que habiliten al ejercicio ante ellas de dicha representación en nombre y por cuenta de personas físicas o jurídicas privadas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

2. Se crea el Registro de Representación Electrónica de la Comunitat Valenciana para el ejercicio de las funciones señaladas en el anterior párrafo en el ámbito de las entidades integrantes del sector público de La Generalitat, sin perjuicio de que, mediante los correspondientes convenios, pueda ofrecer dichos servicios y ejercer sus competencias respecto del resto de entidades enunciadas en el artículo 2 de la presente ley. Reglamentariamente se regulará la organización, estructura y funcionamiento del Registro de Representación Electrónica de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO III
Registros y documentación

Artículo 23. Registros electrónicos

1. En los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cada administración pública deberá disponer de un Registro Electrónico General o Común, de acceso libre y gratuito en la sede electrónica, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de registros electrónicos de naturaleza auxiliar integrados en aquél, para el mejor funcionamiento de la recepción y remisión de solicitudes, escritos, comunicaciones, consultas y documentos que se transmitan telemáticamente.

En los registros existentes en las oficinas administrativas de atención presencial los ciudadanos y ciudadanas podrán acceder directamente a aquéllos a través de los cajeros electrónicos de autoadministración regulados en el artículo 34.2 así como, en su caso, a través de los mecanismos regulados en los artículos 21 y 22 de esta ley.

2. La presentación, a través del registro electrónico que corresponda en cada supuesto, de solicitudes, escritos, peticiones, reclamaciones, consultas u otro tipo de comunicación, iniciará preceptivament el cómputo de plazos.

Cuando concurren razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo de los sistemas, aplicaciones, canales o medios electrónicos de titularidad de la administración actuante, podrá suspenderse temporalmente la posibilidad de ejercer la relación jurídicoadministrativa por vía electrónica. Asimismo, se determinarán de oficio las ampliaciones de plazos derivadas de las suspensiones del servicio en los supuestos que se determinen reglamentariamente y en los términos legalmente establecidos.

En la sede electrónica correspondiente se informará sobre la suspensión temporal del servicio, la previsión de duración de la misma, y la determinación del supuesto previsto reglamentariamente que dé lugar a la adopción de medidas que afecten al cómputo de los plazos.

3. L'autoritat de segellat de temps en l'àmbit del sector públic de La Generalitat és l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. La resta d'entitats esmentades en l'article 2 d'esta llei podran sol·licitar a l'Agència la prestació dels serveis de segellat de temps.

4. Tots els registres electrònics disposaran de documents electrònics normalitzats corresponents als procediments administratius la tramitació telemàtica dels quals siga de competència de la sede electrònica. Reglamentàriament es desplegarà la informació i les indicacions obligatòries que hagen d'incorporar dits documents, directament o a través de la informació adjunta del procediment corresponent que, en tot cas i com a mínim, hauran de fer referència a:

- a) Si es tracta d'un procediment de tramitació electrònica íntegra o no.
- b) L'obligatorietat d'utilització del model normalitzat i conseqüències del seu incompliment, sense perjudici, si fa el cas, de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant de les administracions públiques.
- c) La possibilitat d'acompanyar documents a la sol·licitud, escrit, comunicació o consulta.
- d) Els drets d'accés electrònic que tinga el ciutadà o la ciutadana, en funció de la lletra a, anterior.
- e) La indicació del nivell d'identificació i autenticació exigida, a l'efecte d'exigència de sistemes de firma electrònica a utilitzar.
- f) Les indicacions, advertiments i cautelles de caràcter obligatori derivades de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal o amb motiu de l'exercici de la intermodalitat.
- g) Altres indicacions previstes legalment o reglamentàriament.

Article 24. Registre Electrònic de La Generalitat

Es crea el Registre Electrònic de l'Administració de La Generalitat, el qual dependrà de la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals de La Generalitat en matèria d'administració electrònica. La seua utilització és voluntària per als ciutadans i ciutadanes i preferent en les relacions entre les administracions públiques, d'acord amb el que estableix l'article 27 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i en els termes que es determinen reglamentàriament.

El Registre Electrònic de La Generalitat podrà estar integrat per registres electrònics auxiliars en els termes que s'establisquen reglamentàriament. En tot cas, la creació o modificació dels registres electrònics auxiliars es realitzarà mitjançant una norma reglamentària de la conselleria de La Generalitat corresponent, amb un informe previ favorable d'administració electrònica emès per la conselleria a què es referix el primer apartat d'este article.

Article 25. Convenis d'interconnexió de registres electrònics

1. Mitjançant un conveni podrà acordar-se la interconnexió de registres electrònics, amb els efectes assenyalats en relació amb el cómput de terminis, presentació en dia inhàbil, i altres qüestions d'interès comú per a les administracions que el subscriuen. La Generalitat, dins de les seues competències, fomentarà la subscripció de convenis en aquest camp amb totes les administracions públiques.

2. Els convenis d'interconnexió de registres electrònics en cap cas no podran implicar la supressió dels drets reconeguts en esta llei ni una minva o perjudici en el seu exercici.

Article 26. Emmagatzemament i remissió de documents i expedients administratius electrònics

1. Podran emmagatzemar-se per mitjans electrònics tots els documents i expedients administratius, amb independència del suport que tingueren originàriament.

Els mitjans i suports en què s'emmagatzemen els documents i expedients administratius comptaran amb les mesures de seguretat que reglamentàriament s'establisquen i que, en tot cas, garantiran la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents i expedients emmagatzemats.

En la sede electrónica correspondiente se informará sobre la suspensión temporal del servicio, la previsión de duración de la misma, y la determinación del supuesto previsto reglamentariamente que dé lugar a la adopción de medidas que afecten al cómputo de los plazos.

3. La autoridad de sellado de tiempo en el ámbito del sector público de La Generalitat es la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. El resto de entidades mencionadas en el artículo 2 de esta ley podrán solicitar a aquella Agencia la prestación de los servicios de sellado de tiempo.

4. Todos los registros electrónicos dispondrán de documentos electrónicos normalizados correspondientes a los procedimientos administrativos cuya tramitación telemática sea de competencia de la sede electrónica. Reglamentariamente se desarrollará la información e indicaciones obligatorias que deban incorporar dichos documentos, directamente o a través de la información adjunta del procedimiento correspondiente, que, en todo caso y como mínimo, deberán hacer referencia a:

- a) Si se trata de un procedimiento de tramitación electrónica íntegra o no.
- b) Obligatoriedad de utilización del modelo normalizado y consecuencias de su incumplimiento, sin perjuicio, en su caso, de la normativa establecida con carácter general sobre la presentación de solicitudes ante las administraciones públicas.
- c) Posibilidad de acompañar documentos a la solicitud, escrito, comunicación o consulta.
- d) Derechos de acceso electrónico que ostente el ciudadano o ciudadana, en función de la letra a, anterior.
- e) Indicación del nivel de identificación y autenticación exigido, a efectos de exigencia de sistemas de firma electrónica a utilizar.
- f) Las indicaciones, advertencias y cautelas de carácter obligatorio derivadas de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o con motivo del ejercicio de la intermodalidad.
- g) Otras indicaciones previstas legal o reglamentariamente.

Artículo 24. Registro Electrónico de La Generalitat

Se crea el Registro Electrónico de la administración de La Generalitat, que dependerá de la conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales de La Generalitat en materia de administración electrónica. Su utilización es voluntaria para los ciudadanos y ciudadanas y preferente en las relaciones entre las administraciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en los términos que se determinen reglamentariamente.

El Registro Electrónico de La Generalitat podrá estar integrado por registros electrónicos auxiliares en los términos que se establezcan reglamentariamente. En todo caso, la creación o modificación de registros electrónicos auxiliares se realizará mediante norma reglamentaria de la correspondiente conselleria de La Generalitat, previo informe favorable de administración electrónica emitido por la conselleria a que se refiere el primer apartado de este artículo.

Artículo 25. Convenios de interconexión de registros electrónicos

1. Mediante convenio podrá acordarse la interconexión de registros electrónicos, con los efectos que se señalen en el mismo en relación con el cómputo de plazos, presentación en día inhàbil, y otras cuestiones de interés común para las administraciones que lo suscriban. La Generalitat, dentro de sus competencias, fomentará la suscripción de convenios en este campo con todas las administraciones públicas.

2. Los convenios de interconexión de registros electrónicos en ningún caso podrán implicar la supresión de derechos reconocidos en esta ley ni una merma o perjuicio de su ejercicio.

Artículo 26. Almacenamiento y remisión de documentos y expedientes administrativos electrónicos

1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos y expedientes administrativos, con independencia del soporte que tuvieran originariamente.

Los medios y soportes en que se almacenen los documentos y expedientes administrativos contarán con las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan y que, en todo caso, garantizarán la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos y expedientes almacenados.

2. La remissió de documents o expedients administratius electrònics podrà dur-se a terme en qualsevol de les següents formes, d'acord amb el que estableix reglamentàriament cada administració actuant:

a) Traslát físic dels suports electrònics que continguen les còpies autèntiques dels documents i expedients.

b) Remissió telemàtica mitjançant qualsevol dels sistemes de firma electrònica avançada en els termes i condicions que preveu esta llei.

c) Posada a disposició electrònica, la qual es realitzarà a través de la inserció directa, vincle electrònic o un altre sistema de dipòsit virtual, del document o expedient en un espai específic dins de la seua electrònica de l'administració remitent o de la persona destinatària, en la seua carpeta personal electrònica, o en un altre espai que es preveja en la normativa reguladora.

En l'accés a la documentació remesa es garantirà, en tot cas, la integritat electrònica del document o expedient original.

Article 27. Arxíu electrònic de documents i expedients administratius

1. Els expedients administratius que s'hagen tramitat íntegrament en suport electrònic es conservaran, a tots els efectes, en eixe suport, sense perjudici de la seua migració digital o conversió a altres formats i suports que puguen sorgir en el futur com a conseqüència de l'evolució tecnològica, a fi de garantir la seua conservació, la seua perdurabilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i disponibilitat en condicions de qualitat, d'acord amb la normativa, si fa el cas, vigent en la matèria.

El compliment del que s'ha establert en el paràgraf anterior s'exigirà la utilització de sistemes de firma longeva, que garantisquen la referència temporal dels documents i expedients administratius per a la verificació de les firmes electròniques a llarg termini dels documents firmats electrònicament en un moment determinat. A l'efecte, l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica prestarà d'ofici a les entitats integrants del sector públic de La Generalitat, i amb caràcter pregat a la resta d'entitats de l'àmbit d'aplicació d'esta llei, servicis de custòdia documental electrònica avançada, i posarà a la seua disposició les infraestructures per a l'arxíu dels documents electrònics.

2. Reglamentàriament s'establiran els principis i les mesures de seguretat aplicables als mitjans i suports en què s'emmagatzemen els documents i expedients administratius, així com, si fa el cas, els processos de digitalització dels uns i els altres quan estiguen en suport de paper.

3. La destrucció de documents administratius originàriament en suport paper només podrà dur-se a terme quan s'hagen realitzat les còpies electròniques, que garantisquen la seua qualitat, contingut, accessibilitat i perdurabilitat d'acord amb els principis assenyalats en este article, en els termes i condicions que s'establisquen reglamentàriament.

Els processos de digitalització generalitzada al si d'un òrgan, conselleria o entitat, que comporten la destrucció del suport original en paper, necessàriament hauran d'incorporar un informe d'administració electrònica elaborat per la conselleria o l'òrgan amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica dins de cada entitat, que valore la necessitat, procediment i impacte de la mesura.

4. Per via de reglament es regularà l'arxíu de les seues electròniques que siguen substituïdes per unes altres de noves i, en tot cas, s'haurà de garantir que la conservació de les antigues permeta la identificació i el seguiment, durant els terminis legalment exigibles, dels procediments i tràmits substanciats a través d'aquelles, així com l'esbrinament de les responsabilitats que puguen derivar-se'n.

Igualment, en els termes del seu desplegament reglamentari, s'haurà de garantir la possibilitat de la navegació per les funcionalitats, continguts i servicis, de les seues electròniques arxivades, d'acord amb el que possibiliten els avanços tecnològics i científics en cada moment, i atés el valor històric i cultural de l'esmentat patrimoni immaterial.

5. En matèria d'arxíu documental i de conservació dels documents susceptibles de formar part del Patrimoni Documental Valencià, caldrà

2. La remisión de documentos o expedientes administrativos electrónicos podrá llevarse a cabo en cualquiera de las siguientes formas, de acuerdo con lo que establezca reglamentariamente cada administración actuante:

a) Traslado físico de los soportes electrónicos que contengan las copias auténticas de los documentos y expedientes.

b) Remisión telemática mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica avanzada en los términos y condiciones previstos en esta ley.

c) Puesta a disposición electrónica, que se realizará mediante la inserción directa, vínculo electrónico u otro sistema de depósito virtual, del documento o expediente en un espacio específico dentro de la sede electrónica de la administración remiteante o de la persona destinataria, en la carpeta personal electrónica de ésta, o en otro espacio que se prevea en la normativa reguladora.

En el acceso a la documentación remitida se garantizará, en todo caso, la integridad electrónica del documento o expediente original.

Artículo 27. Archivo electrónico de documentos y expedientes administrativos

1. Los expedientes administrativos que se hayan tramitado íntegramente en soporte electrónico se conservarán, a todos los efectos, en dicho soporte, sin perjuicio de su migración digital o conversión a otros formatos y soportes que puedan surgir en el futuro como consecuencia de la evolución tecnológica, con el fin de garantizar su conservación, su perdurabilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad en condiciones de calidad, de acuerdo con la normativa, en su caso, vigente en la materia.

El cumplimiento de lo señalado en el anterior párrafo exigirá la utilización de sistemas de firma longeva, que garanticen la referencia temporal de los documentos y expedientes administrativos para la verificación de las firmas electrónicas a largo plazo de los documentos firmados electrónicamente en un momento determinado. A estos efectos, la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica prestará de oficio a las entidades integrantes del sector público de La Generalitat, y con carácter rogado al resto de entidades del ámbito de aplicación de esta ley, servicios de custodia documental electrónica avanzada, y pondrá a su disposición las infraestructuras para el archivado de documentos electrónicos.

2. Reglamentariamente se establecerán los principios y medidas de seguridad aplicables a los medios y soportes en que se almacenen los documentos y expedientes administrativos, así como, en su caso, los procesos de digitalización de unos y otros cuando se hallaren en soporte papel.

3. La destrucción de documentos administrativos originariamente en soporte papel solo podrá llevarse a cabo cuando se hayan realizado copias electrónicas de los mismos, que garanticen su calidad, contenido, accesibilidad y perdurabilidad conforme a los principios señalados en este artículo, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Los procesos de digitalización generalizada en el seno de un órgano, conselleria o entidad, que comporten la destrucción del soporte original en papel, necesariamente habrán de incorporar un informe de administración electrónica elaborado por la conselleria u órgano con competencias horizontales en materia de administración electrónica dentro de cada entidad, que valore la necesidad, procedimiento e impacto de la medida.

4. Reglamentariamente se regulará el archivo de las sedes electrónicas que sean substituidas por otras nuevas, garantizándose, en todo caso, que la conservación de las antiguas permita la identificación y seguimiento, durante los plazos legalmente exigibles, de los procedimientos y trámites sustanciados a través de aquéllas, así como la averiguación de las responsabilidades que pudieren derivarse de unos y otros.

Asimismo, en los términos de su desarrollo reglamentario, se deberá garantizar la posibilidad de la navegación por las funcionalidades, contenidos y servicios, de las sedes electrónicas archivadas, de acuerdo con lo que posibiliten los avances tecnológicos y científicos en cada momento, y teniendo en cuenta el valor histórico y cultural de dicho patrimonio inmaterial.

5. En materia de archivo documental y de conservación de los documentos susceptibles de formar parte del Patrimoni Documental

ajustar-se al que disposa la Llei 3/2005, de 15 de juny, de La Generalitat, d'Arxius. En especial, haurà de poder-se establir la interconnexió electrònica dels arxius del sistema arxivístic valencià, així com la progressiva digitalització dels fons documentals, a fi de posar a disposició de la ciutadania el Portal Documental de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL IV Comunicacions electròniques

Article 28. Dret a la comunicació i accés per mitjans electrònics

1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a comunicar-se electrònicament amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a formular tot tipus de sol·licituds, recursos, reclamacions, alegacions, queixes, suggeriments, peticions, oposicions i consultes, també per a rebre notificacions i tot tipus de comunicacions d'estes, sense més limitacions que les establides en les lleis.

En la mesura en què la implantació de l'expedient electrònic ho permeta, i d'acord amb la normativa europea i estatal sobre això, els interessats en un procediment tindran dret a conèixer l'estat de tramitació dels expedients en què siguen part i a accedir electrònicament a l'índex de l'expedient i a qualssevol documents que s'hi troben, sempre que no perjudiquen el dret a la protecció de dades de caràcter personal o ho prohibisquen expressament altres lleis, així com a la normativa aplicable en el procediment.

2. Reglamentàriament es podrà establir l'obligatorietat de comunicar-se exclusivament per mitjans electrònics quan les persones interessades es corresponguen amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguen garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos. En especial esta obligatorietat haurà de preveure's amb caràcter general per a les persones jurídiques en l'àmbit de la contractació del sector públic i el tributari.

Article 29. Intermodalitat

Els ciutadans i les ciutadanes podran triar en qualsevol moment el mitjà o canal de comunicació amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, entre els que estiguen disponibles, i intercanviar-lo al llarg de la relació jurídicoadministrativa referida. L'opció per un mitjà no electrònic no impedirà la validesa de les comunicacions electròniques interadministratives dins del mateix procediment o amb motiu d'aquella relació jurídica.

Article 30. Comunicacions interadministratives

Les comunicacions entre els òrgans d'una mateixa administració o entre diverses administracions es realitzaran preferentment per mitjans electrònics en els termes establits en esta llei, i gaudiran de plena validesa i eficàcia si reuneixen la resta de requisits establits amb caràcter general en la legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 31. Notificacions electròniques

1. La notificació electrònica de qualsevol acte administratiu es realitzarà a través del Registre Electrònic, en la forma i pels mitjans electrònics que s'establisquen reglamentàriament.

2. La identificació electrònica de la persona interessada en el procediment es realitzarà a través de qualsevol dels sistemes de firma electrònica establits en l'article 18 d'esta llei. En cas de consultes telefòniques, l'administració podrà facilitar una contrasenya personal o utilitzar altres sistemes d'acreditació que li permeten la identificació com a persona interessada en el procediment.

Si la notificació electrònica no fóra possible per problemes tècnics, l'administració actuant practicarà la notificació de forma convencional.

3. Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i en la resta de la legislació vigent.

Valenciano, se estará a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de La Generalitat, de Archivos. En especial, deberá poderse establecer la interconexión electrónica de los archivos del sistema archivístico valenciano, así como la progresiva digitalización de los fondos documentales, a fin de poner a disposición de la ciudadanía el Portal Documental de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTULO IV Comunicaciones electrónicas

Artículo 28. Derecho a la comunicación y acceso por medios electrónicos

1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a comunicarse electrónicamente con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para formular todo tipo de solicitudes, recursos, reclamaciones, alegaciones, quejas, sugerencias, peticiones, oposiciones y consultas, así como para recibir notificaciones y todo tipo de comunicaciones de aquellas, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.

En la medida en que la implantación del expediente electrónico lo permita, y de acuerdo con la normativa europea y estatal al respecto, los interesados en un procedimiento tendrán derecho a conocer el estado de tramitación de los expedientes en los que sean parte, a acceder electrónicamente al índice del expediente y a cualesquiera documentos que obren en aquel, siempre que no perjudiquen el derecho a la protección de datos de carácter personal o lo prohiban expresamente otras leyes, así como a la normativa aplicable en el procedimiento.

2. Reglamentariamente se podrá establecer la obligatoriedad de comunicarse exclusivamente por medios electrónicos cuando las personas interesadas se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de medios tecnológicos precisos. En especial dicha obligatoriedad deberá preverse con carácter general para las personas jurídicas en el ámbito de la contratación del sector público y en el tributario.

Artículo 29. Intermodalidad

Los ciudadanos y ciudadanas podrán elegir en cualquier momento el medio o canal de comunicación con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, de entre los que se hallen disponibles, e intercambiarlo a lo largo de la relación jurídicoadministrativa de que se trate. La opción por un medio no electrónico no impedirá la validez de las comunicaciones electrónicas intradministrativas dentro del mismo procedimiento o con motivo de aquella relación jurídica.

Artículo 30. Comunicaciones interadministrativas

Las comunicaciones entre órganos de una misma administración o entre varias administraciones se realizarán preferentemente por medios electrónicos en los términos establecidos en esta ley, gozando de plena validez y eficacia si reúnieren el resto de requisitos establecidos con carácter general en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 31. Notificaciones electrónicas

1. La notificación electrónica de cualquier acto administrativo se realizará a través del Registro Electrónico, en la forma y por los medios electrónicos que se establezcan reglamentariamente.

2. La identificación electrónica de la persona interesada en el procedimiento se realizará a través de cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos en el artículo 18 de esta ley. En caso de consultas telefónicas, la administración podrá facilitar una contraseña personal o utilizar otros sistemas de acreditación que le permita la identificación como persona interesada en el mismo.

Si la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, la administración actuante practicarà la notificación de forma convencional.

3. Las notificaciones que se realicen por medios electrónicos se entenderán practicadas o rechazadas en los términos que se señalan en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el resto de la legislación vigente.

Article 32. Notificacions a través de publicació en diaris o butlletins oficials o taulells d'anuncis electrònics i per compareixença

1. En els supòsits legalment establerts la notificació electrònica podrà ser substituïda per la publicació en els diaris i butlletins oficials i en els taulells d'anuncis electrònics.

2. Podran implantar-se sistemes de notificació per compareixença electrònica, tot garantint les exigències i els principis de la legislació vigent. La notificació per compareixença podrà entendre's realitzada a través de l'exercici per la persona interessada del dret d'accés a l'expedient i al seu estat de tramitació, o per mitjà del seu accés a servicis electrònics en la corresponent seu electrònica, sempre que quede acreditada la seua identitat d'acord amb el que estableix esta llei, així com la naturalesa de l'esmentat accés.

CAPÍTOL V
Administració integral

Article 33. Multicanalitat

1. Totes les administracions públiques estaran obligades a posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes diferents canals i mitjans presencials i no presencials que garantiscen una atenció i informació de qualitat i optimitzen la prestació dels servicis públics i la tramitació dels procediments administratius, en els termes que tot seguit s'indiquen.

2. En concret, haurà de facilitar-se, com a mínim:

a) L'atenció presencial a través d'oficines físiques administratives, que en el cas de constituir una xarxa de centres distribuïts territorialment, hauran d'estar interconnectades electrònicament.

b) L'atenció telefònica, mitjançant una numeració de fàcil identificació i memorització, que permeta el redireccionament de telefonades a l'interior de l'organització en funció del nivell de complexitat de la sol·licitud d'informació o de la consulta plantejada.

c) L'atenció a través o des de seu electrònica, en els termes establerts en la present llei.

A mesura que l'estat de l'evolució tecnològica ofereisca la possibilitat d'utilitzar nous canals o mitjans a través dels quals impulsar la millora continua de l'atenció i la comunicació amb la ciutadania, les administracions públiques adoptaran les mesures necessàries per a incorporar-los dins de les seues organitzacions.

3. L'estructura i organització dels canals i mitjans d'atenció assenyalats tendirà a facilitar l'exercici ple dels drets o el millor compliment dels deures dels ciutadans i les ciutadanes en les seues relacions amb les administracions públiques, les quals han d'estar interconnectades per tal d'afavorir la integració electrònica personalitzada de la informació de cada ciutadà o ciutadana, amb independència de la naturalesa, electrònica o no, del canal d'entrada o eixida que s'haja utilitzat per a la comunicació administrativa, tot això amb ple respecte al dret a la protecció de dades de caràcter personal.

4. Tots els canals o mitjans assenyalats, tant els presencials com no presencials, hauran de garantir l'exercici ple del dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, si fa el cas, mitjançant les tècniques d'acreditació i representació electrònica arrelgades en els articles 21 i 22 d'esta llei, o d'autoadministració de l'article següent.

5. D'igual manera, les administracions públiques hauran de complir amb el que prescriuen els articles 14, 16.3 i 43 d'esta llei en matèria d'atenció al ciutadà o ciutadana i introduir caràcter generalitzat mesures que fomenten l'accessibilitat efectiva.

Article 34. Autoadministració

1. Les seus electròniques posaran a disposició dels ciutadans i les ciutadanes un espai d'emmagatzemament accessible en línia, amb la denominació de «carpeta personal electrònica» o una altra significació anàloga.

La carpeta personal electrònica és un servici públic de la seu electrònica per a l'arxiu, conservació, gestió i posada a disposició de documents electrònics relatius a l'esfera d'interessos del ciutadà o la ciutadana i susceptibles de ser utilitzats o aportats en les comunicacions o relacions electròniques amb les administracions, amb independència que siguen titulars o no de la seu electrònica on estiguen les carpetes.

Artículo 32. Notificaciones a través de publicación en diarios o boletines oficiales o tableros de anuncios electrónicos y por comparecencia

1. En los supuestos legalmente establecidos la notificación electrónica podrá ser sustituida por la publicación en los diarios y boletines oficiales y en los tableros de anuncios electrónicos.

2. Podrán implantarse sistemas de notificación por comparecencia electrónica garantizándose las exigencias y principios de la legislación vigente. La notificación por comparecencia podrá entenderse realizada a través del ejercicio por la persona interesada del derecho de acceso al expediente y a su estado de tramitación, o mediante su acceso a servicios electrónicos en la correspondiente sede electrónica, siempre que quede acreditada su identidad conforme a lo establecido en esta ley, así como la naturaleza de dicho acceso.

CAPÍTULO V
Administración integral

Artículo 33. Multicanalidad

1. Todas las administraciones públicas vendrán obligadas a poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas diferentes canales y medios presenciales y no presenciales que garanticen una atención e información de calidad y optimicen la prestación de los servicios públicos y la tramitación de los procedimientos administrativos, en los términos que se indican a continuación.

2. En concreto, deberá facilitarse, como mínimo:

a) La atención presencial a través de oficinas físicas administrativas, que si constituyeran una red de centros distribuidos territorialmente, deberán estar interconectadas electrónicamente.

b) La atención telefónica, por medio de numeración de fácil identificación y memorización, que permita el redireccionamiento de llamadas al interior de la organización en función del nivel de complejidad de la solicitud de información o de la consulta planteada.

c) La atención a través o desde sede electrónica, en los términos establecidos en la presente ley.

A medida que el estado de la evolución tecnológica ofrezca la posibilidad de utilizar nuevos canales o medios a través de los cuales impulsar la mejora continua de la atención y la comunicación con la ciudadanía, las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para incorporarlas dentro de sus organizaciones.

3. La estructura y organización de los canales y medios de atención señalados se dirigirá a facilitar el pleno ejercicio de los derechos o el mejor cumplimiento de los deberes de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones con las administraciones públicas, debiendo estar aquellos interconectados y favorecer la integración electrónica personalizada de la información de cada ciudadano o ciudadana, con independencia de la naturaleza, electrónica o no, del canal de entrada o salida que se haya utilizado para la comunicación administrativa, todo ello con pleno respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal.

4. Todos los canales o medios señalados, tanto presenciales como no presenciales, deberán garantizar el pleno ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, en su caso mediante las técnicas de acreditación y representación electrónica recogidas en los artículos 21 y 22 de esta ley, o de autoadministración del siguiente artículo.

5. De igual manera, las administraciones públicas deberán cumplir con lo prescrito en los artículos 14, 16.3 y 43 de esta ley en materia de atención al ciudadano o ciudadana, introduciendo con carácter generalizado medidas que fomenten la accesibilidad efectiva.

Artículo 34. Autoadministración

1. Las sedes electrónicas pondrán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas un espacio de almacenamiento accesible en línea, con la denominación de «carpeta personal electrónica» u otra de análoga significación.

La carpeta personal electrónica es un servicio público de la sede electrónica para el archivo, conservación, gestión y puesta a disposición de documentos electrónicos relativos a la esfera de intereses del ciudadano o ciudadana y susceptibles de ser utilizados o aportados en las comunicaciones o relaciones electrónicas con las administraciones, con independencia de que sean titulares o no de la sede electrónica donde se hallen las carpetas.

Reglamentàriament, es determinaran els requeriments tècnics d'èixos espais, les condicions i termes d'ús de la carpeta personal electrònica, així com d'identificació i autenticació, accés, permisos i control del seu titular, els requisits de la documentació que còpia emmagatzemar i, en especial, les mesures tècniques i jurídiques de seguretat en l'accés per part del titular de la carpeta o de l'administració, o en el tractament, transmissió, modificació i control de la documentació emmagatzemada, els quals hauran de respectar el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

En tot cas, l'usuari o usuària haurà de poder controlar autònomament i amb confidencialitat la seua carpeta personal electrònica i poder determinar els documents electrònics que continga i fer-los aptes i útils per a la seua aportació en la seua comunicació o relació electrònica amb les administracions.

La prestació del consentiment del ciutadà per a accedir a dades que es troben en poder de titularitat pública d'altres òrgans, administracions o entitats, que es refereix l'article 42 d'esta llei, amb la finalitat de poder-se prestar millor el servei públic o agilitzar-se la tramitació del procediment administratiu del qual siga part o persona interessada, implicarà la possibilitat d'accedir als documents electrònics que assenyalen de la carpeta personal electrònica, en els termes i condicions que haja indicat expressament. El consentiment es podrà modificar o revocar electrònicament en qualsevol moment.

2. En les oficines d'atenció presencial de les administracions públiques que es determinen i regulen reglamentàriament, a través de conveni o per acord dels òrgans gestors d'aquelles dins de la mateixa administració s'habilitaran espais físics per a la instal·lació de terminals de gestió, comunicació, relació i tramitació electrònica dels ciutadans i les ciutadanes amb les administracions públiques, en règim d'autoservici a través d'un accés senzill, segur i exclusiu a les seues electròniques o a determinats serveis o procediments, en especial aquells que permeten l'obtenció immediata del que sol·licita.

Els caixers electrònics d'autoadministració a què es refereix l'anterior paràgraf, els quals inclouran el Servei de Registre Electrònic de Seu, estaran disponibles durant l'horari d'atenció al públic, sense perjudici que s'acrediten raons suficients que promueuen un servei permanent de vint-i-quatre hores i la seua localització a l'exterior de les oficines i, en este cas, estaran dotades de les mesures de seguretat físiques generalment aplicables en matèria de caixers automàtics.

3. L'aprovació dels sistemes d'autoadministració assenyalats en este article així com qualsevol altres d'ídèntica o semblant naturalesa i finalitat que puguen implantar-se hauran de comptar amb l'informe previ favorable d'administració electrònica de la conselleria o de l'òrgan que tinga atribuïdes les competències horitzontals en matèria d'administració electrònica dins de l'organització on vagen a implantar-se.

Article 35. L'administració comuna electrònica

1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana impulsaran els acords o convenis de col·laboració tendents a aconseguir la interconnexió de registres i d'oficines d'atenció presencial, la coordinació de l'atenció telefònica, així com la intercomunicació eficaç i integració de continguts i serveis de les seues seues electròniques, bé creant seues electròniques o punts d'accés general interadministratiu, xarxes d'espais comuns, finestretes úniques o bé amb altres sistemes de portals ciutadans, generals o sectorials, que permeten l'atenció i prestació integral i eficient de serveis a la ciutadania.

En especial, La Generalitat fomentarà l'establiment d'infraestructures i xarxes comunes interadministratives de telecomunicacions amb les entitats locals, fonamentalment per a la prestació conjunta de serveis electrònics o per a la gestió coordinada de procediments administratius en què hagen d'intervindre diverses administracions, dins dels principis, estàndards, normes i marcs d'interoperabilitat a què es refereix el següent apartat.

2. La Generalitat i la resta d'administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la societat civil i els sectors productius, elaboraran un marc valencià d'interoperabilitat, d'acord amb l'esquema nacional d'interoperabilitat, i coordinat amb

Reglamentàriament se determinarán los requerimientos técnicos de dichos espacios, las condiciones y términos de uso de la carpeta personal electrónica, así como de identificación y autenticación, acceso, permisos y control de su titular, los requisitos de la documentación que quepa almacenar y en especial las medidas técnicas y jurídicas de seguridad en el acceso por parte del titular de la carpeta o de la administración, o en el tratamiento, transmisión, modificación y control de la documentación almacenada, que deberán respetar el derecho a la protección de datos de carácter personal.

En todo caso, el usuario o usuaria deberá poder controlar autónomamente y con confidencialidad su carpeta personal electrónica, determinando los documentos electrónicos que contendrá y haciéndolos aptos y útiles para su aportación en su comunicación o relación electrónica con las administraciones.

La prestación del consentimiento del ciudadano para acceder a datos obrantes en ficheros de titularidad pública de otros órganos, administraciones o entidades, a que se refiere el artículo 42 de esta ley, con la finalidad de poderse prestar mejor el servicio público o agilizar-se la tramitación del procedimiento administrativo del que sea parte o persona interesada, implicará la posibilidad de acceder a los documentos electrónicos que señale de la carpeta personal electrónica, en los términos y condiciones que haya indicado expresamente. El consentimiento se podrá modificar o revocar electrònicament en cualquier momento.

2. En las oficinas de atención presencial de las administraciones públicas que se determinen y regulen reglamentariamente, a través de convenio o por acuerdo de los órganos gestores de aquellas dentro de la misma administración, se habilitarán espacios físicos para la instalación de terminales de gestión, comunicación, relación y tramitación electrónica de los ciudadanos y ciudadanas con las administraciones públicas, en régimen de autoservicio a través de acceso sencillo, seguro y exclusivo a las sedes electrónicas o a determinados servicios o procedimientos dentro de ellas, en especial aquellos que permitan la obtención inmediata de lo solicitado.

Los cajeros electrónicos de autoadministración a que se refiere el anterior párrafo, que incluirán el servicio de Registro Electrónico de Sede, estarán disponibles durante el horario de atención al público, sin perjuicio de que se acrediten razones suficientes que promuevan un servicio permanente de veinticuatro horas y su localización en el exterior de las oficinas, en cuyo caso se las dotará de las medidas de seguridad físicas generalmente aplicables en materia de cajeros automáticos.

3. La aprobación de los sistemas de autoadministración señalados en este artículo así como cualesquiera otros de idéntica o semejante naturaleza y finalidad que pudieren implantarse deberán contar con el informe previo favorable de administración electrónica de la conselleria u órgano que tenga atribuidas las competencias horitzontals en materia de administración electrónica dentro de la organización en la que se vayan a implantar los mecanismos de autoadministración.

Artículo 35. La administración común electrónica

1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana impulsaran los acuerdos o convenios de colaboración tendentes a alcanzar la interconexión de registros y de oficinas de atención presencial, la coordinación de la atención telefónica, así como la intercomunicación eficaç e integració de contenidos y servicios de sus sedes electrónicas, en su caso creando sedes electrónicas o puntos de acceso general interadministrativo, redes de espacios comunes, ventanillas únicas u otros sistemas de portales ciudadanos, generales o sectoriales, que permitan la atención y prestación integral y eficiente de servicios a la ciudadanía.

En especial, La Generalitat fomentarà el establecimiento de infraestructuras y redes comunes interadministrativas de telecomunicaciones con las entidades locales, fundamentalmente para la prestación conjunta de servicios electrónicos o para la gestión coordinada de procedimientos administrativos en que hayan de intervenir varias administraciones, dentro de los principios, estándares, normas y marcos de interoperabilidad a que se refiere el siguiente apartado.

2. La Generalitat i el resto d'administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en col·laboració con su sociedad civil y sus sectores productivos, elaborará un Marco Valenciano de Interoperabilidad, de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y

altres mares regionals, europeus o internacionals, sobre la base dels principis de neutralitat tecnològica, eficiència, excel·lència en l'atenció a la ciutadania i prestació de serveis públics, no discriminació, accessibilitat i sostenibilitat tant tecnològica com mediambiental.

L'administració de La Generalitat i les entitats que integren l'administració local formalitzaran convenis de col·laboració que impulsen i faciliten la implantació i l'ús de l'administració electrònica i la interoperabilitat, sense perjudici dels que puguen subscriure's amb l'administració general de l'Estat en estes matèries.

3. Especialment, La Generalitat impulsarà i fomentarà, en col·laboració amb l'administració europea, estatal i local, el desplegament d'una Xarxa Integrada de Telecomunicacions que permeta la interconnexió d'estes infraestructures i xarxes de titularitat de les diferents administracions que actuen a la Comunitat Valenciana o s'hi relacionen, tant a nivell regional i estatal com a europeu.

4. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana que siguen titulars dominicals dels drets de propietat intel·lectual sobre aplicacions desplegades internament per elles o a través de contracte, així com els òrgans que en formen part, les posaran a disposició d'altres administracions públiques.

En el sentit exposat en l'anterior paràgraf, cada administració pública serà responsable del manteniment d'un directori actualitzat de les aplicacions de lliure disposició i reutilització que dispose, especialment d'aquelles utilitzades, relacionades o vinculades al desplegament i la innovació de l'administració electrònica, cosa que haurà de comunicar a l'òrgan que es regula en l'apartat següent en la forma i terminis que s'establisquen reglamentàriament.

5. La Generalitat, a través de la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals de la seua organització en matèria d'administració electrònica, constituirà un centre de transferència tecnològica i de coneixement, encarregat:

a) Del registre centralitzat de les aplicacions de lliure disposició en l'àmbit de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. La cessió d'estes aplicacions es realitzarà sense contraprestació, sense perjudici de l'autorització, aprovació o informe previ de l'administració cedent.

b) D'impulsar la transferència de tecnologia i coneixement sobre la base de la lliure reutilització d'aplicacions i el desplegament de les que permeten esta transferència per a poder compartir-les.

c) D'impulsar i fomentar la investigació, innovació i desplegament en tecnologies de la informació i la comunicació relacionades amb l'administració electrònica.

d) De prestar assistència tecnològica i l'assessorament necessari a les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a la millor implantació i desplegament de l'administració electrònica.

e) D'impulsar i informar sobre el desplegament de les aplicacions, formats i estàndards comuns d'especial interès per a l'aprovació i aplicació efectives del Marc Valencià d'Interoperabilitat, en especial d'estàndards oberts que permeten l'intercanvi d'informació amb independència del programari utilitzat.

f) En el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, s'aprovarà el reglament que regule l'estructura, l'organització, les competències, el funcionament i el règim econòmicofinancer del Centre de Transferència Tecnològica i de Coneixement a què es refereix aquest apartat.

6. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana fomentaran els acords de seguretat tecnològica entre si i amb altres administracions de l'Estat i internacionals i empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. En especial, fomentaran la constitució i participació en grups o centres de resposta davant d'incidentes de seguretat informàtica.

Article 36. Administració de qualitat

1. Les administracions públiques introduiran mecanismes per a la gestió de la qualitat de l'administració electrònica en el seu àmbit de competències, i procuraran que la prestació i tramitació telemàtica de serveis i procediments administratius així com les comunicacions electròniques amb la ciutadania se sostinguen sobre criteris d'excel·lència en l'atenció ciutadana i en la gestió pública dels uns i els altres.

coordinado con otros marcos regionales, europeos o internacionales, sobre la base de los principios de neutralidad tecnológica, eficiencia, excelencia en la atención a la ciudadanía y prestación de servicios públicos, no discriminación, accesibilidad y sostenibilidad tanto tecnológica como medioambiental.

La administración de La Generalitat y las entidades que integran la administración local formalizarán convenios de colaboración que impulsen y faciliten la implantación y el uso de la administración electrónica y la interoperabilidad, sin perjuicio de los que puedan suscribirse con la administración general del Estado en estas materias.

3. Especialmente, La Generalitat impulsará y fomentará, en colaboración con la administración europea, estatal y local, el desarrollo de una Red Integrada de Telecomunicaciones que permita la interconexión de estas infraestructuras y redes de titularidad de las diferentes administraciones que actúan en la Comunitat Valenciana o se relacionan con ellas, tanto a nivel regional y estatal como europeo.

4. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana que sean titulares dominicales de los derechos de propiedad intelectual sobre aplicaciones desarrolladas internamente por ellas o a través de contrato, así como los órganos que formen parte de ellas, las tendrán a disposición de otras administraciones públicas.

En el sentido expuesto en el anterior párrafo, cada administración pública será responsable del mantenimiento de un directorio actualizado de las aplicaciones de libre disposición y reutilización de que disponga, especialmente de aquellas utilizadas, relacionadas o vinculadas al desarrollo e innovación de la administración electrónica, debiéndolo comunicar al órgano que se regula en el apartado siguiente en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente.

5. La Generalitat, a través de la conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales de su organización en materia de administración electrónica, constituirá un centro de transferencia tecnológica y de conocimiento, encargado de:

a) El registro centralizado de las aplicaciones de libre disposición en el ámbito de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana. La cesión de dichas aplicaciones se realizará sin contraprestación, sin perjuicio de la autorización, aprobación o informe previo de la administración cedente.

b) Impulsar la transferencia de tecnología y conocimiento sobre la base de la libre reutilización de aplicaciones y el desarrollo de las que permitan dicha transferencia y poder compartirlas.

c) Impulsar y fomentar la investigación, innovación y desarrollo en tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con la administración electrónica.

d) Prestar asistencia tecnológica y el asesoramiento necesario a las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana para la mejor implantación y desarrollo de la administración electrónica.

e) Impulsar e informar sobre el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes de especial interés para la aprobación y aplicación efectivas del Marco Valenciano de Interoperabilidad, en especial de estándares abiertos que permitan el intercambio de información con independencia del software utilizado.

f) En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, se aprobará el reglamento que regule la estructura, organización, competencias, funcionamiento y régimen económico-financiero del Centro de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento al que se refiere este apartado.

6. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana fomentarán los acuerdos de seguridad tecnológica entre si y con otras administraciones del Estado e internacionales y empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. En especial, fomentarán la constitución y participación en grupos o centros de respuesta ante incidentes de seguridad informática.

Artículo 36. Administración de calidad

1. Las administraciones públicas introducirán mecanismos para la gestión de la calidad de la administración electrónica en su ámbito de competencias, procurando que la prestación y tramitación telemática de servicios y procedimientos administrativos así como las comunicaciones electrónicas con la ciudadanía se sostengan sobre criterios de excelencia en la atención ciudadana y en la gestión pública de unos y otros.

2. Totes les seues electròniques disposaran d'una Carta de Servicis de Seu Electrònica (CSE) en els termes i les condicions que es preveja reglamentàriament.

3. L'administració de la Generalitat inclourà en els plans i els cursos de formació que aquesta aprobe, programes per a la millora de la capacitat dels empleats públics, que els habiliten en el coneixement de les eines i les aplicacions necessàries per a la implantació de l'administració electrònica. Aquests cursos es dirigiran al personal al servei de la mateixa administració, i s'atendrà també les necessitats de formació del personal al servei de les entitats locals, potenciant per a això els canals de formació electrònics.

Article 37. Seguretat tecnològica

1. La utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per part de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana haurà d'incorporar les mesures de seguretat, qualitat i de control necessàries que garantisquen l'autenticitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i conservació de la informació i, en este cas, s'ha de tenir en compte l'estat d'evolució de la tecnologia i ser proporcionades a la naturalesa de les dades i dels tractaments i als riscos a què estiguen exposats.

2. La utilització de les indicades tècniques i, en general, dels suports, mitjans, canals i aplicacions d'esta naturalesa, en els procediments administratius, en la prestació de servicis, en els processos de treball o en la gestió de l'atenció o informació a subministrar a la ciutadania, haurà d'estar autoritzada pels òrgans competents de cada administració pública, amb el preceptiu informe previ de l'administració electrònica elaborat per la conselleria, entitat o òrgan que tinga atribuïdes les competències horitzontals en matèria d'administració electrònica dins de l'organització.

3. En els termes que s'establisquen per cada administració pública, l'aprovació o homologació haurà de sotmetre's a publicitat, en especial quan es tracte de programes o aplicacions que efectuen tractaments d'informació el resultat dels quals siga utilitzat per a l'exercici de potestats administratives.

4. Les administracions públiques, en funció de la seua capacitat i possibilitats, aprovaran, o adoptaran mitjançant els acords i convenis oportuns, les polítiques de seguretat de la informació per a l'aplicació efectiva dels principis assenyalats en els apartats anteriors i, per això, podran promoure la constitució o incorporació als grups i centres de seguretat a què es refereix l'article 35.6 d'esta llei.

Article 38. Sostenibilitat mediambiental

Les administracions públiques, en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, adoptaran les decisions sobre adquisició, règim d'ús i destinació final d'aplicacions, mitjans, terminals o dispositius tecnològics utilitzats en l'administració electrònica, sempre aplicant els criteris i les directrius generalment admesos en matèria de sostenibilitat ambiental, per a promoure la transferència i la possibilitat de compartir aplicacions i terminals, un ús eficient i racional d'ambdós, l'estalvi energètic i la utilització d'energies alternatives o renovables.

Les administracions públiques, en especial, estaran obligades a aprovar disposicions que concreten els criteris i directrius a què es refereix el paràgraf anterior. Els informes d'administració electrònica que s'evacuen en aplicació d'esta llei hauran de tindre en compte els aspectes assenyalats en esta matèria.

Article 39. Sistema integral multicanal d'atenció ciutadana de La Generalitat

En l'àmbit de les entitats integrants del sector públic de La Generalitat que es determinen reglamentàriament, i als efectes del compliment del que estableix el present capítol, s'implantarà un sistema integral multicanal d'atenció ciutadana. La direcció, impuls, coordinació, implantació i control global del sistema correspondrà a la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de La Generalitat, sense perjudici de la col·laboració i coordinació de totes les conselleries, entitats o òrgans de La Generalitat en l'àmbit de les seues competències pròpies.

2. Todas las sedes electrónicas dispondrán de una Carta de Servicios de Sede Electrónica (CSE) en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente.

3. La administración de la Generalitat incluirá en los planes y cursos de formación que ésta apruebe, programas para la mejora de la capacitación de los empleados públicos, que les habiliten en el conocimiento de las herramientas y aplicaciones necesarias para la implantación de la administración electrónica. Estos cursos se dirigirán al personal al servicio de la propia administración, atendiendo también a las necesidades de formación del personal al servicio de las entidades locales, potenciando para ello los canales de formación electrónicos.

Artículo 37. Seguridad tecnológica

1. La utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por parte de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana deberá incorporar las medidas de seguridad, calidad y de control necesarias que garanticen la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y conservación de la información, debiendo en todo caso tener en cuenta el estado de evolución de la tecnología y ser proporcionadas a la naturaleza de los datos y de los tratamientos y a los riesgos a los que estén expuestos.

2. La utilización de las indicadas técnicas y, en general, de soportes, medios, canales y aplicaciones de tal naturaleza, en los procedimientos administrativos, en la prestación de servicios, en los procesos de trabajo o en la gestión de la atención o información a suministrar a la ciudadanía, deberá estar autorizada por los órganos competentes de cada administración pública, previo el preceptivo informe de administración electrónica elaborado por la conselleria, entidad u órgano que tenga atribuidas las competencias horizontales en materia de administración electrónica dentro de la organización.

3. En los términos que se establezcan por cada administración pública, la aprobación u homologación deberá someterse a publicidad, en especial cuando se trate de programas o aplicaciones que efectúen tratamientos de información cuyo resultado sea utilizado para el ejercicio de potestades administrativas.

4. Las administraciones públicas, en función de su capacidad y posibilidades, aprobarán, o adoptarán mediante los oportunos acuerdos y convenios, políticas de seguridad de la información para la aplicación efectiva de los principios señalados en los apartados anteriores, pudiendo promover la constitución o incorporación a los grupos y centros de seguridad a los que se refiere el artículo 35.6 de esta ley.

Artículo 38. Sostenibilidad medioambiental

Las administraciones públicas, en materia de tecnologías de la información y la comunicación, adoptarán las decisiones sobre adquisición, régimen de uso y destino final de aplicaciones, medios, terminales o dispositivos tecnológicos utilizados en la administración electrónica, aplicando en todo caso criterios y directrices generalmente admitidos en materia de sostenibilidad ambiental, promoviendo la transferencia y la posibilidad de compartir aplicaciones y terminales, un uso eficiente y racional de aquéllas y éstos, el ahorro energético y la utilización de energías alternativas o renovables.

Las administraciones públicas, en especial, vendrán obligadas a aprobar disposiciones que concreten los criterios y directrices a que se refiere el párrafo anterior. Los informes de administración electrónica que se evacúen en aplicación de esta ley deberán tener en cuenta los aspectos señalados en esta materia.

Artículo 39. Sistema integral multicanal de atención ciudadana de La Generalitat

En el ámbito de las entidades integrantes del sector público de La Generalitat que se determinen reglamentariamente, y a efectos del cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo, se implantará un sistema integral multicanal de atención ciudadana. La dirección, impulso, coordinación, implantación y control global de dicho sistema corresponderá a la conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales en materia de administración electrónica en el ámbito de La Generalitat, sin perjuicio de la colaboración y coordinación de todas las conselleries, entidades u órganos de La Generalitat en el ámbito de sus competencias propias.

**TÍTOL III
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
ELECTRÒNIC EN L'ÀMBIT
DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

**CAPÍTOL I
Disposicions generals**

Article 40. Principis generals de la gestió electrònica de procediments administratius

1. La gestió electrònica de l'activitat no alterarà el règim general de titularitat i exercici de les competències administratives determinat en les normes de creació o d'organització de cada administració pública, entitat o òrgan.

2. Les administracions públiques impulsaran l'ocupació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la seua actuació, promouran la simplificació i transparència dels processos de treball, l'eficiència, agilitat i flexibilitat en la gestió, tramitació i resolució de procediments administratius, així com l'excel·lència en la prestació dels servicis públics.

En especial, en l'aplicació d'estes tècniques, es considerarà l'adequada dotació de recursos i mitjans materials al personal que les utilitze, la necessària formació sobre la seua utilització i la seua actualització, així com la permanent adaptació d'aquelles a l'estat de la tecnologia vigent en cada moment.

3. La implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la tramitació de procediments s'efectuarà progressivament i estarà subjecta a l'aprovació prèvia de les administracions públiques en els termes assenyalats en l'article 37.2 d'esta llei, així com dels procediments corresponents, segons s'indica en l'article següent.

4. L'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació als procediments administratius tendirà en especial a automatitzar la gestió dels termes i terminis de la tramitació, ajudarà al compliment estricte per part dels instructors, garantirà als interessats o interessades el control transparent d'esta obligació i, també, afavorirà l'exercici immediat dels drets que els assistisquen, en especial per al supòsit d'incompliment.

De la mateixa manera, estes tècniques identificaran plenament als òrgans responsables dels procediments, impulsaran la tramitació ordenada i facilitaràn la seua simplificació i publicitat.

Article 41. Anàlisi i informe d'administració electrònica

1. L'aprovació o modificació de tota norma reguladora d'un procediment administratiu o d'un procés de treball dins de l'administració, requerirà la realització prèvia de l'anàlisi d'administració electrònica per part de l'òrgan proponent, el qual haurà d'incorporar necessàriament l'examen dels termes continguts en la present llei d'acord amb el detall que es determine reglamentàriament.

2. El document d'anàlisi elaborat serà elevat a l'òrgan amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica dins de l'administració actuant a fi que emeta un informe d'administració electrònica amb caràcter preceptiu, en els terminis que s'establisquen reglamentàriament per cada administració.

3. Amb independència de la publicació en els diaris, butlletins o taulers d'anuncis oficials de les normes que regulen els procediments administratius o els processos de treball segons el que estableix els apartats anteriors, la seua electrònica de l'administració titular incorporarà un resum prou explicatiu i didàctic del contingut essencial del procediment o procés aprovat.

Article 42. Accés a les dades

1. En qualsevol procediment administratiu podrà substituir-se el requeriment d'aportació de certificats i documents o de la constància de dades de l'interessat o interessada, per l'aportació a l'expedient de certificats administratius electrònics, tant a instància de la persona interessada com d'ofici per l'òrgan instructor, sempre que en este últim cas hi haja el consentiment exprés de la persona, o que la cessió d'aquelles dades de caràcter personal estiga autoritzada en esta o en altres lleis.

**TÍTULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ELECTRÓNICO EN EL ÁMBITO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

**CAPÍTULO I
Disposiciones generales**

Artículo 40. Principios generales de la gestión electrónica de procedimientos administrativos

1. La gestión electrónica de la actividad no alterará el régimen general de titularidad y ejercicio de las competencias administrativas determinado en las normas de creación o de organización de cada administración pública, entidad u órgano.

2. Las administraciones públicas impulsarán el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en su actuación, promoviendo la simplificación y transparencia de los procesos de trabajo, la eficiencia, agilidad y flexibilidad en la gestión, tramitación y resolución de procedimientos administrativos, así como la excelencia en la prestación de los servicios públicos.

En especial, en la aplicación de dichas técnicas, se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, la necesaria formación acerca de su utilización y su actualización, así como la permanente adaptación de aquellas al estado de la tecnología vigente en cada momento.

3. La implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la tramitación de procedimientos se efectuará progresivamente y estará sujeta a la previa aprobación de aquellas en los términos señalados en el artículo 37.2 de esta ley, así como de los correspondientes procedimientos, según se indica en el artículo siguiente.

4. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procedimientos administrativos tenderá en especial a automatizar la gestión de los términos y plazos de su tramitación, ayudando a su cumplimiento estricto por parte de los instructores, y garantizando a los interesados o interesadas el control transparente de dicha obligación, así como favoreciendo el ejercicio inmediato de los derechos que les asistan, en especial para el supuesto de incumplimiento.

De igual manera, dichas técnicas identificarán plenamente a los órganos responsables de los procedimientos, impulsarán la tramitación ordenada de los mismos y facilitaràn su simplificación y publicitat.

Artículo 41. Análisis e informe de administración electrónica

1. La aprobación o modificación de toda norma reguladora de un procedimiento administrativo o de un proceso de trabajo dentro de la administración, requerirá la realización previa del análisis de administración electrónica por parte del órgano proponente, que deberá incorporar necesariamente el examen de los extremos contenidos en la presente ley de acuerdo con el detalle que se determine reglamentariamente.

2. El documento de análisis elaborado será elevado al órgano con competencias horizontales en materia de administración electrónica dentro de la administración actuante a fin de que emita informe de administración electrónica con carácter preceptivo, en los plazos que se establezcan reglamentariamente por cada administración.

3. Con independencia de la publicación en los diarios, boletines o tablones de anuncios oficiales de las normas que regulen los procedimientos administrativos o los procesos de trabajo según lo establecido en los apartados anteriores, la sede electrónica de la administración titular incorporará un resumen suficientemente explicativo y didáctico del contenido esencial del procedimiento o proceso aprobado.

Artículo 42. Acceso a datos

1. En cualquier procedimiento administrativo podrá sustituirse el requerimiento de aportación de certificados y documentos o de la constancia de datos del interesado o interesada, por la aportación al expediente de certificados administrativos electrónicos, tanto a instancia de persona interesada como de oficio por el órgano instructor, siempre que en este último caso se cuente con el expreso consentimiento de aquella, o que la cesión de aquellos datos de carácter personal esté autorizada en esta o en otras leyes.

L'aportació dels certificats que es preveja amb caràcter general en les normes reguladores dels procediments i les actuacions administratives s'entendrà substituïda, a tots els efectes i amb plena validesa i eficàcia, pels dels certificats electrònics a què es refereix este apartat, els quals s'hauran d'incorporar a l'expedient administratiu.

2. Sense perjudi d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat anterior i amb els mateixos requisits que s'hi s'establixen, en qualsevol moment al llarg del procediment l'òrgan instructor podrà sol·licitar dels òrgans, administracions i entitats competents la transmissió telemàtica d'aquelles dades que siguen necessàries per a la correcta instrucció del procediment, per a permetre la determinació, coneixement i comprovació dels fets sobre els quals haja de pronunciar-se la resolució. Les transmissions de dades tindran la naturalesa jurídica de certificats quan siguen firmats electrònicament pel titular de l'òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament esta naturalesa.

3. En els termes i condicions d'interoperabilitat que s'establixen en els acords i convenis entre els òrgans, entitats o administracions afectades i, en tot cas, respectant els límits i garanties establits en els apartats anteriors respecte del consentiment de l'interessat o la interessada, els òrgans instructors podran accedir directament a les dades de caràcter personal que estiguen en poder de titularitat pública d'altres òrgans, administracions o entitats, i en l'expedient s'ha de deixar constància d'estos accessos electrònics.

4. Reglamentàriament s'establixen els supòsits i requisits per a excepcionar l'aportació de documentació identificativa, de residència dels ciutadans i ciutadanes, o d'una altra que calga per a la tramitació administrativa, respecte de procediments de competència de l'administració de La Generalitat o de les institucions assenyalades en l'article 2.1, lletra b, d'esta llei, d'acord amb la legislació vigent aplicable en la matèria.

A l'efecte anterior, l'obtenció de la informació assenyalada podrà dur-se a terme vàlidament i amb el mateix valor probatori mitjançant l'accés que l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica proporciona al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i de Residència, sense perjudi del consentiment de la persona interessada o de l'autorització legal a l'efecte.

5. El règim d'accés a les dades i documents de la carpeta personal electrònica es regirà pel que estableix l'article 34.1 d'esta llei i en el seu desplegament reglamentari.

6. El que disposa este article s'entén sense perjudi d'allò prescrit en l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

Article 43. Accessibilitat procedimental

Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana adoptaran les mesures que calguen a fi de facilitar la tramitació i gestió, electròniques o no, dels procediments administratius en què intervinguen persones amb qualsevol tipus de discapacitat, siguen o no interessades, d'acord amb el que estableix els articles 14, 16.3 i 33.5 d'esta llei.

La Generalitat impulsarà els convenis i acords necessaris amb la resta d'administracions i amb les organitzacions representatives d'estos col·lectius, a fi de complir eficaçment amb les prescripcions de la llei en esta matèria.

CAPÍTOL II Gestió electrònica del procediment administratiu

Article 44. Iniciació

1. En els procediments iniciats a sol·licitud de la part interessada, esta haurà de presentar-se, amb els requisits i condicions que s'hi s'establixen, en algun dels registres electrònics regulats en el capítol III del títol II d'esta llei.

2. Les sol·licituds d'iniciació hauran d'ajustar-se amb caràcter general als models, sistemes o documents electrònics normalitzats disponibles en la seu electrònica, segons s'establix en l'article 23.4 d'esta llei o, si ho permet la norma reguladora del procediment, podran presentar-se sense subjecció a aquells models o sistemes sempre que complisquen tots els requisits de contingut exigits en la legislació vigent.

La aportació de certificats que se preveja con caràcter general en las normas reguladoras de procedimientos y actuaciones administrativas se entenderá sustituida, a todos los efectos y con plena validez y eficacia, por la de los certificados electrónicos a que se refiere este apartado, que deberán incorporarse al expediente administrativo.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior y con los mismos requisitos que en él se establecen, en cualquier momento a lo largo del procedimiento el órgano instructor podrá solicitar a los órganos, administraciones y entidades competentes la transmisión telemática de aquellos datos que sean necesarios para la correcta instrucción del procedimiento, permitiendo la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos sobre los que deba pronunciarse la resolución. Las transmisiones de datos tendrán la naturaleza jurídica de certificados cuando sean firmados electrónicamente por el titular del órgano responsable de los datos transmitidos y conste expresamente tal naturaleza.

3. En los términos y condiciones de interoperabilidad que se establezcan en los acuerdos y convenios entre los órganos, entidades o administraciones afectadas y, en todo caso, respetando los límites y garantías establecidos en los apartados anteriores respecto del consentimiento del interesado o interesada, los órganos instructores podrán acceder directamente a los datos de carácter personal obrantes en ficheros de titularidad pública de otros órganos, administraciones o entidades, debiendo dejar constancia en el expediente de dichos accesos electrónicos.

4. Reglamentariamente se establecerán los supuestos y requisitos para excepcionar la aportación de documentación identificativa, de residencia de los ciudadanos y ciudadanas, o de otra que sea necesaria para la tramitación administrativa, respecto de procedimientos de competencia de la administración de La Generalitat o de las instituciones señaladas en el artículo 2.1, letra b, de esta ley, de acuerdo con la legislación vigente aplicable en la materia.

A los anteriores efectos, la obtención de la información señalada podrá llevarse a cabo válidamente y con el mismo valor probatorio mediante el acceso que la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica proporciona al Sistema de Verificación de Datos de Identidad y de Residencia, sin perjuicio del consentimiento de la persona interesada o de la autorización legal al efecto.

5. El régimen de acceso a los datos y documentos de la carpeta personal electrónica se regirá por lo establecido en el artículo 34.1 de esta ley y en su desarrollo reglamentario.

6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 43. Accesibilidad procedimental

Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana adoptarán las medidas necesarias a fin de facilitar la tramitación y gestión, electrónicas o no, de los procedimientos administrativos en los que intervengan personas con cualquier tipo de discapacidad, sean o no interesadas en el mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 16.3 y 33.5 de esta ley.

La Generalitat impulsará los convenios y acuerdos necesarios con el resto de administraciones y con las organizaciones representativas de dichos colectivos, a fin de cumplir eficaçment con las prescripcions de la ley en esta matèria.

CAPÍTULO II Gestión electrónica del procedimiento administrativo

Artículo 44. Iniciación

1. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte interesada, ésta deberá presentarse, con los requisitos y condiciones que allí se establecen, en alguno de los registros electrónicos regulados en el capítulo III del título II de esta ley.

2. Las solicitudes de iniciación deberán ajustarse con carácter general a modelos, sistemas o documentos electrónicos normalizados disponibles en la sede electrónica, según se establece en el artículo 23.4 de esta ley, o, si lo permite la norma reguladora del procedimiento, presentarse sin subjección a aquellos modelos o sistemas siempre que cumplan con todos los requisitos de contenido exigidos en la legislación vigente.

Totes les sol·licituds d'iniciació, les quals podran anar acompanyades de documents electrònics, hauran d'incorporar expressament l'adreça de correu electrònic o un altre mitjà electrònic suficient admes per l'administració actuant, a l'efecte de la pràctica de comunicacions i notificacions, així com la indicació de l'opció per a accedir a la carpeta personal electrònica, i el sistema de firma electrònica avançada que es disposa.

L'administració actuant garantirà la inalterabilitat de les sol·licituds d'iniciació i de la documentació que les acompanya, una vegada presentades i admeses en el registre electrònic. Qualsevol alteració que pugui realitzar-se després de l'admissió de la sol·licitud i que no siga merament tècnica a l'efecte de lectura, emmagatzemament, arxiu o transmissió, es tindrà per no presentada.

3. En els procediments administratius electrònics iniciats d'ofici no tindrán eficacia les comunicacions i notificacions electròniques o, en general, els actes, de tràmit o definitius, que dicte l'òrgan instructor si no consta el consentiment exprés a la tramitació electrònica per part de la persona interessada.

Article 45. Ordenació i instrucció

1. L'administració actuant posarà a disposició de les persones interessades en un procediment administratiu tramitat electrònicament un servei electrònic d'accés restringit a l'expedient on podran consultar la informació sobre l'estat de la tramitació del procediment, que haurà d'incloure la relació d'actes de tràmit duts a terme, amb indicació sobre el contingut d'aquests, com també la data en la qual van ser dictats, sense perjudici del que hi ha disposat en l'article 28.1, segon paràgraf, d'aquesta llei. En la resta de procediments es podrà habilitar serveis electrònics d'informació de l'estat de tramitació que comprenen, almenys, la fase en la qual es troba el procediment i l'òrgan o la unitat responsable.

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana impulsaran la presentació d'al·legacions, l'aportació de documents i altres elements de juí, així com la substanciació del tràmit d'audiència i d'informació pública, especialment en el procediment d'elaboració de les disposicions i actes administratius que promouen, a través de mitjans i canals electrònics, amb totes les garanties jurídiques necessàries, quan així siga acceptat de manera explícita per les persones interessades.

3. La petició i evacuació dels informes que demane l'òrgan instructor durant la tramitació del procediment es produirà a través de mitjans electrònics entre els òrgans administratius implicats, tret que causes tècniques ho impedisquen o dificulten en tal grau que puguin veure's superats els terminis legals o reglamentaris establits per al compliment del tràmit, i sense perjudici de l'evacuació posterior pels mitjans electrònics, una vegada resoltes eixes causes, perquè en quede constància en l'expedient electrònic.

4. La pràctica de la prova en la tramitació administrativa podrà incorporar la utilització de sistemes tecnològics i audiovisuals que permeten la realització eficient i evitar desplaçaments, sempre que acrediten de manera segura la seua realització i contingut.

Article 46. Terminació

1. Qualsevol dels actes que posen fi al procediment administratiu així com els recursos i reclamacions que còpia interposar contra ells, podran ser produïts i comunicats pels mitjans electrònics, d'acord amb el que estableix este article i els següents i en la normativa de desplaçament d'esta llei.

2. Els procediments gestionats electrònicament per les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantirán sempre la determinació del dia últim per a dictar i notificar la resolució expressa, actualitzant-lo immediatament quan es produisca la paralització, suspensió, ampliació o represa dels terminis de resolució.

3. La resolució expressa dictada en un procediment administratiu haurà d'indicar, a més del contingut que resulte obligatori, d'acord amb la normativa de règim general aplicable, també els mitjans electrònics per a la interposició dels recursos corresponents recursos que càpien contra la resolució.

Todas las solicitudes de iniciación, que podrán ir acompañadas de documentos electrónicos, deberán incorporar expresamente la dirección de correo electrónico u otro medio electrónico suficiente admitido por la administración actuante, a efectos de la práctica de comunicaciones y notificaciones, así como la indicación de la opción para acceder a la carpeta personal electrónica, y el sistema de firma electrónica avanzada de que se disponga.

La administración actuante garantizará la inalterabilidad de las solicitudes de iniciación y de la documentación que las acompaña, una vez presentadas y admitidas en el registro electrónico. Cualquier alteración que pueda realizarse con posterioridad a la admisión de la solicitud y que no sea meramente técnica a efectos de lectura, almacenamiento, archivo o transmisión, se tendrá por no puesta.

3. En procedimientos administrativos electrónicos iniciados de oficio no tendrán eficacia las comunicaciones y notificaciones electrónicas o, en general, los actos, de trámite o definitivos, que dicte el órgano instructor si no consta el consentimiento expreso a la tramitación electrónica por parte de la persona interesada.

Artículo 45. Ordenación e instrucción

1. La administración actuante pondrá a disposición de las personas interesadas en un procedimiento administrativo tramitado electrónicamente un servicio electrónico de acceso restringido al expediente donde aquellas podrán consultar la información sobre el estado de la tramitación del procedimiento, que deberá incluir la relación de actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.1, segundo párrafo, de esta ley. En el resto de procedimientos, podrán habilitarse servicios electrónicos de información del estado de tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

2. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana impulsarán la presentación de alegaciones, la aportación de documentos y otros elementos de juicio, así como la sustanciación del trámite de audiencia y de información pública, especialmente en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos que promuevan, a través de medios y canales electrónicos, con todas las garantías jurídicas necesarias, cuando así se acepte de modo explícito por las personas interesadas.

3. La petición y evacuación de los informes que recabe el órgano instructor durante la tramitación del procedimiento se producirá a través de medios electrónicos entre los órganos administrativos implicados, salvo que causas técnicas lo impidan o dificulten de tal grado que puedan verse superados los plazos legales o reglamentarios establecidos para la cumplimentación del trámite, y sin perjuicio de su evacuación posterior por aquellos medios, una vez solventadas dichas causas, para su constancia en el expediente electrónico.

4. La práctica de la prueba en la tramitación administrativa podrá incorporar la utilización de sistemas tecnológicos y audiovisuales que permitan su realización eficiente evitando desplazamientos, siempre que acrediten de manera segura su realización y contenido.

Artículo 46. Terminación

1. Cualquiera de los actos que ponen fin al procedimiento administrativo así como los recursos y reclamaciones que quepa interponer contra ellos, podrán ser producidos y comunicados por medios electrónicos, conforme a lo que se establece en éste y en los siguientes artículos y en la normativa de desarrollo de esta ley.

2. Los procedimientos gestionados electrónicamente por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana garantizarán en todo momento la determinación del día último para dictar y notificar la resolución expresa, actualizándolo inmediatamente cuando se produzca la paralización, suspensión, ampliación o reanudación de los plazos de resolución.

3. La resolución expresa dictada en un procedimiento administrativo deberá indicar, además del contenido que resulte obligatorio conforme a la normativa de régimen general aplicable, también los medios electrónicos para la interposición de los correspondientes recursos que quepan contra ella.

Article 47. Terminació convencional

La celebració d'acords, pactes, convenis o contractes amb persones físiques o jurídiques, així com de les reunions necessàries per a aconseguir-los podran dur-se a terme en entorns tancats de comunicació o a través d'altres fórmules de sessions virtuals, d'acord amb el que s'establisca per acord de les parts intervinents.

En tot cas, es garantirà el compliment dels principis assenyalats en l'article 53 d'esta llei per als òrgans col·legiats, el qual s'aplicarà amb caràcter supletori.

Article 48. Actuació administrativa automatitzada

1. Les administracions públiques podran utilitzar sistemes d'informació adequadament programades que permeten dictar actes administratius, ja siguen estos de tràmit, resolutoris o de mera comunicació, sense necessitat d'intervenció d'una persona física en cada cas singular.

2. En cas de resolucions administratives automatitzades, prèviament s'ha d'establir l'òrgan o els òrgans competents, segons els casos, per a la definició de les especificacions, la programació, el manteniment, la supervisió i el control de qualitat i, si fa el cas, l'auditoria del sistema d'informació i del seu codi font. Igualment, s'indicarà l'òrgan que ha de ser considerat responsable a l'efecte d'impugnació i es garantirà el compliment del que estableix l'article 46.3 d'esta llei.

3. Les resolucions i, en general, totes les actuacions administratives automatitzades respectaran el que preveu l'article 13 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Article 49. Desistiment i renúncia

El desistiment de la sol·licitud o la renúncia als drets dins d'un procediment administratiu tramitat telemàticament podran formular-se a través d'un document electrònic on conste esta declaració de voluntat i, d'ofici, s'efectuarà l'anotació del desistiment o de la renúncia que corresponga en l'expedient administratiu electrònic, sense perjudici de dictar i notificar la corresponent resolució administrativa electrònica al respecte, d'acord amb la normativa vigent.

 CAPÍTOL III
 Procediments especials
Article 50. Procediments d'inscripció o dipòsit en registres públics electrònics

1. Per a l'obtenció de certificats, notes simples informatives, còpies d'assentaments o simples consultes d'inscripcions, dipòsits i altres actes registrals relatius a documents o fets que hagen de constar en els registres públics a què es refereix l'article 9.4 d'esta llei, de competència de qualsevol administració pública de la Comunitat Valenciana, s'habilitarà un sistema electrònic d'accés directe a través de la seua seu electrònica o, si fa el cas, de la seu electrònica de l'administració o entitat en la qual estiguen adscrits, sense necessitat que la persona interessada haja de presentar una sol·licitud formal a través del registre electrònic.

2. Igualment, per a la presa de raó dels actes i documents que hagen de constar en estos registres s'establirà un procediment administratiu normalitzat per mitjans electrònics que permetja la realització directa de la inscripció o dipòsit i de tots els tràmits conexas, així com, si fa el cas, del pagament de les taxes corresponents.

3. La inscripció o dipòsit d'actes i documents en un registre públic electrònic dels assenyalats en el primer apartat d'este article generarà l'emissió automatitzada del certificat acreditatiu d'estos fets registrals a favor de les persones interessades, el qual els serà notificat o comunicat per les vies electròniques establides en esta llei i estarà disponible directament en la seu electrònica del registre públic certificant o de l'administració o entitat a què estiguen adscrits.

D'acord amb el que s'establisca en la regulació que es faça de la carpeta personal electrònica de l'article 34.1 d'esta llei, el certificat a què fa referència el paràgraf anterior també podrà dipositar-se en la carpeta.

Artículo 47. Terminación convencional

La celebración de acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, así como de las reuniones necesarias para alcanzarlos podrán llevarse a cabo en entornos cerrados de comunicación o a través de otras fórmulas de sesiones virtuales, conforme a lo que se establezca por acuerdo de las partes intervinientes.

En todo caso, se garantizará el cumplimiento de los principios señalados en el artículo 53 de esta ley para los órganos colegiados, que se aplicará con carácter supletorio.

Artículo 48. Actuación administrativa automatizada

1. Las administraciones públicas podrán utilizar sistemas de información adecuadamente programados que permitan dictar actos administrativos, ya sean éstos de trámite, resolutorios o de mera comunicación, sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular.

2. En caso de resoluciones administrativas automatizadas, deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación y se garantizará el cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.3 de esta ley.

3. Las resoluciones y, en general, todas las actuaciones administrativas automatizadas respetarán lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 49. Desistimiento y renuncia

El desistimiento de la solicitud o la renuncia a los derechos dentro de un procedimiento administrativo tramitado telemáticamente podrán formularse mediante documento electrónico en que conste tal declaración de voluntad, efectuándose de oficio la anotación del desistimiento o de la renuncia que corresponda en el expediente administrativo electrónico, sin perjuicio de dictar y notificar la correspondiente resolución administrativa electrónica al respecto, de acuerdo con la normativa vigente.

 CAPÍTULO III
 Procedimientos especiales
Artículo 50. Procedimientos de inscripción o depósito en registros públicos electrónicos

1. Para la obtención de certificados, simples notas informativas, copias de asientos o meras consultas de inscripciones, depósitos y otros actos registrales relativos a documentos o hechos que deban constar en los registros públicos a que se refiere el artículo 9.4 de esta ley, de competencia de cualquier administración pública de la Comunitat Valenciana, se habilitará un sistema electrónico de acceso directo a los mismos a través de su sede electrónica o, en su caso, de la sede electrónica de la administración o entidad a la que se hallen adscritos, sin necesidad para la persona interesada de tener que presentar una solicitud formal a través del registro electrónico.

2. Asimismo, para la toma de razón de los actos y documentos que deban constar en dichos registros se establecerá un procedimiento administrativo normalizado por medios electrónicos que permita la realización directa de la inscripción o depósito y de todos los trámites conexas, así como, en su caso, del pago de las tasas correspondientes.

3. La inscripción o depósito de actos y documentos en un registro público electrónico de los señalados en el primer apartado de este artículo generará la emisión automatizada de certificado acreditativo de tales hechos registrales a favor de las personas interesadas, que se notificará o comunicará a éstas por las vías electrónicas establecidas en esta ley, estando disponible directamente en la sede electrónica del registro público certificante o de la administración o entidad a la que se hallen adscritos.

De acuerdo con lo que se establezca en la regulación que se haga de la carpeta personal electrónica del artículo 34.1 de esta ley, el certificado a que se refiere el anterior párrafo también podrá depositarse en ella.

Article 51. Procediments d'inscripció i matriculació en els centres de les xarxes públiques docent i assistencial

En el cas d'inscripcions i matriculacions en els centres de les xarxes públiques docent i assistencial, hom fomentarà la gestió electrònica a través de les pròpies seues electròniques o de les seues electròniques de les administracions o entitats a les quals estiguen adscrits, d'acord amb el que estableix la disposició addicional octava, a fi d'aconseguir un sistema d'accessos directes sense necessitat de sol·licitud al registre electrònic.

Article 52. Procediment de queixes i suggeriments

Els procediments electrònics de tramitació de queixes i suggeriments tindran un accés directe en cada seu electrònica, amb independència del registre electrònic, però, en tot cas, ha de quedar garantida l'acreditació electrònica de qui les presente en els casos i termes que s'establisquen reglamentàriament.

Les especialitats d'este procediment seran regulades per via de reglament d'acord amb el que assenyala fonamentalment el Decret 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i suggeriments en l'àmbit de l'administració i les organitzacions de La Generalitat.

Article 53. Funcionament dels òrgans col·legiats

1. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana utilitzaran preferentment els mitjans electrònics per al seu funcionament i es regiran, a l'efecte de l'acreditació electrònica de la seua voluntat, pel que estableix l'article 19.1, lletra c, d'esta llei i, en general, conforme amb allò disposat per a l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació.

2. Reglamentàriament es regularà el règim de funcionament pels mitjans electrònics dels òrgans col·legiats el qual, en tot cas, haurà de garantir els principis següents:

a) Inalterabilitat de les garanties i drets establits en el règim general per al funcionament dels òrgans col·legiats per mitjans presencials.

b) Participació en el funcionament de l'òrgan col·legiat en condicions d'igualtat de tots els seus membres, tant en allò referent a l'accés a la documentació generada, com a la constitució i celebració de les sessions, participació i adopció d'acords.

c) Preferència en la utilització dels mitjans electrònics, inclosos els audiovisuals, fonamentalment en les comunicacions que es realitzen entre els membres, sense perjudici del dret d'estos a rebre-les per altres mitjans si expressament ho sol·liciten, així com en l'arxiu de la documentació.

d) Presumpció de validesa de la documentació generada pels mitjans electrònics al si de l'òrgan col·legiat.

e) Determinabilitat del domicili de l'òrgan col·legiat i del lloc de celebració de les sessions.

f) Seguretat i protecció de les dades que es comuniquen i transmeten.

**TÍTOL IV
ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA EN L'ÀMBIT DE LA
GENERALITAT I DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

Article 54. Organització general

1. Els òrgans i entitats que integren i impulsen l'administració electrònica i els drets de la ciutadania en les seues relacions electròniques amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana són els següents:

a) La conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals dins de l'administració de La Generalitat en matèria d'administració electrònica, i els òrgans homòlegs que les tinguen assignades dins de la resta d'administracions públiques.

b) L'Observatori d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

c) El Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Artículo 51. Procedimientos de inscripción y matriculación en centros de las redes públicas docente y asistencial

En el caso de inscripciones y matriculaciones en centros de las redes públicas docente y asistencial, se fomentará su gestión electrónica a través de las propias sedes electrónicas o de las sedes electrónicas de las administraciones o entidades a las que se hallen adscritos, conforme a lo establecido en la disposición adicional octava, a fin de alcanzar un sistema de accesos directos sin necesidad de solicitud al registro electrónico.

Artículo 52. Procedimiento de quejas y sugerencias

Los procedimientos electrónicos de tramitación de quejas y sugerencias tendrán un acceso directo en cada sede electrónica, con independencia del registro electrónico, debiendo en todo caso quedar garantizada la acreditación electrónica de quien las presente en los casos y términos que se establezcan reglamentariamente.

Las especialidades de este procedimiento se regularán reglamentariamente conforme a lo señalado fundamentalmente en el Decreto 165/2006, de 3 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las quejas y sugerencias en el ámbito de la administración y las organizaciones de La Generalitat.

Artículo 53. Funcionamiento de órganos colegiados

1. Los órganos colegiados de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana utilizarán preferentemente medios electrónicos para su funcionamiento y se regirán, a efectos de la acreditación electrónica de su voluntad, por lo establecido en el artículo 19.1, letra c, de esta ley, y, en general, conforme con lo dispuesto para el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.

2. Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento por medios electrónicos de los órganos colegiados, que, en todo caso, deberá garantizar los siguientes principios:

a) Inalterabilidad de las garantías y derechos establecidos en el régimen general para el funcionamiento de los órganos colegiados por medios presenciales.

b) Participación en el funcionamiento del órgano colegiado en condiciones de igualdad de todos los miembros del mismo, tanto en lo que se refiere al acceso a la documentación que se genere, como en la constitución y celebración de las sesiones, participación en las mismas y adopción de acuerdos.

c) Preferencia en la utilización de los medios electrónicos, incluidos los audiovisuales, fundamentalmente en las comunicaciones que se realicen entre los miembros, sin perjuicio del derecho de éstos a recibirlos por otros medios si expresamente lo solicitan, así como en el archivo de la documentación.

d) Presunción de validez de la documentación generada por medios electrónicos en el seno del órgano colegiado.

e) Determinabilidad del domicilio del órgano colegiado así como del lugar de celebración de sesiones.

f) Seguridad y protección de datos que se comuniquen y transmitan.

**TÍTULO IV
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EN EL ÁMBITO DE LA
GENERALITAT Y DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

Artículo 54. Organización general

1. Los órganos y entidades que integran e impulsan la administración electrónica y los derechos de la ciudadanía en sus relaciones electrónicas con las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana son los siguientes:

a) La conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales dentro de la administración de La Generalitat en materia de administración electrónica, y los órganos homólogos que las tengan asignadas dentro del resto de administraciones públicas.

b) El Observatorio de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

c) El Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

d) L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, en els termes i amb l'abast establits en la present llei i en l'article 120 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de La Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de La Generalitat.

Article 55. Òrgans amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica

1. Correspon a la conselleria que tinga atribuïdes les competències horitzontals en matèria d'administració electrònica dins de l'administració de La Generalitat, així com als òrgans homòlegs de les administracions locals, d'acord amb hi regulen reglamentàriament, la direcció estratègica, l'impuls, coordinació i control de la implantació i desplegament de l'administració electrònica al si de les organitzacions públiques.

2. En els àmbits territorials citats, i en execució de l'esmentada competència, la conselleria de La Generalitat i els òrgans competents de les administracions locals emetran informes d'administració electrònica amb caràcter preceptiu i, si s'escau, vinculant, en els termes assenyalats en esta llei i en els previstos reglamentàriament, sense perjudici de les funcions d'assistència i assessorament interns en la matèria, que es podran prestar directament a la resta de conselleries, entitats i òrgans o coordinadament entre tots ells.

3. Amb el caràcter periòdic que es determine reglamentàriament, els òrgans indicats en els apartats anteriors d'este article, emetran informes sobre l'estat, evolució i perspectives futures del desplegament de l'administració electrònica al si de les seues organitzacions, els quals seran remesos al Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

4. Les competències i funcions que s'assenyalen en este article s'entenen sense perjudici de les que puguen tenir en virtut d'altres títols legals o reglamentaris o de les que s'atorguen amb posterioritat.

Article 56. Observatori de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana

1. Dins del Consell a què es refereix l'article següent, es crearà l'Observatori de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, encarregat de realitzar l'anàlisi i establir els indicadors necessaris d'avaluació i control de la situació, evolució i perspectiva de l'administració electrònica a la Comunitat Valenciana, així com el seu seguiment en la resta d'administracions de l'Estat i a nivell europeu i mundial.

2. L'Observatori de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana s'integrarà dins de la Xarxa d'Observatoris de l'Administració Electrònica a nivell estatal i europeu, i elaborarà un informe anual sobre el grau d'implantació de l'administració electrònica a la Comunitat Valenciana, del qual donarà compte a Les Corts.

Article 57. Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana

Mitjançant un decret del Consell es crearà i regularà el Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, per a la coordinació, assessorament, consulta, impuls i promoció de l'administració electrònica, així com per al control, avaluació i seguiment de l'aplicació efectiva per les administracions públiques de la Comunitat Valenciana de les mesures que es contemplen en la present llei i en la resta de la normativa aplicable en la matèria.

Hauran de formar part necessàriament del Consell d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, en la proporció i termes que es dispose reglamentàriament, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana així com la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. S'hi garantirà, igualment, la representació directa dels municipis de la Comunitat Valenciana en funció de les franges de població i que, en tot cas, haurà de respectar la presència dels més menuts i dels de les comarques de l'interior inclosos especialment en els plans estratègics de foment.

d) La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, en los términos y con el alcance establecidos en la presente ley así como en el artículo 120 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de La Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de La Generalitat.

Artículo 55. Órganos con competencias horizontales en materia de administración electrónica

1. Corresponde a la conselleria que tenga atribuidas las competencias horizontales en materia de administración electrónica dentro de la administración de La Generalitat, así como a los órganos homólogos de las administraciones locales conforme a lo que se regule reglamentariamente por éstas, la dirección estratégica, impulso, coordinación y control de la implantación y desarrollo de la administración electrónica en el seno de las organizaciones públicas.

2. En los ámbitos territoriales citados, y en ejecución de dicha competencia, la conselleria de La Generalitat y los órganos competentes de las administraciones locales emitirán informes de administración electrónica con carácter preceptivo y, en su caso, vinculante, en los términos señalados en esta ley y en los que se prevean reglamentariamente, sin perjuicio de las funciones de asistencia y asesoramiento internos en la materia, que se podrán prestar directamente al resto de consellerias, entidades y órganos o coordinadamente entre todos ellos.

3. Con el carácter periódico que se determine reglamentariamente, los órganos indicados en los apartados anteriores de este artículo, emitirán informes sobre el estado, evolución y perspectivas futuras del desarrollo de la administración electrónica en el seno de sus organizaciones, que serán remitidos al Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.

4. Las competencias y funciones que se señalan en este artículo se entienden sin perjuicio de las que puedan ostentar en virtud de otros títulos legales o reglamentarios o de las que se otorguen con posterioridad.

Artículo 56. Observatorio de la administración Electrónica de la Comunitat Valenciana

1. Dentro del Consejo al que se refiere el siguiente artículo, se creará el Observatorio de la administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, encargado de realizar el análisis y establecer los indicadores necesarios de evaluación y control de la situación, evolución y perspectiva de la administración electrónica en la Comunitat Valenciana, así como el seguimiento de ésta en el resto de administraciones del Estado y a nivel europeo y mundial.

2. El Observatorio de la administración Electrónica de la Comunitat Valenciana se integrará dentro de la Red de Observatorios de la administración Electrónica a nivel estatal y europeo, elaborará un informe anual sobre el grado de implantación de la administración electrónica en la Comunitat Valenciana del que dará cuenta a Les Corts.

Artículo 57. Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana

Mediante decreto del Consell se creará y regulará el Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, para la coordinación, asesoramiento, consulta, impulso y promoción de la administración electrónica, así como para el control, evaluación y seguimiento de la aplicación efectiva por las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana de las medidas que se contemplan en la presente ley y en el resto de la normativa aplicable en la materia.

Deberán formar parte necesariamente del Consejo de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, en la proporción y términos que se disponga reglamentariamente, las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana así como la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Se garantizará, igualmente, la representación directa en su seno de los municipios de la Comunitat Valenciana en función de franjas de población de los mismos y que, en todo caso, deberá respetar la presencia de los más pequeños y de los de sus comarcas del interior incluidos especialmente en planes estratégicos de fomento.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Habilitació competencial

La present llei es dicta a l'empara de les competències que La Generalitat té atribuïdes pels articles 49.1.3.ª, 49.1.8.ª, 49.3.16.ª i 50.1, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com en virtut del que disposa la disposició final octava de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, i en la legislació bàsica en matèria de règim local.

Segona. Procediments tributaris

La present llei s'aplicarà als procediments tributaris competència de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en allò que no s'opose al que disposen les seues normes especials.

Tercera. Procediments de contractació

En matèria de contractació, sense perjudici del que està previst respecte del perfil del contractant en l'article 15.1, lletra i, i en la disposició final quarta de la present llei, esta serà aplicable en allò que no s'opose al que està prescrit en les disposicions addicionals donou i trenta-una de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Quarta. Procediments sancionadors

La tramitació electrònica dels procediments sancionadors s'adaptarà al que estableix la present llei, en especial per a ampliar les garanties de defensa efectiva de la persona presumptament responsable, així com per a la implantació avançada dels mitjans i canals electrònics en el tràmit de pràctica de la prova.

Quinta. Formació en administració electrònica als empleats i empleades públics de La Generalitat

Les entitats, òrgans i unitats que tinguen atribuïdes les competències en matèria de formació dels empleats i empleades públics al si de La Generalitat incorporaran amb caràcter obligatori en els seus plans anuals de formació, amb l'assessorament i assistència de la conselleria amb competències horitzontals en matèria d'administració electrònica, i d'acord amb l'article 37.1.f de Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb la normativa autonòmica que la desplega, cursos específics sobre administració electrònica, als quals podran assistir, en la mesura que es determine reglamentàriament, personal d'altres administracions de la Comunitat Valenciana, en especial d'aquelles que no puguen atendre pels seus propis mitjans l'obligació consignada en l'article 36.3 d'esta llei.

Sexta. Protecció de drets d'autor i de propietat intel·lectual en les seues electròniques. Propietat industrial

1. La Generalitat impulsarà i fomentarà la implantació de mesures de seguretat tecnològiques especials a fi de fer efectiva la defensa dels drets d'autor i de propietat intel·lectual al si de les seues electròniques de les administracions públiques de l'àmbit d'aplicació de la present llei, així com en l'ús dels mitjans i canals informàtics, electrònics i telemàtics per part dels seus empleats i empleades públics i de totes les persones físiques i jurídiques que hi accedisquen, en virtut de qual-sevol títol jurídic habilitant.

2. Les administracions públiques hauran d'inscriure les marques i noms de domini de les seues electròniques de la seua titularitat, associats o no a aquelles, en el Registre de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i en els altres registres o oficines, estatals o internacionals, quan siga preceptiva la inscripció a l'efecte d'adquisició i salvaguarda dels drets de propietat industrial.

En especial, es vetlarà per la deguda inscripció registral d'aquelles marques i noms de domini que es referisquen a denominacions d'institucions, entitats, òrgans representatius o tradicionals, topònims, o als seus acrònims, o que facen referència a plans, programes o projectes de caràcter estratègic o emblemàtic, i altres de significació analoga, l'absència de la qual pugua perjudicar la imatge i reputació de La Gene-

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Habilitación competencial

La presente ley se dicta al amparo de las competencias que le atribuyen a La Generalitat los artículos 49.1.3.ª, 49.1.8.ª, 49.3.16.ª y 50.1, del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como en virtud de lo dispuesto en la disposición final octava de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en la legislación básica en materia de régimen local.

Segunda. Procedimientos tributarios

La presente ley se aplicará a los procedimientos tributarios de competencia de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana en lo que no se oponga a lo dispuesto en sus normas especiales.

Tercera. Procedimientos de contratación

En materia de contratación, sin perjuicio de lo previsto respecto del perfil de contratante en el artículo 15.1, letra i, y en la disposición final cuarta de la presente ley, ésta será de aplicación en lo que no se oponga a lo prescrito en las disposiciones adicionales decimonovena y trigésimo primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Cuarta. Procedimientos sancionadores

La tramitación electrónica de los procedimientos sancionadores se adaptará a lo establecido en la presente ley, en especial para ampliar las garantías de defensa efectiva de la persona presumptamente responsable, así como para la implantación avanzada de los medios y canales electrónicos en el trámite de práctica de la prueba.

Quinta. Formación en administración electrónica a empleadas y empleados públicos de La Generalitat

Las entidades, órganos y unidades que tengan atribuidas las competencias en materia de formación de las empleadas y empleados públicos en el seno de La Generalitat incorporarán con carácter obligatorio en sus planes anuales de formación, con el asesoramiento y asistencia de la conselleria con competencias horizontales en materia de administración electrónica, y de acuerdo con el artículo 37.1.f de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y con la normativa autonómica que la desarrolle, cursos específicos sobre administración electrónica, a los que podrán asistir, en la medida en que se determine reglamentariamente, personal de otras administraciones de la Comunitat Valenciana, en especial de aquellas que no puedan atender por sus propios medios la obligación consignada en el artículo 36.3 de esta ley.

Sexta. Protección de derechos de autor y de propiedad intelectual en sedes electrónicas. Propiedad industrial

1. La Generalitat impulsará y fomentará la implantación de medidas de seguridad tecnológicas especiales a fin de hacer efectiva la defensa de los derechos de autor y de propiedad intelectual en el seno de las sedes electrónicas de las administraciones públicas del ámbito de aplicación de la presente ley, así como en el uso de los medios y canales informáticos, electrónicos y telemáticos por parte de sus empleados y empleadas públicas y de todas las personas físicas y jurídicas que accedan a los mismos en virtud de cualquier título jurídico habilitante.

2. Las administraciones públicas deberán inscribir las marcas y nombres de dominio de las sedes electrónicas de su titularidad, asociados o no a aquellas, en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas y en los demás registros u oficinas, estatales o internacionales, en que sea preceptiva la inscripción a efectos de adquisición y salvaguarda de los derechos de propiedad industrial.

En especial, se velará por la debida inscripción registral de aquellas marcas y nombres de dominio que se refieran a denominaciones de instituciones, entidades, órganos representativos o tradicionales, topónimos, o a sus acrónimos, o que hagan referencia a planes, programas o proyectos de carácter estratégico o emblemático, y otros de análoga significación, cuya ausencia pudiera perjudicar la imagen y reputación

ralitat, de la Comunitat Valenciana o de les seues institucions i administracions públiques.

Per via de reglament es determinarà el període de temps obligatori durant el qual les administracions públiques han de mantindre les inscripcions a què es referixen els paràgrafs anteriors després d'haver cessat efectivament l'objecte pel qual van ser creades i es va inscriure la marca, o després d'haver desaparegut la seua electrònica corresponent al nom de domini inscrit.

Sèptima. Aplicació de la llei a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

La present llei serà d'aplicació a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana respecte als principis i drets, regulats en els articles 3, 4 i 6 de la llei.

Octava. Centres de la xarxa sanitària, docent i assistencial de La Generalitat

El que disposa l'article 9.4 de la present llei s'aplicarà igualment als centres públics integrats en les xarxes sanitària, docent o assistencial dependents de La Generalitat, i als centres privats que mitjançant concert o conveni s'integren o col·laboren amb aquelles, en els termes que s'especifiquen reglamentàriament.

Novena. Foment de la mediació i arbitratge electrònics

1. La Generalitat i la resta d'administracions públiques de la Comunitat Valenciana fomentaran l'ús de la mediació i l'arbitratge electrònics entre la ciutadania i les empreses, especialment en matèria de defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

2. De la mateixa manera, La Generalitat, a través de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'arbitratge de consum, impulsarà i fomentarà l'adhesió electrònica d'empresaris i professionals al Sistema Arbitral de Consum així com el procediment arbitral de consum per mitjans telemàtics, inclòs el laude arbitral electrònic, com a procediment habitual per a la substanciació d'este arbitratge.

Deu. Planificació estratègica en administració electrònica

El Consell inclourà amb caràcter obligatori dins de la seua planificació estratègica plurianual en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació i de societat del coneixement, plans i programes sectorials dedicats a l'impuls i desplegament de l'administració electrònica a la Comunitat Valenciana.

Onze. Adquisició per La Generalitat de béns i servicis relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació

Reglamentàriament podran preveure's els supòsits de procediments de contractació per a l'adquisició de béns i servicis relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, en els quals haja d'emetre's un informe preceptiu en relació amb el compliment en els plecs de clàusules administratives i tècniques corresponents, dels estàndards o estratègies tecnològiques definides pel Consell.

Corresponderà, en tot cas, a la conselleria que tinga les competències horitzontals de La Generalitat en matèria d'administració electrònica l'emissió de l'esmentat informe.

Dotze. Dret d'informació, orientació i consulta per mitjans electrònics

La regulació de les comunicacions electròniques de la ciutadania amb les seues administracions públiques per a fer efectiu el dret d'informació, orientació i consulta per mitjans electrònics, a què es referix l'article 6, lletra a, d'esta llei, podrà dur-se a terme reglamentàriament pels titulars de cada seua electrònica o, si fa el cas, a través de la carta de servicis de seua electrònica que es preveu en l'article 36.2 d'esta llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Seus electròniques locals

Durant el període d'adaptació establert en la disposició final segona els llocs o pàgines web i els portals de les entitats locals tindran la

de La Generalitat, de la Comunitat Valenciana o de sus institucions y administraciones públicas.

Reglamentariamente se determinará el período de tiempo obligatorio durante el cual las administraciones públicas hayan de mantener las inscripciones a que se refieren los anteriores párrafos tras haber cesado efectivamente el objeto por el que se creó e inscribió la marca, o después de haber desaparecido la sede electrónica correspondiente al nombre de dominio inscrito.

Séptima. Aplicación de la ley a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana

La presente ley será de aplicación a las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en cuanto a principios y derechos, regulados en los artículos 3, 4 y 6 de la misma.

Octava. Centros de la red sanitaria, docente y asistencial de La Generalitat

Lo dispuesto en el artículo 9.4 de la presente ley se aplicará igualmente a los centros públicos integrados en las redes sanitaria, docente o asistencial dependientes de La Generalitat, y a los centros privados que mediante concierto o convenio se integren o colaboren con aquéllas, en los términos que se especifiquen reglamentariamente.

Novena. Fomento de la mediación y arbitraje electrónicos

1. La Generalitat y el resto de administraciones públicas de la Comunitat Valenciana fomentarán el uso de la mediación y el arbitraje electrónicos entre la ciudadanía y las empresas, especialmente en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

2. De igual manera, La Generalitat, a través de la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de arbitraje de consumo, impulsará y fomentará la adhesión electrónica de empresarios y profesionales al Sistema Arbitral de Consumo así como el procedimiento arbitral de consumo por medios telemáticos, incluido el laudo arbitral electrónico, como procedimiento habitual para la sustanciación de este arbitraje.

Décima. Planificación estratégica en administración electrónica

El Consell incluirá con carácter obligatorio dentro de su planificación estratégica plurianual en materia de tecnologías de la información y la comunicación y de sociedad del conocimiento, planes y programas sectoriales dedicados al impulso y desarrollo de la administración electrónica en la Comunitat Valenciana.

Undécima. Adquisición por La Generalitat de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación

Reglamentariamente podrán preverse los supuestos de procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, en los que deba emitirse informe preceptivo en relación con el cumplimiento en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas correspondientes, de los estándares o estrategias tecnológicas definidas por el Consell.

Corresponderá, en todo caso, a la conselleria que ostente las competencias horitzontals de La Generalitat en materia de administración electrónica la emisión del mencionado informe.

Duodécima. Derecho de información, orientación y consulta por medios electrónicos

La regulación de las comunicaciones electrónicas de la ciudadanía con sus administraciones públicas para hacer efectivo el derecho de información, orientación y consulta por medios electrónicos, al que se refiere el artículo 6, letra a, de esta ley, podrá llevarse a cabo reglamentariamente por los titulares de cada sede electrónica o, en su caso, a través de la carta de servicios de sede electrónica que se prevé en el artículo 36.2 de esta ley.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Sedes electròniques locals

Durante el período de adaptación establecido en la disposición final segunda los sitios o páginas web y los portales de las entidades

consideració de seus electròniques locals, ja tinguen caràcter institucional o siguen de nivell inferior.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior contradiguen o s'oposen al que disposa esta llei, i, en particular, el número 2 de l'apartat cinc de l'article 120 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat, i la disposició addicional segona del Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica avançada en La Generalitat.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Aplicació de la llei en l'àmbit de La Generalitat

Des de la data d'entrada en vigor de la present llei, els drets reconeguts en l'article 6 podran ser exercits en relació amb els procediments i actuacions adaptats al que s'hi disposa. A l'efecte, La Generalitat farà pública i mantindrà actualitzada la relació dels esmentats procediments i actuacions a través de la seua seu electrònica.

Segona. Aplicació de la llei en l'àmbit de les entitats locals i de les corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana

1. L'aplicació de la present llei a les entitats locals se subjectarà al que estableix la disposició final tercera, número 4, de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.

En el termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor de la present llei, les entitats locals titulars de seus electròniques hauran de complir amb els requisits establits en el capítol I del títol II. Este termini començarà a comptar a partir de la data d'entrada en vigor de la norma corresponent de desplegament d'esta llei, respecte del compliment d'aquells requisits que exigisquen objectivament la seua concreció en l'esmentat desplegament reglamentari.

2. En els mateixos termes i terminis assenyalats en l'apartat anterior, les corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana aplicaran el que disposa esta llei.

Tercera. Ente Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana

1. L'Autoritat Certificadora de La Generalitat, creada pel Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica avançada en La Generalitat, passa a anomenarse Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), i les seues competències o funcions recauen en l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

S'adscriuen expressament a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica totes les competències i funcions que encara no haguera assumit corresponents a l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la normativa vigent fins a l'entrada en vigor de la present llei.

L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ostentarà i exercirà els drets de propietat industrial sobre la marca ACCV.

2. Es modifiquen els apartats un, cardinals 1 i 2; dos, cardinal 3; tres, s'afeg cardinal 3; quatre, cardinal 1, lletres b, e i d, deu, cardinal 1; i tretze, cardinal 2, tots ells de l'article 120 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de La Generalitat, que quedaran redactats en els termes següents:

«Un. Naturalesa jurídica

1. L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica es crea com a entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del text refós de la Llei d'hisenda pública de La Generalitat.

2. L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica gaudirà de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, quedant adscrita a la conselleria que ostente les compe-

locales tendrán la consideración de sedes electrónicas locales, ya tengan carácter institucional o sean de nivel inferior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley, y, en particular, el número 2 del apartado cinco del artículo 120 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de La Generalitat, y la disposición adicional segunda del Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Consell, por el que se regula la utilización de la firma electrónica avanzada en La Generalitat.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Aplicación de la ley en el ámbito de La Generalitat

Desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, los derechos reconocidos en el artículo 6 podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma. A tal efecto, La Generalitat hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones a través de su sede electrónica.

Segunda. Aplicación de la ley en el ámbito de las entidades locales y de las corporaciones de derecho público de la Comunitat Valenciana

1. La aplicación de la presente ley a las entidades locales se sujetará a lo establecido en la disposición final tercera, número 4, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente ley, las entidades locales titulares de sedes electrónicas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo I del título II. Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma correspondiente de desarrollo de esta ley, respecto del cumplimiento de aquellos requisitos que exijan objetivamente su concreción en el citado desarrollo reglamentario.

2. En los mismos términos y plazos señalados en el apartado anterior, las corporaciones de derecho público de la Comunitat Valenciana aplicarán lo dispuesto en esta ley.

Tercera. Ente Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana

1. La Autoridad Certificadora de La Generalitat, creada por el Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Consell, por el que se regula la utilización de la firma electrónica avanzada en La Generalitat, pasa a denominarse Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV), recayendo sus competencias o funciones en el Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica.

Se adscriben expresamente al Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica todas las competencias y funciones que aún no hubiera asumido correspondientes a la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana de acuerdo con la normativa vigente hasta la entrada en vigor de la presente ley.

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica ostentará y ejercerá los derechos de propiedad industrial sobre la marca ACCV.

2. Se modifican los apartados uno, cardinales 1 y 2; dos, cardinal 3; tres, se añade cardinal 3; cuatro, cardinal 1, letras b, e y d, diez, cardinal 1; trece, cardinal 2, todos ellos del artículo 120 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de La Generalitat, que quedarán redactados en los siguiente términos:

«Uno. Naturalesa jurídica

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica se crea como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5.2 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de La Generalitat.

La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica gozará de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, quedando adscrita a la conselleria que ostente

tències horitzontals de La Generalitat en matèria d'administració electrònica.»

«Dos. Règim jurídic

3. La contractació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica es regirà per la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques. Serà necessària l'autorització de qui ostente la titularitat de la conselleria a la que es trobe adscrit per a celebrar contractes de quantia superior a 750.000 euros.

A l'efecte d'allò que s'ha assenyalat en la normativa pública de contractació que siga aplicable, l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica tindrà la consideració de mitjà propi i servici tècnic de l'administració del Consell i dels seus organismes i entitats de dret públic, podent encomanar-li la realització de treballs i tasques incardinades en l'àmbit de les seues competències. Les cometes establiran els termes i condicions de realització dels esmentats treballs i tasques.»

«Tres. Competències

3. L'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica podrà explotar amb criteri de rendibilitat, tant social com econòmica, els béns incorporals de naturalesa tecnològica adscrits a les conselleries i organismes de La Generalitat, respectant les limitacions establides en la Llei de Patrimoni de La Generalitat.»

«Quatre. Funcions

1. Com a prestador de servicis de certificació l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica desenvoluparà totes aquelles activitats necessàries per a prestar els servicis de certificació de firma electrònica, i en particular:

- b) Aprovarà, publicarà i revisarà els documents de pràctiques i polítiques de certificació.
- c) Executarà les polítiques de certificació.
- d) Aprovarà i aplicarà els procediments i pràctiques operatives per a l'emissió de certificats digitals.»

«Deu. La Gerència

1. El titular de la gerència de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica serà anomenat i, si és el cas, separat, per decret del Consell, a proposta de qui ostente la titularitat de la Conselleria a què es trobe adscrit.»

«Tretze. Règim pressupostari

2. L'Anteprojete de pressupost, una vegada aprovat pel Consell de Direcció, serà remès a la conselleria a què es trobe adscrit per a la seua posterior elevació a la conselleria competent en matèria d'Hisenda a l'efecte de la seua integració en el pressupost de La Generalitat.»

3. El que disposa la present llei s'entén sense perjudi de la resta de competències i funcions atribuïdes a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica en l'article 120 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de La Generalitat.

4. En el termini de sis mesos el Consell adaptarà els estatuts de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

Quarta. Habilitació normativa en matèria de contractació i factura electròniques

El Consell i les conselleries que tinguen atribuïdes les competències horitzontals d'hisenda pública i d'administració electrònica queden autoritzades a regular i desplegar en l'àmbit de La Generalitat el que disposa la disposició final novena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. En tot cas, es tindrà en compte el que disposa l'article 28.2 de la present llei així com la gratuïtat dels servicis de suport per a la facilitació de l'emissió de factures electròniques, en els casos que es prevegen d'acord amb criteris d'objectivitat, imparcialitat i no-discriminació.

Quinta. Registre Electrònic de La Generalitat

1. Des de l'entrada en vigor d'esta llei el Registre Telemàtic de La Generalitat canvia la seua denominació per la de Registre Electrònic de La Generalitat.

las competencias horizontales de La Generalitat en materia de administración electrónica.»

«Dos. Régimen jurídico.

La contratación de la Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica se regirá por la legislación vigente sobre contratos de las administraciones públicas. Será necesario la autorización de quien ostente la titularidad de la conselleria a la que se encuentre adscrita para celebrar contratos de cuantía superior a 750.000 euros.

A efectos de lo señalado en la normativa pública de contratación que sea aplicable, la Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica tendrá la consideración de medio propio y servicio técnico de la administración del Consell y de sus organismos y entidades de derecho público, pudiendo encomendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el ámbito de sus competencias. Los encargos establecerán los términos y las condiciones de realización de dichos trabajos y tareas.»

«Tres. Competencias

3. La Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica podrá explotar con criterio de rentabilidad, tanto social como económica, los bienes incorporales de naturaleza tecnológica adscritos a las conselleries y organismos de La Generalitat, respetando las limitaciones establecidas en la Ley de Patrimonio de La Generalitat.»

«Cuatro. Funciones

Como prestador de servicios de certificación, la Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica desarrollará todas aquellas actividades necesarias para prestar los servicios de certificación de firma electrónica y, en particular:

- b) Aprobará, publicará y revisará los documentos de prácticas y políticas de certificación.
- c) Ejecutará las políticas de certificación.
- d) Aprobará y aplicará los procedimientos y prácticas operativas para la emisión de certificados digitales.»

«Diez. La Gerencia

El titular de la gerencia de la Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica será nombrado y, en su caso, separado, por decreto del Consell, a propuesta de quien ostente la titularidad de la conselleria a la que se encuentre adscrita.»

«Trece. Régimen presupuestario

El anteproyecto de presupuesto, una vez aprobado por el Consejo de Dirección, será remitido a la conselleria a la que se encuentre adscrita para su posterior elevación a la conselleria competente en materia de hacienda, a los efectos de su integración en el presupuesto de La Generalitat.»

3. Lo dispuesto en la presente ley se entiende sin perjuicio del resto de competencias y funciones atribuidas al Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica en el artículo 120 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de La Generalitat.

4. En el plazo de seis meses el Consell adaptará los estatutos de la Agencia de Tecnologia y Certificación Electrónica.

Cuarta. Habilitación normativa en materia de contratación y factura electrónicas

Se autoriza al Consell y a las consellerias que tengan atribuïdas las competencias horizontales de hacienda pública y de administración electrónica para que regulen y desarrollen en el ámbito de La Generalitat lo dispuesto en la disposición final novena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En todo caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de la presente ley así como la gratuidad de los servicios de apoyo para la facilitación de la emisión de facturas electrónicas, en los casos que se prevean de acuerdo con criterios de objetividad, imparcialidad, y no discriminación.

Quinta. Registro Electrónico de La Generalitat

1. Desde la entrada en vigor de esta ley el Registro Telemático de La Generalitat cambiará su denominación por el de Registro Electrónico de La Generalitat.

Num. 6262 / 07.05.2010



18238

2. El que disposa l'article 24, primer paràgraf, d'esta llei respecte de la preferència de l'ús del Registre Electrònic de La Generalitat en les relacions interadministratives, serà aplicable en el marc de l'article 35.2 i en els termes assenyalats en les disposicions finals primera i segona de la llei.

Sexta. Desplegament reglamentari i autorització al Consell

1. En el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la present llei, el Consell haurà d'aprovar el reglament general de desplegament de la llei, sense perjudi de l'autorització per a dictar qualssevol altres disposicions necessàries per al seu desplegament i execució que es prevegen amb caràcter especial.

2. Així mateix, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'esta llei, el Consell aprovarà, mitjançant decret, la política de seguretat de la informació a què es referix l'article 37.4, d'acord amb els Esquemes Nacionals de Seguretat i Interoperabilitat i amb el Marc Valencià d'Interoperabilitat.

Sèptima. Entrada en vigor

La present llei vigirà l'endemà de la seua publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 5 de maig de 2010

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

2. Lo dispuesto en el artículo 24, primer párrafo, de esta ley respecto de la preferencia del uso del Registro Electrónico de La Generalitat en las relaciones interadministrativas, será de aplicación en el marco del artículo 35.2 y en los términos señalados en las disposiciones finales primera y segunda de la misma.

Sexta. Desarrollo reglamentario y autorización al Consell

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Consell deberá aprobar el reglamento general de desarrollo de la misma, sin perjuicio de la autorización para dictar cualesquiera otras disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución que se prevean con carácter especial.

2. Asimismo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consell aprobará, mediante decreto, la política de seguridad de la información a la que se refiere el artículo 37.4, de acuerdo con los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y con el Marco Valenciano de Interoperabilidad.

Sèptima. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley

València, 5 de mayo de 2010

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

ANEXO III

LEY DE MOVILIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Num. 6495 / 05.04.2011



13870

Presidència de la Generalitat

LLEI 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. [2011/3979]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBULO

Mobilitat, progrés i llibertat s'han entrellaçat en els últims dos segles de la història de les societats avançades, i han transformat radicalment l'escenari d'aïllament i subdesenvolupament en què transcorria la vida de la immensa major part de les persones, per mitjà de la multiplicació de les possibilitats per a desplaçar-se i, per tant, de les opcions de treball, formació i accés als serveis, al mateix temps que les empreses generaven cada vegada més riquesa i ocupació. Vaixells de vapor, ferrocarrils, tramvies, metropolitans, l'automòbil i l'aviació comercial han transformat els límits geogràfics de la vida de les persones des de l'estretor dels murs de les aldees fins als nivells d'interrelació social i cultural que han superat l'una darrere de l'altra totes les fronteres. Al mateix temps, i parafrasejant Larra, pegades a les rodes dels nous modes de transport es difonia la pols de les idees i de la llibertat, fins a extrems que cap pensador il·lustrat haguera pogut vaticinar.

En començar el segle XXI sabem, no obstant això, que l'espiral virtuosa de mobilitat i desenvolupament té límits i condicionants molt clars. *Traffic in Towns*, la cèlebre obra de Buchanan, ja va avançar en 1963 que el cost que la qualitat de vida de les nostres ciutats estava pagant a l'automòbil era inassumible. Per tant, tenim el repte que cada vegada més ciutadans i ciutadanes puguen moure's fàcilment per a satisfer les seues aspiracions en relació amb l'ocupació, la formació i els serveis, però que això siga compatible a tindre un entorn urbà d'alta qualitat, en el qual podem disfrutar d'un espai urbà al servei de les persones, amb un aire net i amb una factura energètica, en especial pel que fa als combustibles fòssils, que no ens porten a nivells de dependència no assumibles.

Recuperar la ciutat, fer el transport accessible per a tots, disminuir les emissions danyoses per a la salut i tindre nivells de seguretat cada vegada més alts, són objectius comuns que han de guiar el desenvolupament de la mobilitat en els pròxims anys, de manera que la Comunitat Valenciana pugua homologar-se en esta matèria amb les regions més avançades del continent que han sabut trobar vies adequades per a unir desenvolupament i qualitat de vida. En poques paraules, es tracta d'avançar cap a un patró més equilibrat de mobilitat en què els desplaçaments a peu i amb bicicleta i el transport públic tinguen un paper cada vegada més rellevant tant en el centre dels espais metropolitans com en els àmbits cada vegada més amplis als quals s'estén la mobilitat quotidiana.

L'atenció preferent sobre esta qüestió està especialment en raó tant de l'actual magnitud de les xifres de mobilitat, com de la progressió que aconseguirà en els pròxims anys. D'acord amb estudis solvents, en les pròximes dos dècades els desplaçaments diaris en àrees com les de la Comunitat Valenciana poden duplicar-se. Ens trobem, no tan sols davant de la necessitat de resoldre un problema present, sinó amb l'oportunitat de desenvolupar un ventall d'accions preventives en la matèria, que tendixen al fet que en les pròximes dècades el nostre territori aconseguisca també en qüestions de mobilitat l'alt nivell d'excel·lència a què en matèria de qualitat de vida i de capacitat de progrés aspira la ciutadania.

Gràcies a la Unió Europea disposem d'una àmplia bateria d'anàlisi, criteris, objectius i normes que ens permeten avançar cap a este objectiu a l'unison amb la resta dels països membres, i donar solucions semblants a problemes que són comuns a tota la ciutadania europea. Ens trobem, així, davant d'un nou escenari integrat en la seua essència per una sèrie d'interessants disposicions: les directives comunitàries 91/440 i 51/2004, que establixen un nou model de prestació de serveis ferroviaris amb separació de la infraestructura i els serveis, la Directiva 2004/49, que establix les bases per a avançar en la seguretat ferroviària, el Reglament CE 1371/2007, sobre els drets dels usuaris del ferrocarril

Presidencia de la Generalitat

LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. [2011/3979]

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÀMBULO

Movilidad, progreso y libertad se han venido entrelazando en los últimos dos siglos de la historia de las sociedades avanzadas transformando radicalmente el escenario de aislamiento y subdesarrollo en el que transcurría la vida de la inmensa mayor parte de las personas, mediante la multiplicación de las posibilidades para desplazarse y por lo tanto de las opciones de trabajo, formación y acceso a los servicios, a la vez que las empresas generaban cada vez más riqueza y empleo. Barcos a vapor, ferrocarriles, tranvías, metropolitano, el automóvil y la aviación comercial han ido transformando los límites geográficos de la vida de las personas desde la estrechez de los muros de las aldeas hasta niveles de interrelación social y cultural que han ido superando una tras otra todas las fronteras. Al tiempo, y parafraseando a Larra, pegadas a las ruedas de los nuevos modos de transporte se difundía el polvo de las ideas y de la libertad, hasta extremos que ningún pensador ilustrado hubiera podido vaticinar.

Al comenzar el siglo XXI sabemos, sin embargo, que la espiral virtuosa de movilidad y desarrollo tiene límites y condicionantes muy claros. *Traffic in Towns*, la cèlebre obra de Buchanan, ya avanzó en 1963 que el coste que la calidad de vida de nuestras ciudades estaba pagando al automóvil era inasumible. Tenemos por lo tanto el reto de que cada vez más ciudadanos y ciudadanas puedan moverse fácilmente para satisfacer sus aspiraciones en relación con el empleo, la formación y los servicios, pero que ello sea compatible con tener un entorno urbano de alta calidad, en el que podamos disfrutar de un espacio urbano al servicio de las personas, con un aire limpio y con una factura energética, en especial en lo referente a los combustibles fósiles, que no nos aboque a niveles de dependencia no asumibles.

Recuperar la ciudad, hacer el transporte accesible para todos, disminuir las emisiones dañinas para la salud y tener niveles de seguridad cada vez más altos, son pues objetivos comunes que tienen que guiar el desarrollo de la movilidad en los próximos años, de manera que la Comunitat Valenciana pueda homologarse en esta materia con las regiones más avanzadas del continente que han sabido encontrar vías adecuadas para unir desarrollo y calidad de vida. En pocas palabras, se trata de avanzar hacia un patrón más equilibrado de movilidad en el que los desplazamientos a pie y en bicicleta y el transporte público tengan un papel cada vez más relevante tanto en el corazón de los espacios metropolitanos como en los ámbitos cada vez más amplios a los que se extiende la movilidad cotidiana.

La atención preferente sobre esta cuestión está especialmente en razón tanto de la actual magnitud de las cifras de movilidad, como de la progresión que va a alcanzar en los próximos años. De acuerdo con estudios solventes, en las próximas dos décadas los desplazamientos diarios en áreas como las de la Comunitat Valenciana pueden duplicarse. Nos encontramos, pues, no tan sólo ante la necesidad de solventar un problema presente, sino con la oportunidad de desarrollar un abanico de acciones preventivas en la materia, tendentes a que en las próximas décadas nuestro territorio alcance también en cuestiones de movilidad el alto nivel de excelencia al que en materia de calidad de vida y de capacidad de progreso aspira la ciudadanía.

Gracias a la Unión Europea disponemos de una amplia batería de análisis, criterios, objetivos y normas que nos permiten avanzar hacia tal objetivo al unisono con el resto de los países miembros, dando soluciones semejantes a problemas que son comunes a toda la ciudadanía europea. Nos encontramos así ante un novedoso escenario integrado en su esencia por una serie de interesantes disposiciones: las Directivas comunitarias 91/440 y 51/2004 que establecen un nuevo modelo de prestación de servicios ferroviarios separando infraestructura y servicios, la Directiva 2004/49 que sienta las bases para avanzar en la seguridad ferroviaria, el Reglamento CE 1371/2007 sobre derechos de los

i, especialment, el Reglament CE 1370/2007, de 23 d'octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport, que defineix un nou escenari de tanta profunditat en la matèria que, sens dubte, per si sol acomoda la resta del marc legal vigent, i referma, així, els principis en què es basa, entre els quals cal destacar molt especialment la consideració dels serveis de transport com un servei públic coherent amb les potestats genèriques de les administracions d'ordenació i gestió, i obert a la selecció del millor operador, ja siga públic o privat, que l'eficiència i l'interès general aconsellen en cada cas.

Aplicant els criteris abans assenyalats, el títol I de la llei encomana a les administracions públiques un paper central de cara a impulsar patrons equilibrats de mobilitat i, en particular, l'ús del transport públic i la potenciació dels desplaçaments amb bicicleta i, sobretot, a peu. Les ciutats de la Comunitat Valenciana tenen percentatges de desplaçaments de vianants difícilment superables. Un model de mobilitat mediterrània associat al gaudi de la ciutat i de l'entorn que suposa, en relació amb altres àmbits, una disminució real dels nivells d'emissions i consums energètics. El manteniment d'este model és un objectiu essencial d'esta llei, que per això no es limita només a fer una sèrie de recomanacions respecte d'això, sinó que s'introdueix en l'essència del model, en propagar obertament un desenvolupament de models urbans en què la integració d'usos, les densitats intermèdies, la contigüitat dels desenvolupaments i la qualitat de l'entorn propicien este tipus de desplaçaments.

Altres models urbans, amb la residència i els serveis, els comerços i les activitats dispersos en el territori, impliquen la impossibilitat de teixir xarxes de transport públic vertaderament efectives, i obliguen a l'ús del vehicle privat fins i tot per a les qüestions més quotidianes. Els plans de mobilitat previstos en el capítol III del títol I, inserits en el procés d'ordenació urbana, asseguraran que els teixits urbans es desenvolupen en el futur de manera racional, tenint en compte el balanç energètic i ambiental del conjunt dels desplaçaments. La figura dels plans de mobilitat s'estén igualment a altres supòsits en què es tracta de crear mecanismes de solució de situacions preexistents, tant pel que fa a nuclis urbans consolidats, com a centres generadors de desplaçaments.

Respecte a l'ús de la bicicleta, la llei incorpora una sèrie de determinacions destinades a potenciar-ne l'ús, entre les quals cal destacar la previsió d'estacionaments en origen i destinació, així com la consideració singular de les seues infraestructures específiques de cara a eliminar els obstacles legals i administratius que puguen impedir el desenvolupament.

Tot el contingut de la llei, i en particular el del títol I, es basa, com no podria ser d'una altra manera, en el més estricte respecte a les competències fixades per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la legislació aplicable en matèria de règim local. Es consagren les competències de la Generalitat en la mobilitat intracomunitària, al mateix temps que es respecta la funció que han de desenvolupar els ajuntaments tant en relació amb els serveis de transport urbà com en la potenciació dels desplaçaments no motoritzats. L'esmentat respecte al marc competencial no obsta perquè, des del punt de vista del ciutadà, este haja de percebre una oferta integrada de transport, més enllà d'estes competències i dels límits administratius. Els principis generals d'eficiència i coordinació de les administracions que presideixen el nostre ordenament jurídic s'apliquen en este cas tant en l'adopció d'un ampli ventall de mecanismes de concertació, com per mitjà del suport en l'Agència Valenciana de Mobilitat, ens públic de la Generalitat, la conformació del qual li permet tindre un paper destacat en matèria de coordinació del transport públic i foment de la mobilitat equilibrada, així com en la gestió del taxi en els espais metropolitans.

Respecte al transport de viatgers, el títol II de la llei enllaça la rica tradició del nostre ordenament jurídic en la matèria amb el que estableix el reglament esmentat 1370/2007. D'esta manera, figures del nostre dret de transport d'eficiència àmpliament contrastada, com són el projecte i el contracte de servei públic de transport (nova terminologia dels contractes de servei públic de transport per carretera), s'acomoden a les noves circumstàncies, estenent-les a qualsevol servei públic de transport i, en relació amb el que estableix el Reglament 1370/2007, que potencia els aspectes relatius a la identificació i la compensació en relació amb les obligacions de servei públic.

usuarios del ferrocarril y, especialmente el Reglamento CE 1370/2007 de 23 de octubre de 2007 sobre los servicios públicos de transporte, que define un nuevo escenario de tanto calado en la materia que sin duda por sí sólo acomoda el resto del marco legal vigente, afirmando así los principios en los que se basa, entre los que cabe destacar muy especialmente la consideración de los servicios de transporte como un servicio público coherente con las potestades genéricas de las administraciones de ordenación y gestión, y abierto a la selección del mejor operador, ya sea público o privado, que la eficiencia y el interés general aconsejen en cada caso.

Aplicando los criterios antes señalados, el título I de la ley encomienda a las administraciones públicas un papel central de cara a impulsar patrones equilibrados de movilidad y, en particular, el uso del transporte público y la potenciación de los desplazamientos en bicicleta y, sobre todo, a pie. Las ciudades de la Comunitat Valenciana tienen porcentajes de desplazamientos peatonales difícilmente superables. Un modelo de movilidad mediterránea asociado al disfrute de la ciudad y del entorno que supone, en relación con otros ámbitos, una disminución real de los niveles de emisiones y consumos energéticos. El mantenimiento de este modelo es un objetivo esencial de esta ley, que por ello no se limita tan sólo a hacer una serie de recomendaciones al respecto, sino que se introduce en la esencia del modelo, al propugnar abiertamente un desarrollo de modelos urbanos en los que la integración de usos, las densidades intermedias, la contigüidad de los desarrollos y la calidad del entorno propicien este tipo de desplazamientos.

Otros modelos urbanos, con la residencia y los servicios, los comercios y las actividades dispersos en el territorio, implican la imposibilidad de tejer redes de transporte público verdaderamente efectivas, y obligan al uso del vehículo privado incluso para las cuestiones más cotidianas. Los planes de movilidad previstos en el capítulo III del título I, insertados en el proceso de ordenación urbana, asegurarán que los tejidos urbanos se desarrollen en el futuro de manera racional, teniendo en cuenta el balance energético y ambiental del conjunto de los desplazamientos. La figura de los planes de movilidad se extiende igualmente a otros supuestos en los que se trata de crear mecanismos de solución de situaciones preexistentes, tanto en lo referente a núcleos urbanos consolidados, como a centros generadores de desplazamientos.

Respecto al uso de la bicicleta, la ley incorpora una serie de determinaciones destinadas a potenciar su uso, entre las que cabe destacar la previsión de estacionamientos en origen y destino, así como la consideración singular de sus infraestructuras específicas de cara a eliminar los obstáculos legales y administrativos que puedan impedir su desarrollo.

Todo el contenido de la ley, y en particular el del título I, se basa, como no podría ser de otra forma, en el más estricto respeto a las competencias fijadas por la Constitución, el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y la legislación aplicable en materia de régimen local. Se consagran las competencias de la Generalitat en la movilidad intracomunitaria, a la vez que se respecta la función que deben desarrollar los ayuntamientos tanto en relación con los servicios de transporte urbano como en la potenciación de los desplazamientos no motorizados. Dicho respeto al marco competencial no obsta para que, desde el punto de vista del ciudadano, éste deba percibir una oferta integrada de transporte, más allá de tales competencias y de los límites administrativos. Los principios generales de eficiencia y coordinación de las administraciones que presiden nuestro ordenamiento jurídico se aplican en este caso tanto en la adopción de un amplio abanico de mecanismos de concertación, como mediante el apoyo en la Agencia Valenciana de Movilidad, ente público de la Generalitat, cuya conformación le permite tener un papel destacado en materia de coordinación del transporte público y fomento de la movilidad equilibrada, así como en la gestión del taxi en los espacios metropolitanos.

Respecto al transporte de viajeros, el título II de la ley enlaza la rica tradición de nuestro ordenamiento jurídico en la materia con lo dispuesto en el citado Reglamento 1370/2007. De esta forma, figuras de nuestro derecho de transporte de eficiencia ampliamente contrastada, como son el proyecto y el contrato de servicio público de transporte (nueva terminología de los contratos de servicio público de transporte por carretera), se acomodan a las nuevas circunstancias, extendiéndolas a cualquier servicio público de transporte y, en relación con lo dispuesto en el Reglamento 1370/2007, potenciando los aspectos relativos a la identificación y compensación en relación con las obligaciones de servicio público.

Generalment oblidat en els plantejaments integrals del transport, el capítol III del títol II de la llei presta una atenció molt especial al sector del taxi, que continuarà sent essencial per a assegurar la mobilitat en zones i horaris en què la demanda no és elevada. Concebut inicialment com un servei municipal, hui en dia l'operació del servei de taxi no es comprén si se cenyix a un sol terme, ja siga metropolità o rural. Per tant, convé regular este servei com a autonòmic, amb independència de les excepcions que es plantegen de cara a articular una adequada transició des de la situació actual. D'altra banda, la llei consagra l'interés públic del taxi i en relació amb això regula la intervenció administrativa en el sector, fonamentalment en l'establiment del corresponent contingent en cada un dels àmbits considerats, així com en el règim tarifari.

La promulgació de la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, cenyida exclusivament als ferrocarrils d'interés general de l'Estat, implica que les diverses comunitats autònomes hagen de desenvolupar marcs normatius propis que regulen les infraestructures ferroviàries. En el cas de la Comunitat Valenciana, després d'analitzar la possibilitat d'una llei específica per a la infraestructura mencionada, en el títol III s'ha optat per una solució més avançada que és la d'una norma estesa a qualsevol tipus d'infraestructures de transport, i s'hi inclouen igualment les plataformes reservades per al transport públic quan no formen part d'una carretera, les infraestructures logístiques i altres de similars. En qualsevol cas, sembla summament convenient mantindre en matèria d'infraestructures el major nivell possible d'homogeneïtat legislativa, de manera que els processos de planificació i d'execució d'infraestructures tenen en esta llei una regulació semblant a la de la Llei 39/2003, assenyalada anteriorment. Igualment succeix amb les mesures tendents a assegurar la compatibilitat amb l'entorn (homòlogues a les de policia de ferrocarrils de la legislació estatal) i les d'àrees de reserva (igualment homòlogues a les denominades en l'esmentada llei zones de servei), si bé en este últim cas es potencien d'una manera notable amb vista a complir el que estableix l'article 47 de la nostra carta magna amb vista a la participació en les plusvàlues que genere l'acció urbanística dels ens públics.

Així mateix, cal apuntar que existix ja en l'ordenament jurídic autonòmic una llei que garanteix el lliure accés als mitjans de transport i a la plena possibilitat de mobilitat i comunicació accessible en l'ús d'estos serveis per a tota la ciutadania de la Comunitat Valenciana, que és la Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.

Finalment, s'ha d'assenyalar que en el procediment d'elaboració de la present llei han sigut consultats els principals agents que representen als sectors afectats per l'aplicació de la norma. Igualment, han informat les diferents conselleries amb competències sobre la matèria objecte de la regulació projectada, els suggeriments de la qual han sigut incorporada majoritàriament i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Amb els objectius expressats i en l'exercici de les competències que en matèria de transport terrestre reconeix a la Generalitat l'article 49.1.15.^a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 148.1.5.^a de la Constitució Espanyola, es redacta esta llei, a fi de configurar un marc normatiu regulador del transport terrestre a la Comunitat Valenciana.

TÍTULO I Principios generales

CAPÍTULO I Objetivos, criterios i competències

Artículo 1. Objeto de la llei

La presente llei té com a objecte regular les diverses competències que en matèria de mobilitat corresponen a la Generalitat d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i, en particular:

1. Establir els criteris generals destinats a promoure la mobilitat en el marc del màxim respecte possible per la seguretat, els recursos energètics i la qualitat de l'entorn urbà i del medi ambient.

Generalmente olvidado en los planteamientos integrales del transporte, el capítulo III del título II de la ley presta una atención muy especial al sector del taxi, que seguirá siendo esencial para asegurar la movilidad en zonas y horarios en los que la demanda no es elevada. Concebido inicialmente como un servicio municipal, hoy en día la operación del servicio de taxi no se comprende si se cñe a un solo término, ya sea metropolitano o rural. Conviene por lo tanto regular tal servicio como autonómico, con independencia de las excepciones que se plantean de cara a articular una adecuada transición desde la situación actual. Por otra parte, la ley consagra el interés público del taxi y en relación con ello regula la intervención administrativa en el sector, fundamentalmente en el establecimiento del correspondiente contingente en cada uno de los ámbitos considerados, así como en el régimen tarifario.

La promulgación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, ceñida exclusivamente a los ferrocarriles de interés general del Estado, implica que las diversas comunidades autónomas deban desarrollar marcos normativos propios que regulen las infraestructuras ferroviarias. En el caso de la Comunitat Valenciana, tras analizar la posibilidad de una ley específica para dicha infraestructura, en el título III se ha optado por una solución más avanzada cual es la de una norma extendida a cualquier tipo de infraestructuras de transporte, incluyendo igualmente las plataformas reservadas para el transporte público cuando no formen parte de una carretera, las infraestructuras logísticas y otras similares. En todo caso, parece sumamente conveniente mantener en materia de infraestructuras el mayor nivel posible de homogeneidad legislativa, de manera que los procesos de planificación y ejecución de infraestructuras tienen en esta ley una regulación semejante a la de la Ley 39/2003 antes señalada. Igualmente sucede con las medidas tendentes a asegurar la compatibilidad con el entorno (homólogas a las de policia de ferrocarriles de la legislación estatal) y las de áreas de reserva (igualmente homólogas a las denominadas en dicha ley zonas de servicio), si bien en este último caso se potencian de una manera notable en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 de nuestra carta magna en orden a la participación en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Cabe así mismo apuntar que existe ya en el ordenamiento jurídico autonómico una ley que garantiza el libre acceso a los medios de transporte y a la plena posibilidad de movilidad y comunicación accesible en el uso de estos servicios para toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, que es la Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.

Por último señalar que en el procedimiento de elaboración de la presente ley han sido consultados los principales agentes que representan a los sectores afectados por la aplicación de la norma. Igualmente, han informado las diferentes consellerías con competencias sobre la materia objeto de la regulación proyectada, cuyas sugerencias han sido incorporadas en su mayor parte y conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Con los objetivos expresados y en el ejercicio de las competencias que en materia de transporte terrestre reconoce a la Generalitat el artículo 49.1.15.^a del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en relación con el artículo 148.1.5.^a de la Constitución Española, se redacta esta ley, con el fin de configurar un marco normativo regulador del transporte terrestre en la Comunitat Valenciana.

TÍTULO I Principios generales

CAPÍTULO I Objetivos, criterios y competències

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto regular las diversas competencias que en materia de movilidad corresponden a la Generalitat de acuerdo con el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, y, en particular:

1. Establecer los criterios generales destinados a promover la movilidad en el marco del mayor respeto posible por la seguridad, los recursos energéticos y la calidad del entorno urbano y del medio ambiente.

2. Regular els instruments de planificació necessaris amb vista a assolir els objectius assenyalats anteriorment.
3. Regular el servei públic de transport terrestre de viatgers i el servei de taxi.
4. Regular les infraestructures de transport, així com les logístiques.

Article 2. Principis generals

1. Les administracions públiques facilitaràn la mobilitat de les persones com a element essencial de la seua qualitat de vida i de les seues possibilitats de progrés en relació amb el desenvolupament de les seues oportunitats d'accés al treball, a la formació, als serveis i a l'oci.

2. Les administracions públiques orientaran el creixement de la mobilitat de manera que se satisfacen simultàniament els següents objectius:

a) La millora constant dels nivells de seguretat, amb la promoció de l'ús dels modes més segurs i, dins de cada mode, la disminució dels índexs d'accidentalitat.

b) La millora de l'accessibilitat de tota la ciutadania amb vista a garantir la igualtat en l'accés a l'ocupació, formació, serveis, relacions socials, oci, cultura i a les altres oportunitats que ofereixen les societats avançades.

c) La salut i la qualitat de l'entorn urbà i del medi ambient, amb la consegüent disminució dels nivells de soroll i emissions atmosfèriques, especialment les que puguen afectar de manera directa la salut i el benestar de les persones.

d) La disminució dels consums energètics específics, amb la potenciació de la utilització dels modes de transport en este sentit més eficients, i amb la promoció de la progressiva utilització de fonts renovables.

e) La participació de la societat en la presa de decisions que afecten la mobilitat de les persones i de les mercaderies.

f) La promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat.

3. Les administracions públiques competents promouran totes aquelles accions de formació i difusió que permeten a ciutadans i ciutadanes triar el mode de transport per a cada desplaçament que consideren idoni en relació tant amb la seua eficiència i qualitat com per les seues afecions energètiques i ambientals.

Article 3. Competències administratives

1. Correspon a la Generalitat:

a) La potestat normativa en relació amb la mobilitat de les persones, dels serveis de transport públic i de les seues infraestructures dins de la Comunitat Valenciana.

b) La planificació, l'execució i el manteniment de les infraestructures de transport interurbà, excepte aquelles que siguen d'interés general de l'Estat.

c) La provisió dels serveis de transport públic interurbà de viatgers dins de la Comunitat Valenciana.

d) La potestat inspectora i sancionadora en relació amb les seues competències.

2. De la mateixa manera, d'acord amb el que estableix la present llei i en la legislació aplicable en matèria de règim local, a l'administració local correspon:

a) La promoció de patrons equilibrats de mobilitat urbana, en especial en relació amb els desplaçaments a peu i amb altres modes no motoritzats.

b) La planificació, l'execució i el manteniment de les infraestructures de transport urbà, d'acord amb el que s'estableix sobre això en la present norma i en la legislació urbanística i de règim local.

c) La provisió dels serveis de transport públic dins dels nuclis urbans.

3. Les competències abans assenyalades seran exercides sota el principi general de la col·laboració administrativa, de manera que l'acció conjunta de les diverses administracions tinga com a fruit oferir al ciutadà un sistema integrat de transports, tant pel que fa a la planificació de les infraestructures i els serveis, com en els aspectes relacionats amb la intermodalitat, la informació, la tarificació i la coordinació d'itineraris i horaris.

2. Regular los instrumentos de planificación necesarios en orden a alcanzar los objetivos antes señalados.

3. Regular el servicio público de transporte terrestre de viajeros y el servicio de taxi.

4. Regular las infraestructuras de transporte, así como las logísticas.

Artículo 2. Principios generales

1. Las administraciones públicas facilitaràn la movilidad de las personas como elemento esencial de su calidad de vida y de sus posibilidades de progreso en relación con el desarrollo de sus oportunidades de acceso al trabajo, a la formación, a los servicios y al ocio.

2. Las administraciones públicas orientarán el crecimiento de la movilidad de manera que se satisfagan simultáneamente los siguientes objetivos:

a) La mejora constante de los niveles de seguridad, promoviendo el uso de los modos más seguros y, dentro de cada modo, la disminución de los índices de accidentalidad.

b) La mejora de la accesibilidad de toda la ciudadanía en orden a garantizar la igualdad en el acceso al empleo, formación, servicios, relaciones sociales, ocio, cultura y a las demás oportunidades que ofrecen las sociedades avanzadas.

c) La salud y la calidad del entorno y del medio ambiente, con la consiguiente disminución de los niveles de ruido y emisiones atmosféricas, especialmente las que puedan afectar de manera directa a la salud y el bienestar de las personas.

d) La disminución de los consumos energéticos específicos, potenciando la utilización de los modos de transporte en tal sentido más eficientes, y promoviendo la progresiva utilización de fuentes renovables.

e) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y de las mercancías.

f) La promoción del transporte público para todas las personas y de la intermodalidad.

3. Las administraciones públicas competentes promoverán todas aquellas acciones de formación y difusión que permitan a ciudadanos y ciudadanas elegir el modo de transporte para cada desplazamiento que consideren idóneo en relación tanto con su eficiencia y calidad, como por sus afeciones energéticas y ambientales.

Artículo 3. Competencias administrativas

1. Corresponde a la Generalitat:

a) La potestat normativa en relació amb la mobilitat de les persones, dels serveis de transport públic i de les seues infraestructures dins de la Comunitat Valenciana.

b) La planificació, l'execució i el manteniment de les infraestructures de transport interurbà, salvo aquelles que sean de interés general del Estado.

c) La provisió de los servicios de transporte público interurbano de viajeros dentro de la Comunitat Valenciana.

d) La potestat inspectora i sancionadora en relació amb les seues competències.

2. Del mismo modo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y en la legislación aplicable en materia de régimen local, a la administración local le corresponde:

a) La promoció de patrons equilibrats de mobilitat urbana, en especial en relació amb els desplaçaments a pie y en otros modos no motorizados.

b) La planificació, l'execució i el manteniment de les infraestructures de transport urbà, de acuerdo con lo previsto al respecto en la presente norma y en la legislación urbanística y de régimen local.

c) La provisió de los servicios de transporte público dentro de los núcleos urbanos.

3. Las competencias antes señaladas serán ejercidas bajo el principio general de la colaboración administrativa, de manera que la acción conjunta de las diversas administraciones tenga como fruto ofrecer al ciudadano un sistema integrado de transportes, tanto en lo referente a la planificación de las infraestructuras y los servicios, como en los aspectos relacionados con la intermodalidad, la información, la tarificación y la coordinación de itinerarios y horarios.

Article 4. Agència Valenciana de Mobilitat

1. L'Agència Valenciana de Mobilitat desenvoluparà les competències de la Generalitat en matèria de serveis de transport públic de viatgers assenyalades en el títol II de la present llei, a més de les pròpies o delegades a la Generalitat que pogueren atribuir-se-li, i exercirà les funcions d'autoritat única de transport en els àmbits metropolitans de la Comunitat Valenciana, en funció dels convenis i els acords que s'establisquen amb altres administracions.

2. Correspon a l'Agència Valenciana de Mobilitat la realització de totes aquelles accions en relació amb la promoció i la difusió de la mobilitat equilibrada i de la potenciació dels desplaçaments no motoritzats i del transport públic que desenvolupe la Generalitat.

3. Exercirà igualment les competències que en matèria d'inspecció i seguretat en el transport de viatgers corresponen a la Generalitat, i s'hi inclourà la corresponent potestat sancionadora.

CAPÍTOL II

Foment dels desplaçaments no motoritzats

Article 5. Desplaçaments a peu i amb bicicleta

1. El desplaçament a peu i, si és el cas, amb bicicleta constitueix l'element essencial del patró de mobilitat dels pobles i les ciutats del sud d'Europa, en general, i de la Comunitat Valenciana, en particular. Pel seu elevat nivell d'eficiència i respecte als valors ambientals i energètics, i la seua contribució a la convivència i a la salut, es conforma com un pilar essencial del nivell de qualitat de vida en relació amb altres territoris.

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana promouran els desplaçaments a peu i amb bicicleta tant en l'exercici de les seues competències en matèria de mobilitat, com en relació amb les que tinguen en matèria de planificació urbanística, ubicació de serveis públics, urbanització i construcció d'infraestructures. Els corresponen igualment totes aquelles accions formatives, comunicatives i divulgatives encaminades al fet que es pugui optar pels desplaçaments no motoritzats en aquells casos en què siga possible.

3. Les administracions públiques, atès el model de mobilitat mediterrània, hauran de prendre les mesures necessàries de calmat de trànsit perquè les limitacions de velocitat en zones urbanes s'acomplequen en tot moment i procurar estendre al màxim de carrers les zones amb un límit de velocitat més apropiat amb l'ús residencial.

Article 6. Foment dels desplaçaments de vianants

1. Amb vista al fet que els desplaçaments no motoritzats continuen constituint l'element essencial de la mobilitat quotidiana, les administracions públiques propiciarán models de creixement urbà contigus a nuclis existents, amb densitats i tipologies edificatòries adequades, i amb dotacions suficients de serveis públics i privats per a atendre les necessitats quotidianes. Els desenvolupaments no contigus als nuclis urbans consolidats, els desenvolupaments de molt baixa densitat o les ubicacions d'habitatges i altres usos en sòl no urbanitzable es limitaran als casos en què siga justificat per motius d'interés públic, segons criteris tècnics o d'ordenació territorial, d'acord amb la seua normativa específica i sempre que, per mitjà de les accions complementàries que corresponen, no impliquen la dependència de l'ús del vehicle privat per a tot tipus de desplaçaments.

2. El planejament urbanístic i, en el seu desenvolupament, els projectes d'urbanització o d'un altre tipus destinats a condicionar l'espai urbà, tendiran a reforçar el paper dels carrers, les places, les avingudes i la resta d'elements semblants com a espais clau de la vida urbana, i es promourà la tranquil·litat del trànsit i es compaginarà l'atenció preferent per a vianants i, si és el cas, ciclistes, amb una adequada compatibilització amb la resta de modes de transport.

3. Els plans d'ordenació i instruments de planificació de competència municipal, hauran de dissenyar itineraris que permeten la realització de trayectos a peu en condicions de seguretat i comoditat per a conformar una xarxa que recórrega la ciutat i connecte els centres escolars i culturals, les zones comercials i d'oci, els jardins, els centres històrics i els serveis públics de concurrència i importància especials.

Artículo 4. Agencia Valenciana de Movilidad

1. La Agencia Valenciana de Movilidad desarrollará las competencias de la Generalitat en materia de servicios de transporte público de viajeros señaladas en el título II de la presente ley, además de las propias o delegadas a la Generalitat que pudieran atribuírsele, y ejercerá las funciones de autoridad única de transporte en los ámbitos metropolitanos de la Comunitat Valenciana, en función de los convenios y acuerdos que se establezcan con otras administraciones.

2. Corresponde a la Agencia Valenciana de Movilidad la realización de todas aquellas acciones en relación con la promoción y difusión de la movilidad equilibrada y de la potenciació de los desplazamientos no motorizados y del transporte público que desarrolle la Generalitat.

3. Ejercerá igualmente las competencias que en materia de inspección y seguridad en el transporte de viajeros corresponden a la Generalitat, incluyendo la correspondiente potestad sancionadora.

CAPÍTULO II

Fomento de los desplazamientos no motorizados

Artículo 5. Desplazamientos a pie y en bicicleta

1. El desplazamiento a pie y, en su caso, en bicicleta constituye el elemento esencial del patrón de movilidad de los pueblos y ciudades del sur de Europa, en general, y de la Comunitat Valenciana, en particular. Dados su elevado nivel de eficiencia y respeto a los valores ambientales y energéticos, y su contribución a la convivencia y a la salud, se conforma como un pilar esencial del nivel de calidad de vida en relación con otros territorios.

2. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana promoverán los desplazamientos a pie y en bicicleta tanto en el ejercicio de sus competencias en materia de movilidad, como en relación con las que ostentan en materia de planificación urbanística, ubicación de servicios públicos, urbanización y construcción de infraestructuras. Les corresponden igualmente todas aquellas acciones formativas, comunicativas y divulgativas encaminadas a que se pueda optar por los desplazamientos no motorizados en aquellos casos en los que sea posible.

3. Las administraciones públicas, teniendo en cuenta el modelo de movilidad mediterránea, deberán tomar las medidas necesarias de calmatado del tráfico para que las limitaciones de velocidad en zonas urbanas se cumplan en todo momento y procurar extender al máximo de calles las zonas con un límite de velocidad más apropiado con el uso residencial.

Artículo 6. Fomento de los desplazamientos peatonales

1. En orden a que los desplazamientos no motorizados sigan constituyendo el elemento esencial de la movilidad cotidiana, las administraciones públicas propiciarán modelos de crecimiento urbano contiguos a núcleos existentes, con densidades y tipologías edificatorias adecuadas, y con dotaciones suficientes de servicios públicos y privados para atender las necesidades cotidianas. Los desarrollos no contiguos a los núcleos urbanos consolidados, los desarrollos de muy baja densidad o las ubicaciones de viviendas y otros usos en suelo no urbanizable se limitarán a los casos en los que resulte justificado por motivos de interés público, en virtud de criterios técnicos o de ordenación territorial, de acuerdo con su normativa específica y siempre que mediante las acciones complementarias que correspondan no impliquen la dependencia del uso del vehicle privado para todo tipo de desplazamientos.

2. El planeamiento urbanístic y, en su desarrollo, los proyectos de urbanización o de otro tipo destinados a acondicionar el espacio urbano, tenderán a reforzar el papel de las calles, plazas, avenidas y demás elementos semejantes como espacios clave de la vida urbana, promoviendo el calmatado del tráfico y compaginando la atención preferente para peatones y, en su caso, ciclistas, con una adecuada compatibilización con el resto de modos de transporte.

3. Los planes de ordenación e instrumentos de planificación de competencia municipal, deberán diseñar itinerarios que permitan la realización de trayectos a pie en condiciones de seguridad y comodidad para conformar una red que recorra la ciudad y conecte los centros escolares y culturales, las zonas comerciales y de ocio, los jardines, los centros históricos y los servicios públicos de especial concurrència e importancia.

Article 7. Actuacions específiques en relació amb l'ús de la bicicleta

1. Correspon als ajuntaments desenvolupar el conjunt d'accions tendents a facilitar el desplaçament segur amb bicicleta dins dels seus respectius termes municipals, bé amb itineraris específics en aquells casos que concentren les majors demandes, bé per mitjà d'una adequada compatibilització amb altres usos del viari urbà.

2. Correspon a les administracions competents en carreteres i infraestructures de transport adoptar, de manera coordinada entre estes i amb els municipis, les mesures necessàries perquè els desplaçaments a peu o amb bicicleta entre els distints nuclis es puguin realitzar en condicions adequades de funcionalitat i seguretat. En les àrees metropolitanes i en aquelles zones on els nuclis estiguen particularment pròxims es desenvoluparà una xarxa específica per a estos fluxos de vianants i ciclistes. Les condicions de seguretat tendran a evitar el risc i a aplicar mesures col·lectives de prevenció que eviten disminuir la llibertat i la comoditat de la circulació ciclista. Aquestes mesures afectaran, principalment, el comportament dels vehicles de motor i el disseny viari, sense imposar al ciclista o al seu vehicle, més limitacions que les que imposa la llei de trànsit

3. Les administracions competents en les infraestructures lineals asseguraran la permeabilitat transversal dotant-les de passos en nombre suficient i de qualitat adequada per a afavorir la circulació de vianants i ciclistes, i s'establiran, respecte d'això, les línies de col·laboració que procedisquen amb la resta d'administracions concernides.

4. Es promourà la creació de sistemes públics de lloguer de bicicletes. Reglamentàriament es determinaran les normes de les targetes o títols que permeten l'ús, afavorint la intermodalitat tant entre ells com amb els títols de transport, de cara a potenciar la intermodalitat i l'accés i la dispersió dels fluxos canalitzats pel transport públic mitjançant la bicicleta.

Article 8. Estacionament de bicicletes

1. Els edificis d'ús residencial de nova construcció hauran de preveure emplaçaments específics, segurs i resguardats, per a un nombre de bicicletes almenys igual al doble del nombre d'habitatges, en una ubicació que permeta l'accés còmode i fàcil des de la xarxa viària, d'acord amb el que reglamentàriament s'especifique.

2. Els edificis destinats a serveis públics es dotaran de suficients estacionaments per a bicicletes, llevat que això siga impossible donada la configuració o la ubicació de l'edifici on se situen, d'acord amb el que reglamentàriament s'establisca. Les corresponents ordenances municipals, a falta de pla de mobilitat o de previsió en el planejament urbanístic de desenvolupament, podran estendre esta obligació a altres serveis i als centres de treball.

3. Els centres escolars i universitaris, com també els centres hospitalaris, esportius, culturals, comercials i d'oci, i altres punts generadors de demandes importants de mobilitat, adoptaran les mesures necessàries per a impulsar l'ús de la bicicleta, tant mitjançant el desenvolupament d'accesos i estacionaments adequats, com mitjançant les accions internes formatives i difusores que resulten convenients.

4. Els nous estacionaments de vehicles de motor tindran un espai reservat a bicicletes, al menys, d'un 10% del total de places. Si es tracta d'estacionaments sotmesos a tarifa, les places s'ubicaran el més immediat possible als punts de control, i la tarifa aplicable serà proporcional a la de la resta de vehicles.

5. Els ajuntaments podran establir les mesures que corresponguen d'acord amb la normativa vigent perquè l'obligació assenyalada en el punt anterior s'estenga als estacionaments ja existents, i, en qualsevol cas, amb motiu de canvi o renovació de la titularitat concessional.

6. Les estacions de trens i autobusos de nova construcció tindran emplaçaments específics per a bicicletes en nombre suficient a la demanda potencial que hi haja. En els ja existents a l'entrada en vigor d'aquesta llei, es disposarà d'un termini de dos anys per a establir-los.

 CAPÍTOL III
Plans de mobilitat
Article 9. Concepte i tipus

1. Els plans de mobilitat són els instruments que concreten, en un àmbit o implantació determinada, els objectius plantejats en esta llei, i

Artículo 7. Actuaciones específicas en relación con el uso de la bicicleta

1. Corresponde a los ayuntamientos desarrollar el conjunto de acciones tendentes a facilitar el desplazamiento seguro en bicicleta dentro de sus respectivos términos municipales, bien con itinerarios específicos en aquellos casos que concentren las mayores demandas, bien mediante una adecuada compatibilización con otros usos del viario urbano.

2. Corresponde a las administraciones competentes en carreteras e infraestructuras de transporte adoptar, de manera coordinada entre ellas y con los municipios, las medidas necesarias para que los desplazamientos a pie o en bicicleta entre los distintos núcleos puedan realizarse en condiciones adecuadas de funcionalidad y seguridad. En las áreas metropolitanas y en aquellas zonas en donde los núcleos estén particularmente cercanos se desarrollará una red específica para flujos peatonales y ciclistas. Las condiciones de seguridad tenderán a evitar el riesgo y a aplicar medidas colectivas de prevención que eviten disminuir la libertad y la comodidad de la circulación ciclista. Estas medidas afectarán principalmente al comportamiento de los vehículos de motor y al diseño viario, sin imponer al ciclista o a su vehículo, más limitaciones que las que imponga la ley de tráfico.

3. Las administraciones competentes en las infraestructuras lineales asegurarán la permeabilidad trasversal dotándolas de pasos en número suficiente y de calidad adecuada para favorecer la circulación de peatones y ciclistas, estableciéndose al respecto las líneas de colaboración que procedan con las restantes administraciones concernidas.

4. Se promoverá la creación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas. Reglamentariamente se determinarán las normas de las tarjetas o títulos que permitan su uso, favoreciendo la intermodalidad tanto entre ellos como con los títulos de transporte, de cara a potenciar la intermodalidad y el acceso y dispersión de los flujos canalizados por el transporte público mediante la bicicleta.

Artículo 8. Estacionamiento de bicicletas

1. Los edificios de uso residencial de nueva construcción deberán contemplar emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para un número de bicicletas al menos igual al doble del número de viviendas, en una ubicación que permita el acceso cómodo y fácil desde la red viaria, de acuerdo con lo que reglamentariamente se especifique.

2. Los edificios destinados a servicios públicos se dotarán de suficientes estacionamientos para bicicletas, salvo que ello resulte imposible dada la configuración o ubicación del edificio en donde se sitúen, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. Las correspondientes ordenanzas municipales, a falta de plan de movilidad o de previsión en el planeamiento urbanístico de desarrollo, podrán extender esta obligación a otros servicios y a los centros de trabajo.

3. Los centros escolares y universitarios, así como los centros hospitalarios, deportivos, culturales, comerciales y de ocio, y otros puntos generadores de demandas importantes de movilidad, adoptarán las medidas necesarias para impulsar el uso de la bicicleta, tanto mediante el desarrollo de accesos y estacionamientos adecuados, como mediante las acciones internas formativas y difusoras que resulten convenientes.

4. Los nuevos estacionamientos de vehículos a motor contarán con un espacio reservado a bicicletas de, al menos, un 10% del total de plazas. Si se trata de estacionamientos sometidos a tarifa, las plazas se ubicarán lo más inmediato posible a los puntos de control, y la tarifa aplicable será proporcional a la del resto de vehículos.

5. Los ayuntamientos podrán establecer las medidas que correspondan de acuerdo con la normativa vigente para que la obligación señalada en el punto anterior se extienda a los estacionamientos ya existentes, y en todo caso con motivo de cambio o renovación de la titularidad concessional.

6. Las estaciones de trenes y autobuses de nueva construcción contemplarán emplazamientos específicos para bicicletas en número suficiente a su demanda potencial. En los ya existentes a la entrada en vigor de esta ley, se dispondrá de un plazo de dos años para este establecimiento.

 CAPÍTULO III
Planes de movilidad
Artículo 9. Concepto y tipos

1. Los planes de movilidad son los instrumentos que concreten, en un ámbito o implantación determinada, los objetivos planteados en esta

en particular el gradual progrés cap a patrons més equilibrats de mobilitat, amb participació creixent dels modes no motoritzats i del transport públic. Estos plans definixen igualment les accions i estratègies que s'han d'emprendre amb vista a aconseguir estos objectius, i, per tant, serviran de marc de referència a la planificació concreta en matèria de servicis públics de transport, d'infraestructures i de la resta d'accions en relació amb el condicionament de l'espai urbà.

2. Els plans de mobilitat seran dels tipus següents:

- a) Plans municipals de mobilitat.
- b) Plans supramunicipals de mobilitat, d'àmbit comarcal o metropolità.
- c) Plans de mobilitat d'elements singulars per la seua capacitat de generació o atracció de desplaçaments.

Article 10. Plans municipals de mobilitat

1. Els plans municipals de mobilitat inclouran una anàlisi dels paràmetres essencials que definixquen la mobilitat en el moment en què es formulen, els objectius en relació amb la seua evolució a mitjà i a llarg termini i aquelles determinacions necessàries per a aconseguir els objectius esmentats.

2. La definició de paràmetres i objectius assenyalats en el punt anterior s'acompanyarà dels indicadors que s'estimen pertinents en relació amb el volum total de desplaçaments i el seu repartiment modal, i els nivells associats de consums energètics, ocupació de l'espai públic, soroll i emissions atmosfèriques, i es particularitzaran les d'efecte hivernacle. L'evolució d'estos últims paràmetres tendirà a la seua reducció progressiva d'acord amb els ritmes i els límits que reglamentàriament s'establixen en relació amb el desenvolupament de les polítiques energètiques i ambientals.

3. Les determinacions dels plans de mobilitat s'estendran al disseny i a les dimensions de les xarxes viàries i de transport públic, a les infraestructures específiques per a vianants i ciclistes, a les condicions de seguretat i eficàcia per a la circulació de vianants i ciclistes, al sistema d'estacionament i als aspectes de l'ordenació urbana rellevants a l'hora de determinar aspectes quantitius i qualitius de la demanda de transport, com ara les densitats urbanístiques, la integració d'usos, la localització de servicis i altres usos atractors de transport, i altres de semblants.

4. Els municipis de més de 20.000 habitants o aquells que tinguen una capacitat residencial equivalent formularan un pla municipal de mobilitat en el termini de quatre anys a partir de l'entrada en vigor d'esta llei.

5. Procedirà igualment en els municipis mencionats la redacció d'un pla municipal de mobilitat o la revisió de l'existent amb motiu de la formulació o revisió del Pla General, o quan s'introduïsquen en este modificacions rellevants en relació amb la demanda de desplaçaments en els termes que reglamentàriament s'establixen. Esta obligació s'estendrà igualment als municipis de població inferior als 20.000 habitants en aquells casos en què l'instrument urbanístic corresponent preveja aconseguir l'esmentada capacitat residencial o creixements superiors al 50% de les unitats residencials, o del sòl per a activitats productives.

6. En el supòsit previst en el punt anterior, els plans de mobilitat es formularan conjuntament amb l'instrument urbanístic a què acompanyen, corresponent la seua aprovació definitiva a l'òrgan competent en relació amb l'instrument mencionat, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de transports.

7. Els plans municipals de mobilitat seran sotmesos a informació pública en els termes que reglamentàriament s'establixen, de conformitat, en qualsevol cas, amb el que estableix la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i la seua normativa de desplegament. Després de la seua aprovació seran públics i l'administració que els promoga n'assegurarà la publicitat per mitjà de procediments telemàtics. Igualment establirà un sistema de seguiment dels seus indicadors, i es procedirà a la revisió del pla en el cas que s'advertisquen desviacions significatives sobre estes previsions, quan procedisca reformular els objectius inicials o amb motiu de qualsevol altra circumstància que altere significativament el patró de mobilitat.

8. Els ajuntaments tindran l'obligació de redactar plans de mobilitat en aquells àmbits concrets del seu terme municipal amb una problemàtica de mobilitat específica com ara centres històrics, zones de

ley, y en particular el paulatino progreso hacia patrones más equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público. Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a emprender en orden a alcanzar tales objetivos, sirviendo por lo tanto de marco de referencia a la planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de infraestructuras y del resto de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano.

2. Los planes de movilidad serán de los siguientes tipos:

- a) Planes municipales de movilidad.
- b) Planes supramunicipales de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano.
- c) Planes de movilidad de elementos singulares por su capacidad de generación o atracción de desplazamientos.

Artículo 10. Planes municipales de movilidad

1. Los planes municipales de movilidad incluirán un análisis de los parámetros esenciales que definan la movilidad en el momento en el que se formulen, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo plazo y aquellas determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos.

2. La definición de parámetros y objetivos señalados en el punto anterior se acompañará de los indicadores que se estimen pertinentes en relación con el volumen total de desplazamientos y su reparto modal, y los niveles asociados de consumos energéticos, ocupación del espacio público, ruido y emisiones atmosféricas, particularizando las de efecto invernadero. La evolución de estos últimos parámetros tenderá a su reducción progresiva de acuerdo con los ritmos y límites que reglamentariamente se establezcan en relación con el desarrollo de las políticas energéticas y ambientales.

3. Las determinaciones de los planes de movilidad se extenderán al diseño y dimensionamiento de las redes viarias y de transporte público, a las infraestructuras específicas para peatones y ciclistas, a las condiciones de seguridad y eficacia para la circulación peatonal y ciclista, al sistema de estacionamiento y a los aspectos de la ordenación urbana relevantes a la hora de determinar aspectos cuantitativos y cualitativos de la demanda de transporte, tales como las densidades urbanísticas, la integración de usos, la localización de servicios y otros usos atractores de transporte, y otros semejantes.

4. Los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos que tengan una capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de movilidad en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta ley.

5. Procederá igualmente en dichos municipios la redacción de un plan municipal de movilidad o la revisión del existente con motivo de la formulación o revisión del Plan General, o cuando se introduzcan en él modificaciones relevantes en relación con la demanda de desplazamientos en los términos que reglamentariamente se establezcan. Dicha obligación se extenderá igualmente a los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes en aquellos casos en que el instrumento urbanístico correspondiente prevea alcanzar dicha capacidad residencial o crecimientos superiores al 50% de las unidades residenciales, o del suelo para actividades productivas.

6. En el supuesto previsto en el punto anterior, los planes de movilidad se formularán conjuntamente con el instrumento urbanístico al que acompañen, correspondiendo su aprobación definitiva al órgano competente en relación con dicho instrumento, previo informe favorable de la Conselleria competente en materia de transportes.

7. Los planes municipales de movilidad serán sometidos a información pública en los términos que reglamentariamente se establezcan, de conformidad, en cualquier caso, con lo establecido en la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y en su normativa de desarrollo. Tras su aprobación serán públicos y la administración que los promueva asegurará su publicidad mediante procedimientos telemáticos. Igualmente establecerá un sistema de seguimiento de sus indicadores, procediendo a la revisión del plan en caso de que se adviertan desviaciones significativas sobre tales previsiones, cuando proceda reformular los objetivos iniciales o con motivo de cualquier otra circunstancia que altere significativamente el patrón de movilidad.

8. Los ayuntamientos tendrán la obligación de redactar planes de movilidad en aquellos ámbitos concretos de su término municipal con una problemática de movilidad específica tales como centros históricos,

concentració terciària, estadis esportius, zones comercials, de turisme i d'oci nocturn, zones amb elevats fluxos de compradors o visitants, zones acústicament saturades i altres zones amb usos determinats com a transport, càrrega i descàrrega de mercaderies.

9. Les accions municipals en relació tant amb la mobilitat com amb la resta d'elements que la condicionen se cenyiran a l'estratègia marcada en els corresponents plans. Anualment l'ajuntament elaborarà i farà públic un informe sobre el grau d'avanç de les actuacions en este previstes i sobre la programació per a l'exercici següent.

Article 11. Plans comarcals i metropolitans de mobilitat

1. Les determinacions dels plans metropolitans i comarcals de mobilitat es formularan de manera anàloga als plans de caràcter municipal, si bé se centraran les seues determinacions en relació amb els desplaçaments interurbans i aquells fluxos principals de la demanda susceptibles de ser atesos pels servicis metropolitans de transport.

2. Els plans comarcals i metropolitans seran formulats per l'òrgan competent en matèria de mobilitat de la Generalitat de manera concertada amb els municipis inclosos en el seu àmbit, i a la vista tant dels plans de mobilitat d'estos municipis com de la planificació estatal i autonòmica en matèria de transport.

La conselleria competent en matèria de transport s'adaptarà als plans esmentats en la seua planificació d'infraestructures i servicis de transport, així com per a la programació de les seues actuacions.

Article 12. Plans de mobilitat de noves implantacions especialment rellevants

1. La implantació d'aquells usos, servicis o unitats residencials particularment rellevants en relació amb la seua capacitat de generació o atracció de demanda de desplaçaments serà precedida de la formulació d'un pla de mobilitat específic. En particular, procedirà la seua formulació en els casos següents:

a) Servicis públics de caràcter supramunicipal, entesos com aquells l'àmbit dels quals s'estenga fora del nucli on s'emplaceen.

b) Àrees terciàries, esportives, comercials, hoteleres o d'oci que de forma unitària o conjunta superen els 10.000 metres quadrats.

c) Àrees residencials de més de 1.000 habitatges.

d) Àrees residencials de més de 200 habitatges quan es desenvolupen de manera independent dels nuclis urbans existents o impliquen una dimensió igual o major que la dels nuclis esmentats.

e) Àrees o instal·lacions destinades a l'activitat productiva on es prevegen més de 100 llocs de treball, llevat que es donen les circumstàncies de contigüitat assenyalades en el punt anterior.

2. Els plans de mobilitat referents a les implantacions assenyalades en el punt anterior avaluaran la demanda associada a la nova implantació, i indicaran les solucions amb vista a atendre-les degudament sota els principis de l'existència, en qualsevol cas, d'una connexió de vianants-ciclistes amb els nuclis urbans pròxims, i una participació adequada del transport públic en relació amb el conjunt de modes motoritzats.

3. De cara a assegurar l'accessibilitat a les implantacions assenyalades en els punts a i b de l'apartat 1, estes s'emplazaran preferentment al costat de parades o estacions dels elements bàsics del sistema de transport públic de la Comunitat Valenciana o del municipi corresponent, i s'entenen com a tals els que simultàniament complisquen els tres requisits següents:

a) Freqüència adequada al menys d'un servici cada quinze minuts.

b) Capacitat suficient per a atendre almenys el 50% de la demanda de transport associada al nou desplaçament.

c) Un sistema de connexions que garantisca un temps d'accés raonable des del conjunt de l'àmbit de mobilitat de la implantació considerada.

4. El pla de mobilitat proposarà les solucions adequades per a la connexió al sistema de transport públic, bé per mitjà de la modificació o prolongació de servicis ja existents, o bé per mitjà de la creació de servicis alimentadors, estacionaments dissuasoris i d'altres mesures semblants. Les propostes del pla inclouran les necessitats infraestructurals inherents a estes actuacions i una avaluació tant dels seus costos

zonas de concentración terciaria, estadios deportivos, zonas comerciales, de turismo y de ocio nocturno, zonas con elevados flujos de compradores o visitantes, zonas acústicamente saturadas y otras zonas con usos determinados como transporte, carga y descarga de mercancías.

9. Las acciones municipales en relación tanto con la movilidad como con los restantes elementos que la condicionen se ceñirán a la estrategia marcada en los correspondientes planes. Anualmente el ayuntamiento elaborará y hará público un informe sobre el grado de avance de las actuaciones en el previstas y sobre la programación para el siguiente ejercicio.

Artículo 11. Planes comarcales y metropolitanos de movilidad

1. Las determinaciones de los planes metropolitanos y comarcales de movilidad se formularán de manera análoga a los planes de carácter municipal, si bien centrandó sus determinaciones en relación con los desplazamientos interurbanos y aquellos flujos principales de la demanda susceptibles de ser atendidos por los servicios metropolitanos de transporte.

2. Los planes comarcales y metropolitanos serán formulados por el órgano competente en materia de movilidad de la Generalitat de manera concertada con los municipios incluidos en su ámbito, y a la vista tanto de los planes de movilidad de tales municipios como de la planificación estatal y autonómica en materia de transporte.

La conselleria competente en materia de transporte se adaptará a dichos planes en su planificación de infraestructuras y servicios de transporte, así como para la programación de sus actuaciones.

Artículo 12. Planes de movilidad de nuevas implantaciones especialmente relevantes

1. La implantación de aquellos usos, servicios o unidades residenciales particularmente relevantes en relación con su capacidad de generación o atracción de demanda de desplazamientos será precedida de la formulación de un plan de movilidad específico. En particular, procederá su formulación en los siguientes casos:

a) Servicios públicos de carácter supramunicipal, entendidos como aquellos cuyo ámbito se extienda fuera del núcleo en donde se emplacen.

b) Áreas terciarias, deportivas, comerciales, hoteleras o de ocio que de forma unitaria o conjunta superen los 10.000 metros cuadrados.

c) Áreas residenciales de más de 1.000 viviendas.

d) Áreas residenciales de más de 200 viviendas cuando se desarrollen de manera independiente de los núcleos urbanos existentes o impliquen una dimensión igual o mayor que la de los citados núcleos.

e) Áreas o instalaciones destinadas a la actividad productiva en donde se prevean más de 100 puestos de trabajo, salvo que se den las circunstancias de contigüidad señaladas en el punto anterior.

2. Los planes de movilidad referentes a las implantaciones señaladas en el punto anterior evaluarán la demanda asociada a la nueva implantación, e indicarán las soluciones en orden a atenderlas debidamente bajo los principios de la existencia en todo caso de una conexión peatonal-ciclista con los núcleos urbanos próximos, y una participación adecuada del transporte público en relación con el conjunto de modos motorizados.

3. Al objeto de asegurar la accesibilidad a las implantaciones señaladas en los puntos a y b del apartado 1, estas se emplazarán preferentemente junto a paradas o estaciones de los elementos básicos del sistema de transporte público de la Comunitat Valenciana o del municipio correspondiente, entendiéndose como tales los que simultáneamente cumplan los tres siguientes requisitos:

a) Frecuencia adecuada de al menos un servicio cada quince minutos.

b) Capacidad suficiente para atender al menos el 50% de la demanda de transporte asociada al nuevo desplazamiento.

c) Un sistema de conexiones que garantice un tiempo de acceso razonable desde el conjunto del ámbito de servicio de la implantación considerada.

4. El plan de movilidad propondrá las soluciones adecuadas para la conexión al sistema de transporte público, bien mediante la modificación o prolongación de servicios ya existentes, o bien mediante la creación de servicios alimentadores, estacionamientos disuasorios y otras medidas similares. Las propuestas del plan incluirán las necesidades infraestructurales inherentes a tales actuaciones y una evaluación tanto

com de les compensacions de prestació de servici públic inherents en el cas que estes foren necessàries, que en els dos casos seran a càrrec del promotor de la nova implantació.

5. El pla de mobilitat inclourà, en els casos d'àmbits amb distàncies internes entre els seus elements de més de 1.000 metres o pendents superiors al 5% en una part significativa del seu viari, aquelles solucions específiques per als desplaçaments interns, de cara a poder assegurar l'habitabilitat d'estos àmbits a les persones que no disposen de vehicle privat.

6. Correspon a la conselleria competent en matèria de transport l'aprovació dels plans de mobilitat previstos en este article, aprovació que serà prèvia a l'atorgament de la llicència o aprovació del projecte o instrument d'ordenació que faça possible el desenvolupament de la implantació. El procediment es resoldrà en el termini màxim de dos mesos, amb un informe previ de l'ajuntament corresponent. En els casos en què concorre alguna de les circumstàncies previstes en el punt 4, esta aprovació quedarà supeditada a la consolidació davant de l'Agència Valenciana de Mobilitat dels costos o de les compensacions en estes assenyalades, per a la qual cosa es podran utilitzar els procediments de depòsit, garantia, aval, cessió d'immoble amb valor de renda equivalent o un altre que es considere adequat. En cas d'incompliment per part del promotor del pla o de la resolució que l'aprove, l'Agència aplicarà estes quantitats al manteniment del servici públic o a l'execució de les obres previstes en el pla esmentat.

7. Els plans generals i la resta d'instruments d'ordenació prioritzaran la implantació en els sòls urbanitzables immediats a estacions o punts de parada del sistema bàsic de transport, d'aquells usos que impliquen majors nivells de demanda de transport i preferentment de servicis públics d'àmbit supralocal, i en segon lloc de grans equipaments comercials i d'oci.

Article 13. Plans de mobilitat d'implantacions singulars preexistents

1. Mitjançant una resolució motivada, l'autoritat competent en matèria de transport podrà instar els titulars dels centres assenyalats en els apartats a i b del punt 1 de l'article anterior que s'hagen implantat abans de l'entrada en vigor de la present llei, i que generen nivells especialment rellevants de mobilitat, que formulen un pla de mobilitat.

2. El pla de mobilitat assenyalara aquelles mesures necessàries per a afavorir els desplaçaments no motoritzats i en transport públic, i diferenciarà aquelles que hagen d'abordar els titulars de les activitats, de les susceptibles de ser incorporades als programes d'actuació de les administracions concernides.

3. Correspon l'aprovació del pla de mobilitat en el supòsit previst en este article a l'autoritat que inste la seua formulació, després del corresponent període de concertació tant amb els titulars de les activitats com amb el municipi o els municipis on s'ubiquen.

4. Transcorreguts dos anys sense que s'haguera formulat el pla de mobilitat, correspondrà a l'administració competent en matèria de transport la seua formulació, aprovació i execució, i imputarà els costos d'estes accions als titulars de les activitats d'acord amb els procediments previstos en la legislació aplicable.

Article 14. Plans de mobilitat d'instal·lacions productives

1. Les instal·lacions productives o de servicis podran formular plans de mobilitat en relació amb els desplaçaments quotidians del seu personal, bé de forma individualitzada bé conjuntament en el si d'associacions esteses a àmbits o a sectors homogenis. Els plans mencionats es formularan de manera concertada amb les associacions d'usuaris, i una vegada aprovats es remetraran a l'autoritat de transport corresponent als mers efectes del seu coneixement.

2. Les accions previstes en els plans de mobilitat d'instal·lacions productives podran incloure recomanacions sobre actuacions que s'han d'incloure en la programació d'actuacions de les administracions concernides en funció de les seues corresponents competències.

Article 15. Plans de mobilitat de centres de formació

1. Els centres de formació secundària o universitària de més de 500 estudiants disposaran d'un pla de mobilitat en relació tant amb els des-

de sus costes como de las compensaciones de prestación de servicio público inherentes en el caso de que éstas fueran necesarias, que en ambos casos correrán por cuenta del promotor de la nueva implantación.

5. El plan de movilidad incluirá, en los casos de ámbitos con distancias internas entre sus elementos de más de 1.000 metros o pendientes superiores al 5% en una parte significativa de su viario, aquellas soluciones específicas para los desplazamientos internos, para poder asegurar la habitabilidad de tales ámbitos a las personas que no dispongan de vehículo privado.

6. Corresponde a la conselleria competente en materia de transporte la aprobación de los planes de movilidad previstos en este artículo, aprobación que será previa al otorgamiento de la licencia o aprobación del proyecto o instrumento de ordenación que posibilite el desarrollo de la implantación. El procedimiento se resolverá en el plazo máximo de dos meses, previo informe del ayuntamiento correspondiente. En los casos en que concorra alguna de las circunstancias previstas en el punto 4, tal aprobación quedará supeditada al afianzamiento ante la Agencia Valenciana de Movilidad de los costes o compensaciones en el señaladas, para lo cual se podrán utilizar los procedimientos de depósito, garantía, aval, cesión de inmueble con valor de renta equivalente u otro que se estime adecuado. En caso de incumplimiento por parte del promotor del plan o de la resolución que lo apruebe, la Agencia aplicará tales cantidades al mantenimiento del servicio público o a la ejecución de las obras previstas en dicho plan.

7. Los planes generales y demás instrumentos de ordenación priorizarán la implantación en los suelos urbanizables inmediatos a estaciones o puntos de parada del sistema básico de transporte, de aquellos usos que impliquen mayores niveles de demanda de transporte y preferentemente de servicios públicos de ámbito supralocal, y en segundo lugar de grandes equipamientos comerciales y de ocio.

Artículo 13. Planes de movilidad de implantaciones singulares preexistentes

1. Mediante resolución motivada, la autoridad competente en materia de transporte podrá instar a los titulares de los centros señalados en los apartados a y b del punto 1 del artículo anterior que se hayan implantado antes de la entrada en vigor de la presente ley, y que generen niveles especialmente relevantes de movilidad, a que formulen un plan de movilidad.

2. El Plan de Movilidad señalará aquellas medidas necesarias para favorecer los desplazamientos no motorizados y en transporte público, diferenciando aquellas que deban abordar los titulares de las actividades, de las susceptibles de ser incorporadas a los programas de actuación de las Administraciones concernidas.

3. Corresponde la aprobación del plan de movilidad en el supuesto previsto en este artículo a la autoridad que inste su formulación, tras el correspondiente periodo de concertación tanto con los titulares de las actividades como con el o los municipios en que se ubiquen.

4. Transcurridos dos años sin que se hubiera formulado el plan de movilidad, corresponderá a la administración competente en materia de transporte su formulación, aprobación y ejecución, imputando los costes de tales acciones a los titulares de las actividades de acuerdo con los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

Artículo 14. Planes de movilidad de instalaciones productivas

1. Las instalaciones productivas o de servicios podrán formular planes de movilidad en relación con los desplazamientos cotidianos de su personal, bien de forma individualizada bien conjuntamente en el seno de asociaciones extendidas a ámbitos o sectores homogéneos. Dichos planes se formularán de manera concertada con las asociaciones de usuarios, y una vez aprobados se remitirán a la autoridad de transporte correspondiente a los meros efectos de su conocimiento.

2. Las acciones previstas en los planes de movilidad de instalaciones productivas podrán incluir recomendaciones sobre actuaciones a incluir en la programación de actuaciones de las administraciones concernidas en función de sus correspondientes competencias.

Artículo 15. Planes de movilidad de centros de formación

1. Los centros de formación secundaria o universitaria de más de 500 estudiantes dispondrán de un plan de movilidad en relación tanto

plaçaments dels estudiants mencionats, com del personal docent i no docent. L'existència del pla esmentat serà facultativa en els centres que no aconseguen la xifra abans assenyalada, i per a la seua elaboració se seguiran les especificacions previstes en els articles anteriors en relació amb els plans d'instal·lacions productives.

2. Els plans de mobilitat mencionats promouran especialment l'accés a peu, amb bicicleta i amb transport públic. Preveuran en este sentit tant les infraestructures necessàries en relació amb estacionament de bicicletes, accessos de vianants-ciclistes, connexions i parades per al transport públic etc., com les accions formatives i divulgatives destinades a promoure l'ús dels modes no motoritzats i del transport públic, tant en els seus desplaçaments d'accés al centre com en general.

CAPÍTOL IV

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la mobilitat i el transport públic

Article 16. Drets i obligacions

1. En relació amb la mobilitat, les persones que residisquen a la Comunitat Valenciana tenen dret a:

a) Optar pel mode que entenguen més adequat a les seues necessitats entre aquells que estiguen a la seua disposició.

b) Disposar del servei bàsic de transport públic amb independència del seu punt de residència.

c) Disposar d'alternatives segures, còmodes i de qualitat per als seus desplaçaments no motoritzats.

d) La prestació dels serveis de transport amb nivells adequats de qualitat i seguretat.

e) Disposar de la informació necessària per a triar el mode més adequat i planificar el desplaçament adequadament.

f) Presentar de forma gratuïta davant de l'autoritat de transport i els operadors les denúncies, les reclamacions i els suggeriments que estimen oportuns en relació amb el servei de transport públic.

g) Participar en la presa de decisions en relació amb la mobilitat d'acord amb els procediments que estableix esta llei i en la resta de la normativa aplicable.

2. Els qui utilitzen els serveis de transport hauran de seguir les pautes de comportament i d'ús establides en esta llei i en la normativa que la desenvolupa, i, en qualsevol cas, s'observarà una actitud respectuosa cap a la resta de les persones usuàries i del personal de les empreses operadores, amb la seguretat i amb la qualitat ambiental dels diversos modes, i amb l'entorn.

3. Els drets i les obligacions de la present llei s'estenen a la totalitat de les persones amb independència de la seua edat o de les seues limitacions personals, en relació amb l'estricta compliment del que estableix la Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana.

Article 17. Participació ciutadana

1. Assistix als ciutadans i a les ciutadanes el dret a conèixer i a participar en la planificació i regulació en matèria de mobilitat i transport, d'acord amb els instruments prevists en la normativa vigent.

2. Les administracions asseguraran la màxima divulgació i coneixement possible dels documents aprovats provisionalment o definitivament, per mitjà de la utilització de tots els procediments que estiguen en la seua mà i especialment per mitjà de la seua difusió a través d'Internet.

3. En els casos en què es considere necessari, l'administració formularà una enquesta pública prèvia a l'adopció de les seues decisions en matèria de planificació i regulació. A l'efecte obrirà un tràmit públic d'inscripció prèvia, després del qual sotmetrà les seues propostes a debat bé de manera directa bé per mitjà de mitjans telemàtics. Els resultats d'este procediment seran tinguts en compte per l'administració i la seua acceptació o denegació, que serà, en qualsevol cas, motivada, s'integrarà en l'expedient corresponent.

4. L'autoritat de transport competent podrà conformar, després del corresponent tràmit d'inscripció prèvia, panells d'usuàries i usuàries de serveis o zones determinades. Les persones inscrites en els panells seran consultades amb motiu dels canvis rellevants en els serveis, rebran

con los desplazamientos de dichos estudiantes, como del personal docente y no docente. La existencia de dicho plan será facultativa en los centros que no alcancen la cifra antes señalada, y para su elaboración se seguirán las especificaciones contempladas en los artículos anteriores en relación con los planes de instalaciones productivas.

2. Los mencionados planes de movilidad promoverán especialmente el acceso a pie, en bicicleta y en transporte público. Contemplarán en tal sentido tanto las infraestructuras necesarias en relación con estacionamiento de bicicletas, accesos peatonales-ciclistas, conexiones y paradas para el transporte público etc., como las acciones formativas y divulgativas destinadas a promover el uso de los modos no motorizados y del transporte público, tanto en sus desplazamientos de acceso al centro como en general.

CAPÍTULO IV

Derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la movilidad y el transporte público

Artículo 16. Derechos y obligaciones

1. En relación con la movilidad, las personas que residan en la Comunitat Valenciana tienen derecho a:

a) Optar por el modo que entiendan más adecuado a sus necesidades de entre aquellos que estén a su disposición.

b) Disponer del servicio básico de transporte público con independencia de su punto de residencia.

c) Disponer de alternativas seguras, cómodas y de calidad para sus desplazamientos no motorizados.

d) La prestación de los servicios de transporte con niveles adecuados de calidad y seguridad.

e) Disponer de la información necesaria para elegir el modo más adecuado y planificar el desplazamiento adecuadamente.

f) Presentar de forma gratuita ante la autoridad de transporte y los operadores las denuncias, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas en relación con el servicio de transporte público.

g) Participar en la toma de decisiones en relación con la movilidad de acuerdo con los procedimientos previstos en esta ley y en el resto de normativa aplicable.

2. Quienes utilicen los servicios de transporte deberán seguir las pautas de comportamiento y de uso establecidas en esta ley y en la normativa que la desarrolla, y en todo caso se observará una actitud respetuosa hacia el resto de las personas usuarias y del personal de las empresas operadoras, con la seguridad y con la calidad ambiental de los diversos modos, y con el entorno.

3. Los derechos y obligaciones de la presente ley se extienden a la totalidad de las personas con independencia de su edad o de sus limitaciones personales, en relación con el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.

Artículo 17. Participación ciudadana

1. Asiste a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a conocer y participar en la planificación y regulación en materia de movilidad y transporte, de acuerdo con los instrumentos previstos en la normativa vigente.

2. Las administraciones asegurarán la mayor divulgación y conocimiento posible de los documentos aprobados provisional o definitivamente, mediante la utilización de todos los procedimientos que estén en su mano y especialmente mediante su difusión a través de Internet.

3. En los casos en los que se estime necesario, la administración formulará una encuesta pública previa a la adopción de sus decisiones en materia de planificación y regulación. A tal efecto abrirá un trámite público de inscripción previa, tras el cual someterá sus propuestas a debate bien de manera directa bien mediante medios telemáticos. Los resultados de tal procedimiento serán tenidos en cuenta por la administración y su aceptación o denegación, que será en todo caso motivada, se integrará en el expediente correspondiente.

4. La autoridad de transporte competente podrá conformar, tras el correspondiente trámite de inscripción previa, paneles de usuarios y usuarias de servicios o zonas determinadas. Las personas inscritas en los paneles serán consultadas con motivo de los cambios relevantes

informació directa de les alteracions que es consideren rellevants, i, almenys, una vegada a l'any seran convocades en assemblea.

Article 18. Obligacions dels operadors de transport

1. En tot transport públic de viatgers els danys que patisquen estos hauran d'estar coberts per una assegurança, en els termes que establezca la legislació específica sobre la matèria, en la mesura que els danys mencionats no estiguen coberts per l'asseguramça de responsabilitat civil de subscripció obligatòria prevista en la Llei de Responsabilitat i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor.

2. Els operadors informaran degudament sobre els seus servicis. Informaran igualment de les alteracions d'estos en el termini més breu possible, així com de les mesures preses per a assegurar servicis alternatius sempre que això fóra possible.

3. El personal de les empreses operadores de transport proporcionarà als usuaris i a les usuàries tota la informació que demanen sobre els servicis i les seues alteracions, i, en qualsevol cas, aplicaran en el tracte normes de comportament semblants a les obligatòries per al personal funcionari. En qualsevol cas, el personal que per raó del seu lloc de treball tinga relació amb les persones usuàries haurà d'estar degudament identificat.

4. Els operadors facilitaràn a les persones usuàries dels seus servicis la presentació i tramitació de queixes i reclamacions, a través dels mitjans telemàtics que reglamentàriament es determinen.

5. Els vehicles i les instal·lacions hauran de ser mantinguts en les millors condicions possibles de neteja i confort climàtic i sonor, i, en qualsevol cas, donaran estricte compliment al que estableix el contracte d'operació de servicis públics i la normativa aplicable.

6. Els operadors de transport interurbans facilitaràn la intermodalitat amb la bicicleta i en permetran el trasllat en els vehicles, fins a un límit igual al 20% de places assegudes, com també les possibilitats de lloguer i estacionament en les estacions i baixadors. Esta obligació s'incorporarà a tots els contractes de servicis públics de transport a subscriure des de l'entrada en vigor d'esta llei, com també als prèviament vigents en un termini de cinc anys. En els casos en què tal possibilitat siga tècnicament inviable s'arbitraran les solucions alternatives corresponents d'acord amb el que reglamentàriament s'establezca.

Article 19. Obligacions dels usuaris i de les usuàries del transport públic

1. Els qui utilitzen el transport públic hauran de disposar, durant l'estada en els vehicles i en resta d'instal·lacions del sistema que es determine, del corresponent títol de transport vàlid. L'estada en estos llocs sense la possessió del títol degudament cancel·lat/validat, en iniciar el viatge i/o a l'inici del trasbordi, podrà implicar l'aplicació d'un títol diferent, amb un import establert en les tarifes aplicables en la data dels fets, i en relació amb el perjudici públic que poguera suposar el comportament esmentat, i s'avaluaran els danys i perjudicis ocasionats amb independència d'altres despeses i accions sancionadores, administratives, civils o d'una altra índole que procediren.

2. Els usuaris i les usuàries hauran d'atendre les indicacions del personal de l'operador de transport amb vista a garantir unes condicions adequades de prestació dels servicis.

Article 20. Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana

1. Es crea el Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de participació ciutadana en matèria de mobilitat, amb l'objecte d'analitzar l'evolució de la mobilitat i en particular el grau d'avanç en relació amb els objectius plantejats en esta llei, així com informar sobre els diversos instruments en esta previstos i promoure les accions addicionals que es consideren convenientes en relació amb els objectius mencionats.

2. El Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana integrarà administracions, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, persones expertes en la matèria i associacions de consumidors i usuaris, així com altres actors socials i econòmics rellevants en relació amb la mobilitat, com ara empreses operadores de servicis, associacions de comerciants, associacions de persones amb mobilitat reduïda, etc.

en los servicios, recibirán información directa de las alteraciones que se estimen relevantes, y al menos una vez al año serán convocadas en asamblea.

Artículo 18. Obligaciones de los operadores de transporte

1. En todo transporte público de viajeros los daños que sufran éstos deberán estar cubiertos por un seguro, en los términos que establezca la legislación específica sobre la materia, en la medida en que dichos daños no estén cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria previsto en la Ley de Responsabilidad y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

2. Los operadores informarán debidamente sobre sus servicios. Informarán igualmente de las alteraciones de éstos en el plazo más breve posible, así como de las medidas tomadas para asegurar servicios alternativos siempre que ello fuera posible.

3. El personal de las empresas operadoras de transporte proporcionará a los usuarios y usuarias toda la información que demanden sobre los servicios y sus alteraciones, y en todo caso aplicarán en el trato normas de comportamiento semejantes a las obligatorias para el personal funcionario. En todo caso, el personal que en razón de su puesto de trabajo tenga relación con las personas usuarias deberá estar debidamente identificado.

4. Los operadores facilitarán a las personas usuarias de sus servicios la presentación y tramitación de quejas y reclamaciones, a través de los medios telemáticos que reglamentariamente se determinen.

5. Los vehículos e instalaciones deberán ser mantenidos en las mejores condiciones posibles de limpieza y confort climático y sonoro, y en todo caso dando estricto cumplimiento a lo previsto en el contrato de operación de servicio público y en la normativa aplicable.

6. Los operadores de transporte interurbanos facilitarán la intermodalidad con la bicicleta permitiendo su traslado en los vehículos, hasta un límite igual al 20% de plazas sentadas, así como las posibilidades de alquiler y estacionamiento en las estaciones y apeaderos. Tal obligación se incorporará a todos los contratos de servicio público de transporte a suscribir desde la entrada en vigor de esta ley, así como a los previamente vigentes en un plazo de cinco años. En los casos en los que tal posibilidad sea técnicamente inviable se arbitrarán las soluciones alternativas correspondientes de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca.

Artículo 19. Obligaciones de los usuarios y usuarias del transporte público

1. Quienes utilicen el transporte público deberán disponer, durante su estancia en los vehículos y resto de instalaciones del sistema que se determine, del correspondiente título de transporte válido. La estancia en tales lugares sin la posesión del título debidamente cancelado/validado, al iniciar el viaje y/o al inicio del trasbordo, podrá implicar la aplicación de un título diferente, con un importe establecido en las tarifas aplicables en la fecha de los hechos, y en relación con el perjuicio público que pudiera suponer dicho comportamiento, evaluándose los daños y perjuicios ocasionados con independencia de otros gastos y acciones sancionadoras, administrativas, civiles o de otra índole que procediesen.

2. Los usuarios y las usuarias deberán atender las indicaciones del personal del operador de transporte en orden a garantizar unas condiciones adecuadas de prestación de los servicios.

Artículo 20. Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana

1. Se crea el Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, como órgano de participación ciudadana en materia de movilidad, con el objeto de analizar la evolución de la movilidad y en particular el grado de avance en relación con los objetivos planteados en esta Ley, así como informar los diversos instrumentos en ella previstos y promover las acciones adicionales que se estimen convenientes en relación con dichos objetivos.

2. El Foro de la Movilidad de la Comunitat Valenciana integrará a Administraciones, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, personas expertas en la materia y asociaciones de consumidores y usuarios, así como otros actores sociales y económicos relevantes en relación con la movilidad, tales como empresas operadoras de servicios, asociaciones de comerciantes, asociaciones de personas con movilidad reducida, etc.

3. La seua constitució, la formació i el funcionament seran regulats pel corresponent reglament. En tot allò no previst explícitament, caldrà ajustar-se a la regulació continguda en la Llei de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana i en la seua normativa de desplegament.

4. Es reunirà, almenys, una vegada al semestre, i se sotmetrà a la seua consideració un informe sobre l'evolució de la mobilitat en el conjunt de la Comunitat Valenciana, així com tots aquells assumptes que es consideren convenients.

5. Podran crear-se fóruns de mobilitat en relació amb àmbits integrats específics, bé d'àmbit municipal o metropolità.

TÍTOL II Transport de viatgers

CAPÍTOL I El servei públic de transport

Secció primera Tipus i planificació dels serveis de transport

Article 21. Transport de viatgers

1. A l'efecte d'esta llei, el transport de viatgers és el realitzat a càrrec de tercers contra la corresponent contraprestació econòmica.

2. Els transports de viatgers es classifiquen en:

a) Servei públic de transport, entès com a tal l'ofert a la ciutadania, d'acord amb un calendari i horari prèviament establits.

b) Serveis de transport de viatgers prestats de manera reiterada a col·lectius específics.

c) Transport discrecional de viatgers.

d) Servei de taxi prestat en turismes.

3. Els serveis de transport assenyalats en els apartats a, b i d del punt anterior es prestaran d'acord amb el que estableix la present llei. Els serveis discrecionals de transport s'acomodarán al que estableix la legislació estatal en la matèria.

4. La prestació de serveis de transport podrà efectuar-se per mitjà de sistemes ferroviaris, viaris o amb una combinació d'estos, segons siga més convenient.

5. No tindran la consideració de transport de viatgers, a l'efecte d'esta llei, els que es desenvolupen en recintes tancats o els que es realitzen exclusivament amb el caràcter d'atracció turística.

Article 22. El servei públic de transport. Fins i competències

1. Per mitjà de la prestació dels serveis públics de transport, les administracions públiques competents conformen una oferta integrada de mobilitat amb vista a assegurar a ciutadans i ciutadanes les seues opcions d'accés als serveis i equipaments, al treball, a la formació i a la resta de destinacions que se sol·liciten.

2. La Generalitat és l'autoritat de transport competent per a la provisió dels serveis públics de transport a la Comunitat Valenciana. L'exercici d'esta competència s'exercirà per mitjà de l'Agència Valenciana de Mobilitat.

3. Els ajuntaments són les autoritats de transport competents en la provisió de serveis públics de transport dins dels seus termes municipals, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local, el que preveu esta llei, la normativa que la desenvolupe i els instruments de coordinació que, d'acord amb la normativa mencionada, s'establisquen per a assegurar la integració del sistema de transports.

4. Les distintes administracions podran convindre la prestació conjunta dels serveis públics de transport, i delegar les seues competències en el cas que fóra convenient en l'Agència Valenciana de Mobilitat o en altres administracions locals o mancomunitats municipals.

5. Correspon a cadascuna de les autoritats de transport competents l'ordenació, la planificació, la gestió i la prestació dels serveis públics de transport, bé mitjançant operador intern, en l'accepció del Reglament CE 1370/2007, o mitjançant l'operador seleccionat d'acord amb la normativa aplicable.

6. La prestació dels serveis públics de transport que corresponguen a la Generalitat en virtut de delegació o comanda per part de l'administració general de l'Estat, o conveni previ amb altres comunitats autò-

3. Su constitución, formación y funcionamiento serán regulados por el correspondiente reglamento. En todo lo no previsto explícitamente, se estará a la regulación contenida en la Ley de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana y en su normativa de desarrollo.

4. Se reunirá al menos una vez al semestre, siendo sometido a su consideración un informe sobre la evolución de la movilidad en el conjunto de la Comunitat Valenciana, así como todos aquellos asuntos que se estimen convenientes.

5. Podrán crearse foros de movilidad en relación con ámbitos integrados específicos, bien de ámbito municipal o metropolitano.

TÍTULO II Transporte de viajeros

CAPÍTULO I El servicio público de transporte

Sección primera Tipos y planificación de los servicios de transporte

Artículo 21. Transporte de viajeros

1. A los efectos de esta ley, transporte de viajeros es el realizado por cuenta de terceros contra la correspondiente contraprestación económica.

2. Los transportes de viajeros se clasifican en:

a) Servicio público de transporte, entendido como tal el ofertado a la ciudadanía, de acuerdo con un calendario y horario previamente establecidos.

b) Servicios de transporte de viajeros prestados de manera reiterada a colectivos específicos.

c) Transporte discrecional de viajeros.

d) Servicio de taxi prestado en turismos.

3. Los servicios de transporte señalados en los apartados a, b y d del punto anterior se prestarán de acuerdo con lo establecido en la presente ley. Los servicios discrecionales de transporte se acomodarán a lo establecido en la legislación estatal en la materia.

4. La prestación de servicios de transporte podrá efectuarse mediante sistemas ferroviarios, viarios o con una combinación de ellos, según resulte más conveniente.

5. No tendrán la consideración de transporte de viajeros, a los efectos de esta ley, los que se desarrollen en recintos cerrados o los que se realicen exclusivamente con el carácter de atracción turística.

Artículo 22. El servicio público de transporte. Fines y competencias

1. Mediante la prestación de los servicios públicos de transporte, las administraciones públicas competentes conforman una oferta integrada de movilidad en orden a asegurar a ciudadanos y ciudadanas sus opciones de acceso a los servicios y equipamientos, al trabajo, a la formación y a los restantes destinos que sean demandados.

2. La Generalitat es la autoridad de transporte competente para la provisión de los servicios públicos de transporte en la Comunitat Valenciana. El ejercicio de tal competencia se ejercerá mediante la Agencia Valenciana de Movilidad.

3. Los ayuntamientos son las autoridades de transporte competentes en la provisión de servicios públicos de transporte dentro de sus términos municipales, de acuerdo con lo establecido en la legislación de régimen local, lo previsto en esta Ley, la normativa que la desarrolle y los instrumentos de coordinación que, de acuerdo con dicha normativa, se establezcan para asegurar la integración del sistema de transportes.

4. Las distintas administraciones podrán convenir la prestación conjunta de los servicios públicos de transporte, delegando sus competencias en caso de que resultara conveniente en la Agencia Valenciana de Movilidad o en otras administraciones locales o mancomunidades municipales.

5. Corresponde a cada una de las autoridades de transporte competentes la ordenación, planificación, gestión y prestación de los servicios públicos de transporte bien mediante operador interno, en la acepción del Reglamento CE 1370/2007, o mediante el operador seleccionado de acuerdo con la normativa aplicable.

6. La prestación de los servicios públicos de transporte que correspondan a la Generalitat en virtud de delegación o encomienda por parte de la administración general del Estado, o previo convenio con otras

nomes, s'acomodarà al que preveu esta llei en el que no s'oposa a la legislació de l'Estat, sense perjudi de la resta de legislacions que siguen d'aplicació.

Article 23. Pla de Transport Públic de la Comunitat Valenciana

1. El Pla de Transport Públic de la Comunitat Valenciana es defineix com l'instrument d'ordenació general del sistema de transport en l'àmbit esmentat. El pla s'establirà de manera coordinada amb la planificació estatal i municipal, i es tindran en compte les estratègies i els plans de mobilitat vigents i la resta de planificacions territorials i sectorials.

2. Correspon al pla:

a) Determinar els nodes essencials del sistema de transport que correspondran als centres metropolitanos, capçaleres comarcals i nuclis d'especial rellevància.

b) Definir les connexions essencials entre estos i les xarxes que en cada àmbit metropolità o comarcal asseguren un nivell adequat de cobertura per part del transport públic.

c) Indicar per a cada una de les connexions essencials el mode de transport aconsellable, i en relació amb això les necessitats en matèria d'infraestructures de transport.

d) Establir una distribució orientativa dels serveis amb vista a elaborar els projectes de servei públic de transport en cada zona o itinerari bàsic.

e) Fixar els criteris bàsics en relació amb els serveis de transport destinats a col·lectius específics i amb els serveis de taxi.

3. El pla serà formulat i aprovat per la conselleria competent en la matèria. Fins que no es produïssa la seua aprovació podran formular-se projectes de servei públic de transport d'acord amb els principis generals d'esta llei i els criteris assenyalats en els punts anteriors.

4. Podran formular-se plans zonals amb contingut semblant als assenyalats en els punts anteriors en aquells àmbits en què es considere convenient.

5. Les propostes del Pla de Transport Públic de la Comunitat Valenciana, així com les dels plans zonals, hauran de tindre en compte les determinacions establides per l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

6. Es promourà la participació ciutadana en l'elaboració del pla a través dels instruments continguts en la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Secció segona
Projecte de servei públic de transports

Article 24. Definició i contingut essencial

1. Per mitjà del projecte de servei públic de transport es defineixen els aspectes bàsics de prestació d'un determinat servei, i es permet la seua ulterior comanda o licitació, així com la coordinació amb altres serveis i el desenvolupament del tràmit d'informació pública.

2. El projecte de servei públic de transport podrà estendre's a un àmbit o itinerari determinat, a la creació o a l'extensió de línies dins de les xarxes existents, o a qualsevol altre element substancial que suplemente serveis que ja es prestaven amb anterioritat.

3. Correspon a l'administració competent en cada cas la formulació del projecte de servei públic de transport d'acord amb els criteris generals d'esta llei, i, si és el cas, amb els instruments de planificació de transport vigents en l'àmbit considerat.

4. Els operadors podran presentar a l'administració actuant propostes de projectes de servei públic de transports, que podran ser admeses o no per aquella en relació amb el seu interès públic. En el cas que s'optara per la seua formulació i ulterior licitació, el proponent inicial tindrà dret al reemborsament dels honoraris professionals corresponents a la proposta inicial en el cas que no fóra adjudicatari, dins dels límits que reglamentàriament s'establisquen, sempre que l'adjudicatari final no pertanyi a estiga relacionat amb el mateix grup empresarial del proponent.

Article 25. Contingut específic

El projecte de servei públic de transport inclourà:

comunitats autònoms, se acomodarà a lo previsto en esta ley en lo que no se oponga a la legislación del Estado, sin perjuicio de las restantes legislaciones que resulten de aplicación.

Artículo 23. Plan de Transporte Público de la Comunitat Valenciana

1. El Plan de Transporte Público de la Comunitat Valenciana se define como el instrumento de ordenación general del sistema de transporte en dicho ámbito. El plan se establecerá de manera coordinada con la planificación estatal y municipal, teniendo en cuenta las estrategias y planes de movilidad vigentes y las restantes planificaciones territoriales y sectoriales.

2. Corresponde al plan:

a) Determinar los nodos esenciales del sistema de transporte que corresponderán a los centros metropolitanos, cabeceras comarcals y núcleos de especial relevancia.

b) Definir las conexiones esenciales entre ellos y las redes que en cada ámbito metropolitano o comarcal aseguran un nivel adecuado de cobertura por parte del transporte público.

c) Indicar para cada una de las conexiones esenciales el modo de transporte aconsejable, y en relación con ello las necesidades en materia de infraestructuras de transporte.

d) Establecer una distribución orientativa de los servicios en orden a elaborar los proyectos de servicio público de transporte en cada zona o itinerario básico.

e) Fijar los criterios básicos en relación con los servicios de transporte destinados a colectivos específicos y con los servicios de taxi.

3. El Plan será formulado y aprobado por la conselleria competente en la materia. En tanto no se produzca su aprobación podrán formularse proyectos de servicio público de transporte de acuerdo con los principios generales de esta ley y los criterios señalados en los puntos anteriores.

4. Podrán formularse planes zonales con contenido semejante a los señalados en los puntos anteriores en aquellos ámbitos en los que se considere conveniente.

5. Las propuestas del Plan de Transporte Público de la Comunitat Valenciana, así como las de los planes zonales, deberán tener en cuenta las determinaciones establecidas por la Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

6. Se promoverá la participación ciudadana en la elaboración del Plan a través de los instrumentos contenidos en la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Sección segunda
Proyecto de servicio público de transports

Artículo 24. Definición y contenido esencial

1. Mediante el proyecto de servicio público de transporte se definen los aspectos básicos de prestación de un determinado servicio, permitiendo su ulterior encomienda o licitación, así como la coordinación con otros servicios y el desarrollo del trámite de información pública.

2. El proyecto de servicio público de transporte podrá extenderse a un ámbito o itinerario determinado, a la creación o extensión de líneas dentro de redes existentes, o a cualquier otro elemento substancial que suplemente servicios que ya se venían prestando con anterioridad.

3. Corresponde a la administración competente en cada caso la formulación del proyecto de servicio público de transporte de acuerdo con los criterios generales de esta ley, y en su caso con los instrumentos de planificación de transporte vigentes en el ámbito considerado.

4. Los operadores podrán presentar a la administración actuante propuestas de proyectos de servicio público de transportes, que podrán ser admitidos o no por aquella en relación con su interés público. En caso de que se optase por su formulación y ulterior licitación, el proponente inicial tendrá derecho al reembolso de los honorarios profesionales correspondientes a la propuesta inicial en caso de que no resultara adjudicatario, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan siempre que el adjudicatario final no pertenezca o esté relacionado con el mismo grupo empresarial del proponente.

Artículo 25. Contenido específico

El proyecto de servicio público de transporte incluirá:

1. L'àmbit de prestació, que podrà ser definit en relació amb determinats itineraris, relacions entre nuclis o zones homogènies.

2. Els serveis que per formar part de les obligacions de servei públic tinguen la condició de bàsics.

3. Els serveis addicionals que han de ser prestats per l'operador sense cap compensació.

4. Els límits i les condicions dels serveis suplementaris que puguen ser prestats per decisió de l'operador.

5. Les condicions d'exclusivitat amb què es presten els serveis.

6. Les determinacions referents als títols de transport, propis o integrats, i al seu corresponent marc tarifari, d'acord, en qualsevol cas, amb allò que s'ha indicat en el següent article.

7. Les estipulacions en relació amb terminals, horaris, informació i altres aspectes que siguen necessaris per a la coordinació amb altres serveis de transport.

8. La informació necessària en relació amb les infraestructures que hagen d'utilitzar-se i, si és el cas, els peatges, els cànonos o els lloguers que hagen de ser abonats per l'operador.

9. El règim de coordinació amb altres serveis de transport.

10. La compensació màxima de servei públic que corresponga a l'operador, així com el procediment objectiu i transparent sobre la base del qual s'ha de calcular esta compensació en el cas que procedisca. La compensació no podrà excedir la incidència financera neta derivada de l'execució de les obligacions de servei públic en els costos i els ingressos de l'operador, i es tindran en compte els ingressos corresponents conservats per l'operador de servei públic, i l'existència d'un benefici empresarial raonable.

11. L'estudi econòmic financer que acredite la viabilitat del servei d'acord amb la demanda i els ingressos tarifaris previstos, les compensacions per prestació de servei públic, i els altres ingressos que procedisca considerar.

12. Les condicions de qualitat en la prestació dels serveis, i s'indiquen tant els requisits mínims com els nivells idonis i, si és el cas, les variacions en més o en menys del règim de compensacions assenyalat en el punt anterior en relació amb el grau de compliment de l'objectiu mencionat.

13. Les característiques dels vehicles o de les unitats ferroviàries o tramviàries adscrites al servei, on s'indica igualment si estos han de ser propietat de l'operador o si són proporcionats per l'administració. S'indica igualment si han d'estar adscrites en exclusiva a la prestació dels serveis, les condicions de manteniment, i si procedix o no la seua adquisició per part de l'administració actuant al final del termini del contracte.

14. Els mitjans tècnics i els altres requisits de caràcter laboral i organitzatiu que es consideren imprescindibles per a la prestació del servei.

15. Les instal·lacions i els serveis addicionals que ha de prestar l'operador, tant en matèria d'informació a l'usuari i altres que siguen d'interès, així com, si és el cas, l'obligació de l'ús d'estacions o terminals de viatgers.

16. El termini total de prestació dels serveis, així com, si és el cas, els terminis parcials corresponents a fases successives d'ampliació o modificació d'estos.

El projecte identificarà els elements bàsics de prestació del servei, i els diferenciarà d'aquells que poden ser ampliatos o millorats en el transcurs del termini contractual.

El projecte inclourà igualment aquelles determinacions addicionals que reglamentàriament se determinen, així com aquelles altres que siguen pertinents per al compliment dels seus fins.

17. Els aspectes de caràcter ambiental dels mitjans de transport i el seu impacte.

Article 26. Tramitació

1. El projecte de servei públic de transport serà aprovat inicialment per l'administració competent i sotmés a informació pública i informe de la resta d'administracions afectades. Es donarà igualment trasllat a altres operadors afectats, bé per la coincidència de serveis o zones afectades, o per les necessitats de coordinació establides, així com, si és el cas, als concessionaris d'obra pública que pogueren estar afectats pels nous serveis.

1. El ámbito de prestación, que podrá ser definido en relación con determinados itinerarios, relaciones entre núcleos o zonas homogéneas.

2. Los servicios que por formar parte de las obligaciones de servicio público tengan la condición de básicos.

3. Los servicios adicionales que deben ser prestados por el operador sin compensación alguna.

4. Los límites y condiciones de los servicios suplementarios que puedan ser prestados por decisión del operador.

5. Las condiciones de exclusividad con la que se presten los servicios.

6. Las determinaciones referentes a los títulos de transporte, propios o integrados, y a su correspondiente marco tarifario, de acuerdo en todo caso con lo indicado en el siguiente artículo.

7. Las estipulaciones en relación con terminales, horarios, información y otros aspectos que resulten necesarios para la coordinación con otros servicios de transporte.

8. La información necesaria en relación con las infraestructuras que deban utilizarse y en su caso, los peajes, cánones o alquileres que deban ser abonados por el operador.

9. El régimen de coordinación con otros servicios de transporte.

10. La compensación máxima de servicio público que corresponda al operador, así como el procedimiento objetivo y transparente sobre cuya base debe calcularse tal compensación en caso de que proceda. La compensación no podrá exceder la incidencia financiera neta derivada de la ejecución de las obligaciones de servicio público en los costes e ingresos del operador, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes conservados por el operador de servicio público, y la existencia de un beneficio empresarial razonable.

11. El estudio económico financiero que acredite la viabilidad del servicio de acuerdo con la demanda e ingresos tarifarios previstos, las compensaciones por prestación de servicio público, y los demás ingresos que proceda considerar.

12. Las condiciones de calidad en la prestación de los servicios, indicando tanto los requisitos mínimos como los niveles idóneos y, en su caso, las variaciones en más o en menos del régimen de compensaciones señalado en el punto anterior en relación con el grado de cumplimiento de dicho objetivo.

13. Las características de los vehículos o unidades ferroviarias o tranviarias adscritas al servicio, indicándose igualmente si éstos deben ser propiedad del operador o si son proporcionados por la administración. Se indicará igualmente si deben estar adscritas en exclusiva a la prestación de los servicios, las condiciones de mantenimiento, y si procede o no su adquisición por la administración actuante al final del plazo del contrato.

14. Los medios técnicos y los demás requisitos de carácter laboral y organizativo que se consideren imprescindibles para la prestación del servicio.

15. Las instalaciones y servicios adicionales que debe prestar el operador, tanto en materia de información al usuario y otros que resulten de interés, así como en su caso la obligación del uso de estaciones o terminales de viajeros.

16. El plazo total de prestación de los servicios, así como en su caso los plazos parciales correspondientes a fases sucesivas de ampliación o modificación de los mismos.

El proyecto identificará los elementos básicos de prestación del servicio, diferenciándolos de aquellos que pueden ser ampliados o mejorados en el transcurso del plazo contractual.

El proyecto incluirá igualmente aquellas determinaciones adicionales que reglamentariamente se determinen, así como aquellas otras que resulten pertinentes para el cumplimiento de sus fines.

17. Los aspectos de carácter ambiental de los medios de transporte y su impacto.

Artículo 26. Tramitación

1. El proyecto de servicio público de transporte será aprobado inicialmente por la administración competente y sometido a información pública e informe de las restantes administraciones afectadas. Se dará igualmente traslado a otros operadores afectados, bien por la coincidencia de servicios o zonas afectadas, o por las necesidades de coordinación establecidas, así como en su caso a los concesionarios de obra pública que pudieran estar afectados por los nuevos servicios.

2. Conclòs el període d'informació pública i informe institucional, es procedirà a l'aprovació del projecte i a la seua licitació o comanda, segons siga procedent.

3. Una vegada produïda l'aprovació precedent, el document resultant de servici públic de transports serà publicat per mitjà de procediments telemàtics i traslladat a tota la resta d'administracions afectades. En el cas que el procediment de licitació admeta variacions sobre aspectes no substancials, la publicació es diferirà a l'adjudicació del contracte i a l'aprovació definitiva del projecte i s'hi inclouran les variacions derivades de l'adjudicació mencionada.

Article 27. *Termini*

1. La duració dels contractes de servici públic serà limitada i no podrà superar deu anys per als servicis d'autobús o autocar, i quinze anys per als servicis de transport de viatgers per ferrocarril o altres modes ferroviaris.

La duració dels contractes de servici públic relatius a diversos modes de transport es limitarà a quinze anys si els transports per ferrocarril o altres modes ferroviaris representen més del 50% del valor dels servicis en qüestió.

2. En cas necessari, i tenint en compte les condicions d'amortització dels actius, la duració del contracte de servici públic podrà prolongar-se, com a màxim, durant la meitat del període original, si l'operador de servici públic aporta elements de l'actiu que siguen al mateix temps significatius en relació amb la totalitat dels actius necessaris per a prestar els servicis de transport de viatgers objecte del contracte de servici públic, i que estiguen relacionats predominantment amb estos.

Article 28. *Publicitat*

1. Cada autoritat competent farà públic una vegada a l'any, en la forma que es determine reglamentàriament un informe global sobre els contractes de servici públic de transport adjudicats, i s'indicaran per a cada un d'estos les seues característiques essencials.

2. Les administracions competents faran pública, per mitjà d'anunci en el *Diari Oficial de la Unió Europea*, la seua intenció d'adjudicar directament contractes de servici públic de transport, llevat que els contractes mencionats suposen menys de 50.000 km anuals de servicis de transport. L'anunci inclourà les dades de l'administració concedent i les característiques bàsiques del servici.

Secció tercera Contractació dels servicis públics de transport

Article 29. *El contracte de servici públic de transport*

1. La prestació del servici de transport serà duta a terme per un operador vinculat a l'administració pel corresponent contracte de servici públic de transport. La prestació del servici de transport serà duta a terme per un operador intern dels definits en el Reglament CE 1370/2007 o per un operador vinculat a l'administració pel contracte corresponent de servici públic de transport.

2. El contracte de servici públic de transport establirà les obligacions de servici públic, aquells altres servicis que poden ser prestats per l'operador, i el règim inherent de compensacions i de drets d'exclusivitat que, si és el cas, corresponguera.

3. El contracte podrà establir un marc de tarifes màximes, que tindran la consideració d'obligació de servici públic quan siguen inferiors a les derivades dels costos del servici i que, per tant, donaran lloc a les compensacions previstes en els punts anteriors.

Article 30. *Formes de prestació*

1. Una vegada aprovat el projecte de servici públic de transport, i d'acord amb el que preveu el Reglament 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, sobre els servicis públics de transport per ferrocarril i per carretera, l'autoritat de transport optarà per:

a) Adjudicar el contracte de manera directa a empresa o entitat pública d'esta dependent.

b) Licitat l'operació del servici d'acord amb el que preveu esta llei i la legislació bàsica de contractació del sector públic.

2. Concluido el periodo de información pública e informe institucional, se procederá a la aprobación del proyecto y a su licitación o encomienda, según proceda.

3. Una vez producida la aprobación precedente, el documento resultante de servicio público de transportes será publicado mediante procedimientos telemáticos y trasladado a todas las restantes administraciones afectadas. En el caso de que el procedimiento de licitación admita variaciones sobre aspectos no sustanciales, la publicación se diferirá a la adjudicación del contrato y a la aprobación definitiva del proyecto, incluyendo las variaciones derivadas de dicha adjudicación.

Artículo 27. *Plazo*

1. La duración de los contratos de servicio público será limitada y no podrá superar diez años para los servicios de autobús o autocar, y quince años para los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril u otros modos ferroviarios.

La duración de los contratos de servicio público relativos a diversos modos de transporte se limitará a quince años si los transportes por ferrocarril u otros modos ferroviarios representan más del 50% del valor de los servicios en cuestión.

2. En caso necesario, y habida cuenta de las condiciones de amortización de los activos, la duración del contrato de servicio público podrá prolongarse durante, como máximo, la mitad del periodo original, si el operador de servicio público aporta elementos del activo que sean a la vez significativos en relación con la totalidad de los activos necesarios para prestar los servicios de transporte de viajeros objeto del contrato de servicio público, y que estén relacionados predominantemente con éstos.

Artículo 28. *Publicidad*

1. Cada autoridad competente hará público una vez al año, en la forma que se determine reglamentariamente, un informe global sobre los contratos de servicio público de transporte adjudicados, indicando para cada uno de ellos sus características esenciales.

2. Las administraciones competentes harán pública, mediante anuncio en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, su intención de adjudicar directamente contratos de servicio público de transporte, salvo que dichos contratos supongan menos de 50.000 km anuales de servicios de transporte. El anuncio incluirá los datos de la administración concedente y las características básicas del servicio.

Sección tercera Contratación de los servicios públicos de transporte

Artículo 29. *El contrato de servicio público de transporte*

1. La prestación del servicio de transporte será llevada a cabo por un operador vinculado a la administración por el correspondiente contrato de servicio público de transporte. La prestación del servicio de transporte será llevada a cabo por un operador interno, de los definidos en el Reglamento CE 1370/2007, o por un operador vinculado a la administración por el correspondiente contrato de servicio público de transporte.

2. El contrato de servicio público de transporte establecerá las obligaciones de servicio público, aquellos otros servicios que pueden ser prestados por el operador, y el régimen inherente de compensaciones y de derechos de exclusividad que en su caso correspondiese.

3. El contrato podrá establecer un marco de tarifas máximas, que tendrán la consideración de obligación de servicio público cuando resulten inferiores a las derivadas de los costos del servicio y que por lo tanto darán lugar a las compensaciones previstas en los puntos anteriores.

Artículo 30. *Formas de prestación*

1. Una vez aprobado el proyecto de servicio público de transporte, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios públicos de transporte por ferrocarril y por carretera, la autoridad de transporte optará por:

a) Adjudicar el contrato de manera directa a empresa o entidad pública de ella dependiente.

b) Licitat l'operació del servici de acuerdo con lo previsto en esta ley y la legislación básica de contratación del sector público.

2. Amb caràcter excepcional, l'administració actuant podrà prestar els serveis amb mitjans propis, sense que això siga obstacle per al compliment dels requisits generals establits en la normativa aplicable en matèria de transports discrecionals.

Article 31. Formes d'adjudicació i modalitats de contractació

1. La contractació dels serveis públics de transport assenyalada en l'apartat b del punt 1 de l'article anterior es realitzarà amb caràcter general per mitjà de la modalitat de concessió, per la qual l'operador gestionarà el servei al seu risc i ventura. No obstant això, l'autoritat de transport podrà emprar la resta de modalitats de contractació de serveis públics previstes en la legislació de contractació del sector públic quan així ho aconselle l'interès general.

2. L'adjudicació del contracte de servei públic de transports es realitzarà pel procediment obert o restringit, excepte en els casos en què, d'acord amb allò que s'ha indicat en els punts següents, s'opte pel procediment negociat o l'adjudicació directa.

3. Procedirà l'adjudicació del contracte de servei públic de transports pel procediment negociat en aquells supòsits prevists en la legislació de contractació del sector públic, i en particular en aquells casos en què no puga promoure's la concurrència, com també en els que les despeses de primer establiment no superen els 500.000 euros i el termini de durada dels quals siga inferior a 5 anys. Igualment podrà aplicar-se el dit procediment, per tràmit d'urgència, en els casos en què es produeixa la renúncia o l'abandó de la prestació del servei i no puga promoure's un altre procediment d'adjudicació en els terminis necessaris per a poder assegurar la continuïtat del servei. En aquest últim cas, els contractes seran precedits de l'elaboració d'un projecte simplificat, que podrà ser eximit del tràmit d'informació pública, i tindran una durada que no podrà superar dos anys.

4. Podran adjudicar-se directament els contractes menors de prestació de servei públic de transport en què la contraprestació per les obligacions de servei públic no superen els 18.000 euros i sempre que tinguen una duració inferior a un any i suposen una oferta inferior als 300.000 Vh-km.

5. L'òrgan de contractació podrà tindre en compte variants o millores sempre que esta possibilitat s'haja previst expressament en el plec de clàusules administratives particulars.

6. La selecció de l'adjudicatari es realitzarà d'acord amb la valoració dels diversos criteris establits en el plec de clàusules administratives particulars, entre les quals necessàriament figurarà el valor de les compensacions econòmiques corresponents a les obligacions de servei públic.

7. Les empreses operadores de transport hauran d'estar en possessió dels títols habilitants per a la prestació de servei de transport discrecional per carretera, de transport ferroviari, o els dos, segons siga procedent.

Article 32. Execució del contracte de servei públic de transport

1. El contracte de prestació de servei públic de transport s'executarà d'acord amb el projecte aprovat, les clàusules administratives generals i particulars i allò que s'ha indicat en el document de condicions concretes de prestació del servei a què fa referència este article.

2. L'autoritat de transports nomenarà un tècnic competent director del servei. Correspondrà al director del servei vetlar per la seua prestació d'acord amb el que preveu la legislació aplicable i el contracte. Li correspondrà igualment formalitzar la documentació necessària que acredite la prestació de les obligacions de servei públic prèviament a l'abonament de les compensacions previstes.

3. Després de la subscripció del contracte de prestació de servei públic de transport, l'operador elaborarà en el termini d'un mes un document en què fixe les condicions concretes de prestació del servei, com ara els horaris de les diverses expedicions o les freqüències de cada interval horari, el marc tarifari, els vehicles concrets adscrits a la prestació dels serveis, els punts de parada les mesures adoptades per a garantir l'accessibilitat als vehicles i en les parades i altres de similars. El document esmentat serà aprovat pel director del servei, llevat que els seus punts no siguen concordants amb el contracte i amb l'interès públic, i en este cas requerirà a l'operador perquè s'esmenen les deficiències observades en el termini adicional d'un mes.

2. Con carácter excepcional, la administración actuante podrá prestar los servicios con medios propios, sin que ello sea óbice para el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la normativa aplicable en materia de transportes discrecionales.

Artículo 31. Formas de adjudicación y modalidades de contratación

1. La contratación de los servicios públicos de transporte señalada en el apartado b del punto 1 del artículo anterior se realizará con carácter general mediante la modalidad de concesión, por la cual el operador gestionará el servicio a su riesgo y ventura. No obstante, la autoridad de transporte podrá emplear las restantes modalidades de contratación de servicios públicos previstas en la legislación de contratación del sector público cuando así lo aconseje el interés general.

2. La adjudicación del contrato de servicio público de transportes se realizará por el procedimiento abierto o restringido, salvo en los casos en los que, de acuerdo con lo indicado en los puntos siguientes, se opte por el procedimiento negociado o la adjudicación directa.

3. Procederá la adjudicación del contrato de servicio público de transportes por el procedimiento negociado en aquellos supuestos previstos en la legislación de contratación del sector público, y en particular en aquellos casos en los que no pueda promoverse la concurrencia, así como en los que los gastos de primer establecimiento no superen los 500.000 euros y cuyo plazo de duración sea inferior a 5 años. Igualmente podrá aplicarse a dicho procedimiento, por trámite de urgencia, en los casos en los que se produzca la renuncia o abandono de la prestación del servicio y no pueda promoverse otro procedimiento de adjudicación en los plazos necesarios para poder asegurar la continuidad del servicio. En este último caso, los contratos serán precedidos de la elaboración de un proyecto simplificado, que podrá ser eximido del trámite de información pública, y tendrán una duración que no podrá superar dos años.

4. Podrán adjudicarse directamente los contratos menores de prestación de servicio público de transporte en los que la contraprestación por las obligaciones de servicio público no superen los 18.000 euros y siempre que tengan una duración inferior a un año y supongan una oferta inferior a los 300.000 Vh-km.

5. El órgano de contratación podrá tener en cuenta variantes o mejoras siempre que esta posibilidad se haya previsto expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. La selección del adjudicatario se realizará de acuerdo con la valoración de los diversos criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, entre los cuales necesariamente figurará el valor de las compensaciones económicas correspondientes a las obligaciones de servicio público.

7. Las empresas operadoras de transporte deberán estar en posesión de los títulos habilitantes para la prestación de servicio de transporte discrecional por carretera, de transporte ferroviario, o ambos según proceda.

Artículo 32. Ejecución del contrato de servicio público de transporte

1. El contrato de prestación de servicio público de transporte se ejecutará de acuerdo con el proyecto aprobado, las cláusulas administrativas generales y particulares y lo indicado en el documento de condiciones concretas de prestación del servicio a que hace referencia este artículo.

2. La autoridad de transportes nombrará a un técnico competente director del servicio. Corresponderá al director del servicio velar por su prestación de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable y en el contrato. Le correspondrá igualmente formalizar la documentación necesaria que acredite la prestación de las obligaciones de servicio público previa al abono de las compensaciones previstas.

3. Tras la suscripción del contrato de prestación de servicio público de transporte, el operador elaborará en el plazo de un mes un documento en el que fije las condiciones concretas de prestación del servicio, tales como los horarios de las diversas expediciones o las frecuencias de cada intervalo horario, el marco tarifario, los vehículos concretos adscritos a la prestación de los servicios, los puntos de parada, las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad a los vehículos y en las paradas y otros similares. El citado documento será aprobado por el director del servicio, salvo que sus extremos no sean concordantes con el contrato y con el interés público, en cuyo caso requerirá al operador para que se subsanen las deficiencias observadas en el plazo adicional de un mes.

4. L'aprovació del document de condicions concretes de prestació del servei de transport serà condició prèvia per a l'inici dels serveis.

5. El document podrà ser modificat cada vegada que siga convenient per a adaptar la prestació d'estos serveis a la demanda i a l'interès públic, i sempre que estes variacions no alteren les condicions del contracte.

6. La informació donada a les persones usuàries sempre serà concordant amb el document de condicions concretes de prestació del servei. El seu contingut serà traslladat als ajuntaments afectats tant en ocasió de la seua aprovació, com de les ulteriors modificacions.

7. L'increment d'expedicions o la implantació de noves parades que no impliquen trànsits addicionals en els termes que es definen reglamentàriament es tramitarà d'acord amb el que preveu este article, sempre que no suposen una modificació del contracte.

8. Els aspectes de l'operació no regulats en el contracte o el document de condicions concretes de prestació del servei podran ser establits per l'operador de manera que el servei de transport pugua prestar-se en les millors condicions possibles.

Article 33. Utilització de mitjans de tercers i subcontractació

1. L'operador de transport podrà utilitzar mitjans materials propis o de tercers, dins dels límits que respecte d'això establisca el corresponent contracte i sempre que es complisquen les especificacions de qualitat previstes en este.

2. La subcontractació de determinats serveis a tercers s'acomodarà al que preveu esta llei, en el reglament que la desenvolupe i en la normativa de contractació del sector públic. En qualsevol cas, els prestadors hauran d'estar en possessió dels títols habilitants necessaris.

3. L'empresa operadora podrà subcontractar igualment la prestació de determinats serveis a taxis dotats de l'autorització corresponent quan l'interès públic així ho aconselle, i amb la modificació prèvia corresponent del document de condicions de prestació del servei. En aquest cas el règim aplicable als viatgers serà el del contracte de servei de transport públic pel que fa a títols, tarifes i la resta de característiques, correspondrà al titular de l'autorització de taxi la retribució que acorde amb l'operador.

Article 34. Modificació dels contractes de servei públic de transports

1. Els contractes de prestació de servei públic de transports es podran modificar d'acord amb el que s'establix en esta llei i en la reguladora de la contractació del sector públic. No tindran el caràcter de modificació de contracte les variacions en les condicions concretes de prestació del servei, que es tramitaran i s'aprovaran d'acord amb el que establix l'article 32.

2. Serà condició prèvia necessària per a la modificació del contracte aprovar la modificació del projecte de servei públic de transports.

3. La modificació podrà consistir en l'ampliació dels nuclis o de les relacions servits sempre que a la vista de l'entitat de l'oferta de transport no sembla convenient la formulació i licitació d'un nou projecte independent de prestació de servei públic de transport.

4. Serà motiu de modificació del contracte de prestació de serveis de transport l'aprovació i adjudicació d'altres contractes que puguen alterar les seues condicions essencials com ara la coincidència de trànsits o altres de similars. Estes modificacions, que es tramitaran i s'aprovaran d'acord amb el que preveu este article, incorporaran, si és el cas, una nova formulació de l'estudi econòmic, de les obligacions de servei públic i de les compensacions que respecte d'això procedisquen.

5. En el cas que es produïsquen variacions substancials de la demanda que no tinguen un caràcter conjuntural, es procedirà a modificar el projecte de servei públic de transport i a la consegüent adequació dels serveis, i procedirà, si és el cas, igualment la redefinició de les obligacions de servei públic i les corresponents prestacions. En el cas que estes modificacions foren de l'entitat que alteraren les condicions essencials del contracte, procedirà el seu rescament i la nova licitació dels serveis.

6. Les modificacions dels contractes podran tindre caràcter temporal o definitiu, fins al termini de l'acabament del contracte. En el primer

4. La aprobació del document de condicions concretes de prestació del servei de transport serà condició prèvia per a l'inici dels serveis.

5. El document podrà ser modificat cada vegada que resulte convenient per a adaptar la prestació de tals serveis a la demanda i al interès públic, i sempre que tals variacions no alteren les condicions de contracte.

6. La informació dada a les persones usuàries sempre serà concordant amb el document de condicions concretes de prestació del servei. Su contingut serà traslladat a los ayuntamientos afectados tanto con ocasión de su aprobación, como de las posteriores modificaciones.

7. El incremento de expediciones o la implantación de nuevas paradas que no impliquen tráfico adicionales en los términos que se definen reglamentariamente se tramitará de acuerdo con lo previsto en este artículo, siempre que no supongan una modificación del contrato.

8. Los aspectos de la operación no regulados en el contrato o el documento de condiciones concretas de prestación del servicio podrán ser establecidos por el operador de manera que el servicio de transporte pueda prestarse en las mejores condiciones posibles.

Artículo 33. Utilización de medios de terceros y subcontractación

1. El operador de transporte podrá utilizar medios materiales propios o de terceros, dentro de los límites que al respecto establezca el correspondiente contrato y siempre que se cumplan las especificaciones de calidad previstas en él.

2. La subcontratación de determinados servicios a terceros se acomodará a lo previsto en esta ley, en el reglamento que la desarrolle y en la normativa de contratación del sector público. En todo caso, los prestadores deberán estar en posesión de los títulos habilitantes necesarios.

3. La empresa operadora podrá subcontratar igualmente la prestación de determinados servicios a taxis dotados de la autorización correspondiente cuando el interés público así lo aconseje, y previa la modificación correspondiente del documento de condiciones concretas de prestación del servicio. En tal caso el régimen aplicable a los viajeros será el del contrato de servicio de transporte público en lo referente a títulos, tarifas y demás características, correspondiendo al titular de la autorización de taxi la retribución que acuerde con el operador.

Artículo 34. Modificación de los contratos de servicio público de transportes

1. Los contratos de prestación de servicio público de transportes podrán modificarse de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en la reguladora de la contratación del sector público. No tendrán el carácter de modificación de contrato las variaciones en las condiciones concretas de prestación del servicio, que se tramitarán y aprobarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.

2. Será condición previa necesaria para la modificación del contrato aprobar la modificación del proyecto de servicio público de transportes.

3. La modificación podrá consistir en la ampliación de los núcleos o relaciones servidos siempre que a la vista de la entidad de la oferta de transporte no parezca conveniente la formulación y licitación de un nuevo proyecto independiente de prestación de servicio público de transporte.

4. Será motivo de modificación del contrato de prestación de servicios de transporte la aprobación y adjudicación de otros contratos que puedan alterar sus condiciones esenciales tales como la coincidencia de tráfico u otras similares. Tales modificaciones, que se tramitarán y aprobarán de acuerdo con lo previsto en este artículo, incorporarán en su caso una nueva formulación del estudio económico, de las obligaciones de servicio público y de las compensaciones que al respecto procedan.

5. En caso de que se produzcan variaciones sustanciales de la demanda que no tengan un carácter coyuntural, se procederá a modificar el proyecto de servicio público de transporte y a la consiguiente adecuación de los servicios, pudiendo proceder en su caso igualmente la redefinición de las obligaciones de servicio público y las correspondientes prestaciones. En caso de que tales modificaciones fueran de tal entidad que alterasen las condiciones esenciales del contrato, procederá su rescate y la nueva licitación de los servicios.

6. Las modificaciones de los contratos podrán tener carácter temporal o definitivo, hasta el plazo de finalización del contrato. En el primer

cas les variacions s'estendran pel termini de les circumstàncies que les justifiquen.

7. L'administració, d'ofici o a instàncies dels operadors, podrà unificar diversos serveis públics de transport si així ho aconsella l'interès general. Una vegada aprovada esta unificació, es podrà optar per adjudicar el contracte resultant a l'operador constituït pels prestadors dels serveis preexistents, o per la resolució i nova licitació dels contractes.

8. En casos en què no s'estime convenient la unificació de serveis públics de transport prevista en el punt anterior, els operadors de diferents serveis públics de transport amb punts de contacte entre si podran establir un contracte de col·laboració a fi de solapar els serveis essencials, de manera que puguen prestar-se de forma conjunta i evitar el trasbors de viatgers. Estos contractes de solapament estaran subjectes a autorització per part de l'administració o les administracions competents en els serveis afectats i no podran incloure nous trànsits que tinguen reconeguts altres serveis públics de transport.

Article 35. Extinció dels contractes de servei públic de transports

1. Els contractes de servei públic de transports s'extingiran per compliment o per resolució.

2. Les causes de resolució són les següents:

- a) Incumpliment de les condicions essencials del contracte.
- b) La mort o la incapacitat sobrevinguda de l'empresari individual o l'extinció de la personalitat jurídica de l'empresa gestora del servei, llevat que es produïssa la transmissió d'estes en els termes que es determinen en la legislació de contractes del sector públic. No es considerarà que s'ha produït l'extinció de l'empresa quan canvie simplement la seua forma jurídica, però es mantinga aquella en els seus aspectes econòmic i laboral.
- c) La declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre procediment, o circumstàncies que impedisquen el normal compliment del contracte.
- d) El mutu acord entre l'administració i l'operador.
- e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- f) La demora superior a sis mesos per part de l'administració en l'entrega al contractista de la contraprestació o dels mitjans auxiliars als quals es va obligar segons el contracte.
- g) La supressió o el rescat del servei per raons d'interès públic.

h) La impossibilitat de l'explotació del servei com a conseqüència d'acords adoptats per l'administració després del contracte.

- i) Renúncia de l'operador en els casos legalment o reglamentàriament previstos.
- j) Pèrdua dels títols habilitants necessaris per a la prestació del servei.
- k) Unificació de diverses concessions d'acord amb el que estableix l'article precedent.
- l) Les establides expressament en el contracte.

3. A l'acabament del contracte de servei públic de transport, este podrà ser prorrogat excepcionalment pel temps necessari perquè es produïssa l'adjudicació a l'operador següent, temps que, en cap cas, podrà superar l'any.

Article 36. Rescat i renúncia

1. L'administració, per raó d'interès públic, podrà donar per conclòs el contracte de servei públic de transport abans de l'acabament del termini contractual. Excepte en els casos en què este es produïssa com a sanció dins d'un procediment de caducitat del contracte, l'operador tindrà dret a la indemnització que procedisca d'acord amb el que estableix el mateix contracte i la normativa reguladora de la responsabilitat patrimonial de l'administració.

2. L'operador podrà renunciar a la prestació del servei comunicant-ho amb una antelació mínima d'un any, llevat que el contracte estableisca un termini diferent.

3. En el supòsit previst en el punt anterior, així com en els altres supòsits d'extinció del contracte, l'administració adoptarà les mesures necessàries per a la prestació del servei mentre no es produïssa una nova adjudicació. Procedirà igualment la intervenció de l'administració

caso las variaciones se extenderán por el plazo de las circunstancias que las justifiquen.

7. La administración, de oficio o a instancia de los operadores, podrá unificar diversos servicios públicos de transporte si así lo aconseja el interés general. Una vez aprobada tal unificación podrá optarse por adjudicar el contrato resultante al operador constituido por los prestadores de los servicios preexistentes, o por la resolución y nueva licitación de los contratos.

8. En casos en que no se estime conveniente la unificación de servicios públicos de transporte prevista en el punto anterior, los operadores de distintos servicios públicos de transporte con puntos de contacto entre si, podrán establecer un contrato de colaboración a fin de solapar dichos servicios, de manera que puedan prestarse de forma conjunta evitando el trasbordo de viajeros. Estos contratos de solape estarán sujetos a autorización por parte de la administración o administraciones competentes en los servicios afectados y no podrán incluir nuevos tránsitos que tengan reconocidos otros servicios públicos de transporte.

Artículo 35. Extinción de los contratos de servicio público de transportes

1. Los contratos de servicio público de transportes se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

2. Las causas de resolución son las siguientes:

- a) Incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato.
- b) La muerte o incapacidad sobrevenida del empresario individual o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa gestora del servicio, salvo que se produzca la transmisión de las mismas en los términos que se determinan en la legislación de contratos del sector público. No se considerará que se ha producido la extinción de la empresa cuando cambie simplemente su forma jurídica, pero se mantenga aquella en sus aspectos económico y laboral.
- c) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento, o circunstancias que impidan el normal cumplimiento del contrato.
- d) El mutuo acuerdo entre la administración y el operador.
- e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
- f) La demora superior a seis meses por parte de la administración en la entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
- g) La supresión o rescate del servicio por razones de interés público.

h) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la administración con posterioridad al contrato.

- i) Renuncia del operador en los casos legal o reglamentariamente previstos.
- j) Pérdida de los títulos habilitantes necesarios para la prestación del servicio.
- k) Unificación de varias concesiones de acuerdo con lo previsto en el artículo precedente.
- l) Las establecidas expresamente en el contrato.

3. A la finalización del contrato de servicio público de transporte, éste podrá ser prorrogado excepcionalmente por el tiempo necesario para que se produzca la adjudicación al siguiente operador, tiempo que en ningún caso podrá superar el año.

Artículo 36. Rescate y renuncia

1. La administración, por razón de interés público, podrá dar por concluido el contrato de servicio público de transporte antes de la finalización del plazo contractual. Salvo en los casos en que tal hecho se produzca como sanción dentro de un procedimiento de caducidad del contrato, el operador tendrá derecho a la indemnización que proceda de acuerdo con lo previsto en el propio contrato y en la normativa reguladora de la responsabilidad patrimonial de la administración.

2. El operador podrá renunciar a la prestación del servicio comunicándolo con una antelación mínima de un año, salvo que el contrato establezca plazo diferente.

3. En el supuesto previsto en el extremo anterior, así como en los demás supuestos de extinción del contrato, la administración adoptará las medidas necesarias para la prestación del servicio en tanto en cuanto no se produzca una nueva adjudicación. Procederá igualmente la

en els termes assenyalats en el punt anterior quan es produïssa un abandonament parcial del servei.

Secció quarta
Títols de transport

Article 37. Títols de transport

1. Les persones que utilitzen els serveis han d'estar proveïdes del corresponent títol, que podrà ser propi de l'operador o integrat.

2. S'entén com a títols de transport integrats els emesos per una autoritat de transport bé de manera directa bé per mitjà de tercers, i que permeten l'accés a diversos serveis de transport prestats per un operador o més d'un.

3. L'expedició dels títols de transport integrats podrà ser duta a terme de manera directa per l'autoritat de transport, per operadors de transport o per altres empreses contractades a l'efecte per l'autoritat de transport.

Article 38. Suport dels títols de transport

1. Els títols de transport podran tindre suport físic, magnètic o telemàtic en els termes que reglamentàriament s'establisquen, sempre que estiguen garantits adequadament els drets de les persones usuàries i de les empreses operadores.

2. Els suports dels títols de transport de les diverses autoritats i operadors que presten servei a la Comunitat Valenciana, així com els corresponents equips fixos o embarcats, s'adequaran a les normes d'interoperativitat que establisca l'Agència Valenciana de Mobilitat.

Article 39. Tarifes

1. Els títols propis de l'operador estaran sotmesos a les tarifes màximes establides per l'administració, excepte en aquells supòsits en què, d'acord amb esta llei i amb el reglament que la desenvolupe, puguen ser establides excepcionalment pel mateix operador.

2. La retribució de l'operador en relació amb els viatgers proveïts de títols d'integració serà l'establida en el contracte de servei públic de transport. Les autoritats de transport podran establir nous títols d'integració, i fixar en este cas la contraprestació a l'operador de manera que no s'alteren les condicions econòmiques inicials de prestació del contracte. Estes compensacions i les altres condicions d'expedició i ús dels títols seran fixades per mitjà del corresponent acord que tindrà efectes semblants al contracte de prestació de serveis de transport.

3. L'autoritat de transport revisarà amb una periodicitat, almenys, anual les tarifes i les compensacions assenyalades en els punts anteriors d'acord amb l'evolució dels costos i de les circumstàncies de la demanda. En el cas que estes revisions no foren concordants amb l'evolució dels costos o amb els acords assenyalats en els punts anteriors, es procedirà a establir, incrementar o minorar la corresponent compensació per servei públic.

4. Les tarifes dels títols propis o integrats es podran establir amb caràcter zonal, en relació amb la distància, o per mitjà d'un altre procediment que es considere adequat. Seran públiques i no discriminatòries.

Les autoritats de transport i els operadors, amb un informe previ favorable de les primeres, podran subscriure acords amb altres òrgans administratius o amb diferents administracions amb la finalitat que determinats col·lectius amb condicions socials específiques tinguen reduccions en les tarifes percebudes. Estes acords fixaran les compensacions que permeten mantindre les condicions econòmiques inicials del contracte de servei públic de transport.

CAPÍTOL II

Altres transports de viatgers

Article 40. Serveis de transport reiterat per a col·lectius específics

1. Tindran la consideració de serveis de transport reiterat per a col·lectius específics, a què fa referència l'apartat 2.b de l'article 21, aquells que, suposant una oferta permanent de transport, se cenyisquen a atendre les necessitats concretes d'un col·lectiu determinat, homogeni i específic d'usuàries i usuàries, caracteritzat perquè l'origen o la desti-

intervenció de la administració en los términos señalados en el punto anterior cuando se produzca un abandono parcial del servicio.

Sección cuarta
Títulos de transporte

Artículo 37. Títulos de transporte

1. Las personas que utilicen los servicios deben ir provistas del correspondiente título, que podrá ser propio del operador o integrado.

2. Se entiende como títulos de transporte integrados los emitidos por una autoridad de transporte bien de manera directa bien mediante terceros, y que permiten el acceso a diversos servicios de transporte prestados por uno o varios operadores.

3. La expedición de los títulos de transporte integrados podrá ser llevada a cabo de manera directa por la autoridad de transporte, por operadores de transporte o por otras empresas contratadas a tal efecto por la autoridad de transporte.

Artículo 38. Soporte de los títulos de transporte

1. Los títulos de transporte podrán tener soporte físico, magnético o telemático en los términos que reglamentariamente se establezcan, siempre que queden garantizados adecuadamente los derechos de las personas usuarias y empresas operadoras.

2. Los soportes de los títulos de transporte de las diversas autoridades y operadores que presten servicio en la Comunitat Valenciana, así como los correspondientes equipos fijos o embarcados, se adecuarán a las normas de interoperatividad que establezca la Agencia Valenciana de Movilidad.

Artículo 39. Tarifas

1. Los títulos propios del operador estarán sometidos a las tarifas máximas establecidas por la administración, salvo en aquellos supuestos en los que de acuerdo con esta ley y el reglamento que la desarrolle puedan ser establecidas excepcionalmente por el propio operador.

2. La retribución del operador en relación con los viajeros provistos de títulos de integración será la establecida en el contrato de servicio público de transporte. Las autoridades de transporte podrán establecer nuevos títulos de integración, fijando en tal caso la contraprestación al operador de manera que no se alteren las condiciones económicas iniciales de prestación del contrato. Tales compensaciones y las demás condiciones de expedición y uso de los títulos serán fijadas mediante el correspondiente acuerdo que tendrá efectos similares al contrato de prestación de servicios de transporte.

3. La autoridad de transporte revisará con una periodicidad al menos anual, las tarifas y compensaciones señaladas en los puntos anteriores de acuerdo con la evolución de los costes y de las circunstancias de la demanda. En caso de que dichas revisiones no fueran concordantes con la evolución de los costes o con los acuerdos señalados en los puntos anteriores, se procederá a establecer, incrementar o minorar la correspondiente compensación por servicio público.

4. Las tarifas de los títulos propios o integrados podrán establecerse con carácter zonal, en relación con la distancia, o mediante otro procedimiento que se estime adecuado. Serán públicas y no discriminatorias.

Las autoridades de transporte y los operadores, previo informe favorable de las primeras, podrán suscribir acuerdos con otros órganos administrativos o con diferentes administraciones con la finalidad de que determinados colectivos con condiciones sociales específicas tengan reducciones en las tarifas percibidas. Tales acuerdos fijarán las compensaciones que permitan mantener las condiciones económicas iniciales del contrato de servicio público de transporte.

CAPÍTULO II

Otros transportes de viajeros

Artículo 40. Servicios de transporte reiterado para colectivos específicos

1. Tendrán la consideración de servicios de transporte reiterado para colectivos específicos, a los que hace referencia el apartado 2.b del artículo 21, aquellos que suponiendo una oferta permanente de transporte se cifan a atender las necesidades concretas de un colectivo determinado, homogéneo y específico de usuàries y usuàries, caracterizado porque

nació siga un determinat servei, centre de formació, oci o treball, edifici o conjunt d'edificis. En particular, tindran esta consideració el transport escolar, universitari, laboral, de persones usuàries de serveis socials o d'una determinada instal·lació d'oci, i semblants.

2. Els serveis de transport públic d'ús específic es prestaran d'acord amb el contracte que respecte d'això subseqüent, d'una banda, l'empresa operadora i, d'una altra, la persona jurídica o entitat organitzadora dels serveis o les persones usuàries d'estos. Reglamentàriament es determinaran les condicions i els requisits per a l'establiment i la intermediació dels serveis mencionats. Llevat que l'entitat contractant siga una entitat de dret públic, el contracte mencionat tindrà el caràcter de privat. En qualsevol cas, en este s'identificaran els drets i les garanties que corresponen als usuaris i les responsabilitats de cada una de les parts amb vista al compliment de la normativa específica en matèria de transports i la resta que siga aplicable.

3. Els serveis de transport públic d'ús específic podran ser prestats de manera directa per empreses o entitats a aquelles persones usuàries relacionades amb l'activitat principal que desenvolupen. En este cas, les empreses o entitats esmentades hauran de complir els requisits assenyalats en la legislació estatal per al transport privat complementari de viatgers.

4. La prestació dels serveis de transport públic de viatgers d'ús específic està sotmesa a autorització prèvia, en la qual s'identificarà el conjunt d'usuaris a què està destinat el servei, els itineraris i les altres característiques bàsiques del servei. Correspondrà atorgar esta autorització a l'òrgan competent de la Generalitat, excepte en els casos en què no excedisca dels límits d'un terme municipal, i en este cas correspondrà al corresponent municipi.

5. El règim tarifari dels serveis de transport públic de viatgers d'ús específic serà el fixat en el contracte escrit establert per les parts. En qualsevol cas, haurà d'existir un títol de transport o qualsevol altre mitjà d'acreditació que permeta exercir a l'usuari els seus drets en relació amb el règim d'assegurament, condicions de prestació o altres de similars.

6. El prestador dels serveis de transport públic de viatgers d'ús específic haurà d'estar en possessió, en qualsevol cas, del títol habilitant per a la prestació de serveis, d'acord amb la normativa estatal aplicable en matèria de transport discrecional, o, si és el cas, privat complementari.

7. El contracte per a la prestació dels serveis assenyalats en el present article contindrà una referència expressa al fet que els seus efectes queden supeditats a l'autorització assenyalada en aquest mateix article.

Article 41. Transport discrecional i arrendament

1. Tindran la consideració de transport discrecional de viatgers, en els termes assenyalats en l'apartat 2.c de l'article 21, els que no supongan una oferta permanent de transport i estiguen destinats a un col·lectiu específic d'usuaris.

2. El transport discrecional de viatgers es prestarà d'acord amb la normativa estatal aplicable.

3. L'arrendament de vehicles de qualsevol tipus es regirà per la normativa estatal aplicable, excepte en els casos en què es preste un servei de transport per no ser conduïts pels usuaris, i en este cas s'aplicarà el que estableix l'article següent.

Article 42. Transport públic de viatgers amb vehicles turisme de característiques especials

1. El transport de viatgers en vehicles de turisme amb unes condicions especials quant al nivell de representativitat o altres característiques excepcionals, clarament diferenciats de la resta pel preu, les prestacions mecàniques, les característiques físiques, etc., amb origen o destinació a la Comunitat Valenciana, s'adequarà al que hi ha assenyalat en la legislació estatal en la matèria, al que hi ha establert en aquesta llei i al que hi ha disposat en l'autorització administrativa corresponent.

2. Per mitjà d'un estudi específic de demanda, s'establirà la dimensió global de la flota necessària per a la prestació dels serveis.

su origen o destino sea un determinado servicio, centro de formación, ocio o trabajo, edificio o conjunto de edificios. En particular, tendrán tal consideración el transporte escolar, universitario, laboral, de personas usuarias de servicios sociales o de una determinada instalación de ocio, y similares.

2. Los servicios de transporte público de uso específico se prestarán de acuerdo con el contrato que al respecto suscriban, por una parte, la empresa operadora y, por otra, la persona jurídica o entidad organizadora de los servicios o las personas usuarias de los mismos. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el establecimiento e intermediación de dichos servicios. Salvo que la entidad contratante sea una entidad de derecho público, dicho contrato tendrá el carácter de privado. En todo caso, en él se identificarán los derechos y garantías que corresponden a los usuarios y las responsabilidades de cada una de las partes en orden al cumplimiento de la normativa específica en materia de transportes y la restante que sea aplicable.

3. Los servicios de transporte público de uso específico podrán ser prestados de manera directa por empresas o entidades a aquellas personas usuarias relacionadas con la actividad principal que desarrollen. En tal caso, las citadas empresas o entidades deberán cumplir los requisitos señalados en la legislación estatal para el transporte privado complementario de viajeros.

4. La prestación de los servicios de transporte público de viajeros de uso específico está sometido a autorización previa, en la que se identificará el conjunto de usuarios a que está destinado el servicio, los itinerarios y las demás características básicas del servicio. Corresponderá otorgar tal autorización al órgano competente de la Generalitat, salvo en los casos en los que no exceda de los límites de un término municipal, en cuyo caso corresponderá al correspondiente municipio.

5. El régimen tarifario de los servicios de transporte público de viajeros de uso específico será el fijado en el contrato escrito establecido por las partes. En todo caso, deberá existir un título de transporte o cualquier otro medio de acreditación que permita ejercer al usuario sus derechos en relación con el régimen de aseguramiento, condiciones de prestación u otros similares.

6. El prestador de los servicios de transporte público de viajeros de uso específico deberá, en todo caso, estar en posesión del título habilitante para la prestación de servicios de acuerdo con la normativa estatal aplicable en materia de transporte discrecional, o en su caso privado complementario.

7. El contrato para la prestación de los servicios señalados en el presente artículo contendrá referencia expresa a que sus efectos quedan supeditados a la autorización señalada en este mismo artículo.

Artículo 41. Transporte discrecional y arrendamiento

1. Tendrán la consideración de transporte discrecional de viajeros, en los términos señalados en el apartado 2.c del artículo 21, los que no supongan una oferta permanente de transporte y estén destinados a un colectivo específico de usuarios.

2. El transporte discrecional de viajeros se prestará de acuerdo con la normativa estatal aplicable.

3. El arrendamiento de vehículos de todo tipo se regirá por la normativa estatal aplicable, salvo en los casos en los que se preste un servicio de transporte por no ser conducidos por los usuarios, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 42. Transporte público de viajeros con vehículos turismo de características especiales

1. El transporte de viajeros en vehículos de turismo con unas condiciones especiales en razón de su nivel de representatividad u otras características excepcionales, claramente diferenciados del resto por su precio, prestaciones mecánicas características físicas, etc., con origen o destino en la Comunidad Valenciana, se adecuará a lo señalado en la legislación estatal en la materia, a lo establecido en esta ley y a lo dispuesto en la correspondiente autorización administrativa.

2. Mediante un estudio específico de demanda, se establecerá la dimensión global de la flota necesaria para la prestación de los servicios.

CAPÍTOL III
Servici de taxi

Secció primera
Concepte, àmbit d'aplicació i competències. Definicions

Article 43. Objecte, àmbit d'aplicació, règim jurídic i principis

1. L'objecte del present capítol és regular la prestació del servei de taxi, que s'entenen, a l'efecte d'esta llei, el transport públic discrecional de viatgers amb vehicles amb una capacitat igual o inferior a les nou places inclosa la del conductor, realitzat per compte d'altri, per mitjà del pagament d'un preu, en el territori de la Comunitat Valenciana.

2. La prestació del servei de taxi es regirà per la present llei i per les normes de la Generalitat que l'afecten.

3. La prestació del servei de taxi se sotmet als principis següents:

a) Intervenció administrativa per a garantir un nivell de qualitat adequat en la prestació d'este servei de transport públic.

b) Competència limitada en el sector i establiment de tarifes obligatòries dirigits a assegurar l'equilibri econòmic de l'activitat i la suficiència del servei, que es prestaran per mitjà de titulars que operen al seu risc i ventura habilitats a l'efecte per l'administració.

c) Respecte als drets dels usuaris.

4. Les necessitats de servei públic es podran establir en termes de disponibilitat temporal o espacial del servei, d'atenció de col·lectius determinats, o de l'èxit de nivells mitjans de qualitat. L'evolució inadequada dels paràmetres que respecte d'això es fixen donarà lloc a les accions administratives corresponents de l'administració competent i, si és el cas, a la redefinició del contingent total en l'àmbit considerat, o a l'establiment de noves autoritzacions centrades en la prestació dels serveis inadequadament atesos. Aquestes autoritzacions noves s'atorgaran per temps indefinit.

5. Els vehicles dotats d'autorització expedida d'acord amb el que estableix esta llei podran efectuar serveis amb origen dins de la Comunitat Valenciana i destinació en punts situats fora d'esta, d'acord amb la normativa estatal i de la Unió Europea que siga d'aplicació. En estos casos, s'aplicarà el contingut d'esta llei en tots aquells aspectes que no contravenen les legislacions estatals o regionals que pogueren ser d'aplicació en raó del territori travessat.

Article 44. Competències i àrees funcionals

1. Amb caràcter general, correspon a la Generalitat l'exercici de les competències administratives en relació amb el servei de taxi, i en particular l'establiment de la seua normativa, la determinació en cada àmbit i la circumstància del nombre màxim d'autoritzacions, el seu atorgament, l'anul·lació i el visat, la definició del marc tarifari, l'acreditació, per mitjà del procediment establert, de l'aptitud dels conductors i l'exercici de les labors inspectora i sancionadora.

2. La prestació del servei de taxi s'ordenarà per mitjà de la delimitació d'àrees funcionals caracteritzades per la possibilitat d'iniciar serveis en qualsevol dels seus punts, i per l'existència d'un marc tarifari homogeni per a totes les autoritzacions en estes residenciades. Les àrees funcionals esmentades es podran circumscriure a un sol municipi, o tindre el caràcter d'àrees de prestació conjunta quan compreguen més d'un municipi. La delimitació de les àrees de prestació conjunta s'efectuarà d'acord amb els criteris d'interès públic de cara a atendre degudament les necessitats del servei públic i, en qualsevol cas, amb un informe previ dels ajuntaments, de les associacions representatives del sector i de les associacions de consumidors i usuaris, tot això en els termes que reglamentàriament s'establisca.

3. Per raó d'interès públic i amb un informe previ dels ajuntaments afectats, de les associacions representatives i de les associacions de consumidors i usuaris, la Generalitat podrà fixar les condicions específiques en què les autoritzacions residenciades en una determinada àrea funcional puguen prendre servei en altres àrees funcionals.

4. Les competències en matèria de servei de taxi de la Generalitat seran exercides per mitjà de l'Agència Valenciana de Mobilitat. No obstant això, en els municipis de més de 20.000 habitants no integrats en àrees de prestació conjunta, estes competències continuaran sent

CAPÍTULO III
Servicio de taxi

Sección primera
Concepto, ámbito de aplicación y competencias. Definiciones

Artículo 43. Objeto, ámbito de aplicación, régimen jurídico y principios

1. El objeto del presente capítulo es regular la prestación del servicio de taxi, entendiéndose por tal, a los efectos de esta ley, el transporte público discrecional de viajeros en vehículos con una capacidad igual o inferior a las nueve plazas incluida la del conductor, realizado por cuenta ajena, mediante el pago de un precio, en el territorio de la Comunitat Valenciana.

2. La prestación del servicio de taxi se regirá por la presente ley y las normas de la Generalitat que le afecten.

3. La prestación del servicio de taxi se somete a los siguientes principios:

a) Intervención administrativa para garantizar un nivel de calidad adecuado en la prestación de este servicio de transporte público.

b) Competencia limitada en el sector y establecimiento de tarifas obligatorias dirigidos a asegurar el equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio, que se prestarán mediante titulares que operan a su riesgo y ventura habilitados al efecto por la administración.

c) Respeto a los derechos de los usuarios.

4. Las necesidades de servicio público podrán establecerse en términos de disponibilidad temporal o espacial del servicio, de atención de colectivos determinados, o del logro de niveles medios de calidad. La evolución inadecuada de los parámetros que al respecto se fijen dará lugar a las acciones administrativas correspondientes de la administración competente y, en su caso, a la redefinición del contingente total en el ámbito considerado, o al establecimiento de nuevas autorizaciones centradas en la prestación de los servicios inadecuadamente atendidos. Estas nuevas autorizaciones se otorgarán por tiempo indefinido.

5. Los vehículos dotados de autorización expedida de acuerdo con lo previsto en esta ley podrán efectuar servicios con origen dentro de la Comunitat Valenciana y destino en puntos situados fuera de ella, de acuerdo con la normativa estatal y de la Unió Europea que resulte de aplicación. En tales casos, será de aplicación el contenido de esta ley en todos aquellos aspectos que no contravengan las legislaciones estatales o regionales que pudieran resultar de aplicación en razón del territorio atravesado.

Artículo 44. Competencias y áreas funcionales

1. Con carácter general, corresponde a la Generalitat el ejercicio de las competencias administrativas en relación con el servicio de taxi, y en particular el establecimiento de su normativa, la determinación en cada ámbito y circunstancia del número máximo de autorizaciones, su otorgamiento, anulación y visado, la definición del marco tarifario, la acreditación, mediante el procedimiento establecido, de la aptitud de los conductores, y el ejercicio de las labores inspectora y sancionadora.

2. La prestación del servicio de taxi se ordenará mediante la delimitación de áreas funcionales caracterizadas por la posibilidad de iniciar servicios en cualquiera de sus puntos, y por la existencia de un marco tarifario homogéneo para todas las autorizaciones en ellas residenciadas. Dichas áreas funcionales podrán circunscribirse a un solo municipio, o tener el carácter de áreas de prestación conjunta cuando abarquen a más de un municipio. La delimitación de las áreas de prestación conjunta se efectuará de acuerdo con criterios de interés público a fin de atender debidamente las necesidades de servicio público, y en todo caso previo informe de los ayuntamientos, las asociaciones representativas del sector y asociaciones de consumidores y usuarios, en los términos todo ello que reglamentariamente se establezca.

3. Por razón de interés público y previo informe de los ayuntamientos afectados, de las asociaciones representativas y asociaciones de consumidores y usuarios, la Generalitat podrá fijar las condiciones específicas en las que las autorizaciones residenciadas en una determinada área funcional puedan tomar servicio en otras áreas funcionales.

4. Las competencias en materia de servicio de taxi de la Generalitat serán ejercidas mediante la Agencia Valenciana de Movilidad. No obstante, en los municipios de más de 20.000 habitantes no integrados en áreas de prestación conjunta tales competencias seguirán siendo ejer-

exercides pel corresponent ajuntament, i correspondran en este sentit les funcions assenyalades en el punt 1.

5. La Generalitat i els ajuntaments podran acordar la comanda de les competències que corresponen a la primera a un ajuntament o una agrupació d'estos.

6. En aquells casos en què, d'acord amb el que estableixen els punts anteriors, exercisca la competència en matèria de taxi el corresponent ajuntament, podran elaborar-se i aprovar-se les corresponents ordenances municipals reguladores de la prestació del servici, amb subjecció al que estableix la llei i les seues normes de desplegament.

Article 45. Condicions generals de prestació del servici

1. Amb caràcter general, la prestació del servici s'efectuarà per mitjà de vehicles de turisme amb un màxim de cinc places inclòs el conductor. Excepcionalment els vehicles podran ser de fins a nou places, quan es tracte de vehicles adaptats i en aquells altres supòsits en què l'interès públic així ho justifique. Reglamentàriament podran establir-se condicions objectives per a les autoritzacions de vehicles de més de nou places.

2. La prestació de servici s'efectuarà a petició de l'usuari, bé de manera directa, bé per mitjà d'un centre d'atenció a l'usuari.

Secció segona

Títols habilitants per a la prestació del servici de taxi

Article 46. Autoritzacions de taxi

1. La prestació del servici de taxi estarà sotmesa a l'obtenció prèvia de la corresponent autorització atorgada per l'òrgan competent.

2. Les autoritzacions s'atorgaran exclusivament a les persones físiques que tinguen els requisits exigits per la present llei. Les autoritzacions s'atorgaran per mitjà de concurs i de conformitat amb els procediments establits, a les quals podran concórrer les persones que acrediten el compliment dels requisits mínims establits en esta llei i la resta d'accessoris que es fixen reglamentàriament, així com en la convocatorià corresponent. En els concursos es valorarà especialment l'experiència laboral prèvia en el sector.

3. Cada autorització estarà referida a un vehicle concret identificat per la seua matrícula, sense perjudi d'altres dades que siguen exigibles.

4. Amb caràcter general, cada persona serà titular d'una única autorització. Reglamentàriament es determinaran les condicions d'acumulació de més d'una autorització en un sol titular, exclusivament en les àrees de prestació conjunta que tinguen més d'1.000 llicències, que no podran excedir el 15% del total d'autoritzacions en la dita àrea.

5. L'increment o la disminució del nombre d'autoritzacions en un mateix àmbit funcional ha de ser justificat per l'administració competent, en un estudi previ que dispose dels requisits que es determinen reglamentàriament, amb un informe previ dels ajuntaments afectats, de les associacions professionals i d'usuaris.

Article 47. Creació de noves autoritzacions

1. En els supòsits en què siga un ajuntament a qui competisca l'emissió de les corresponents autoritzacions, el tràmit s'adequarà al que estableix l'article 46.2, sense perjudi de la normativa de règim local que siga d'aplicació.

2. L'ampliació del nombre d'autoritzacions serà precedida de l'estudi assenyalat en el punt 5 de l'article anterior, informat favorablement per la Agència Valenciana de Mobilitat, estudi que analitzarà, en qualsevol cas, la possibilitat de millora del servici per mitjà de la creació d'una àrea de prestació conjunta.

3. En el cas que l'informe assenyalat en el punt anterior siga desfavorable, l'ajuntament podrà prosseguir el tràmit i atorgar l'autorització corresponent, si bé esta s'entendrà circumscriu a l'àmbit municipal, no s'habilitarà per a la realització del transport interurbà.

Article 48. Requisits per a l'obtenció de l'autorització

Per a l'obtenció i atorgament de les autoritzacions per a la prestació del servici de taxi, serà necessari acreditar davant de l'òrgan competent el compliment dels requisits següents:

1. Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'un altre Estat amb què, en virtut del que estableixen els

cidias por el correspondiente ayuntamiento, correspondiéndole en tal sentido las funciones señaladas en el punto 1.

5. La Generalitat y los ayuntamientos podrán acordar la encomienda de las competencias que corresponden a la primera a un ayuntamiento o una agrupación de ellos.

6. En aquellos casos en los que de acuerdo con lo previsto en los puntos anteriores ejerza la competencia en materia de taxi el correspondiente ayuntamiento, podrán elaborarse y aprobarse las correspondientes ordenanzas municipales reguladoras de la prestación del servicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley y en sus normas de desarrollo.

Artículo 45. Condiciones generales de prestación del servicio

1. Con carácter general, la prestación del servicio se efectuará mediante vehículos de turismo con un máximo de cinco plazas incluido el conductor. Excepcionalmente los vehículos podrán ser de hasta nueve plazas, cuando se trate de vehículos adaptados y en aquellos otros supuestos en que el interés público así lo justifique. Reglamentariamente podrán establecerse condiciones objetivas para las autorizaciones de vehículos de más de nueve plazas.

2. La prestación de servicio se efectuará a petición del usuario, bien de manera directa, bien mediante un centro de atención al usuario.

Sección segunda

Títulos habilitantes para la prestación del servicio de taxi

Artículo 46. Autorizaciones de taxi

1. La prestación del servicio de taxi estará sometida a la previa obtención de la correspondiente autorización otorgada por el órgano competente.

2. Las autorizaciones se otorgarán exclusivamente a las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos por la presente ley. Las autorizaciones se otorgarán mediante concurso y de conformidad con los procedimientos establecidos, al que podrán concurrir las personas que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en esta ley y demás accesorios que se fijen reglamentariamente, así como en la convocatorià correspondiente. En los concursos se valorará especialmente la experiencia laboral previa en el sector.

3. Cada autorización estará referida a un vehículo concreto identificado por su matrícula, sin perjuicio de otros datos que sean exigibles.

4. Con carácter general cada persona será titular de una única autorización. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acumulación de más de una autorización en un solo titular, exclusivamente en las áreas de prestación conjunta que tengan más de 1000 licencias, y que no podrán exceder del 15% del total de autorizaciones en dicha área.

5. El incremento o disminución del número de autorizaciones en un mismo ámbito funcional debe ser justificado por la administración competente, en un estudio previo que reúna los requisitos que se determinen reglamentariamente, previo informe de los ayuntamientos afectados, de las asociaciones profesionales y de usuarios.

Artículo 47. Creación de nuevas autorizaciones

1. En los supuestos en los que sea un ayuntamiento a quien compete la emisión de las correspondientes autorizaciones, el trámite se adecuará a lo señalado en el artículo 46.2, sin perjuicio de la normativa de régimen local que resulte de aplicación.

2. La ampliación del número de autorizaciones será precedida del estudio señalado en el punto 5 del artículo anterior, informado favorablemente por la Agencia Valenciana de Movilidad, estudio que analizará, en todo caso, la posibilidad de mejora del servicio mediante la creación de un área de prestación conjunta.

3. En el caso de que el informe señalado en el punto anterior sea desfavorable, el ayuntamiento podrá proseguir el trámite y otorgar la autorización correspondiente, si bien esta se entenderá circumscriu al ámbito municipal, no habilitando para la realización de transporte interurbano.

Artículo 48. Requisitos para la obtención de la autorización

Para la obtención y el otorgamiento de las autorizaciones para la prestación del servicio de taxi, será necesario acreditar ante el órgano competente el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado con el que, en virtud de lo dispues-

acords, els tractats o els convenis internacionals suscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de nacionalitat, o disposar de les autoritzacions o els permisos de treball que, d'acord amb el que estableix la legislació sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya, siguen suficients per a emparar la realització de l'activitat.

2. Capacitació per a l'exercici de l'activitat, esta s'entén com el certificat dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat, atorgat per l'òrgan administratiu que corresponga.

Reglamentàriament es determinaran els coneixements mínims exigibles, la manera d'adquirir estos coneixements i el sistema de comprovació per l'administració competent de la possessió dels coneixements exigits.

3. Honorabilitat: s'entendrà que posseeixen el requisit d'honorabilitat les persones en què no concórrega cap de les circumstàncies següents:

a) Haver sigut condemnada per sentència ferma sempre que esta supose penes privatives de llibertat superiors a un any relacionades amb l'exercici de la professió. En este cas, els titulars podran realitzar l'efectiva prestació del servei de taxi per mitjà de conductors assalariats.

b) Haver sigut sancionades de forma reiterada per resolució ferma per infraccions molt greus en matèria de transport en els termes que reglamentàriament es determinen.

c) Incumpliment molt greu i reiterat de les normes fiscals, laborals, de la Seguretat Social, seguretat viària o medi ambient.

4. De la mateixa manera, s'exigirà la corresponent solvència econòmica, i s'acreditarà tindre coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguen ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establits per la normativa vigent.

5. Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rënting o un altre règim admés per la normativa vigent.

6. Complir les obligacions laborals i socials exigides en la normativa corresponent.

7. Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la normativa vigent.

8. Qualsevol altres que normativament puguen ser exigits; en especial, referits a la millora de la seguretat en la prestació del servei.

Artículo 49. Prestación efectiva del servicio de taxi

1. Els titulars d'autoritzacions podran prestar el servei de taxi personalment, a través d'un familiar col·laborador donat d'alta en el règim corresponent de la seguretat social o a través de conductors amb contracte laboral vigent. La formalització d'estos contractes haurà de ser comunicada a l'administració, acompanyada d'una còpia del contracte en què s'indique l'horari de treball del conductor assalariat contractat.

2. Els titulars que presten el servei personalment, i els que ho fan en virtut de relació laboral, hauran de complir els requisits següents:

a) Tindre títol de capacitació professional obtingut d'acord amb el procediment reglamentàriament establert.

b) Estar inscrits com a conductors en situació d'alta en el règim que corresponga de la Seguretat Social.

c) No tindre antecedents penals.

d) Tots els altres requisits que siguen establits pels òrgans competents, en la forma que reglamentàriament es determine.

3. Aquells titulars que posseeixen més d'una autorització hauran de tindre el nombre de conductors assalariats que reglamentàriament es determine.

4. L'administració competent mantindrà un registre dels titulars de capacitació professional, així com de les seues altes i baixes.

Artículo 50. Suspensión

1. Els titulars de les autoritzacions de taxi poden sol·licitar la suspensió de la seua vigència per un període màxim de cinc anys, prorrogable per altres cinc, en el cas que, temporalment, hagen de deixar de prestar l'activitat per alguna causa justificada. Esta suspensió els l'autoritzarà o els la denegarà els òrgans que han concedit les autoritzacions per mitjà d'una resolució motivada, en el termini de dos mesos.

to en los acuerdos, tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de nacionalidad, o contar con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para amparar la realización de la actividad.

2. Capacitación para el ejercicio de la actividad, entendiéndose la misma como la certificación de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad, otorgada por el órgano administrativo que corresponda.

Reglamentariamente se determinarán los conocimientos mínimos exigibles, el modo de adquirir dichos conocimientos y el sistema de comprobación por la administración competente de la posesión de los conocimientos exigidos.

3. Honorabilidad: se entenderá que poseen el requisito de honorabilidad las personas en las que no concorra ninguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenada por sentencia firme siempre que la misma suponga penas privativas de libertad superiores a un año relacionadas con el ejercicio de la profesión. En este caso, los titulares podrán realizar la efectiva prestación del servicio de taxi mediante conductores asalariados.

b) Haber sido sancionadas de forma reiterada por resolución firme por infracciones muy graves en materia de transporte en los términos que reglamentariamente se determinen.

c) Incumplimiento muy grave y reiterado de las normas fiscales, laborales, de Seguridad Social, seguridad vial o medio ambiente.

4. Del mismo modo, se exigirá la correspondiente solvencia económica, acreditando tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse en el transcurso del servicio, en los términos establecidos por la normativa vigente.

5. Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente.

6. Cumplir las obligaciones laborales y sociales exigidas en la normativa correspondiente.

7. Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas en la normativa vigente.

8. Cualesquiera otros que normativamente puedan ser exigidos; en especial, referidos a la mejora de la seguridad en la prestación del servicio.

Artículo 49. Prestación efectiva del servicio de taxi

1. Los titulares de autorizaciones podrán prestar el servicio de taxi personalmente, a través de familiar colaborador dado de alta en el régimen correspondiente de la seguridad social o a través de conductores con contrato laboral vigente. La formalización de estos contratos deberá ser comunicada a la administración, acompañada de una copia del mismo, en la que se indique el horario de trabajo del conductor asalariado contratado.

2. Los titulares que presten el servicio personalmente, y los que lo hagan en virtud de relación laboral, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener título de capacitación profesional obtenido de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.

b) Estar inscritos como conductores en situación de alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social.

c) Carecer de antecedentes penales.

d) Cuantos otros requisitos sean establecidos por los órganos competentes, en la forma que reglamentariamente se determine.

3. Aquellos titulares que posean más de una autorización tendrán que tener el número de conductores asalariados que reglamentariamente se determine.

4. La administración competente mantendrá un registro de los titulares de capacitación profesional, así como de sus altas y bajas.

Artículo 50. Suspensión

1. Los titulares de las autorizaciones de taxi pueden solicitar la suspensión de su vigencia por un período máximo de cinco años, prorrogable por otros cinco, en el caso de que, temporalmente, deban dejar de prestar la actividad por alguna causa justificada. Esta suspensión ha de serles autorizada o denegada por los órganos que han concedido las autorizaciones mediante una resolución motivada, en el plazo de

Reglamentàriament es determinaran les causes que puguen motivar la suspensió temporal.

2. També podran ser suspeses les autoritzacions d'ofici per l'administració de conformitat amb el que estableix el règim sancionador de la present llei.

3. En el cas que l'interés públic així ho justifique, l'administració podrà atorgar les autoritzacions addicionals per a la prestació del servei de taxi amb un termini de vigència i en nombre igual a les que hagen sigut suspeses.

Article 51. Transmissió

1. Les autoritzacions són transmissibles i s'atorgaran per temps indefinit, si bé la seua validesa estarà condicionada al compliment de les condicions i els requisits establits per a l'obtenció del títol habilitant, i a la constatació periòdica de les circumstàncies mencionades i altres que es puguen exigir, per mitjà del corresponent visat, en els termes establits en la present llei i en la normativa que la desenvolupe.

Les autoritzacions de nova creació es podran transmetre una vegada es complisca el termini de sis anys des del seu atorgament, amb l'autorització prèvia de l'òrgan administratiu competent, sempre que l'adquirent dispose dels requisits exigits per a ser titular d'estes.

Excepcionalment s'admet la transmissió encara que no haja transcorregut el termini mencionat en els supòsits de defunció o incapacitat del titular, a favor del cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el registre corresponent, o dels hereus legítims.

Quan en els supòsits assenyalats en el paràgraf anterior, el cònjuge, la parella de fet o els hereus legítims no puguen explotar l'autorització per no disposar dels requisits exigits, l'autorització serà transmissible a favor de tercers.

2. Tant en el cas de noves autoritzacions com en aquelles que ja hagen sigut transmeses, es resoldran favorablement les transmissions que tinguen l'origen en la defunció o la incapacitat del seu titular, i ho siguen a favor del seu cònjuge o hereus legítims, tot i que estos no tinguen la capacitat professional exigida, encara que condicionades a l'efectiva adquisició de la capacitat mencionada, que s'haurà de verificar en els terminis següents, i mentrestant prestar el servei per mitjà de conductors assalariats a temps complet:

a) Durant els dos anys següents a la data de defunció o incapacitat del titular transmissor en el cas dels hereus legítims. Mentre els hereus legítims aconseguixen l'edat suficient per a adquirir la dita capacitat, es nomenarà un representant que tinga la capacitat necessària.

b) Durant els dos anys següents a la data de defunció, o incapacitat del titular transmissor en el cas del cònjuge o la parella de fet, excepte en el cas que l'edat d'estos siga superior a 60 anys, i en este cas no s'exigirà que estos adquirisquen la capacitat prevista en la present llei.

3. La transmissibilitat de les autoritzacions de taxi estarà condicionada, en qualsevol cas, al pagament dels tributs i les sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa que recaiguen sobre el titular per l'exercici de l'activitat.

La transmissió no es pot autoritzar si suposa la vulneració de les disposicions de l'article 48 de la present llei.

Article 52. Extinció

1. Les autoritzacions per a la prestació del servei de taxi s'extinguen per la concurrència d'alguna de les causes següents:

a) La renúncia del titular, per mitjà d'un escrit dirigit a l'òrgan que va concedir l'autorització.

b) La resolució per incompliment del titular dels requisits de l'autorització per no prestar servei habitualment en els termes que reglamentàriament es determine, o per desenvolupar la gestió o l'explotació per qualsevol forma no prevista per la present llei i el desplegament reglamentari, una vegada finalitzat l'expedient administratiu corresponent per resolució ferma.

c) La revocació, per raons d'interés públic, amb dret a la corresponent indemnització econòmica, que s'ha de calcular de conformitat amb els paràmetres objectius que determinen el seu valor real.

d) La caducitat de l'autorització per no haver obtingut el visat una vegada transcorregut el termini màxim i les seues pròrrogues, fixats legalment i reglamentàriament.

e) L'extinció per sanció.

dos meses. Reglamentàriament se determinarán las causas que puedan motivar la suspensión temporal.

2. También podrán ser suspendidas las autorizaciones de oficio por la administración de conformidad con lo dispuesto en el régimen sancionador de la presente ley.

3. En caso de que el interés público así lo justifique, la administración podrá otorgar las autorizaciones adicionales para la prestación del servicio de taxi con un plazo de vigencia y en número igual a las que hayan sido suspendidas.

Artículo 51. Transmisión

1. Las autorizaciones son transmissibles y se otorgarán por tiempo indefinido, si bien su validez quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la obtención del título habilitante, y a la constatación periódica de dichas circunstancias y otras que puedan exigirse, mediante el correspondiente visado, en los términos establecidos en la presente ley y en la normativa que la desarrolle.

Las autorizaciones de nueva creación podrán ser transmitidas una vez se cumpla el plazo de seis años desde su otorgamiento, previa autorización del órgano administrativo competente, siempre que el adquirente reúna los requisitos exigidos para ser titular de las mismas.

Excepcionalmente se admite la transmisión aunque no haya transcurrido dicho plazo en los supuestos de fallecimiento o incapacidad del titular, a favor del cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita en el registro correspondiente, o los herederos legítimos.

Cuando en los supuestos señalados en el párrafo anterior, el cónyuge, pareja de hecho o herederos legítimos no puedan explotar la autorización por no reunir los requisitos exigidos, la autorización será transmisible a favor de terceros.

2. Tanto en el caso de nuevas autorizaciones como en aquellas que ya hayan sido transmitidas, se resolverán favorablemente las transmisiones que tengan su origen en el fallecimiento o incapacidad de su titular, y lo sean a favor de su cónyuge o herederos legítimos, aun cuando los mismos no dispongan de la capacitación profesional exigida, aunque condicionadas a la efectiva adquisición de dicha capacitación, que deberá verificarse en los siguientes plazos, prestando entre tanto el servicio mediante conductores asalariados a tiempo completo:

a) Durante los dos años siguientes a la fecha de fallecimiento o incapacidad del titular transmissor en el caso de los herederos legítimos. En tanto los herederos legítimos alcancen la edad suficiente para adquirir dicha capacitación, se nombrará un representante que ostente la capacitación necesaria.

b) Durante los dos años siguientes a la fecha de fallecimiento, o incapacidad del titular transmissor en el caso del cónyuge o pareja de hecho, excepto en el caso de que la edad de los mismos sea superior a 60 años, en cuyo caso no se exigirá que los mismos adquieran la capacitación prevista en la presente ley.

3. La transmissibilidad de las autorizaciones de taxi quedará, en todo caso, condicionada al pago de los tributos y sanciones pecuniarias impuestas por resolución firme en via administrativa que recaigan sobre el titular por el ejercicio de la actividad.

La transmisión no puede autorizarse si supone la vulneración de las disposiciones del artículo 48 de la presente ley.

Artículo 52. Extinción

1. Las autorizaciones para la prestación del servicio de taxi se extinguen por la concurrència de alguna de las siguientes causas:

a) La renuncia de su titular, mediante un escrito dirigido al órgano que concedió la autorización.

b) La resolución por incumplimiento del titular de los requisitos de la autorización por no prestar servicio habitualmente en los términos que reglamentàriament se determine, o por desarrollar su gestión o explotación por cualquier forma no prevista por la presente ley y su desarrollo reglamentario, una vez finalizado el correspondiente expediente administrativo por resolución firme.

c) La revocación, por razones de interés público, con derecho a la correspondiente indemnización económica, que ha de calcularse de conformidad con los parámetros objetivos que determinan su valor real.

d) La caducidad de la autorización por no haber obtenido el visado una vez transcurrido el plazo máximo y sus prórrogas, fijados legal y reglamentàriament.

e) La extinción por sanción.

f) Per l'arrendament, la cessió o el traspàs de l'explotació de les autoritzacions i dels vehicles adscrits a estes.

2. En els casos de revocació dels títols habilitants per raons d'interès públic, l'òrgan competent podrà oferir, amb caràcter previ a la instrucció de l'oportú expedient d'extinció, la possibilitat que els titulars interessats renunciïn a la seua autorització en les condicions que es determinen en el reglament que desenvolupa la present llei.

Article 53. Visat

El visat de les autoritzacions és l'actuació per mitjà de la qual l'administració constata de forma periòdica, i sense perjudici de les facultats d'inspecció regulades en la present llei, el manteniment de les condicions que originàriament van justificar el seu atorgament.

En la normativa de desplegament de la present llei es regularan el procediment i el termini per a obtenir el visat de les autoritzacions, així com de les pròrrogues que, si és el cas, s'establisquen per al compliment d'esta obligació.

Secció tercera Vehicles i règim econòmic

Article 54. Vehicles i característiques

1. Els vehicles de turisme destinats a la prestació del servei de taxi hauran de complir els requisits que determinen les normes de desplegament d'este article quant a les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort, antiguitat màxima, prestacions, mediambientals i imatge corporativa.

L'antiguitat màxima dels vehicles es determinarà reglamentàriament, i no podran excedir de huit anys. Excepcionalment i en atenció a les especials característiques de comoditat i seguretat de determinats vehicles que es determinen reglamentàriament, es podran reconèixer com a aptes per a la prestació del servei de taxi vehicles que excedisquen de l'antiguitat assenyalada, sempre que esta no siga superior a 12 anys.

2. Les administracions competents en la matèria han de garantir l'accés de tots els usuaris i totes les usuàries als serveis de taxi, i amb esta finalitat han de promoure i assegurar la incorporació de vehicles adaptats a l'ús de persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb la normativa vigent en la matèria.

3. Els vehicles adaptats donaran servei preferent a les persones amb mobilitat reduïda, però no tindran este ús exclusiu.

4. En el cas que siga necessari substituir el vehicle amb què es realitza la prestació del servei de taxi, el nou vehicle haurà de tindre una antiguitat màxima de quatre anys.

5. L'administració competent podrà establir una normativa específica per a vehicles en relació amb la seguretat ciutadana, i podrà condicionar-ne l'activitat en determinats horaris al fet que els serveis es presten amb vehicles que reunesquen els dits requisits.

6. Reglamentàriament es determinaran la forma i les condicions per a la col·locació de publicitat en els vehicles de taxi, i se salvaguardarà sempre la imatge corporativa.

7. Els equips de cobrament telemàtic o per mitjà de targetes magnètiques o sense contacte hauran de complir la normativa tècnica que respecte d'això aprobe la Generalitat. Per raons de seguretat, l'administració competent podrà prohibir en determinades zones o horaris el cobrament per sistemes diferents dels assenyalats anteriorment.

8. La prestació del servei s'efectuarà com a regla general per mitjà de vehicles a la total disposició del titular. No obstant això, en el cas de vehicles especialment preparats en relació amb la seguretat ciutadana o el transport de persones amb problemes de mobilitat, o per a serveis amb sol·licitud, es podran fixar reglamentàriament unes altres fórmules de cara a compartir estes unitats, sempre que això no supose un increment del nombre total d'unitats que presten servei simultàniament en una àrea funcional. Així mateix, en el cas d'accident o d'averia greu, amb un temps de reparació superior a cinc dies, el titular del vehicle podrà continuar prestant el servei, durant un termini màxim de tres mesos, amb un vehicle de característiques que caldrà determinar reglamentàriament, que oferisca nivells de qualitat i servei equivalents.

f) Por el arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las autorizaciones y de los vehículos afectos a las mismas.

2. En los casos de revocación de los títulos habilitantes por razones de interés público, el órgano competente podrá ofertar, con carácter previo a la instrucción del oportuno expediente de extinción, la posibilidad de que los titulares interesados renuncien a su autorización en las condiciones que se determinen en el reglamento que desarrolle la presente ley.

Artículo 53. Visado

El visado de las autorizaciones es la actuación mediante la cual la administración constata de forma periódica, y sin perjuicio de las facultades de inspección reguladas en la presente ley, el mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su otorgamiento.

En la normativa de desarrollo de la presente ley se regularán el procedimiento y plazo para obtener el visado de las autorizaciones, así como de las prórrogas que en su caso se establezcan para el cumplimiento de dicha obligación.

Sección tercera Vehículos y régimen económico

Artículo 54. Vehículos y características

1. Los vehículos de turismo destinados a la prestación del servicio de taxi deberán cumplir los requisitos que determinen las normas de desarrollo de este artículo en cuanto a las condiciones genéricas de seguridad, capacidad, confort, antigüedad máxima, prestaciones, medioambientales e imagen corporativa.

La antigüedad máxima de los vehículos se determinará reglamentariamente, no pudiendo exceder de ocho años. Excepcionalmente y atendiendo a las especiales características de comodidad y seguridad de determinados vehículos que se determinen reglamentariamente, se podrán reconocer como aptos para la prestación del servicio de taxi vehículos que excedan de la antigüedad señalada, siempre que la misma no sea superior a 12 años.

2. Las administraciones competentes en la materia deben garantizar el acceso de todos los usuarios y usuarias a los servicios de taxi, y con esta finalidad han de promover y asegurar la incorporación de vehículos adaptados al uso de personas con movilidad reducida, de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

3. Los vehículos adaptados darán servicio preferente a las personas con movilidad reducida, pero no tendrán ese uso exclusivo.

4. En el caso de que sea necesario sustituir el vehículo con el que se realiza la prestación del servicio de taxi, el nuevo vehículo deberá tener una antigüedad máxima de cuatro años.

5. La administración competente podrá establecer una normativa específica para vehículos en relación con la seguridad ciudadana, pudiendo condicionar la actividad en determinados horarios a que los servicios se presten con vehículos que reúnan dichos requisitos.

6. Reglamentariamente se determinarán la forma y condiciones para la colocación de publicidad en los vehículos de taxi, salvaguardando siempre la imagen corporativa.

7. Los equipos de cobro telemático o mediante tarjetas magnéticas o sin contacto deberán obedecer a la normativa técnica que al respecto apruebe la Generalitat. Por razones de seguridad, la administración competente podrá prohibir en determinadas zonas u horarios el cobro por sistemas distintos a los antes señalados.

8. La prestación del servicio se efectuará como regla general mediante vehículos a plena disposición del titular. No obstante, en el caso de vehículos especialmente preparados en relación con la seguridad ciudadana o el transporte de personas con problemas de movilidad, o para servicios a la demanda, podrán fijarse reglamentariamente otras fórmulas al objeto de compartir tales unidades, siempre que ello no suponga un incremento del número total de unidades que presten servicio simultáneamente en una área funcional. Asimismo, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación superior a cinco días, el titular del vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de tres meses, con un vehículo de características a determinar reglamentariamente, que ofrezca niveles de calidad y servicio equivalentes.

Article 55. Règim econòmic. Tarifes

1. Les tarifes han de garantir la cobertura del cost real del servei en condicions normals de productivitat i organització, i permetre una adequada amortització i un raonable benefici industrial, i es podran revisar periòdicament, o de manera excepcional, quan es produïska una variació en els costos que altere significativament l'equilibri econòmic. La seua aprovació i la revisió correspon a l'òrgan competent, amb audiència prèvia de les associacions representatives del sector i de les associacions de consumidors i usuaris.

2. Dins d'una determinada àrea funcional, les tarifes s'apliquen obligatòria per als titulars de les autoritzacions, el seu personal conductor i els qui utilitzen els serveis. Reglamentàriament es fixaran els supòsits excepcionals en què siga admissible el concert de preu pel servei realitzat.

3. Els serveis amb destinació fora de l'àrea funcional on estiga residenciada l'autorització estan sotmesos a tarifes màximes establides per l'òrgan competent de la Generalitat, d'acord amb els principis assenyalats en el punt 1.

4. Les tarifes aplicables seran visibles per a l'usuari des de l'interior del vehicle. Els vehicles que presten serveis de taxi hauran d'estar equipats amb dispositius que permeten l'usuari conèixer en cada moment l'import del servei rebut.

Secció quarta
Centres d'atenció al públic

Article 56. Centres d'atenció al públic

1. Els centres d'atenció al públic són entitats destinades a satisfer les demandes efectuades mitjançant atenció personal, atenció telefònica o qualsevol altre procediment telemàtic, per mitjà de l'assignació d'un determinat vehicle per a la prestació del servei sol·licitat.

2. L'activitat dels centres d'atenció al públic està sotmesa a l'autorització prèvia per l'òrgan competent en matèria del servei de taxi en la corresponent àrea funcional. Esta autorització i el seu manteniment estaran condicionats a la garantia de lliure associació dels titulars d'autoritzacions.

3. La Generalitat promourà les actuacions que considere necessàries per a facilitar la contractació dels serveis al públic a través de qualsevol sistema tecnològic i aquells que es consideren adequats per a atendre persones amb discapacitats i limitacions sensorials. Igualment promourà les formes de col·laboració que siguen convenients entre els diversos centres d'atenció, especialment en aquells aspectes que impliquen la major difusió dels serveis oferits per a la seua concertació fora de la Comunitat Valenciana, o en coordinació amb altres operadors de transport.

Secció cinquena
Drets i obligacions d'usuaris i usuàries

Article 57. Drets i obligacions d'usuaris i usuàries

1. Els qui utilitzen els serveis de taxi tenen, amb caràcter emnunciatiu, els drets següents:

a) Conèixer el número d'autorització, la identitat del conductor i les tarifes aplicables als serveis, documents que s'han de col·locar en un lloc del vehicle visible per a l'usuari.

b) Transportar equipatges, d'acord amb les condicions establides per les normes de desplegament de la present llei.

c) Obtindre un rebut o factura on consten el preu, l'origen i la destinació del servei i les dades de la corresponent autorització, i que acredite que s'ha satisfet la tarifa del servei.

d) Rebre el servei amb vehicles que tinguen les condicions adequades, a l'interior i a l'exterior, quant a higiene, estat de conservació, accessibilitat i confort, en els termes establits en la present llei i en la seua normativa de desplegament.

e) Triar el recorregut que consideren més adequat per a la prestació del servei, i pujar al vehicle i baixar del vehicle en llocs on estiguen suficientment garantides la seguretat de les persones, la correcta circulació i la integritat del vehicle.

Artículo 55. Régimen económico. Tarifas

1. Las tarifas deben garantizar la cobertura del coste real del servicio en condiciones normales de productividad y organización, y permitir una adecuada amortización y un razonable beneficio industrial, pudiendo ser revisadas periódicamente, o de manera excepcional, cuando se produzca una variación en los costes que altere significativamente el equilibrio económico. Su aprobación y revisión corresponde al órgano competente, previa audiencia de las asociaciones representativas del sector, y de las asociaciones de consumidores y usuarios.

2. Dentro de una determinada área funcional, las tarifas son de aplicación obligatoria para los titulares de las autorizaciones, su personal conductor y quienes utilicen los servicios. Reglamentariamente se fijarán los supuestos excepcionales en que sea admisible el concierto de precio por el servicio realizado.

3. Los servicios con destino fuera de la área funcional en el que esté residenciada la autorización están sometidos a tarifas máximas establecidas por el órgano competente de la Generalitat, de acuerdo con los principios señalados en el punto 1.

4. Las tarifas aplicables serán visibles para el usuario desde el interior del vehículo. Los vehículos que presten servicios de taxi deberán estar equipados con dispositivos que permitan al usuario conocer en cada momento el importe del servicio recibido.

Sección cuarta
Centros de atención al público

Artículo 56. Centros de atención al público

1. Los centros de atención al público son entidades destinadas a satisfacer las demandas efectuadas mediante atención personal, atención telefónica o cualquier otro procedimiento telemático, mediante la asignación de un determinado vehículo para la prestación del servicio solicitado.

2. La actividad de los centros de atención al público está sometida a autorización previa por el órgano competente en materia del servicio de taxi en la correspondiente área funcional. Dicha autorización y su mantenimiento estarán condicionados a la garantía de libre asociación de los titulares de autorizaciones.

3. La Generalitat promoverá las actuaciones que considere necesarias para facilitar la contratación de los servicios al público a través de cualesquiera sistemas tecnológicos y aquellos que se consideren adecuados para atender a personas con discapacidades y limitaciones sensoriales. Igualmente promoverá las formas de colaboración que resulten convenientes entre los diversos centros de atención, especialmente en aquellos aspectos que impliquen la mayor difusión de los servicios ofertados para su concertación fuera de la Comunitat Valenciana, o en coordinación con otros operadores de transporte.

Sección quinta
Derechos y obligaciones de usuarios y usuarias

Artículo 57. Derechos y obligaciones de usuarios y usuarias

1. Quienes utilicen los servicios de taxi tienen, con carácter enunciativo, los siguientes derechos:

a) Conocer el número de autorización, la identidad del conductor y las tarifas aplicables a los servicios, documentos que han de colocarse en un lugar del vehículo visible para el usuario.

b) Transportar equipajes, de acuerdo con las condiciones establecidas por las normas de desarrollo de la presente ley.

c) Obtener un recibo o factura en que consten el precio, origen y destino del servicio y los datos de la correspondiente autorización, y que acredite que se ha satisfecho la tarifa del servicio.

d) Recibir el servicio con vehículos que tengan las condiciones adecuadas, en el interior y en el exterior, en cuanto a higiene, estado de conservación, accesibilidad y confort, en los términos establecidos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

e) Escoger el recorrido que consideren más adecuado para la prestación del servicio, y subir y bajar al vehículo en lugares donde queden suficientemente garantizadas la seguridad de las personas, la correcta circulación y la integridad del vehículo.

f) Formular les reclamacions que estimen convenientes en relació amb la prestació del servei, en la forma que determinen les normes de desplegament de la present llei.

2. Son obligacions de les persones usuàries del servei de taxi:

- a) Pagar el preu dels servicis segons el règim de tarifes establert.

- b) Tindre un correcte comportament durant el servei.

- c) No manipular, destruir ni deteriorar cap element del vehicle durant el servei.

- d) Respectar les instruccions del conductor sempre que estes estiguen dirigides a una millor prestació del servei.

Secció sisena
Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana

Article 58. Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana

1. Es crea el Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana, integrat per representants de les administracions amb competències en les matèries regulades en esta llei, com també de les associacions representatives del sector, representants dels titulars de llicències, dels usuaris i d'associacions sindicals que superen els nivells de representativitat que s'estableixen reglamentàriament.

2. El Consell del Taxi serà presidit pel conseller competent en matèria de transports. La determinació i la designació dels seus membres es concretarà en la normativa de desplegament de la present llei.

3. El Consell del Taxi tindrà les funcions consultives que es determinen reglamentàriament i debatrà qualsevol assumpte en relació amb el contingut d'esta llei que siga plantejat pels seus membres. Es reunirà almenys anualment.

Secció setena
Inspecció

Article 59. Inspecció

1. La inspecció dels servicis regulats en este títol serà exercida pels òrgans competents, segons el que estableix l'article 44 de la present llei. Els inspectors tindran la consideració d'autoritat pública amb caràcter general, i gaudiran de plena independència en la seua actuació.

2. El personal adscrit a la inspecció estarà proveït del document acreditatiu de la seua condició, i li'll podran requerir quan exercite les seues funcions amb l'obligació d'exhibir-lo.

3. Les persones que duguen a terme les activitats de servei de taxi han de facilitar al personal de la inspecció, en l'exercici de les seues funcions, l'accés als seus vehicles i a les instal·lacions, i permetran l'examen de la documentació exigida, d'acord amb esta llei i amb les disposicions que la despleguen o amb la legislació general en matèria de transports. Els qui estiguen en els vehicles o en les instal·lacions esmentats col·laboraran, en qualsevol cas, amb el personal de la inspecció en l'exercici de les seues funcions.

4. El personal de la inspecció podrà requerir la presentació dels documents a què es refereix el paràgraf anterior en les mateixes dependències de l'administració, únicament en la mesura que esta exigència siga necessària per a verificar el compliment de les obligacions contingudes en la legislació de transports.

5. Les actuacions del personal de la inspecció es reflectiran en actes que arreglen els antecedents o les circumstàncies dels fets que motiven l'actuació inspectora, les disposicions que, si és el cas, es consideren infringides, i la conformitat o disconformitat motivada dels interessats. Els fets arreglats en estes actes tenen valor probatori i disfruten de la presumpció de veracitat, sense perjudi de les proves que puguen aportar les persones interessades en defensa dels seus drets i interessos.

6. En cas de necessitat, per a un eficaç compliment de la seua funció, els membres de la inspecció podran sol·licitar el suport necessari de les unitats o dels destacaments de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i Policia Local. Correspon a la Policia Local, de conformitat amb la legislació local i de Forces i Cossos de Seguretat, col·laborar en la vigilància del compliment de la normativa vigent i formular les denúncies oportunes.

f) Formular las reclamaciones que estimen convenientes en relación con la prestación del servicio, en la forma que determinen las normas de desarrollo de la presente ley.

2. Son obligaciones de las personas usuarias del servicio de taxi:

- a) Pagar el precio de los servicios según el régimen de tarifas establecido.

- b) Tener un correcto comportamiento durante el servicio.

- c) No manipular, destruir ni deteriorar ningún elemento del vehículo durante el servicio.

- d) Respetar las instrucciones del conductor siempre que las mismas vayan dirigidas a una mejor prestación del servicio.

Sección sexta
Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana

Artículo 58. Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana

1. Se crea el Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana, integrado por representantes de las administraciones con competencias en las materias reguladas en esta ley, así como de las asociaciones representativas del sector, representantes de los titulares de licencias, de los usuarios y de asociaciones sindicales, que superen los niveles de representatividad que se establezcan reglamentariamente.

2. El Consejo del Taxi será presidido por el conseller competente en materia de transportes. La determinación y designación de sus miembros se concretará en la normativa de desarrollo de la presente ley.

3. El Consejo del Taxi tendrá las funciones consultivas que se determinen reglamentariamente y debatirá cualquier asunto en relación con el contenido de esta ley que sea planteado por sus miembros. Se reunirá al menos anualmente.

Sección séptima
Inspección

Artículo 59. Inspección

1. La inspección de los servicios regulados en este título será ejercida por los órganos competentes, según lo dispuesto en el artículo 44 de la presente ley. Los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública a todos los efectos, y gozarán de plena independencia en su actuación.

2. El personal adscrito a la inspección estará provisto de documento acreditativo de su condición, que le podrá ser requerido cuando ejercite sus funciones, teniendo la obligación de exhibirlo.

3. Las personas que lleven a cabo las actividades de servicio de taxi deben facilitar al personal de la inspección, en el ejercicio de sus funciones, el acceso a sus vehículos e instalaciones, y permitirán el examen de la documentación exigida con arreglo a esta ley y las disposiciones que la desarrollen o la legislación general en materia de transportes. Quienes se encuentren en los vehículos o instalaciones citados colaborarán, en todo caso, con el personal de la inspección en el ejercicio de sus funciones.

4. El personal de la inspección podrá requerir la presentación de los documentos a que se refiere el párrafo anterior en las propias dependencias de la administración, únicamente en la medida en que esta exigencia resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes.

5. Las actuaciones del personal de la inspección se reflejarán en actas que recojan los antecedentes o circunstancias de los hechos que motiven la actuación inspectora, las disposiciones que, en su caso, se consideren infringidas, y la conformidad o disconformidad motivada de los interesados. Los hechos recogidos en dichas actas tienen valor probatorio y disfruten de la presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.

6. En caso de necesidad, para un eficaz cumplimiento de su función, los miembros de la inspección podrán solicitar el apoyo necesario de las unidades o destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales. Corresponde a las Policías Locales, de conformidad con la legislación local y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, colaborar en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente formulando las oportunas denuncias.

TÍTOL III
Infraestructures de transport
CAPÍTOL I
Principis generals
Article 60. Objecte

1. El present capítol té com a finalitat regular el règim de planificació, construcció, manteniment i administració de les infraestructures de transport de la Comunitat Valenciana, i estes s'entenen:

a) Les infraestructures ferroviàries que no estiguen declarades expressament com d'interés general de l'Estat, així com les actuacions que la Generalitat realitze en les d'interés general de l'Estat, d'acord amb les delegacions, les comandes o els convenis que respecte d'això s'establisquen.

b) Les infraestructures tramviàries, enteses com aquelles en què es puguen produir encreuaments a nivell en els quals la preferència absoluta no corresponga sempre a les unitats que circulen per la infraestructura mencionada.

c) Les infraestructures destinades per a l'ús exclusiu o preferent de vehicles de transport públic, llevat que constituïsquen un element funcional no diferenciat de la resta de vies de comunicació, i en este cas seran regulades per la normativa urbanística o de carreteres, segons procedisca.

d) Les infraestructures interurbanes dissenyades per a l'ús preferent de vianants i ciclistes, llevat que, per estar integrades en una carretera o un altre tipus de via, siga procedent l'aplicació de la normativa urbanística o de carretera.

e) Les infraestructures logístiques.

2. Competix a la conselleria competent en matèria de transports l'exercici de les potestats previstes en esta llei en relació amb les infraestructures assenyalades en el punt anterior que per les seues característiques o els servicis de transport que atenguen siguen d'interés general per a la Comunitat Valenciana.

3. Els ajuntaments podran desenvolupar dins dels seus termes municipals les infraestructures de transport que consideren necessàries en relació amb els seus servicis de transport urbà o les necessitats locals de desplaçaments no motoritzats o en relació amb les activitats logístiques. Estes actuacions s'ajustaran al que establix esta llei i la normativa que la desenvolupe.

Article 61. Infraestructures de transport

1. Al l'efecte d'esta llei, s'entendrà com a infraestructura de transport la totalitat dels elements que la conformen, tant en el sentit estricto com els elements addicionals requerits per a la seua plena operativitat, com ara parades, estacions, estacionaments annexos, apartadors, ramals, àrees de descans, línies de connexió, subestacions, transformadors i la resta d'instal·lacions anàlogues o semblants.

2. Les actuacions que s'escometen per a la supressió de passos a nivell o encreuaments, o per a la permeabilització transversal de les infraestructures, s'executaran igualment d'acord amb el que establix esta llei, sense perjudici dels preceptes que foren aplicable en relació amb el tipus de via en què s'inscriuen.

CAPÍTOL II
Planificació d'infraestructures
Secció primera
Estudis i projectes
Article 62. Estudis de planejament d'infraestructures de transport o logístiques

1. L'estudi de planejament d'infraestructura de transport o d'infraestructura logística es definix com l'instrument per mitjà del qual l'administració competent en la matèria definix les característiques bàsiques de les xarxes, les línies, els trams o els elements funcionals necessaris per a la creació o l'ampliació dels servicis de transport, per a la millora de la funcionalitat, la comoditat, la integració en l'entorn o la seguretat de les infraestructures ja existents, o per a atendre qualsevol

TÍTULO III
Infraestructuras de transporte
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 60. Objeto

1. El presente capítulo tiene por finalidad regular el régimen de planificación, construcción, mantenimiento y administración de las infraestructuras de transporte de la Comunitat Valenciana, entendiéndose por tales:

a) Las infraestructuras ferroviarias que no estén declaradas expresamente como de interés general del Estado, así como las actuaciones que la Generalitat realice en las de interés general del Estado, de acuerdo con las delegaciones, encomiendas o convenios que al respecto se establezcan.

b) Las infraestructuras tranviarias, entendidas como aquellas en las que puedan producirse cruces a nivel en los que la preferencia absoluta no corresponda siempre a las unidades que circulen por la mencionada infraestructura.

c) Las infraestructuras destinadas para el uso exclusivo o preferente de vehículos de transporte público, salvo que constituyan un elemento funcional no diferenciado del resto de vías de comunicación, en cuyo caso serán reguladas por la normativa urbanística o de carreteras, según proceda.

d) Las infraestructuras interurbanas diseñadas para el uso preferente de peatones y ciclistas, salvo que, por estar integradas en una carretera u otro tipo de vía, proceda la aplicación de la normativa urbanística o de carretera.

e) Las infraestructuras logísticas.

2. Compete a la conselleria competente en materia de transportes el ejercicio de las potestades previstas en esta ley en relación con las infraestructuras señaladas en el punto anterior que por sus características o los servicios de transporte que atiendan sean de interés general para la Comunitat Valenciana.

3. Los ayuntamientos podrán desarrollar dentro de sus términos municipales las infraestructuras de transporte que consideren necesarias en relación con sus servicios de transporte urbano o las necesidades locales de desplazamientos no motorizados o en relación con las actividades logísticas. Dichas actuaciones se ajustarán a lo previsto en esta ley y en la normativa que la desarrolle.

Artículo 61. Infraestructuras de transporte

1. A los efectos de esta ley, se entenderá como infraestructura de transporte la totalidad de los elementos que la conforman, tanto en sentido estricto como los elementos adicionales requeridos para su plena operatividad, como paradas, estaciones, estacionamientos anejos, apartaderos, ramales, áreas de descanso, líneas de acometida, subestaciones, transformadores y demás instalaciones análogas o similares.

2. Las actuaciones que se acometan para la supresión de pasos a nivel o cruces, o para la permeabilización transversal de las infraestructuras, se ejecutarán igualmente de acuerdo con lo previsto en esta ley, sin perjuicio de los preceptos que fueran de aplicación en relación con el tipo de vía en la que se inscriban.

CAPÍTULO II
Planificación de infraestructuras
Sección primera
Estudios y proyectos
Artículo 62. Estudios de planeamiento de infraestructuras de transporte o logísticas

1. El estudio de planeamiento de infraestructura de transporte o de infraestructura logística se define como el instrumento mediante el cual la administración competente en la materia define las características básicas de las redes, líneas, tramos o elementos funcionales necesarios para la creación o ampliación de los servicios de transporte, para la mejora de la funcionalidad, comodidad, integración en el entorno o seguridad de las infraestructuras ya existentes, o para atender cualquier

altre objectiu en relació amb la millora de la mobilitat de les persones i amb la logística.

2. El contingut i la precisió de l'estudi de planejament serà el necessari per a la concertació institucional de les solucions plantejades, en relació amb les administracions locals i les altres competents en matèria de transports, així com aquelles que administren aspectes especialment rellevants de cara a l'adopció de la solució idònea de la problemàtica plantejada.

3. L'estudi de planejament continuarà, en qualsevol cas:

a) Referència al servei públic de transports que s'ha d'establir, modificar o ampliar o, si és el cas, a la problemàtica en matèria de funcionalitat, comoditat, integració en l'entorn o seguretat que cal satisfer.

b) Antecedents i condicionants bàsics de l'actuació.

c) Definició de la solució proposada amb el nivell suficient per a permetre la seua avaluació i, si és el cas, concertació per altres organismes.

d) En el cas que es propose més d'una solució, anàlisi comparativa entre estes i, en qualsevol cas, amb el supòsit de no execució de l'actuació.

e) En el cas que procedisca, diferenciació d'aquells elements de l'actuació que corresponguen a l'administració proponent, d'aquells altres que pogueren correspondre a altres administracions en virtut del conveni o l'acord que ulteriorment se substanciara.

Article 63. Tramitació, aprovació i efectes dels estudis de planejament

1. Una vegada aprovat inicialment l'estudi de planejament per la direcció general competent en matèria de transport, serà sotmès al tràmit d'informe institucional per mitjà de remissió a les diferents administracions i a les entitats públiques directament concernides per l'actuació, de cara al seu informe en el termini que s'assenyale. Paral·lelament, i en els casos en què siga pertinent, s'obrirà un període de concertació interinstitucional per mitjà de la realització dels contactes i les reunions que procedisquen. Conclòs el període esmentat, es resoldrà sobre l'aprovació de l'estudi amb les incorporacions que, si és el cas, procedisquen, i es donarà compte d'això als òrgans i a les entitats que hagen participat en el tràmit.

2. En aquells casos en què donat el caràcter de l'actuació siga necessària la incoació d'un procediment d'avaluació ambiental, l'autorització prevista en la normativa autonòmica en matèria de paisatge o un altre de similar, l'estudi de planejament serà remès als òrgans competents en la matèria mencionada com a part integrant de la documentació requerida per a l'inici dels tràmits esmentats. En qualsevol cas, la mera aprovació de l'estudi de planejament no faculta per a l'execució de l'obra mentre no es produisca la declaració esmentada i les altres autoritzacions que siguen preceptives d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

3. Tant en el període de concertació assenyalat en el punt 1, com després de l'aprovació definitiva de l'estudi de planejament, les administracions concernides evitaran la formulació o el desenvolupament de planejament, o la planificació o l'execució d'actuacions que dificulten o impossibiliten les previsions de l'estudi de planejament. Transcorregut un any des de que este fora sotmès a informació institucional sense que s'haja produït l'aprovació definitiva, o transcorreguts tres anys des de la mencionada aprovació sense que s'execute l'actuació proposada, les administracions concernides podran sol·licitar del conseller competent en matèria de transport l'anul·lació parcial d'aquelles determinacions de l'estudi de planejament que siguen incompatibles amb la formalització, l'execució o el desenvolupament de planificacions o les actuacions pròpies dels seus respectius àmbits competencials.

4. La facultat de formulació d'estudis de planejament s'entendrà estesa igualment a aquelles línies, trams o elements d'infraestructura ferroviària susceptibles de ser aprovats i executats per l'administració general de l'Estat abans que els elements mencionats siguen inclosos expressament en la xarxa ferroviària d'interès general de l'Estat. En estos casos, l'estudi de planejament se centrarà especialment pel que fa a la coordinació amb la resta del sistema de transports de la Comunitat Valenciana i amb els altres elements condicionants de l'actuació a què s'estenguen les competències de la Generalitat.

5. No serà necessària la realització de l'estudi de planejament en aquells supòsits en què es considere innecessari per tractar-se d'actuaci-

o otro objetivo en relación con la mejora de la movilidad de las personas y con la logística.

2. El contenido y precisión del estudio de planeamiento será el necesario para la concertación institucional de las soluciones planteadas, en relación con las administraciones locales y las demás competentes en materia de transportes, así como aquellas que administren aspectos especialmente relevantes de cara a la adopción de la solución idónea de la problemática planteada.

3. El estudio de planeamiento contendrá, en todo caso:

a) Referencia al servicio público de transportes a establecer, modificar o ampliar o, en su caso, a la problemática en materia de funcionalidad, comodidad, integración en el entorno o seguridad a satisfacer.

b) Antecedentes y condicionantes básicos de la actuación.

c) Definición de la solución propuesta con el nivel suficiente para permitir su evaluación y en su caso concertación por otros organismos.

d) En caso de que se proponga más de una solución, análisis comparativo entre ellas y, en todo caso, con el supuesto de no ejecución de la actuación.

e) En caso de que proceda, diferenciación de aquellos elementos de la actuación que correspondan a la administración proponente, de aquellos otros que pudieran corresponder a otras administraciones en virtud del convenio o acuerdo que ulteriormente se sustanciara.

Artículo 63. Tramitación, aprobación y efectos de los estudios de planeamiento

1. Una vez aprobado inicialmente el estudio de planeamiento por la dirección general competente en materia de transporte, será sometido al trámite de informe institucional mediante remisión a las diferentes administraciones y entidades públicas directamente concernidas por la actuación, de cara a su informe en el plazo que se señale. Paralelamente, y en los casos en que resulte pertinente, se abrirá un período de concertación interinstitucional mediante la celebración de los contactos y reuniones que procedan. Concluido dicho período, se resolverá sobre la aprobación del estudio con las incorporaciones que en su caso procedan, dando cuenta de ello a los órganos y entidades que hayan participado en el trámite.

2. En aquellos casos en los que dado el carácter de la actuación sea necesaria la incoación de un procedimiento de evaluación ambiental, la autorización prevista en la normativa autonómica en materia de paisaje u otro similar, el estudio de planeamiento será remitido a los órganos competentes en dicha materia como parte integrante de la documentación requerida para el inicio de dichos trámites. En todo caso, la mera aprobación del estudio de planeamiento no faculta para la ejecución de la obra en tanto en cuanto no se produzca la citada declaración y las demás autorizaciones que resulten preceptivas de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

3. Tanto en el período de concertación señalado en el punto 1, como tras la aprobación definitiva del estudio de planeamiento, las administraciones concernidas evitarán la formulación o desarrollo de planeamiento, o la planificació o ejecución de actuaciones que dificulten o imposibiliten las previsions del estudio de planeamiento. Transcurrido un año desde que este fuera sometido a información institucional sin que se haya producido la aprobación definitiva, o transcurridos tres años desde dicha aprobación sin que se execute la actuación propuesta, las administraciones concernidas podrán solicitar del conseller competente en materia de transporte la anulació parcial de aquellas determinaciones del estudio de planeamiento que sean incompatibles con la formalización, ejecución o desarrollo de planificaciones o actuaciones propias de sus respectivos ámbitos competenciales.

4. La facultad de formulación de estudios de planeamiento se entenderá extendida igualmente a aquellas líneas, tramos o elementos de infraestructura ferroviaria susceptibles de ser aprobados y ejecutados por la administración general del Estado antes de que dichos elementos sean incluidos expresamente en la red ferroviaria de interés general del Estado. En tales casos, el estudio de planeamiento se centrará especialmente en lo referente a la coordinación con el resto del sistema de transportes de la Comunitat Valenciana y con los demás elementos condicionantes de la actuación a los que se extiendan las competencias de la Generalitat.

5. No resultará necesaria la realización del estudio de planeamiento en aquellos supuestos en los que se estime innecesario por tratarse de

ons d'escassa entitat o que poden ser concertades en el marc de l'estudi informatiu.

6. Els estudis de planejament d'infraestructures de transport podran incorporar-se o tramitar-se conjuntament amb els projectes de servei de transport públic sempre que això siga convenient.

Article 64. Estudis informatius

1. L'establiment o la modificació de les infraestructures de transport requerirà la l'aprovació prèvia, per la conselleria competent en la matèria, del corresponent estudi informatiu.

2. L'estudi informatiu és l'instrument de planificació del sistema de transports que servix de base al procés d'informació pública i a la resta d'informes, declaracions o autoritzacions que en relació amb l'actuació procedisca emetre pel conjunt d'òrgans competents en les matèries que els afecten.

3. L'estudi informatiu continuarà els documents següents:

a) Memòria, que farà referència a:

1.^ª Antecedents existents i les necessitats que cal satisfer, en especial els estudis de planejament prèviament formalitzats, així com, si és el cas, del projecte de servei públic de transport.

2.^ª La informació necessària en relació amb el planejament urbanístic o en relació amb altres infraestructures que siga pertinent, així com la delimitació d'aquells espais afectats objecte de qualsevol tipus de protecció en virtut de les legislacions ambientals, d'espais naturals, paisajístiques, sobre el patrimoni o qualsevol altra rellevant.

3.^ª Infraestructures i serveis afectats, tant en referència a les existents com a les planificades, i es tenen en compte tant les seues corresponents configuracions com les consideracions per a aconseguir una adequada integració.

4.^ª Definició bàsica de la solució o les solucions adoptades.

5.^ª Avaluació diferencial de la situació origen i de les solucions adoptades, siga esta una o diverses, en termes d'eficiència, costos d'implantació i operació, consums energètics, emissions i altres factors que es consideren convenientes.

b) Plans, amb la precisió necessària per a identificar les solucions i els seus condicionants.

c) Estimació econòmica de l'actuació.

4. L'estudi informatiu s'acompanyarà, en el cas que això procedisca, de l'estudi d'impacte ambiental i constituirà el document bàsic a l'efecte de l'avaluació ambiental prevista en la legislació corresponent.

5. En els casos en què es preveja que la construcció de la infraestructura es realitze per mitjà del procediment de concessió d'obra pública, l'estudi informatiu inclourà el corresponent estudi de viabilitat amb el contingut que determine la normativa reguladora del procediment mencionat.

Article 65. Tramitació dels estudis informatius

1. Una vegada aprovat inicialment, l'estudi informatiu serà remès a les entitats locals, a la conselleria competent en matèria d'ordenació territorial i paisatge i a la resta d'administracions afectades, a fi que, durant el termini de trenta dies, examinen la proposta més adequada per a l'interès general i per als interessos que representen. Transcorregut el termini esmentat sense que les administracions públiques mencionades informen respecte d'això, s'entendrà que estan d'acord amb la solució proposada.

2. Amb caràcter simultani al tràmit d'informe que es referix l'apartat anterior, l'estudi informatiu se sotmetrà a un tràmit d'informació pública durant un període de trenta dies. Les observacions realitzades en este tràmit hauran de versar sobre la concepció global del traçat.

3. En aquells supòsits en què d'acord amb la legislació ambiental siga necessària la incoació d'un procediment d'avaluació ambiental, la conselleria competent en transports remetrà a la competent al medi ambient l'expedient complet de l'actuació, i s'hi inclou un informe en relació amb els escrits i les alegacions rebuts en els tràmits d'informe institucional i informació pública.

4. Després dels tràmits anteriors, i a la vista de l'avaluació d'impacte ambiental, la conselleria formularà un document en el qual s'arreglen les característiques essencials de l'actuació objecte de l'estudi informatiu amb les incorporacions que procedisquen d'estos tràmits.

actuaciones de escasa entidad o que pueden ser concertadas en el marco del estudio informativo.

6. Los estudios de planeamiento de infraestructuras de transporte podrán incorporarse o tramitarse conjuntamente con los proyectos de servicio de transporte público siempre que ello resulte conveniente.

Artículo 64. Estudios informativos

1. El establecimiento o la modificación de las infraestructuras de transporte requerirá la previa aprobación, por la Conselleria competente en la materia, del correspondiente estudio informativo.

2. El estudio informativo es el instrumento de planificación del sistema de transportes que sirve de base al proceso de información pública y al resto de informes, declaraciones o autorizaciones que en relación con la actuación proceda emitir por el conjunto de órganos competentes en las materias que les afectan.

3. El estudio informativo contendrá los siguientes documentos:

a) Memoria, que hará referencia a:

1.^º Antecedentes existentes y las necesidades a satisfacer, en especial los estudios de planeamiento previamente formalizados, así como en su caso del proyecto de servicio público de transporte.

2.^º La información necesaria en relación con el planeamiento urbanístico o en relación con otras infraestructuras que resulte pertinente, así como la delimitación de aquellos espacios afectados objeto de cualquier tipo de protección en virtud de las legislaciones ambientales, de espacios naturales, paisajísticas, sobre el patrimonio o cualquier otra relevante.

3.^º Infraestructuras y servicios afectados, tanto en referencia a las existentes como a las planificadas, teniendo en cuenta tanto sus correspondientes configuraciones como las consideraciones para conseguir una adecuada integración.

4.^º Definición básica de la solución o soluciones adoptadas.

5.^º Evaluación diferencial de la situación origen y de las soluciones adoptadas, sea ésta una o varias, en términos de eficiencia, costes de implantación y operación, consumos energéticos, emisiones y otros factores que se consideren convenientes.

b) Planos, con la precisión necesaria para identificar las soluciones y sus condicionantes.

c) Estimación económica de la actuación.

4. El estudio informativo se acompañará, en caso de que ello proceda, del estudio de impacto ambiental y constituirá el documento básico a los efectos de la evaluación ambiental prevista en la legislación correspondiente.

5. En los casos en los que se prevea que la construcción de la infraestructura se realice mediante el procedimiento de concesión de obra pública, el estudio informativo incluirá el correspondiente estudio de viabilidad con el contenido que determine la normativa reguladora de dicho procedimiento.

Artículo 65. Tramitación de los estudios informativos

1. Una vez aprobado inicialmente, el estudio informativo será remitido a las entidades locales, a la conselleria competente en materia de ordenación territorial y paisaje y restantes administraciones afectadas, con objeto de que, durante el plazo de treinta días, examinen la propuesta más adecuada para el interés general y para los intereses que representan. Transcurrido dicho plazo sin que dichas administraciones públicas informen al respecto, se entenderá que están conformes con la solución propuesta.

2. Con carácter simultáneo al trámite de informe a que se refiere el apartado anterior, el estudio informativo se someterá a un trámite de información pública durante un período de treinta días. Las observaciones realizadas en este trámite deberán versar sobre la concepción global del trazado.

3. En aquellos supuestos en los que de acuerdo con la legislación ambiental sea necesaria la incoación de un procedimiento de evaluación ambiental, la conselleria competente en transportes remitirá a la competente en medio ambiente el expediente completo de la actuación, incluyendo un informe en relación con los escritos y alegaciones recibidos en los trámites de informe institucional e información pública.

4. Tras los trámites anteriores, y a la vista de la evaluación de impacto ambiental, la conselleria formulará un documento en el se recojan las características esenciales de la actuación objeto del estudio informativo con las incorporaciones que procedan de tales trámites.

5. L'aprovació definitiva del document esmentat i consegüentment de l'actuació en este detallada correspon al conseller competent en matèria de transports, que podrà procedir igualment en acte administratiu esmentat a encomanar la seua execució i l'administració a l'ens administrador de la infraestructura o a l'òrgan que corresponga en relació amb el caràcter de l'actuació.

6. La resolució assenyalada en el punt anterior serà publicada en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* i notificada a les administracions afectades.

7. Seran aplicables a les actuacions arrellegades en els estudis informatius degudament aprovats les previsions que pel que fa a la compatibilització amb la resta d'usos del sòl es contenen en el present títol. D'altra banda, hauran de ser arrellegades en el planejament urbanístic vigent de cada municipi amb motiu de la revisió següent que s'aborde.

8. No serà obligatòria la formulació d'estudi informatiu prèviament a la redacció i l'aprovació del corresponent projecte constructiu en aquelles actuacions en què no procedisca la formulació de la declaració d'impacte ambiental, ni en aquelles de menor entitat que no impliquen aspectes referents a l'interès general.

9. Queden eximides de la necessitat formulació d'estudi informatiu, així com de l'avaluació o les estimació d'impacte ambiental, les actuacions relacionades amb la seguretat ferroviària i, en particular, les tendents a la supressió de passos a nivell.

10. No serà necessària la formulació d'estudi informatiu en aquelles actuacions arrellegades en el planejament urbanístic degudament aprovat.

Article 66. Projecte bàsic i constructiu

1. Els projectes bàsics i de construcció de les infraestructures de transport es formularan d'acord amb el que estableix, el seu cas, el corresponent estudi informatiu, i, el seu contingut obeirà tant al que preveu esta llei com al que estableix la normativa bàsica de contractació de les administracions públiques de cara a poder formar part del corresponent expedient de licitació i execució de les obres.

2. Els projectes bàsics i constructius podran introduir variacions no substancials en relació amb l'estudi informatiu prèviament aprovat, com a conseqüència de la concreció de les seues determinacions amb el nivell de precisió propi d'un projecte. En estos casos, l'òrgan administratiu encarregat de la redacció del projecte instarà el competent en la formulació de l'estudi informatiu per a la convalidació d'estes variacions i, si és el cas, per a la corresponent modificació de la resolució aprovatòria.

3. L'aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per esta llei que requerisquen la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d'utilitat pública o interès social, la necessitat d'ocupació i la declaració d'urgència d'esta, a l'efecte de l'expropiació forçosa d'aquells en què haja de construir-se la línia, el tram o l'element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que estableix la legislació expropiatòria.

4. Quan corresponga a l'administrador de la infraestructura la construcció de les infraestructures ferroviàries, la potestat expropiatòria serà exercida per l'administració de la Generalitat i el beneficiari de l'expropiació serà el mateix administrador, que abonarà el preu just de les expropiacions.

Secció segona
Àrees de reserva

Article 67. Delimitació

1. L'administració competent en matèria d'infraestructures podrà delimitar, per mitjà del procediment establert en esta llei, les àrees de reserva necessàries per a:

a) L'establiment de futures infraestructures o l'ampliació de les existents.

b) L'establiment de corredors infraestructurals en què les infraestructures de transport siguen acompanyades d'altres infraestructures lineals energètiques, de telecomunicacions o relacionades amb el cicle hidràulic, a fi d'aconseguir una adequada ordenació conjunta del territori.

5. La aprobación definitiva de dicho documento y consiguientemente de la actuación en él detallada corresponde al conseller competente en materia de transportes, que podrá proceder igualmente en dicho acto administrativo a encomendar su ejecución y administración al ente administrador de la infraestructura o al órgano que corresponda en relación con el carácter de la actuación.

6. La resolución señalada en el punto anterior será publicada en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana* y notificada a las administraciones afectadas.

7. Serán aplicables a las actuaciones recogidas en los estudios informativos debidamente aprobados las previsiones que en lo referente a la compatibilización con el resto de usos del suelo se contienen en el presente título. Por otra parte, deberán ser recogidas en el planeamiento urbanístico vigente de cada municipio con motivo de la siguiente revisión que se aborde.

8. No será obligatoria la formulación de estudio informativo previa a la redacción y aprobación del correspondiente proyecto constructivo en aquellas actuaciones en las que no proceda la formulación de la declaración de impacto ambiental, ni en aquellas de menor entidad que no impliquen aspectos referentes al interés general.

9. Quedan eximidas de la necesidad de formulación de estudio informativo, así como de la evaluación o estimación de impacto ambiental, las actuaciones relacionadas con la seguridad ferroviaria y en particular las tendentes a la supresión de pasos a nivel.

10. No será necesaria la formulación de estudio informativo en aquellas actuaciones recogidas en el planeamiento urbanístico debidamente aprobado.

Artículo 66. Proyecto básico y constructivo

1. Los proyectos básicos y de construcción de las infraestructuras de transporte se formularán de acuerdo con lo previsto en su caso en el correspondiente estudio informativo, y, su contenido obedecerá tanto a lo previsto en esta ley como a lo establecido en la normativa básica de contratación de las administraciones públicas a fin de poder formar parte del correspondiente expediente de licitación y ejecución de las obras.

2. Los proyectos básicos y constructivos podrán introducir variaciones no sustanciales en relación con el estudio informativo previamente aprobado, como consecuencia de la concreción de sus determinaciones con el nivel de precisión propio de un proyecto. En tales casos, el órgano administrativo encargado de la redacción del proyecto instará al competente en la formulación del estudio informativo para la convalidación de tales variaciones y, en su caso, para la correspondiente modificación de la resolución aprobatoria.

3. La aprobación del correspondiente proyecto básico o del de construcción de las actuaciones reguladas por esta ley que requieran la utilización de nuevos terrenos, supondrá la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de la misma, a los efectos de la expropiación forzosa de aquellos en los que deba construirse la línea, el tramo o el elemento de la infraestructura ferroviaria, o que sean necesarios para modificar las preexistentes, según lo previsto en la legislación expropiatoria.

4. Cuando corresponda al administrador de la infraestructura la construcción de las infraestructuras ferroviarias, la potestad expropiatoria será ejercida por la administración de la Generalitat y el beneficiario de la expropiación será el propio administrador, que abonará el justiprecio de las expropiaciones.

Sección segunda
Áreas de reserva

Artículo 67. Delimitación

1. La administración competente en materia de infraestructuras podrá delimitar, mediante el procedimiento establecido en esta ley, las áreas de reserva necesarias para:

a) El establecimiento de futuras infraestructuras o la ampliación de las existentes.

b) El establecimiento de corredores infraestructurales en los que las infraestructuras de transporte sean acompañadas de otras infraestructuras lineales energéticas, de telecomunicaciones o relacionadas con el ciclo hidráulico, a fin de conseguir una adecuada ordenación conjunta del territorio.

c) El foment de la intermodalitat per mitjà de la implantació d'intercanviadors, estacionaments, àrees de magatzematge o altres elements semblants.

d) L'ampliació de les zones de protecció assenyalades en el present títol, així com el condicionament ambiental o paisatgístic d'estos espais o altres limitrofs, amb l'objecte de permetre el millor nivell d'integració possible entre les infraestructures mencionades i el seu entorn.

e) La planificació futura d'àmbits destinats a les estacions i a les terminals de transport, així com les activitats productives, els servicis o els usos residencials la ubicació immediata dels quals a estes terminals convinga per l'interès públic, en relació amb la minoració global dels desplaçaments de persones o mercaderies, la màxima extensió de la cobertura de servicis del transport públic i del ferroviari de mercaderies, o la recuperació de les plusvàlues públiques generades per l'esforç inversor, amb compliment del que estableix l'article 47 de la Constitució Espanyola.

2. Les reserves de sòl indicades podran establir-se en relació amb infraestructures que entren dins de l'àmbit competencial autonòmic o estatal, i s'hi inclouen tant les dedicades al transport públic com als servicis ferroviaris en general.

3. La delimitació de les àrees de reserva tindrà en compte les limitacions o condicions que per a l'establiment o el funcionament de les infraestructures de transport puguen derivar-se, si és el cas, dels règims de protecció i ordenació dels espais naturals protegits, així com dels plans d'ordenació dels recursos naturals.

Article 65. Tramitació de les reserves de sòl

1. La reserves de sòl s'establiran per un termini màxim de deu anys. Caducaran pel transcurs del termini mencionat sense que s'haja procedit a l'adquisició per l'administració corresponent dels corresponents terrenys, o per l'execució o el desistiment de la infraestructura que la motiva.

2. Prèviament a la declaració de l'àrea de reserva, l'administració competent en matèria de transports formularà la corresponent delimitació d'àrea de reserva. Les determinacions del document esmentat es limitaran a justificar de manera genèrica l'interès públic en relació amb la delimitació proposada.

3. El document de delimitació d'àrea de reserva serà sotmès a informació pública i informe institucional. En limitar-se els seus efectes futurs a la titularitat dels sòls afectats i no implicar cap execució d'obra o canvi d'usos del sòl, la seua tramitació no requerirà els tràmits previstos en la legislació ambiental o paisatgística, amb independència que els tràmits esmentats s'hagen de desenvolupar posteriorment per l'administració competent una vegada que el grau de definició d'estes actuacions o usos permeten les avaluacions previstes en els marcs normatius mencionats.

4. Correspon al conseller competent en matèria de transport l'aprovació definitiva de la delimitació d'àrea de reserva. Les declaracions esmentades seran publicades i remeses a les administracions afectades.

Article 69. Efectes de la delimitació d'àrea de reserva

1. En els àmbits inclosos en la delimitació d'àrea de reserva requerirà l'informe previ vinculant de l'administració competent en matèria de transport la formulació d'instruments de planejament urbanístic i els projectes de qualsevol tipus, l'execució d'obres públiques o privades i els canvis d'usos que impliquen la implantació de qualsevol tipus d'element edificatori o d'urbanització, o l'alteració o l'eliminació d'elements naturals o antròpics en el cas que pogueren perjudicar la correcta incardinació de la infraestructura en el seu entorn.

2. L'aprovació de la delimitació d'àrea de reserva comporta l'interès públic de l'expropiació i la necessitat d'ocupació. L'administració actuant podrà adquirir els sòls per a la seua ocupació en règim de domini públic adscrit a la corresponent infraestructura, o per a la seua incorporació com a bé patrimonial de l'entitat pública administradora de la infraestructura, que en els dos casos podrà, a estos efectes, tindre el caràcter de beneficiària.

3. Les diverses infraestructures o els usos que s'implanten en les àrees de reserva podran ser objecte de cessió del dret d'ús, arrendament, alienació després de la conclusió de les actuacions que van justificar la seua expropiació, o de l'aplicació de cànons a tercers concessionaris.

c) El fomento de la intermodalidad mediante la implantación de intercambiadores, estacionamientos, áreas de almacenaje u otros elementos semejantes.

d) La ampliación de las zonas de protección señaladas en el presente título, así como el acondicionamiento ambiental o paisajístico de tales espacios u otros colindantes, al objeto de permitir el mejor nivel de integración posible entre dichas infraestructuras y su entorno.

e) La planificación futura de ámbitos destinados a las estaciones y terminales de transporte, así como a las actividades productivas, a los servicios o a los usos residenciales cuya ubicación inmediata a tales terminales convinga por el interés público, en relación con la minoración global de los desplazamientos de personas o mercancías, la máxima extensión de la cobertura de servicio del transporte público y del ferroviario de mercancías, o la recuperación de las plusvalías públicas generadas por el esfuerzo inversor, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española.

2. Las reservas de suelo indicadas podrán establecerse en relación con infraestructuras que entren dentro del ámbito competencial autonómico o estatal, incluyendo tanto las dedicadas al transporte público como a los servicios ferroviarios en general.

3. La delimitación de las áreas de reserva tendrá en cuenta las limitaciones o condiciones que para el establecimiento o el funcionamiento de las infraestructuras de transporte puedan derivarse en su caso de los regímenes de protección y ordenación de los espacios naturales protegidos, así como de los planes de ordenación de los recursos naturales.

Artículo 65. Tramitación de las reservas de suelo

1. Las reservas de suelo se establecerán por un plazo máximo de diez años. Caducarán por el transcurso de dicho plazo sin que se haya procedido a la adquisición por la administración correspondiente de los correspondientes terrenos, o por la ejecución o desistimiento de la infraestructura que la motiva.

2. Previamente a la declaración del área de reserva, la administración competente en materia de transportes formulará la correspondiente delimitación de área de reserva. Las determinaciones de dicho documento se limitarán a justificar de manera genérica el interés público en relación con la delimitación propuesta.

3. El documento de delimitación de área de reserva será sometido a información pública e informe institucional. Al limitarse sus efectos futuros a la titularidad de los suelos afectados y no implicar ejecución de obra alguna o cambio de usos del suelo, su tramitación no requerirá los trámites previstos en la legislación ambiental o paisajística, con independencia de que dichos trámites deban desarrollarse posteriormente por la administración competente una vez que el grado de definición de tales actuaciones o usos permitan las evaluaciones previstas en los marcos normativos citados.

4. Corresponde al conseller competente en materia de transporte la aprobación definitiva de la delimitación de área de reserva. Las citadas declaraciones serán publicadas y remitidas a las administraciones afectadas.

Artículo 69. Efectos de la delimitación de área de reserva

1. En los ámbitos incluidos en la delimitación de área de reserva requerirá informe previo vinculante de la administración competente en materia de transporte la formulación de instrumentos de planeamiento urbanístico y proyectos de cualquier tipo, la ejecución de obras públicas o privadas y los cambios de usos que impliquen la implantación de cualquier tipo de elemento edificatorio o de urbanización, o la alteración o eliminación de elementos naturales o antrópicos en caso de que pudieran perjudicar la correcta incardinación de la infraestructura en su entorno.

2. La aprobación de la delimitación de área de reserva conlleva el interés público de la expropiación y la necesidad de ocupación. La administración actuante podrá adquirir los suelos para su ocupación en régimen de dominio público adscrito a la correspondiente infraestructura, o para su incorporación como bien patrimonial de la entidad pública administradora de la infraestructura, que en ambos casos podrá, a tales efectos, tener el carácter de beneficiaria.

3. Las diversas infraestructuras o usos que se implanten en las áreas de reserva podrán ser objeto de cesión del derecho de uso, arrendamiento, enajenación tras la conclusión de las actuaciones que justificaron su expropiación, o de la aplicación de cánones a terceros concesionarios.

Els ingressos que en este sentit perceba l'administrador d'infraestructures constituïran un fons específic necessàriament vinculat a l'adquisició de nou sòl i la inversió en infraestructures, d'acord amb un programa plurianual incorporat als seus pressupostos i publicitat per mitjà del procediment telemàtic corresponent.

Artículo 70. Actuaciones en las áreas de reserva

1. En les àrees de reserva podran executar-se actuacions en matèria d'infraestructures i de condicionament de l'entorn d'acord amb el procediment previst en esta llei, i el compliment previ dels tràmits d'informació pública i l'informe institucional, així com els requerits per la normativa en matèria de medi ambient i paisatge.
2. En els casos en què es preveja el desenvolupament d'infraestructures logístiques susceptibles de parcel·lació, o d'altres usos productius o residencials, l'ordenació del sector serà objecte del corresponent instrument d'ordenació formulat per l'òrgan competent en matèria de transports, d'acord amb la normativa urbanística vigent.

Secció tercera

Servicis prestats en altres infraestructures viàries

Artículo 71. Adecuación del viario per al seu ús pel transport públic

1. Les administracions competents en la gestió de xarxes viàries utilitzades per servicis de transport públic planificaran, projectaran, construïran i mantindran les xarxes esmentades de manera que els servicis mencionats puguen ser prestats en les millors condicions possibles de funcionalitat, comoditat i seguretat.
2. En les autovies i la resta de carreteres dotades amb control d'accés, la ubicació d'estos i la configuració dels enllaços facilitaran el servici a les poblacions properes.
3. Els ferms utilitzats asseguraran el màxim nivell possible de comoditat i seguretat de les persones usuàries del transport públic. Queda expressament prohibit qualsevol tipus de ressalt o obstacle que altere la continuïtat longitudinal del ferm mencionat, i s'hi inclouen bandes sonores o d'altres elements artificials incorporats al ferm esmentat, que dificulten la circulació dels vehicles de transport públic.
4. L'ordenació semafòrica de les vies utilitzades pel transport públic es gestionarà sota el principi de preferència absoluta per al transport públic, excepte en aquelles situacions excepcionals en què això no siga possible. Amb esta finalitat, a més de les tècniques usuals d'ordenació semafòrica, es podrà recórrer a la implantació de carrils o fases específiques en els encreuaments, a cicles específics de preferència després de la detecció prèvia del vehicle de transport públic, o a qualsevol altra tecnologia que siga convenient.
5. Excepte en les situacions excepcionals que reglamentàriament es determinen, existirà un carril expressament reservat per al transport públic sempre que la freqüència dels servicis públics de transport que l'utilitzen siga superior a una expedició cada cinc minuts, carril que s'ubicarà preferentment de manera independent de les zones usades per a la parada de vehicles privats.

Artículo 72. Paradas de transporte público

1. Com a regla general, i excepte acord distint entre les parts, correspon a l'administració titular de la via el condicionament de les parades, i s'hi inclouen els accessos i les connexions amb la xarxa de vianants existent, així com les mesures de seguretat necessàries per a l'encreuament dels vials en les quals s'ubiquen les parades mencionades. Corresponen, d'altra banda, a l'administració titular del servici de transport la implantació i el manteniment de marquesines, pals, senyals i els elements d'informació a l'usuari.
2. Les parades s'executaran amb el que preveu la normativa aplicable en matèria d'accessibilitat universal al transport públic i en matèria d'accessibilitat al medi urbà. Comptaran en tot cas amb els elements de protecció climàtica, informació i comoditat en l'espera que faciliten l'ús del transport públic a totes les persones incloses les que tinguen mobilitat reduïda.
3. Quan les parades s'ubiquen en plataformes o carrils reservats al transport públic de freqüència elevada de pas, el seu disseny permetrà l'avançament entre diverses unitats per a permetre un elevat nivell de velocitat comercial i regularitat.

Los ingresos que en tal sentido perciba el administrador de infraestructuras constituirán un fondo específico necesariamente vinculado a la adquisición de nuevo suelo y la inversión en infraestructuras, de acuerdo con un programa plurianual incorporado a sus presupuestos y publicitado mediante el procedimiento telemático correspondiente.

Artículo 70. Actuaciones en las áreas de reserva

1. En las áreas de reserva podrán ejecutarse actuaciones en materia de infraestructuras y de acondicionamiento del entorno de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley, y previo el cumplimiento de los trámites de información pública e informe institucional, así como los requeridos por la normativa en materia de medio ambiente y paisaje.
2. En los casos en los que se prevea el desarrollo de infraestructuras logísticas susceptibles de parcelación, o de otros usos productivos o residenciales, la ordenación del sector será objeto del correspondiente instrumento de ordenación formulado por el órgano competente en materia de transportes, de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

Sección tercera

Servicis prestats en altres infraestructures viàries

Artículo 71. Adecuación del viario para su uso por el transporte público

1. Las administraciones competentes en la gestión de redes viarias utilizadas por servicios de transporte público planificarán, proyectarán, construirán y mantendrán dichas redes de manera que los citados servicios puedan ser prestados en las mejores condiciones posibles de funcionalidad, comodidad y seguridad.
2. En las autovías y resto de carreteras dotadas con control de acceso, la ubicación de éstos y la configuración de los enlaces facilitarán el servicio a las poblaciones próximas.
3. Los firmes empleados asegurarán el mayor nivel posible de comodidad y seguridad de las personas usuarias del transporte público. Queda expresamente prohibido todo tipo de resalto u obstáculo que altere la continuidad longitudinal de dicho firme, incluyendo bandas sonoras u otros elementos artificiales incorporados a dicho firme, que dificulten la circulación de los vehículos de transporte público.
4. La ordenación semafórica de las vías utilizadas por el transporte público se gestionará bajo el principio de preferencia absoluta para el transporte público, salvo en aquellas situaciones excepcionales en que ello no sea posible. Con tal finalidad, además de las técnicas usuales de ordenación semafórica, se podrá recurrir a la implantación de carriles o fases específicas en los cruces, a ciclos específicos de preferencia previa detección del vehículo de transporte público, o a cualquier otra tecnología que resulte conveniente.
5. Salvo en las situaciones excepcionales que reglamentariamente se determinen, existirá un carril expresamente reservado para el transporte público siempre que la frecuencia de los servicios públicos de transporte que lo utilicen sea superior a una expedición cada cinco minutos, carril que se ubicará preferentemente de manera independiente de las zonas usadas para la parada de vehículos privados.

Artículo 72. Paradas de transporte público

1. Como regla general, y salvo acuerdo distinto entre partes, corresponde a la administración titular de la vía el acondicionamiento de las paradas, incluyendo sus accesos y conexiones con la red peatonal existente, así como las medidas de seguridad necesarias para el cruce de los viales en los que se ubiquen dichas paradas. Corresponde, por otra parte, a la administración titular del servicio de transporte la implantación y mantenimiento de marquesinas, postes, señales y los elementos de información al usuario.
2. Las paradas se ejecutarán con lo que se prevé en la normativa aplicable en materia de accesibilidad universal al transporte público y en materia de accesibilidad al medio urbano. Contarán en todo caso con los elementos de protección climática, información y comodidad en la espera que faciliten el uso del transporte público a todas las personas, incluidas las que tengan movilidad reducida.
3. Cuando las paradas se ubiquen en plataformas o carriles reservados al transporte público de frecuencia elevada de paso, su diseño permitirá el adelantamiento entre diversas unidades para permitir un elevado nivel de velocidad comercial y regularidad.

4. El que estableix este article s'entén referit també als servicis de transport de viatgers amb vehicles de turisme.

Article 73. Coordinació administrativa

1. L'administració competent en transports sotmetrà a informe de la competent en matèria viària aquells instruments en virtut dels quals s'establisquen les parades dels servicis de transport.

2. Les administracions competents en les xarxes viàries sotmetran a informe de les competents en transport qualsevol tipus d'actuació que desenvolupen en les vies mencionades i que poguera afectar el servici de transport públic.

En els dos casos esmentats en els punts anteriors, les administracions podran, per mitjà d'un escrit motivat, oposar-se fefaentment a l'establiment de parades o a modificacions lesives en la xarxa viària, i estes discrepàncies hauran de ser resoltes pel conseller competent en matèria de transports.

CAPÍTOL III

Compatibilitat de les infraestructures de transport amb l'entorn

Article 74. Zones de compatibilització d'usos a l'entorn de les infraestructures de transport

1. Amb vista a assegurar una adequada funcionalitat i compatibilitat de les infraestructures i el seu entorn, es definixen les zones de domini públic i de protecció, així com la línia de l'edificació limitrofa amb les infraestructures mencionades.

2. Els usos del sòl i les activitats que s'exercisquen en les zones esmentades, ja siga d'iniciativa pública o privada, hauran de respectar el que estableix esta llei, i hauran d'estar subjectes, en qualsevol cas, al tràmit d'autorització prèvia atorgada per l'administrador de la infraestructura.

3. El planejament urbanístic arregarà les zones anteriorment assenyalades, així com la concreció a les limitacions d'usos que en estes procedisquen per aplicació d'esta llei, i la resta de determinacions necessàries per a assegurar l'adequada compatibilitat de les infraestructures amb el seu entorn.

Article 75. Zona de domini públic

1. Comprenen la zona de domini públic els terrenys ocupats per les infraestructures de transport i una franja de terreny a cada costat de la plataforma, mesurada en horitzontalment i perpendicularment a l'eix d'esta, des de l'aresta exterior de l'explanació. L'amplària d'esta franja serà:

a) De huit metres en les infraestructures a què es referixen els apartats a, b i c de l'article 60.1 d'esta llei, llevat que en el cas de les infraestructures a què es referix l'apartat 60.1.c constituïsquen un element funcional no diferenciat de la resta de vies de comunicació, i, en este cas, seran regulades per la normativa urbanística o de carreteres, segons siga procedent.

b) De tres metres en les infraestructures interurbanes dissenyades per a l'ús de vianants i ciclistes, llevat que per estar integrades en una carretera o un altre tipus de via procedisca l'aplicació de la normativa urbanística o de carreteres, així com en els elements addicionals a què es referix l'article 61 d'esta llei.

No s'aplicarà la previsió d'esta franja de domini públic en les infraestructures logístiques a què es referix l'article 60.1.e de la llei, en les quals el domini públic serà el que es delimita per a cada una d'estes en l'instrument de planejament corresponent.

2. L'aresta exterior de l'explanació és la intersecció del talús del desmunt, del terraplè o, si és el cas, dels murs de sosteniment limitrofs, amb el terreny natural.

3. En els casos especials de ponts, viaductes, estructures i obres semblants, es podran fixar com a arestes exteriors de l'explanació les línies de projecció vertical de la vora de les obres sobre el terreny, i és, en qualsevol cas, de domini públic el terreny comprés entre les referides línies.

4. En els túnels, la determinació de la zona de domini públic s'entendrà a la superfície dels terrenys necessaris per a assegurar la conservació i el manteniment de l'obra, d'acord amb les característiques geotècniques del terreny, la seua alçària sobre aquells i la disposició

4. Lo establecido en este artículo se entiende referido también a los servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo.

Artículo 73. Coordinación administrativa

1. La administración competente en transportes someterá a informe de la competente en materia viaria aquellos instrumentos en virtud de los cuales se establezcan las paradas de los servicios de transporte.

2. Las administraciones competentes en las redes viarias someterán a informe de las competentes en transporte cualquier tipo de actuación que desarrollen en dichas vías y que pudiera afectar al servicio de transporte público.

En los dos casos citados en los puntos anteriores, las administraciones podrán, mediante escrito motivado, oponerse fehacientemente al establecimiento de paradas o a modificaciones lesivas en la red viaria, debiendo ser tales discrepancias resueltas por el conseller competente en materia de transportes.

CAPÍTULO III

Compatibilidad de las infraestructuras de transporte con el entorno

Artículo 74. Zonas de compatibilización de usos en torno a las infraestructuras de transporte

1. En orden a asegurar una adecuada funcionalidad y compatibilidad de las infraestructuras y su entorno, se definen las zonas de dominio público y de protección, así como la línea de la edificación colindante con dichas infraestructuras.

2. Los usos del suelo y las actividades que se desarrollen en dichas zonas, ya sea de iniciativa pública o privada, deberán respetar lo previsto en esta ley, estando sujetos, en todo caso, al trámite de autorización previa otorgada por el administrador de la infraestructura.

3. El planeamiento urbanístico recogerá las zonas anteriormente señaladas, así como la concreción a las limitaciones de usos que en ellas procedan por aplicación de esta ley, y las restantes determinaciones necesarias para asegurar la adecuada compatibilidad de las infraestructuras con su entorno.

Artículo 75. Zona de dominio público

1. Comprenen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las infraestructuras de transporte y una franja de terreno a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La anchura de esta franja será:

a) De ocho metros en las infraestructuras a que se refieren los apartados a, b y c del artículo 60.1 de esta ley, salvo que en el caso de las infraestructuras a que se refiere el apartado 60.1.c constituyan un elemento funcional no diferenciado del resto de vías de comunicación, en cuyo caso serán reguladas por la normativa urbanística o de carreteras, según proceda.

b) De tres metros en las infraestructuras interurbanas diseñadas para el uso de peatones y ciclistas, salvo que por estar integradas en una carretera u otro tipo de vía proceda la aplicación de la normativa urbanística o de carreteras, así como en los elementos adicionales a que se refiere el artículo 61 de esta ley.

No será de aplicación la previsión de esta franja de dominio público en las infraestructuras logísticas a que se refiere el artículo 60.1.e de la ley, en las que el dominio público será el que se delimita para cada una de ellas en el instrumento de planeamiento correspondiente.

2. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el terreno natural.

3. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras y obras similares, se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno comprendido entre las referidas líneas.

4. En los túneles, la determinación de la zona de dominio público se extenderá a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre aquellos y la disposi-

dels seus elements, i es tindran en compte circumstàncies com ara la ventilació i els accessos.

Article 76. Zona de protecció

1. La zona de protecció de les infraestructures de transport ferroviari consisteix en una franja de terreny a cada costat d'esta delimitada interiorment per la zona de domini públic definida en l'article anterior i, exteriorment, per dos línies paral·leles situades a setanta metres de les arestes exteriors de l'explanació.

2. Podrà definir-se una zona de protecció entorn de la resta d'infraestructures regulades per esta llei en aquells trams en què siga convenient amb vista a assegurar una adequada integració amb els usos de l'entorn, amb l'ampliació que en cada cas siga convenient sense superar l'assenyalada en el punt anterior. Esta definició figurarà en l'estudi informatiu previ a l'execució de les noves infraestructures, o en el que específicament es redacte amb esta finalitat en la resta de casos.

Article 77. Limitacions d'ús

1. L'execució en les zones de domini públic i de protecció de les infraestructures de transport de qualsevol tipus d'obres o instal·lacions fixes o provisionals, de canvis en la destinació d'estes o el tipus d'activitat que s'hi pot realitzar, així com plantar o talar arbres, requerirà l'autorització prèvia de l'administrador d'infraestructures, sense perjudici de les competències que respecte d'això tinguen altres administracions públiques.

L'aprovació del planejament urbanístic, així com dels projectes d'urbanització i dels altres projectes que faculden les distintes administracions públiques a executar obres en les zones de domini públic i protecció, haurà de tindre igualment la corresponent autorització prèvia a la seua aprovació definitiva en el primer cas, o a la seua execució en la resta de supòsits.

2. En la zona de domini públic només podran realitzar-se obres o instal·lacions quan raons d'interès general així ho requerisquen. Excepcionalment i per causes degudament justificades, es podrà autoritzar l'encreuament de la zona de domini públic, tant aeri com subterrani, per obres i instal·lacions d'interès privat.

En els supòsits d'ocupació de la zona de domini públic, el que la realitze estarà obligat a la neteja i a l'arreglada del material situat en els terrenys ocupats fins al límit de la zona de domini públic esmentada, després del requeriment previ de l'administració pública o de l'administrador de la infraestructura. Si no s'atenguera el requeriment dins del termini conferit, actuarà de forma subsidiària l'administració pública esmentada o l'administrador d'infraestructures ferroviàries titular de la línia, per mitjà de la realització de les necessàries labors de neteja i arreglada del material, i l'ocupant dels terrenys estarà obligat a rescabalar-lo de les despeses en què s'haguera incorregut per la actuació mencionada.

3. En la zona de protecció no podran realitzar-se obres ni es permetran més usos que aquells que siguen compatibles amb la seguretat del transport en la línia o la instal·lació considerada, i amb l'adequada compatibilització d'estos usos amb els efectes ambientals de la infraestructura. Tampoc no podran realitzar-se obres ni alterar-se l'ús quan això dificulte les actuacions futures d'ampliació o la millora de la funcionalitat de la infraestructura programades en els deu anys següents a l'autorització mencionada.

4. L'administrador de la infraestructura podrà utilitzar o autoritzar l'ús de la zona de protecció per raons d'interès general. Seran indemnitzables l'ocupació de les zones de domini públic i protecció, i els danys i els perjudicis que es causen per la seua utilització, d'acord amb el que estableix la legislació d'expropiació forçosa.

5. Podran realitzar-se cultius agrícoles en la zona de protecció, sense necessitat d'autorització prèvia, sempre que es garantisca la correcta evacuació de les aigües de reg i no es causen perjudicis a l'explanació, i estarà prohibida la crema de restolls.

6. Reglamentàriament podrà determinar-se una distància inferior a l'establida en els articles precedents per a delimitar la zona de domini públic i la de protecció, en funció de les característiques tècniques de la línia de què es tracte, i de les característiques del sòl pel qual discorre la línia mencionada.

7. En sòl classificat com a urbà consolidat pel corresponent planejament urbanístic, les distàncies establides en els articles anteriors per a la protecció de la infraestructura ferroviària seran de cinc metres per a la

ció de sus elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación y sus accesos.

Artículo 76. Zona de protección

1. La zona de protección de las infraestructuras de transporte ferroviario consiste en una franja de terreno a cada lado de la misma delimitada interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a setenta metros de las aristas exteriores de la explanación.

2. Podrá definirse una zona de protección en torno al resto de infraestructuras reguladas por esta ley en aquellos tramos en que resulte conveniente en orden a asegurar una adecuada integración con los usos del entorno, con la anchura que resulte en cada caso conveniente sin superar la señalada en el punto anterior. Tal definición figurará en el estudio informativo previo a la ejecución de las nuevas infraestructuras, o en el que específicamente se redacte con tal finalidad en los restantes casos.

Artículo 77. Limitaciones de uso

1. La ejecución en las zonas de dominio público y de protección de las infraestructuras de transporte de cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, de cambios en el destino de las mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas, así como plantar o talar árboles, requerirá la previa autorización del administrador de infraestructuras, sin perjuicio de las competencias que al respecto ostenten otras administraciones públicas.

La aprobación del planeamiento urbanístico, así como de los proyectos de urbanización y de los demás proyectos que faculden a las distintas administraciones públicas a ejecutar obras en las zonas de dominio público y protección, deberá contar igualmente con la correspondiente autorización previamente a su aprobación definitiva en el primer caso, o a su ejecución en los restantes supuestos.

2. En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras o instalaciones cuando razones de interés general así lo requieran. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.

En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público, el que la realizare estará obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el límite de la citada zona de dominio público, previo requerimiento de la administración pública o del administrador de la infraestructura. Si no se atendiere el requerimiento dentro del plazo conferido, actuará de forma subsidiaria la citada Administración pública o el administrador de infraestructuras ferroviarias titular de la línea, mediante la realización de las necesarias labores de limpieza y recogida del material, quedando el ocupante de los terrenos obligado a resarcirle de los gastos en los que se hubiere incurrido por dicha actuación.

3. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad del transporte en la línea o instalación considerada, y con la adecuada compatibilización de tales usos con los efectos ambientales de la infraestructura. Tampoco podrán realizarse obras ni alterarse el uso cuando ello dificulte actuaciones futuras de ampliación o mejora de funcionalidad de la infraestructura programadas en los diez años siguientes a la mencionada autorización.

4. El administrador de la infraestructura podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés general. Serán indemnizables la ocupación de las zonas de dominio público y protección, y los daños y perjuicios que se causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la legislación de expropiación forzosa.

5. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos.

6. Reglamentariamente podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en los artículos precedentes para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las características técnicas de la línea de que se trate, y de las características del suelo por el que discurre dicha línea.

7. En suelo clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección de la infraestructura ferroviaria serán

zona de domini públic i de huit metres per a la de protecció, comptadors en tots els casos des de les arestes exteriors de l'explanació. Les distàncies esmentades podran ser reduïdes per la conselleria competent en matèria de transports, sempre que s'acredite la necessitat de la reducció i no s'ocasionen perjudici a la regularitat, la conservació o al lliure trànsit de l'infraestructura de transport, sense que, en cap cas, la corresponent a la zona de domini públic pugui ser inferior a dos metres.

8. Les actuacions que, d'acord amb l'autorització assenyalada en el punt 1 del present article, s'hagen de realitzar amb vista a aconseguir un nivell adequat de seguretat, a la integració paisatgística, o a l'atenuació dels nivells de soroll i d'emissions que afecten els usos limitats, hauran de ser costejades pel sol·licitant de l'autorització.

Article 78. Limitacions específiques a l'edificació

1. Esta prohibit qualsevol tipus d'obres de construcció, reconstrucció o ampliació d'edificacions de qualsevol tipus a una distància inferior a cinquanta metres de la vora exterior de la plataforma de les infraestructures ferroviàries. No obstant això, es podran executar les que foren imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les edificacions existents en el moment de l'entrada en vigor d'esta llei.

Reglamentàriament s'establiran els supòsits en què siga aplicable una distància inferior a la prevista en el paràgraf anterior per al límit d'edificació en virtut de les característiques de la línia i del seu entorn. En estos casos, la concreció de les distàncies mencionades es realitzarà mitjançant una resolució aprovada pel conseller competent en la matèria.

2. En les edificacions existents fora de la zona assenyalada en el punt 1, però dins de la zona de protecció, podran realitzar-se, igualment, obres de reparació i millora, sempre que no suposen augment de volum de la construcció i sense que l'increment de valor que aquelles comporten pugui ser tingut en compte als efectes expropiatoris.

3. En qualsevol cas, el planejament urbanístic adoptarà les determinacions necessàries perquè les edificacions en els entorns de les línies de transport no estiguen afectades per nivells de soroll, d'emissions atmosfèriques o d'altres circumstàncies que puguin afectar tant els usos residencials com la resta que a estos efectes es consideren especialment sensibles.

4. En relació amb la resta d'infraestructures previstes en esta llei, es podran establir les limitacions a l'edificació previstes en els punts anteriors. L'estudi informatiu en què es definisca la nova infraestructura, o el que, si és el cas, específicament s'elabore amb esta finalitat, indicarà els trams objecte de limitació i la distància límit, que no podrà superar la indicada en el punt 1 d'este article.

Article 79. Integració de les infraestructures de transport en el seu entorn

1. Les administracions coordinaran les seues actuacions en relació tant amb el desenvolupament de les actuacions que els competisquen, com pel que fa a les tasques de manteniment i al control de les activitats dels particulars, de manera que es produisca el major nivell d'integració entre la infraestructura de transport i el seu entorn, i s'assegurarà la integració de la primera en el medi rural o urbà en què s'inscriba, tant des del punt de vista paisatgístic, com pel que fa a l'atenuació dels diferents efectes ambientals sobre l'entorn. Assesuraran, d'altra banda, aquelles mesures dirigides a aconseguir una adequada permeabilitat transversal de les infraestructures lineals, i es tractarà de canalitzar els punts d'encreuament bé per mitjà d'obres de pas a distint nivell transversal, bé per mitjà d'encreuaments dotats de totes les mesures de seguretat.

2. Les mesures abans assenyalades s'estendran a la totalitat dels àmbits necessaris per a assegurar la compatibilització mencionada i, en qualsevol cas, a les zones de domini públic i protecció. En aquells casos en què es considere convenient l'actuació de l'administrador de la infraestructura en la zona de domini públic, ja siga per a assegurar l'objectiu assenyalat, ja siga en relació amb la funcionalitat de la línia o sus futures ampliacions, es podrà procedir a la seua expropiació d'acord amb el que preveu la legislació aplicable.

3. Quan es produïsqen accions urbanitzadores o de variació d'usos del sòl, correspondrà als promotors d'estes actuacions desenvolupar les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat esmentada.

de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por la conselleria competente en materia de transportes, siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasionen perjuicio a la regularidad, conservación o al libre tránsito de la infraestructura de transporte, sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros.

8. Las actuaciones que, de acuerdo con la autorización señalada en el punto 1 del presente artículo, deban realizarse en orden a lograr un nivel adecuado de seguridad, a la integración paisajística, o a la atenuación de los niveles de ruido y emisiones que afecten a los usos colindantes, deberán ser costeadas por el solicitante de la autorización.

Artículo 78. Limitaciones específicas a la edificación

1. Queda prohibido cualquier tipo de obras de construcción, reconstrucción o ampliación de edificaciones de cualquier tipo a una distancia inferior a cincuenta metros del borde exterior de la plataforma de las infraestructuras ferroviarias. No obstante, podrán ejecutarse las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.

Reglamentariamente se establecerán los supuestos en los que resulte aplicable una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para el límite de edificación en virtud de las características de la línea y de su entorno. En tales casos, la concreción de las mencionadas distancias se realizará mediante resolución aprobada por el conseller competente en la materia.

2. En las edificaciones existentes fuera de la zona señalada en el punto 1, pero dentro de la zona de protección, podrán realizarse, igualmente, obras de reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a los efectos expropiatorios.

3. En todo caso, el planeamiento urbanístico adoptará las determinaciones necesarias para que las edificaciones en los entornos de las líneas de transporte no se vean afectadas por niveles de ruido, emisiones atmosféricas u otras circunstancias que puedan afectar tanto a los usos residenciales como a los restantes que a tales efectos se consideran especialmente sensibles.

4. En relación con el resto de infraestructuras previstas en esta ley, podrán establecerse las limitaciones a la edificación previstas en los puntos anteriores. El estudio informativo en el que se defina la nueva infraestructura, o el que en su caso específicamente se elabore con tal finalidad, indicará los tramos objeto de limitación y la distancia límite, que no podrá superar la indicada en el punto 1 de este artículo.

Artículo 79. Integración de las infraestructuras de transporte en su entorno

1. Las administraciones coordinarán sus actuaciones en relación tanto con el desarrollo de las actuaciones que les competan, como en lo referente a las tareas de mantenimiento y al control de las actividades de los particulares, de manera que se produzca el mayor nivel de integración entre la infraestructura de transporte y su entorno, asegurando la integración de la primera en el medio rural o urbano en que se inscriba, tanto desde el punto de vista paisajístico, como en lo referente a la atenuación de los diferentes efectos ambientales sobre el entorno. Assesuraran, por otra parte, aquellas medidas dirigidas a lograr una adecuada permeabilidad transversal de las infraestructuras lineales, tratando de canalizar los puntos de cruce bien mediante obras de paso a distinto nivel transversal, bien mediante cruces dotados de todas las medidas de seguridad.

2. Las medidas antes señaladas se extenderán a la totalidad de los ámbitos necesarios para asegurar la citada compatibilización y, en todo caso, a las zonas de dominio público y protección. En aquellos casos en los que se considere conveniente la actuación del administrador de la infraestructura en la zona de dominio público, ya sea para asegurar el objetivo señalado, ya sea en relación con la funcionalidad de la línea o sus futuras ampliaciones, podrá procederse a su expropiación de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable.

3. Cuando se produzcan acciones urbanizadoras o de variación de usos del suelo, correspondrá a los promotores de tales actuaciones desarrollar las medidas necesarias para asegurar la citada compatibilidad.

4. Quan es tracte d'abordar la integració de la infraestructura de transport en un entorn ja consolidat, les actuacions necessàries s'establiran i es programaran conjuntament per la conselleria competent en la matèria i el corresponent ajuntament, i quedaran arrellegades en l'estudi de planejament que respecte d'això es formalitze. L'execució d'aquestes actuacions es cofinanciarà sota el principi de la participació paritària de les dos parts.

5. Llevat que, per acord entre les parts, s'assenyale el contrari, correspon a l'administrador de la infraestructura el correcte manteniment del degut ornament públic de la plataforma ferroviària i de la resta dels terrenys de la seua titularitat. Corresponen a l'administració municipal estes funcions en els terrenys de la seua titularitat, i en aquells de propietat privada situats en les zones de domini públic i protecció, per mitjà de l'aplicació de la legislació aplicable.

CAPÍTULO IV

Estaciones i terminals de viatgers

Article 80. Planificació

1. Els baixadors, les estacions i les terminals es dissenyaran i s'exploraran sota el principi general de permetre l'accés als serveis de transport en condicions de qualitat i seguretat, afavorir la intermodalitat per mitjà d'un adequat accés des d'altres modes de transport, el vehicle privat, a peu i amb bicicleta, i facilitar, en general, als qui els utilitzen l'espera, la informació dels serveis i l'adquisició dels títols de transport. Per mitjà de la seua adequada connexió amb els teixits urbans a què servix i per mitjà del desenvolupament de les funcions urbanes en el seu interior que procedisquen, constituiran en cada cas una fita de referència bàsica en relació amb els nuclis a què servisquen.

2. Seran criteris bàsics de disseny dels elements abans assenyalats facilitar l'accés i els intercanvis entre modes, tindre capacitat suficient per als fluxos esperables, i tractar de minimitzar els costos energètics. En el seu disseny s'inclouran aquells serveis essencials per a donar un adequat servei al públic, així com aquells altres serveis o equipaments que convinga emplaçar en relació amb l'accessibilitat de la instal·lació i la possibilitat d'atendre des d'esta el màxim nombre de persones possible.

3. El planejament urbanístic dels municipis establirà, de manera concertada amb la conselleria competent en matèria de transports, les ubicacions idònies per a les terminals dels serveis de transport per carretera. Les terminals centrals de cada municipi s'ubicaran preferentment en els corresponents centres urbans, en localitzacions que permeten un ràpid accés als serveis allí establits, la intermodalitat amb la resta de serveis de transport, l'atenció al màxim nombre possible de persones, i un accés adequat per als mateixos vehicles de transport.

4. La planificació i l'execució dels baixadors, les estacions i les terminals s'ajustarà al procés genèric assenyalat en esta llei per al conjunt de les infraestructures de transport.

5. La dimensió dels diversos elements funcionals, edificatoris i d'urbanització que els conformen s'adequarà a les necessitats funcionals que cal satisfer, sense perjudici de les determinacions que en este sentit estableisca el planejament urbanístic municipal.

Article 81. Construcció i explotació de terminals de transport

1. La construcció i l'explotació de noves estacions i terminals s'abordarà de manera concertada entre l'administració local i la conselleria competent en matèria de transport. Com a regla general, correspondrà a la primera la cessió del sòl necessari, i a la segona la seua construcció i explotació, llevat que tinguen un interès merament local.

2. No obstant això que establix el punt anterior, la conselleria competent en matèria de transport i els ajuntaments podran acordar per mitjà del corresponent conveni altres fórmules de col·laboració. Podran igualment convindre amb l'administració de l'Estat fórmules específiques per a la construcció i l'explotació conjunta de terminals i intercanviadors de titularitat estatal, que podran ser gestionats d'acord amb el que establix esta llei en tots aquells aspectes que no contravinguen el que respecte d'això indique la legislació estatal aplicable.

3. La construcció d'estacions i terminals s'acomodarà al que establix esta llei, i es podran executar de manera directa per l'administració competent o per mitjà de procediment de concessió d'obra pública o

4. Cuando se trate de abordar la integración de la infraestructura de transporte en un entorno ya consolidado, las actuaciones necesarias se establecerán y programarán conjuntamente por la conselleria competente en la materia y el correspondiente ayuntamiento, quedando recogidas en el estudio de planeamiento que al respecto se formalice. La ejecución de tales actuaciones se cofinanciará bajo el principio de la participación paritaria de ambas partes.

5. Salvo que por acuerdo entre las partes se señale lo contrario, corresponde al administrador de la infraestructura el correcto mantenimiento del debido ornato público de la plataforma ferroviaria y del resto de los terrenos de su titularidad. Corresponden a la administración municipal tales funciones en los terrenos de su titularidad, y en aquellos de propiedad privada situados en las zonas de dominio público y protección, mediante la aplicación de la legislación aplicable.

CAPÍTULO IV

Estaciones i terminals de viatgers

Artículo 80. Planificació

1. Los apeaderos, estaciones y terminales se diseñarán y explotarán bajo el principio general de permitir el acceso a los servicios de transporte en condiciones de calidad y seguridad, favorecer la intermodalidad mediante un adecuado acceso desde otros modos de transporte, el vehículo privado, a pie y en bicicleta, y facilitar en general a quienes los utilicen la espera, la información de los servicios y la adquisición de los títulos de transporte. Mediante su adecuado entronque con los tejidos urbanos a los que sirve y mediante el desarrollo de las funciones urbanas en su interior que procedan, constituirán en cada caso un hito de referencia básico en relación con los núcleos a los que sirvan.

2. Serán criterios básicos de diseño de los elementos antes señalados facilitar el acceso y los intercambios entre modos, tener capacidad suficiente para los flujos esperables, y tratar de minimizar los costos energéticos. En su diseño se incluirán aquellos servicios esenciales para dar un adecuado servicio al público, así como aquellos otros servicios o equipamientos que convinga emplazar en relación con la accesibilidad de la instalación y la posibilidad de atender desde ella al mayor número de personas posible.

3. El planeamiento urbanístico de los municipios establecerá, de manera concertada con la conselleria competente en materia de transportes, las ubicaciones idóneas para las terminales de los servicios de transporte por carretera. Las terminales centrales de cada municipio se ubicarán preferentemente en los correspondientes centros urbanos, en localizaciones que permitan un rápido acceso a los servicios allí establecidos, la intermodalidad con el resto de servicios de transporte, la atención al mayor número posible de personas, y un acceso adecuado para los propios vehículos de transporte.

4. La planificación y ejecución de los apeaderos, estaciones y terminales se ajustará al proceso genérico señalado en esta ley para el conjunto de las infraestructuras de transporte.

5. La dimensión de los diversos elementos funcionales, edificatorios y de urbanización que los conformen se adecuará a las necesidades funcionales a satisfacer, sin perjuicio de las determinaciones que en tal sentido establezca el planeamiento urbanístico municipal.

Artículo 81. Construcción i explotació de terminals de transport

1. La construcción y explotación de nuevas estaciones y terminales se abordará de manera concertada entre la administración local y la conselleria competente en materia de transporte. Como regla general, correspondrá a la primera la cesión del suelo necesario, y a la segunda su construcción y explotación, salvo que tengan un interés meramente local.

2. No obstante lo establecido en el punto anterior, la conselleria competente en materia de transporte y los ayuntamientos podrán acordar mediante el correspondiente convenio otras fórmulas de colaboración. Podrán igualmente convenir con la administración del Estado fórmulas específicas para la construcción y explotación conjunta de terminales e intercambiadores de titularidad estatal, que podrán ser gestionados de acuerdo con lo previsto en esta ley en todos aquellos aspectos que no contravengan lo que al respecto indique la legislación estatal aplicable.

3. La construcción de estaciones y terminales se acomodará a lo previsto en esta ley, pudiendo ser ejecutadas de manera directa por la administración competente o mediante procedimiento de concesión de

altres de similars previstos en la normativa de contractació del sector públic.

4. L'exploració de les estacions o les terminals podrà ser assumida per un operador de transport, per l'administrador de la infraestructura o per mitjà d'un operador vinculat per un contracte de prestació de servei públic independent o tramitat de manera conjunta amb el de concessió d'obra pública assenyalat en el punt anterior. En qualsevol cas, esta explotació haurà d'estar precedida de la corresponent aprovació del projecte de servei públic redactat d'acord amb esta normativa. Quan estos projectes estiguen promoguts per un ajuntament, la seua aprovació requerirà l'informe favorable de la conselleria competent en transports.

5. Els serveis de transport que utilitzen una determinada estació o terminal contribuirán als seus costos de construcció i d'explotació d'acord amb el que establisca respecte d'això el projecte de servei públic assenyalat en el punt anterior. Les quantitats mencionades podran ser repercutides en les tarifes d'estos serveis o ser objecte de compensació en els termes que establix la present normativa.

Article 82. *Terminals dels operadors de transport*

1. L'administració competent en matèria de transport podrà establir que els serveis d'atenció als viatgers en els punts d'origen i destinació es presten en les terminals pròpies de l'operador del servei públic de transports, sempre que estiguen assegurades les condicions anàlogues de qualitat, accessibilitat i una adequada intermodalitat respecte a la resta de serveis de transport.

2. Quan es done el supòsit previst en l'apartat anterior, l'autorització abans assenyalada es podrà estendre als acords que s'establisquen perquè els serveis de tercers operadors siguen atesos en les terminals mencionades.

CAPÍTOL V *Infraestructures logístiques*

Article 83. *Infraestructures logístiques*

A l'efecte d'esta llei, tenen el caràcter d'infraestructures logístiques:

1. Les terminals ferroviàries de mercaderies que no formen part de la xarxa d'interès general de l'Estat, s'hi inclouen tant els elements purament ferroviaris com les superfícies, els equipaments, les instal·lacions i les edificacions que siguen necessaris per al desenvolupament dels seus fins.

2. Els ramals i la resta d'instal·lacions ferroviàries que connecten la xarxa d'interès general de l'Estat amb emplaçaments logístics, industrials i altres centres generadors de càrrega, llevat dels ports i aeroports d'interès general de l'Estat, que donada la seua titularitat estatal es regiran pel que establix la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari.

3. Les àrees logístiques d'iniciativa pública, enteses com els àmbits dotats dels accessos i serveis adequats d'acord amb el que establix esta llei i la normativa que la desenvolupe, i que estiguen destinats a l'exercici d'activitats de logística, emmagatzemament i distribució, així com altres que convinga ubicar en les zones esmentades pel seu elevat nivell de generació o atracció de fluxos de mercaderies.

4. Les instal·lacions públiques d'estacionament de vehicles pesants, incloent-hi tant els mateixos estacionaments com les activitats complementàries al servei d'estos vehicles, així com les àrees de servei i descans executades amb la finalitat mencionada, sempre que, per les seues condicions particulars, no entren dins de l'àmbit competencial de l'administració titular de la via.

5. Els accessos a les terminals ferroviàries i zones logístiques, llevat que, per les seues condicions particulars, hagen de ser construïts i mantinguts d'acord amb la legislació en matèria de carreteres o urbanística.

Article 84. *Planificació, ordenació i execució d'infraestructures logístiques*

1. La planificació, la projecció, l'execució i la gestió de les infraestructures logístiques s'adequarà al que establix la present llei i la normativa que la desenvolupe.

obra pública u otros similares previstos en la normativa de contractación del sector público.

4. La explotación de las estaciones o terminales podrá ser asumida por un operador de transporte, por el administrador de la infraestructura o mediante un operador vinculado por un contrato de prestación de servicio público independiente o tramitado de manera conjunta con el de concesión de obra pública señalado en el punto anterior. En todo caso, tal explotación deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del proyecto de servicio público redactado de acuerdo con esta normativa. Cuando tales proyectos estén promovidos por un ayuntamiento, su aprobación requerirá el informe favorable de la Conselleria competente en transportes.

5. Los servicios de transporte que utilicen una determinada estación o terminal contribuirán a sus costos de construcción y explotación en razón de lo que establezca al respecto el proyecto de servicio público señalado en el punto anterior. Dichas cantidades podrán ser repercutidas en las tarifas de tales servicios o ser objeto de compensación en los términos previstos en la presente normativa.

Artículo 82. *Terminales de los operadores de transporte*

1. La administración competente en materia de transporte podrá establecer que los servicios de atención a los viajeros en los puntos de origen y destino se presten en terminales propias del operador del servicio público de transportes, siempre que queden aseguradas condiciones análogas de calidad, accesibilidad y una adecuada intermodalidad respecto al resto de servicios de transporte.

2. Cuando se dé el supuesto previsto en el apartado anterior, la autorización antes señalada podrá extenderse a los acuerdos que se establezcan para que los servicios de terceros operadores sean atendidos en las terminales citadas.

CAPÍTULO V *Infraestructuras logísticas*

Artículo 83. *Infraestructuras logísticas*

A los efectos de esta ley, tienen el carácter de infraestructuras logísticas:

1. Las terminales ferroviarias de mercancías que no formen parte de la red de interés general del Estado, incluyendo tanto los elementos puramente ferroviarios como las superficies, equipamientos, instalaciones y edificaciones que sean necesarios para el desarrollo de sus fines.

2. Los ramales y el resto de instalaciones ferroviarias que conecten la red de interés general del Estado con emplazamientos logísticos, industriales y otros centros generadores de carga, salvo con los de los puertos y aeropuertos de interés general del Estado, que dada su titularidad estatal se regirán por lo previsto en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

3. Las áreas logísticas de iniciativa pública, entendidas como los ámbitos dotados de los accesos y servicios adecuados conforme a lo previsto en esta ley y en la normativa que la desarrolle, y que estén destinados al desarrollo de actividades de logística, almacenamiento y distribución, así como otras que convinga ubicar en dichas zonas por su elevado nivel de generación o atracción de flujos de mercancías.

4. Las instalaciones públicas de estacionamiento de vehículos pesados, incluyendo tanto los propios estacionamientos como las actividades complementarias al servicio de tales vehículos, así como las áreas de servicio y descanso ejecutadas con dicha finalidad, siempre que por sus condiciones particulares no entren dentro del ámbito competencial de la administración titular de la vía.

5. Los accesos a las terminales ferroviarias y zonas logísticas, salvo que por sus condiciones particulares deban ser construidos y mantenidos de acuerdo con la legislación en materia de carreteras o urbanística.

Artículo 84. *Planificación, ordenación y ejecución de infraestructuras logísticas*

1. La planificación, proyección, ejecución y gestión de las infraestructuras logísticas se adecuará a lo previsto en la presente ley y a la normativa que la desarrolle.

2. Igualment s'aplicarà el que estableix esta llei i la seua normativa de desplegament al procediment de delimitació d'àrees de reserva i la consegüent facultat expropiatòria, així com l'establiment de l'ordenació detallada en estes àrees en els casos en què es prevegen usos privats.

3. En qualsevol cas, les actuacions derivades dels apartats anteriors hauran de preveure les determinacions establides per l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 85. Instal·lacions ferroviàries privades de mercaderies

1. Les línies o les instal·lacions ferroviàries per al transport de mercaderies que es localitzen íntegrament a la Comunitat Valenciana podran ser de titularitat privada o pública, i es regiran, en este últim cas, pel que estableix esta llei per a la resta d'infraestructures de transport.

2. Per a l'establiment o l'explotació d'una infraestructura ferroviària de titularitat privada serà necessari obtenir prèviament la corresponent autorització administrativa que habilite per a això. Amb anterioritat a l'atorgament de l'autorització per la conselleria competent en matèria de transports, el sol·licitant haurà de presentar un projecte d'establiment o d'explotació de la infraestructura, que inclourà, com a mínim, una memòria explicativa dels fins que es persegueixen per mitjà de l'establiment o l'explotació de la infraestructura, amb els seus plans generals i parcials, així com els pressupostos corresponents, les activitats que s'hagen de prestar sobre aquella, la descripció de les obres i les circumstàncies tècniques de realització d'estes, que s'hauran d'ajustar a la normativa tècnica que siga d'aplicació. El projecte d'establiment o explotació de la línia serà sotmès a l'informe de la conselleria competent en matèria de transports amb anterioritat a la seua autorització. L'informe esmentat haurà de ser emès en el termini d'un mes comptador des que siga sol·licitat, i s'entendrà que és favorable si no es remetora en el referit termini.

3. Sobre la referida infraestructura ferroviària de titularitat privada es podran dur a terme activitats de transport ferroviari, exclusivament, per compte propi, com a complement d'altres activitats industrials, logístiques o d'operador de transport realitzades pel seu titular.

4. Quan l'establiment d'una línia ferroviària de titularitat privada siga, d'acord amb la legislació expropiatòria, d'utilitat pública o interès social, la conselleria competent en matèria de transport podrà habilitar al seu titular per a ocupar els terrenys de domini públic que siguen necessaris i, si és el cas, per a adquirir els de propietat privada a través d'un procediment d'expropiació forçosa en què aquell tindrà la condició de beneficiari. En estos casos, l'expedient expropiatori estarà precedit del corresponent estudi informatiu tramitat d'acord amb el que estableix la present llei.

Article 86. Logística urbana

1. En els àmbits urbans en què coincideixen capacitats escasses de la xarxa viària amb elevats nivells de distribució de mercaderies, els ajuntaments podran elaborar plans de logística urbana amb la finalitat d'incrementar l'eficiència de la distribució de mercaderies, minorar els seus costos energètics i ambientals, i racionalitzar l'ús de l'espai urbà.

2. Els plans mencionats s'elaboraran i es tramitaran d'acord amb allò que s'ha estipulat en relació amb els plans de mobilitat.

CAPÍTOL VI

Administració de les infraestructures de transport

Article 87. Administrador d'infraestructures de transport

1. Correspon a l'Ente Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat (GTP), entitat de dret públic adscrita a la conselleria competent en matèria de transport, l'administració de les infraestructures de transport de la Generalitat, en els termes arrellegats en esta llei i en el seu Estatut particular, i tindrà la condició d'administrador d'infraestructures de transport a què es refereix esta llei. No obstant això, en els casos en què així procedisca per interès públic, les funcions mencionades, o una part d'estes, podran ser assumides per la conselleria competent en matèria de transport, per Ferrocarrils de la Generalitat

2. Igualmente será de aplicación lo dispuesto en esta ley y en su normativa de desarrollo al procedimiento de delimitación de áreas de reserva y la consiguiente facultad expropiatoria, así como al establecimiento de la ordenación pormenorizada en tales áreas en los casos en los que se prevean usos privados.

3. En cualquier caso, las actuaciones derivadas de los apartados anteriores deberán contemplar las determinaciones establecidas por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

Artículo 85. Instalaciones ferroviarias privadas de mercancías

1. Las líneas o instalaciones ferroviarias para el transporte de mercancías que se localicen íntegramente en la Comunitat Valenciana podrán ser de titularidad privada o pública, rigiéndose, en este último caso, por lo previsto en esta ley para el resto de infraestructuras de transporte.

2. Para el establecimiento o la explotación de una infraestructura ferroviaria de titularidad privada será necesario obtener previamente la correspondiente autorización administrativa que habilite para ello. Con anterioridad al otorgamiento de la autorización por la conselleria competente en materia de transportes, el solicitante deberá presentar un proyecto de establecimiento o de explotación de la infraestructura, que incluirá, como mínimo, una memoria explicativa de los fines que se persiguen mediante el establecimiento o la explotación de la infraestructura, con sus planos generales y parciales, así como los presupuestos correspondientes, las actividades que vayan a prestarse sobre aquella, la descripción de las obras y las circunstancias técnicas de realización de las mismas, que habrán de ajustarse a la normativa técnica que resulte de aplicación. El proyecto de establecimiento o explotación de la línea será sometido al informe de la conselleria competente en materia de transportes con anterioridad a su autorización. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de un mes contado desde que sea solicitado, entendiéndose que es favorable si no se remitiese en el referido plazo.

3. Sobre la referida infraestructura ferroviaria de titularidad privada se podrán llevar a cabo actividades de transporte ferroviario, exclusivamente, por cuenta propia, como complemento de otras actividades industriales, logísticas o de operador de transporte realizadas por su titular.

4. Cuando el establecimiento de una línea ferroviaria de titularidad privada sea, con arreglo a la legislación expropiatoria, de utilidad pública o interés social, la conselleria competente en materia de transporte podrá habilitar a su titular para ocupar los terrenos de dominio público que resulten necesarios y, en su caso, para adquirir los de propiedad privada a través de un procedimiento de expropiación forzosa en el que aquel tendrá la condición de beneficiario. En tales casos, el expediente expropiatorio irá precedido del correspondiente estudio informativo tramitado de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

Artículo 86. Logística urbana

1. En los ámbitos urbanos en los que coincidan capacidades escasas de la red viaria con elevados niveles de distribución de mercancías, los ayuntamientos podrán elaborar planes de logística urbana con la finalidad de incrementar la eficiencia de la distribución de mercancías, minorar sus costes energéticos y ambientales, y racionalizar el uso del espacio urbano.

2. Los planes citados se elaborarán y tramitarán de acuerdo con lo estipulado en relación con los planes de movilidad.

CAPÍTULO VI

Administración de las infraestructuras de transporte

Artículo 87. Administrador de infraestructuras de transporte

1. Corresponde al Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP), entidad de derecho público adscrita a la conselleria competente en materia de transporte, la administración de las infraestructuras de transporte de la Generalitat, en los términos recogidos en esta ley y en su Estatuto particular, ostentando la condición de administrador de infraestructuras de transporte a que se refiere esta ley. No obstante, en los casos en que así proceda por interès público, dichas funciones, o parte de ellas, podrán ser asumidas por la conselleria competente en materia de transporte, por Ferrocarrils de la Generalitat

Valenciana (FGV), o per qualsevol altra entitat designada a l'efecte per la conselleria esmentada.

2. Les competències de l'administrador d'infraestructures inclouran la gestió, l'execució, el finançament, la conservació i el manteniment de les obres i la seua explotació, i es podran fixar i percebre cànon, arrendaments i qualsevol altre tipus d'ingrés derivat de la posada a la disposició d'estes per a la prestació de serveis, així com dels procedents d'activitats col·laterals que pogueren desenvolupar-se en estes. Inclourà igualment assumir la condició de beneficiari de l'expropiació forçosa quan així procedisca.

3. Mitjançant una orde de la conselleria competent en matèria de transports s'aprovarà el catàleg d'infraestructures de transport de competència autonòmica i la seua corresponent adscripció a l'efecte d'administració en els termes assenyalats en els punts anteriors. Correspondrà igualment a la conselleria mencionada adscriure les noves infraestructures a l'efecte de la seua construcció i ulterior administració.

4. Les funcions d'administració s'estendran als aspectes següents:

a) Les línies, els trams o els elements de la xarxa, tant en relació amb la plataforma com amb la superestructura, l'electrificació i la senyalització.

b) Les terminals de transport.

c) El manteniment parcial o total de la infraestructura.

d) L'explotació d'aquells elements propis i annexos a les infraestructures susceptibles de tindre rendiments lucratius.

e) La promoció i l'exercici d'activitats relatives als usos del sòl, en relació amb les infraestructures de transport.

f) L'exercici de les potestats en relació amb el règim de compatibilitat de les infraestructures amb altres usos, amb inclusió del corresponent procediment sancionador.

g) La participació, junt amb altres administracions o ens públics estatals o locals, en la construcció i el finançament d'infraestructures i en les labors d'explotació i promoció d'usos lucratius annexos assenyalats en els punts anteriors.

5. L'administració de la infraestructura inclourà, si és el cas, la gestió del sistema de control, de circulació i de seguretat, llevat quan estes funcions siguen desenvolupades per l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

6. L'administració de les infraestructures ferroviàries és un servei d'interés general i essencial per a la Comunitat Valenciana que es prestarà en la forma prevista en esta llei.

7. Les funcions de l'administrador d'infraestructures de transport podran ser desenvolupades de manera directa o indirecta per mitjà de les modalitats de contractació previstes en la legislació de contractes del sector públic, i d'acord amb el que s'ha establert en el seu Estatut particular.

Article 88. Construcció i execució d'infraestructures

1. La construcció de les infraestructures de transport es realitzarà d'acord amb els estudis informatius aprovats per la conselleria competent en matèria de transports i amb un informe previ favorable de la administració esmentada.

2. Quan l'administrador d'infraestructures de transport per a l'execució d'obres recórrega a la realització d'un contracte de concessió d'obra pública, podrà preveure en els plecs que regisquen la concessió que l'empresa concessionària siga retribuïda per mitjà del preu que abonon operadors o usuaris per la posada a la seua disposició de les infraestructures, per mitjà dels rendiments procedents de l'explotació de zones comercials vinculades, o d'activitats complementàries com a establiments d'hostaleria, aparcaments de vehicles, establiments d'oci o recreació, i, si és el cas, per mitjà de les aportacions que pugua realitzar el mateix administrador d'infraestructures.

3. Per a l'execució de les seues actuacions, l'administrador d'infraestructures podrà utilitzar qualsevol recurs que procedisca d'acord amb la normativa aplicable, i en particular:

a) Les aportacions de la Generalitat, així com les provinents de l'Estat per mitjà dels convenis de finançament d'infraestructura de transport metropolitana o qualsevol altre marc de suport estatal al transport metropolità.

b) Els que obtinga per la gestió i l'explotació del seu patrimoni o d'aquell la gestió del qual se li encomane, i per la prestació de serveis a tercers.

Valenciana (FGV), o por cualquier otra entidad designada al efecto por dicha conselleria.

2. Las competencias del administrador de infraestructuras incluirán la gestión, ejecución, financiación, conservación y mantenimiento de las obras y su explotación, pudiendo fijar y percibir cánones, arrendamientos y cualquier otro tipo de ingreso derivado de la puesta a disposición de las mismas para la prestación de servicios, así como de los procedentes de actividades colaterales que pudieran desarrollarse en las mismas. Incluirá igualmente asumir la condición de beneficiario de la expropiación forzosa cuando así proceda.

3. Mediante orden de la conselleria competente en materia de transportes se aprobará el catálogo de infraestructuras de transporte de competencia autonómica y su correspondiente adscripción a los efectos de administración en los términos señalados en los puntos anteriores. Corresponderá igualmente a la mencionada conselleria adscribir las nuevas infraestructuras a los efectos de su construcción y ulterior administración.

4. Las funciones de administración se extenderán a los siguientes aspectos:

a) Las líneas, tramos o elementos de la red, tanto en relación con la plataforma como con la superestructura, electrificación y señalización.

b) Las terminales de transporte.

c) El mantenimiento parcial o total de la infraestructura.

d) La explotación de aquellos elementos propios y anejos a las infraestructuras susceptibles de tener rendimientos lucratiuos.

e) La promoción y el desarrollo de actividades relativas a los usos del suelo, en relación con las infraestructuras de transporte.

f) El ejercicio de las potestades en relación con el régimen de compatibilidad de las infraestructuras con otros usos, incluyendo el correspondiente procedimiento sancionador.

g) La participación, junto con otras administraciones o entes públicos estatales o locales, en la construcción y financiación de infraestructuras y en las labores de explotación y promoción de usos lucratiuos anejos señalados en los puntos anteriores.

5. La administración de la infraestructura incluirá en su caso la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad, salvo cuando tales funciones sean desarrolladas por la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

6. La administración de las infraestructuras ferroviarias es un servicio de interés general y esencial para la Comunitat Valenciana que se prestará en la forma prevista en esta ley.

7. Las funciones del administrador de infraestructuras de transporte podrán ser desarrolladas de manera directa o indirecta mediante las modalidades de contratación previstas en la legislación de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en su Estatut particular.

Artículo 88. Construcción y ejecución de infraestructuras

1. La construcción de las infraestructuras de transporte se realizará de acuerdo con los estudios informativos aprobados por la Conselleria competente en materia de transportes y previo el informe favorable de dicha administración.

2. Cuando el administrador de infraestructuras de transporte para la ejecución de obras recurra a la celebración de un contrato de concesión de obra pública, podrá prever en los pliegos que rijan la concesión que la empresa concessionaria sea retribuïda mediante el precio que abonon operadores o usuarios por la puesta a su disposición de las infraestructuras, mediante los rendimientos procedentes de la explotación de zonas comerciales vinculadas, o de actividades complementarias como establecimientos de hosteleria, aparcamientos de vehículos, establecimientos de ocio o recreo, y, en su caso, mediante las aportaciones que pueda realizar el propio administrador de infraestructuras.

3. Para la ejecución de sus actuaciones, el administrador de infraestructuras podrá utilizar cualquier recurso que proceda de acuerdo con la normativa aplicable, y en particular:

a) Las aportaciones de la Generalitat, así como las provenientes del Estado mediante los convenios de financiación de infraestructura de transporte metropolitano o cualquier otro marco de apoyo estatal al transporte metropolitano.

b) Los que obtinga por la gestión y explotación de su patrimonio o de aquel cuya gestión se le encomiende, y por la prestación de servicios a terceros.

c) Les taxes l'import de les quals haja de percebre per afectació, d'acord amb esta llei.

d) Els fons de la Unió Europea que puguen ser-li assignats.

e) Els cànones que perceba per la utilització de les infraestructures de transport.

f) Les aportacions de la Generalitat a títol de préstec.

g) Els recursos financers procedents d'operacions d'endeutament.

h) Els que obtinga per la formalització de convenis amb altres entitats públiques o privades.

Article 89. Patrimoni

1. L'administrador d'infraestructures de transport podrà exercir, respecte dels béns de domini públic de la seua titularitat o d'aquells que li hagen sigut adscrits, les facultats d'administració, defensa, conservació i millora, policia, investigació, delimitació i recuperació possessòria que atorga a la conselleria competent en matèria de patrimoni la legislació de patrimoni de la Generalitat

2. Són titularitat de l'administrador d'infraestructures de transport:

a) Els béns i els drets que se li assignen per llei o per decret del Consell, els que adquirisca per qualsevol títol i els que construïca amb els seus propis recursos.

b) Els béns i els drets que, en la data d'entrada en vigor d'esta llei, siguen ja de la seua titularitat o estiguen adscrits a este, i aquells la gestió i construcció dels quals li haja sigut assignada d'acord amb allò que s'ha establert en el seu Estatut particular.

3. Els béns de domini públic de titularitat de l'administrador d'infraestructures de transport que siguen innecessaris per a la prestació dels servicis públics a què estigueren afectats, podran ser desafectats per aquell, de conformitat amb el que establix la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat.

Article 90. Declaració sobre la xarxa

1. La declaració sobre la xarxa exposarà les característiques de les infraestructures de transport posades a la disposició dels operadors, i informará sobre la capacitat de cada tram de la xarxa i sobre les condicions d'accés a esta. Així mateix, detallarà les normes generals, terminis, procediments i criteris que regisquen en relació amb els cànones i principis de tarificació que s'han d'aplicar als diferents servicis que presten les empreses operadores.

2. La declaració sobre la xarxa serà revisada anualment, o en ocasió de la incorporació de nous elements, per mitjà de procediment anàleg al de la seua formulació.

3. L'aprovació de la declaració sobre la xarxa assenyalada en els punts anteriors implicarà de manera automàtica l'obligació d'abonament per part dels diversos operadors dels cànones en esta fixats, amb independència que això puga comportar, si és el cas, la corresponent modificació del contracte de servicis públics.

Article 91. Dret d'ús de capacitat en infraestructures de transport

1. Els operadors de servicis públics de transport tindran el dret d'ús de la capacitat d'infraestructura d'acord amb el contracte de servicis públics de transports en virtut del qual desenvolupen esta operació, de la declaració de la xarxa i de l'acord que respecte d'això establisquen en desplegament dels dos instruments anteriors amb l'administrador d'infraestructures.

2. L'acord mencionat fixarà les condicions tècniques i econòmiques específiques d'ús de la capacitat i, si és el cas, de la resta d'instal·lacions que l'administrador d'infraestructura posa al servicis de l'operador. El seu contingut serà subscrit, a més per de l'administrador i l'operador, per la conselleria competent en matèria de transports, amb un informe previ en què verifiqui la seua adaptació als contractes de servicis públics vigents.

3. El desenvolupament de cada acord serà supervisat per una comissió de seguiment integrada per representants de les tres entitats que el subscriuen. Les discrepàncies que no es resolguen per la comissió mencionada seran elevades al conseller competent en matèria de transports perquè adopte les mesures oportunes, que podran incloure, si és el cas, la rescissió del contracte de servicis públics de transports.

c) Las tasas cuyo importe deba percibir por afectación, con arreglo a esta ley.

d) Los fondos de la Unión Europea que puedan ser asignados.

e) Los cánones que perciba por la utilización de las infraestructuras de transporte.

f) Las aportaciones de la Generalitat a título de préstamo.

g) Los recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento.

h) Los que obtenga por la formalización de convenios con otras entidades públicas o privadas.

Artículo 89. Patrimonio

1. El administrador de infraestructuras de transporte podrá ejercer, respecto de los bienes de dominio público de su titularidad o de aquellos que le hayan sido adscritos, las facultades de administración, defensa, conservación y mejora, policía, investigación, deslinde y recuperación posesoria que otorga a la conselleria competente en materia de patrimonio la legislación de patrimonio de la Generalitat

2. Son titularidad del administrador de infraestructuras de transporte:

a) Los bienes y derechos que se le asignen por ley o decreto del Consell, los que adquiere por cualquier título y los que construya con sus propios recursos.

b) Los bienes y derechos que, en la fecha de entrada en vigor de esta ley, sean ya de su titularidad o estén adscritos al mismo, y aquellos cuya gestión y construcción le haya sido asignada conforme a lo dispuesto en su Estatuto particular.

3. Los bienes de dominio público de titularidad del administrador de infraestructuras de transporte que resulten innecesarios para la prestación de los servicios públicos a que estuvieren afectados, podrán ser desafectados por aquel, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat.

Artículo 90. Declaración sobre la red

1. La declaración sobre la red expondrá las características de las infraestructuras de transporte puestas a disposición de los operadores, e informará sobre la capacidad de cada tramo de la red y sobre las condiciones de acceso a la misma. Asimismo detallará las normas generales, plazos, procedimientos y criterios que rijan en relación con los cánones y principios de tarificación que se deben aplicar a los diferentes servicios que presten las empresas operadoras.

2. La declaración sobre la red será revisada anualmente, o con ocasión de la incorporación de nuevos elementos, mediante procedimiento análogo al de su formulación.

3. La aprobación de la declaración sobre la red señalada en los puntos anteriores implicará de manera automática la obligación de abono por parte de los diversos operadores de los cánones en ella fijados, con independencia de que ello pueda conllevar en su caso la correspondiente modificación del contrato de servicio público.

Artículo 91. Derecho de uso de capacidad en infraestructuras de transporte

1. Los operadores de servicios públicos de transporte tendrán el derecho de uso de capacidad de infraestructura de acuerdo con el contrato de servicio público de transportes en virtud del cual desarrollen tal operación, de la declaración de la red y del acuerdo que al respecto establezcan en desarrollo de los dos instrumentos anteriores con el administrador de infraestructuras.

2. El acuerdo citado fijará las condiciones técnicas y económicas específicas de uso de la capacidad y, en su caso, del resto de instalaciones que el administrador de infraestructura pone al servicio del operador. Su contenido será suscrito, además de por el administrador y el operador, por la conselleria competente en materia de transportes, previo informe en que verifique su adaptación a los contratos de servicio público vigentes.

3. El desarrollo de cada acuerdo será supervisado por una comisión de seguimiento integrada por representantes de las tres entidades que lo suscriben. Las discrepancias que no queden resueltas por dicha comisión serán elevadas al conseller competente en materia de transportes para que adopte las medidas oportunas, que podrán incluir, en su caso, la rescisión del contrato de servicio público de transportes.

4. Tant en el cas de la rescissió esmentada en el cas anterior, com en aquells en què es produïssa per part de l'operador l'abandonament del servei o el cessament de les aportacions econòmiques previstes, la conselleria competent en matèria de transports adoptarà les mesures oportunes amb vista al manteniment dels serveis essencials i de l'equilibri econòmic de l'administrador d'infraestructures, i s'adjudicarà de manera immediata l'operació del servei d'acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic, i es rescabalarà l'administrador, si és el cas, per la minva d'ingressos derivada de les noves condicions contractuals.

Article 92. Adjudicació del dret de capacitat per a altres serveis i activitats

La prestació de serveis de trens històrics, turístics i altres que no tinguen com a objectiu el transport públic, així com l'ús de la resta d'infraestructures gestionades per l'administrador d'infraestructures per a usos lucratis no emparats per contractes de servei de transport públic, hauran de ser autoritzats per l'administrador d'infraestructures, després de la subscripció prèvia del corresponent acord de dret d'ús de capacitat i l'establiment de les condicions tècniques i econòmiques que procedisquen.

TÍTOL IV
Inspecció, infraccions i sancions

CAPÍTOL I
Inspecció de transports

Article 93. Competències

1. Correspon a l'Agència Valenciana de Mobilitat, o, si és el cas, als ajuntaments, la inspecció en matèria de serveis públics de transport que siguen de la seua competència, així com de la resta d'activitats de transport regulades en el títol II de la present llei.

2. Correspon a l'administrador de la infraestructura de transport la potestat de policia en relació amb la regulació de la compatibilitat de les infraestructures amb l'entorn regulada en el capítol III del títol III, així com les que li corresponguen en relació amb les infraestructures que administre d'acord amb allò que s'ha mencionat en el títol esmentat.

3. Correspon als ajuntaments la potestat inspectora en relació amb la formalització i el desenvolupament dels plans de mobilitat d'àmbit municipal establerts en el capítol III del títol I d'esta llei.

4. Correspon a la conselleria competent en matèria de transport la potestat inspectora en la resta de supòsits que preveu esta llei, així com en els supòsits previstos en l'apartat 3 del present article en el cas que no s'haja produït l'actuació municipal i una vegada que haja transcorregut el termini de notificació que reglamentàriament s'establisca. Competeix igualment la potestat mencionada en aquells supòsits d'especial rellevància per al sistema de transports de la Comunitat Valenciana, després de la incoació prèvia del corresponent procediment per part del conseller competent en matèria de transports, així com la coordinació dels plans d'inspecció de la resta d'òrgans, en relació, en qualsevol cas, amb els corresponents d'àmbit estatal.

5. Les potestats d'inspecció en relació amb les obligacions dels qui utilitzen els seus serveis podran ser delegades en els operadors de transport. En qualsevol cas, el personal habilitat dels diversos operadors de transport tindrà la condició d'agent de l'autoritat en aquells supòsits en què procedisca actuar de manera immediata en relació amb el comportament de les persones usuàries en estar en perill la seua pròpia seguretat, la de tercers o la del conjunt del servei de transport.

6. Correspon la facultat sancionadora a l'administració o a l'entitat a què corresponga la potestat inspectora. Normativament s'establiran les condicions objectives del personal encarregat de la instrucció dels expedients.

Article 94. Facultats de la inspecció de transports

1. Les empreses que realitzen la prestació dels serveis de transport o d'activitats a què es refereix esta llei, tenen l'obligació de facilitar l'accés a les seues instal·lacions al personal dels serveis d'inspecció en l'exercici de les seues funcions. També hauran de permetre al personal

4. Tanto en el caso de la rescisión citada en el caso anterior, como en aquellos en los que se produzca por parte del operador el abandono del servicio o el cese de las aportaciones económicas previstas, la conselleria competente en materia de transportes adoptará las medidas oportunas en orden al mantenimiento de dichos servicios y del equilibrio económico del administrador de infraestructuras, adjudicando de manera inmediata la operación del servicio de acuerdo con lo previsto en la legislación de contratos del sector público, y resarcido al administrador, en su caso, por la merma de ingresos derivada de las nuevas condiciones contractuales.

Artículo 92. Adjudicación del derecho de capacidad para otros servicios y actividades

La prestación de servicios de trenes históricos, turísticos y otros que no tengan como objetivo el transporte público, así como el uso de las restantes infraestructuras gestionadas por el administrador de infraestructuras para usos lucrativos no amparados por contratos de servicio de transporte público, deberán ser autorizados por el administrador de infraestructuras, previa la suscripción del correspondiente acuerdo de derecho de uso de capacidad y el establecimiento de las condiciones técnicas y económicas que procedan.

TÍTULO IV
Inspección, infracciones y sanciones

CAPÍTULO I
Inspección de transportes

Artículo 93. Competencias

1. Corresponde a la Agencia Valenciana de Movilidad, o en su caso a los ayuntamientos, la inspección en materia de servicios públicos de transporte que sean de su competencia, así como del resto de actividades de transporte reguladas en el título II de la presente ley.

2. Corresponde al administrador de la infraestructura de transporte la potestad de policia en relación con la regulación de la compatibilidad de las infraestructuras con el entorno regulada en el capítulo III del título III, así como las que le correspondan en relación con las infraestructuras que administre de acuerdo con lo mencionado en el citado título.

3. Corresponde a los ayuntamientos la potestad inspectora en relación con la formalización y desarrollo de los planes de movilidad de ámbito municipal establecidos en el capítulo III del título I de esta ley.

4. Corresponde a la conselleria competente en materia de transporte la potestad inspectora en el resto de supuestos previstos en esta ley, así como en los supuestos contemplados en el apartado 3 del presente artículo en caso de que no se haya producido la actuación municipal y una vez que haya transcurrido el plazo de notificación que reglamentariamente se establezca. Compete igualmente dicha potestad en aquellos supuestos de especial relevancia para el sistema de transportes de la Comunitat Valenciana, previa la incoación del correspondiente procedimiento por parte del conseller competente en materia de transportes, así como la coordinación de los planes de inspección de los restantes órganos, en relación en todo caso con los correspondientes de ámbito estatal.

5. Las potestades de inspección en relación con las obligaciones de quienes utilicen sus servicios podrán ser delegadas en los operadores de transporte. En todo caso, el personal habilitado de los diversos operadores de transporte tendrá la condición de agente de la autoridad en aquellos supuestos en los que proceda actuar de manera inmediata en relación con el comportamiento de las personas usuarias al estar en peligro su propia seguridad, la de terceros o la del conjunto del servicio de transporte.

6. Corresponde la facultad sancionadora a la administración o entidad a la que le corresponda la potestad inspectora. Normativamente se establecerán las condiciones objetivas del personal encargado de la instrucción de los expedientes.

Artículo 94. Facultades de la inspección de transportes

1. Las empresas que realicen la prestación de los servicios de transporte o de actividades a las que se refiere esta ley, tienen la obligación de facilitar el acceso a sus instalaciones al personal de los servicios de inspección en el ejercicio de sus funciones. También deberán permitir

mencionat dur a terme el control dels elements afectes a la prestació dels referits servicis.

2. El personal dels servicis d'inspecció podrà demanar de les persones físiques i jurídiques que es refereix l'apartat anterior totes les informacions que estimen necessàries sobre les matèries objecte d'esta llei.

3. El personal respecte d'això habilitat per l'administrador d'infraestructures vigilarà el compliment de les obligacions que tendisquen a evitar qualsevol classe de dany, deteriorament dels elements que componen les infraestructures, risc o perill per a les persones, i el respecte de les limitacions imposades en relació amb els terrenys immediats a les infraestructures esmentades, i es podran dictar, en este sentit, les ordenes d'execució immediata quan l'entitat del risc potencial existent així ho requiera.

4. El personal dels servicis d'inspecció, els funcionaris i el personal expressament facultat per l'administració per a realitzar la funció de policia de transports de viatgers i infraestructures de transports, tindran en els seus actes de servici, o amb motiu d'estos, la consideració d'agents de l'autoritat, a l'efecte de l'exigència, si és el cas, de la responsabilitat corresponent als qui oferisquen resistència o cometan atemptat o desacatament contra estos, d'obra o de paraula.

5. El personal dels servicis d'inspecció, en l'exercici de les funcions a què es refereix este article, podrà sol·licitar, a través de l'autoritat governativa corresponent, el suport necessari dels Cossos i Forces de Seguretat.

6. En l'exercici de la seua funció, el personal dels servicis d'inspecció està autoritzat per a:

a) Realitzar materialment les actuacions inspectores necessàries en qualsevol lloc en què s'exerceixen activitats afectades per la present llei. No obstant això, quan es requiera l'accés al domicili de persones físiques i jurídiques, serà necessària l'obtenció prèvia de l'oportunitat manament judicial.

b) Dur a terme les proves, les investigacions o els exàmens que siguen necessaris per a cerciorar-se de l'observança de les disposicions legals vigents en matèria de transport.

7. Si els òrgans responsables de la inspecció, a la vista de les greus circumstàncies existents que comprometen la seguretat dels transports, decidiren la paralització de servicis o activitats de transport, ho comunicaran immediatament al director general que tinga la competència en transports, o, si és el cas, a l'alcalde del municipi competent en el servici, a l'efecte que ordenen la instrucció del corresponent procediment.

CAPÍTOL II Infraccions

Article 95. Abast subjectiu de la responsabilitat administrativa en les matèries regulades en la present llei

1. La responsabilitat administrativa derivada de les infraccions tipificades en este títol s'exigirà a les persones físiques o jurídiques que realitzen les activitats de transport de viatgers o altres que afecten els supòsits previstos en esta llei i, si és el cas, als usuaris i a les usàries dels servicis de transport o als qui amb la seua conducta pertorbaren la normal prestació o la integritat dels béns adscrits a esta.

2. La responsabilitat administrativa per les infraccions en matèria de transport de viatgers correspondrà:

a) En les infraccions comeses en ocasió de la realització de transports o activitats subjectes a contracte o autorització administrativa, al contractista o a la persona física o jurídica titular de l'autorització.

b) En les infraccions comeses en ocasió de la realització de transports o activitats auxiliars o complementàries d'estos duts a terme sense la cobertura del preceptiu títol administratiu habilitant, o la realització de la qual es estiga exempta de l'obtenció d'este, a la persona física o jurídica propietària o arrendatària del vehicle o titular de l'activitat.

Als efectes previstos en este apartat, es considera titular del transport o activitat clandestina de què es tracte la persona física o jurídica que materialment la duga a terme en nom propi, l'organitze o assumisca la corresponent responsabilitat empresarial, així com a tot aquell que,

a dicho personal llevar a cabo el control de los elementos afectos a la prestación de los referidos servicios.

2. El personal de los servicios de inspección podrá recabar de las personas físicas y jurídicas a que se refiere el apartado anterior cuantas informaciones estimen necesarias sobre las materias objeto de esta ley.

3. El personal al respecto habilitado por el administrador de infraestructuras vigilará el cumplimiento de las obligaciones que tiendan a evitar toda clase de daño, deterioro de los elementos que componen las infraestructuras, riesgo o peligro para las personas, y el respeto de las limitaciones impuestas en relación con los terrenos inmediatos a dichas infraestructuras, pudiendo en tal sentido dictar las ordenes de ejecución inmediata cuando la entidad del riesgo potencial existente así lo requiriese.

4. El personal de los servicios de inspección, los funcionarios y el personal expresamente facultado por la administración para realizar la función de policia de transportes de viajeros e infraestructuras de transportes, tendrán en sus actos de servicio, o con motivo de los mismos, la consideración de agentes de la autoridad, a los efectos de la exigencia, en su caso, de la responsabilidad correspondiente a quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de obra o de palabra.

5. El personal de los servicios de inspección, en el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo, podrá solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

6. En el ejercicio de su función, el personal de los servicios de inspección está autorizado para:

a) Realizar materialmente las actuaciones inspectoras precisas en cualquier lugar en que se desarrollen actividades afectadas por la presente ley. No obstante, cuando se requiera el acceso al domicilio de personas físicas y jurídicas, será necesaria la previa obtención del oportuno mandamiento judicial.

b) Llevar a cabo las pruebas, investigaciones o exámenes que resulten necesarios para cerciorarse de la observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de transporte.

7. Si los órganos responsables de la inspección, a la vista de las graves circunstancias existentes que comprometan la seguridad de los transportes, decidieren la paralización de servicios o actividades de transporte, lo comunicarán inmediatamente al director general que ostente la competencia en transportes, o en su caso al alcalde del municipio competente en el servicio, a los efectos de que ordenen la instrucción del correspondiente procedimiento.

CAPÍTULO II Infracciones

Artículo 95. Alcance subjetivo de la responsabilidad administrativa en las materias reguladas en la ley

1. La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones tipificadas en este título se exigirá a las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades de transporte de viajeros u otras que afecten a los supuestos contemplados en esta ley y, en su caso, a los usuarios y las usuarias de los servicios de transporte o a quienes con su conducta perturbaran su normal prestación o la integridad de los bienes afectos a ella.

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones en materia de transporte de viajeros correspondrá a:

a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetas a contrato o autorización administrativa, al contratista o a la persona física o jurídica titular de la autorización.

b) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias de éstos llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad.

A los efectos previstos en este apartado, se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, la organice o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a

no sent personal assalariat o dependent, col·labore en la realització del mencionat transport o activitat.

e) En les infraccions cometes pels usuaris i les usuàries, i, en general, per terceres persones que, sense estar compresos en els anteriors apartats, realitzen activitats que es estiguen afectades per la legislació reguladora del transport terrestre, a la persona física o jurídica a la qual es dirigisca el precepte infringit o a la qual les normes corresponents atribuisquen específicament la responsabilitat.

d) En qualsevol dels supòsits anteriors la responsabilitat s'estendrà igualment a les persones físiques o jurídiques que mitjancien o publiciten servicis de transport que contravenen la present llei, fins i tot en els supòsits en què la divulgació esmentada es realitze per mitjà d'Internet o qualsevol altre procediment telemàtic.

3. La responsabilitat administrativa s'exigirà a les persones físiques o jurídiques a què es referix l'apartat 2 d'este article, independentment que les accions o omissions de què derive esta responsabilitat, hagen sigut materialment realitzades per estes o pel personal de la seua empresa, sense perjudici que puguen deduir les accions que al seu parer siguen procedents contra les persones a les quals siguen materialment imputables les infraccions.

4. Tendran la consideració d'infraccions independents aquelles que es cometen en relació amb distintes expedicions de transport, encara que els fets infringisquen estos o semblants preceptes.

No obstant això, tractant-se d'expedicions de servici públic de transport, o de servicis de transport públic de viatgers d'ús específic, quan els fets constitutius de la infracció tinguen relació directa amb l'activitat administrativa que es desenvolupa en les oficines de l'empresa o amb el vehicle utilitzat, i siga acreditat que no podien ser corregits fins a la tornada d'aquell a la seua empresarial de què inicialment va partir, estos fets es consideraran constitutius d'una sola infracció, encara que hageren continuat tenint lloc durant les distintes expedicions parcials realitzades mentrestant.

5. Si un mateix comportament infractor fóra susceptible de ser qualificat d'acord amb dos o més tipus infractors, s'imposarà la sanció que corresponga al més greu d'estos.

6. Les infraccions en relació amb el compliment de l'obligació dels prestadors de servicis de transport de viatgers d'estar en possessió dels títols habilitants corresponents previstos en la legislació estatal, se sancionaran d'acord amb el que preveu la norma mencionada. En aquells supòsits en què de la conducta de l'infractor es derivaren incompliments de les dos normes, s'instruiran expedients simultanis, sense que, en cap cas, un mateix supòsit pugua ser objecte de doble sanció en virtut d'una i l'altra regulació.

Article 96. Classificació de les infraccions

Les infraccions de les normes regulades en relació amb els servicis de transport de viatgers i taxi es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Les infraccions en matèria de compatibilitat de les infraestructures de transport amb l'entorn es classifiquen en molt greus i greus.

Article 97. Infraccions molt greus en matèria de transport de viatgers

Es consideren infraccions molt greus en matèria de transport de viatgers:

1. La realització d'activitats o la prestació de servicis regulats en esta llei sense el necessari contracte, autorització administrativa o de qualsevol altre títol habilitant que faculte per a això, o sense estar expressament amparat pels estos. A l'efecte de la qualificació de la infracció, es consideren inclosos en el present apartat els fets següents:

a) La prestació de servicis públics de transport o servicis de transport públic de viatgers d'ús específic que excedisquen de l'àmbit territorial específicament autoritzat.

b) La realització de transports o d'alguna de les seues activitats auxiliars i complementàries sense autorització, si esta fóra necessària d'acord amb la present llei, per no tindre les formalitats legalment o reglamentàriament establides, llevat que la conducta mencionada s'haja de qualificar com a infracció lleu.

c) L'organització, l'establiment o la realització de servicis públics de transport de viatgers sense ser titular del corresponent contracte o

todo aquel que, no siendo personal asalariado o dependiente, colabore en la realización de dicho transporte o actividad.

e) En las infracciones cometidas por los usuarios y las usuarias, y, en general, por terceras personas que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por la legislación reguladora del transporte terrestre, a la persona física o jurídica a la que vaya dirigido el precepto infringido o a la que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.

d) En cualquiera de los supuestos anteriores la responsabilidad se extenderá igualmente a las personas físicas o jurídicas que intermedien o publiciten servicios de transporte que contravengan la presente ley, incluso en los supuestos en que dicha divulgación se realice mediante Internet o cualquier otro procedimiento telemático.

3. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el apartado 2 de este artículo, independientemente de que las acciones u omisiones de las que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.

4. Tendrán la consideración de infracciones independientes aquellas que se cometan en relación con distintas expediciones de transporte, aun cuando los hechos infrinjan los mismos o semejantes preceptos.

No obstante, tratándose de expediciones de servicio público de transporte, o de servicios de transporte público de viajeros de uso específico, cuando los hechos constitutivos de la infracción guarden relación directa con la actividad administrativa que se desarrolla en las oficinas de la empresa o con el vehículo utilizado, y resulte acreditado que no podían ser corregidos hasta el regreso de aquel a la sede empresarial de la que inicialmente partió, tales hechos se considerarán constitutivos de una sola infracción, aun cuando hubieran continuado teniendo lugar durante las distintas expediciones parciales realizadas entre tanto.

5. Si un mismo comportamiento infractor fuera susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más tipos infractores, se impondrá la sanción que corresponda al más grave de ellos.

6. Las infracciones en relación con el cumplimiento de la obligación de los prestadores de servicios de transporte de viajeros de estar en posesión de los títulos habilitantes correspondientes previstos en la legislación estatal, se sancionarán de acuerdo con lo previsto en dicha norma. En aquellos supuestos en los que de la conducta del infractor se derivaran incumplimientos de ambas normas, se instruirán expedientes simultáneos, sin que en ningún caso un mismo supuesto pueda ser objeto de doble sanción en virtud de una y otra regulación.

Artículo 96. Clasificación de las infracciones

Las infracciones de las normas reguladas en relación con los servicios de transporte de viajeros y taxi se clasifican en muy graves, graves y leves. Las infracciones en materia de compatibilidad de las infraestructuras de transporte con el entorno se clasifican en muy graves y graves.

Artículo 97. Infracciones muy graves en materia de transporte de viajeros

Se consideran infracciones muy graves en materia de transporte de viajeros:

1. La realización de actividades o la prestación de servicios regulados en esta ley careciendo del necesario contrato, autorización administrativa o de cualquier otro título habilitante que faculte para ello, o sin estar expresamente amparado por los mismos. A los efectos de la calificación de la infracción, se consideran incluidos en el presente apartado los siguientes hechos:

a) La prestación de servicios públicos de transporte o servicios de transporte público de viajeros de uso específico que excedan del ámbito territorial específicamente autorizado.

b) La realización de transportes o de alguna de sus actividades auxiliares y complementarias careciendo de autorización, si ésta fuera precisa con arreglo a la presente ley, por no contar con las formalidades legal o reglamentariamente establecidas, salvo que dicha conducta deba calificarse como infracción leve.

c) La organización, establecimiento o realización de servicios públicos de transporte de viajeros sin ser titular del correspondiente contrato

autorització, ja siguen propis o aliens els mitjans amb què es presten i encara que es posseïssa l'autorització de transport discrecional.

d) La realització de servei públic de transport a l'empara de contracte o autorització que únicament habilite per a efectuar un tipus de transport de característiques diferents de les efectivament realitzades.

No s'apreciarà la infracció tipificada en el present apartat quan esta concorrega amb les assenyalades en els apartats 2 i 3 del present article.

e) El transport de persones o grups diferents d'aquells a què específicament estiga referida la corresponent autorització durant la realització d'un servei de transport públic de viatgers d'ús específic.

f) La realització de serveis que, a l'empara d'autoritzacions d'un altre tipus de transports diferents dels referits en els apartats anteriors, no complisquen alguna de les condicions establides en l'autorització que fóra necessària per a la seua prestació.

2. L'incompliment de les condicions imposades als titulars de les llicències administratives o altres títols habilitants, o el de les resolucions dictades per l'administrador d'infraestructures de transport, quan es pose en perill la seguretat de les persones, dels béns o del trànsit.

3. La prestació de serveis de transport sense haver obtingut la preceptiva adjudicació de capacitat d'infraestructura.

4. La cessió o l'autorització, expressa o tàcita, de títols habilitants per part dels seus titulars a favor d'altres persones.

5. La cessió del dret d'ús de capacitat d'infraestructura o la realització de qualsevol altre negoci jurídic sobre la capacitat d'infraestructura adjudicada.

6. L'abandonament del servei públic de transport o la seua paralització, pel termini d'un mes o el que es determine en el contracte o reglamentàriament, sense causa justificada o sense el consentiment de l'administració.

7. L'incompliment de les ordres d'immobilització o precintat de vehicles o locals, així com la desatenció als requeriments de l'administració de transport per a l'esmena de les deficiències detectades en la prestació del servei.

8. La manipulació de l'aparell de control dels temps de conducció i descans o els seus elements, del limitador de velocitat o d'altres instruments o mitjans de control que tinga l'obligació de portar instal·lats en el vehicle, destinada a alterar el seu funcionament normal, així com la instal·lació d'elements mecànics, electrònics o d'una altra naturalesa destinats a alterar el funcionament correcte dels corresponents instruments de control o modificar els seus mesuraments, encara que els uns o els altres no estiguen en funcionament en el moment de realitzar-se la inspecció.

9. La carencia de l'aparell de control dels temps de conducció i descans, del limitador de velocitat o els seus elements o d'altres instruments o mitjans de control que tinga l'obligació de portar instal·lats en el vehicle.

10. La carencia significativa de fulls de registre o de dades registrades en l'aparell de control dels temps de conducció i descans o en les targetes dels conductors que tinga obligació de conservar en la seu de l'empresa.

11. L'excess superior al 50 per 100 en els temps màxims de conducció o de conducció ininterrompuda, així com la minoració superior al mencionat percentatge dels períodes de descans obligatori.

12. No portar inserit el corresponent full de registre o targeta del conductor en l'aparell de control dels temps de conducció i descans, quan això siga exigible, portar inserit un full de registre sense haver-hi anotat el nom i els cognoms del conductor, o portar inserits els fulls de registre o targetes corresponents a un altre conductor.

13. La carencia de fulls de registre de l'aparell de control dels temps de conducció i descans que tinga l'obligació de portar en el vehicle.

14. La falsificació de fulls de registre, targetes de conductor i d'altres elements o mitjans de control que tinga l'obligació de portar en el vehicle, així com el falsejament del seu contingut o alteració de les mencions obligatòries del full de registre o targeta del conductor.

15. L'obtenció de les autoritzacions necessàries de conformitat amb la present llei i l'accés a la capacitat d'infraestructura, per mitjà de declaracions falses o per qualsevol altre procediment irregular.

o autorització, ya sean propios o ajenos los medios con los que se presten y aún cuando se posea autorización de transporte discrecional.

d) La realización de servicio público de transporte al amparo de contrato o autorización que únicamente habilite para efectuar un tipo de transporte de características distintas de las efectivamente realizadas.

No se apreciará la infracción tipificada en el presente apartado cuando la misma concorra con las señaladas en los apartados 2 y 3 del presente artículo.

e) El transporte de personas o grupos distintos de aquellos a que específicamente se encuentra referida la correspondiente autorización durante la realización de un servicio de transporte público de viajeros de uso específico.

f) La realización, al amparo de autorizaciones de otro tipo de transportes diferentes de los referidos en los apartados anteriores, de servicios que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en la autorización que fuera precisa para su prestación.

2. El incumplimiento de las condiciones impuestas a los titulares de las licencias administrativas u otros títulos habilitantes, o el de las resoluciones dictadas por el administrador de infraestructuras de transporte, cuando se ponga en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del tráfico.

3. La prestación de servicios de transporte sin haber obtenido la preceptiva adjudicación de capacidad de infraestructura.

4. La cesión o autorización, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras personas.

5. La cesión del derecho de uso de capacidad de infraestructura o la celebración de cualquier otro negocio jurídico sobre la capacidad de infraestructura adjudicada.

6. El abandono del servicio público de transporte o su paralización, por el plazo de un mes o el que se determine en el contrato o reglamentariamente, sin causa justificada o sin el consentimiento de la administración.

7. El quebrantamiento de las órdenes de inmovilización o precintado de vehículos o locales, así como la desatención a los requerimientos de la administración de transporte para la subsanación de las deficiencias detectadas en la prestación del servicio.

8. La manipulación del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso o sus elementos, del limitador de velocidad u otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, destinada a alterar su normal funcionamiento, así como la instalación de elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza destinados a alterar el correcto funcionamiento de los correspondientes instrumentos de control o modificar sus mediciones, aún cuando unos u otros no se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la inspección.

9. La carencia del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, del limitador de velocidad o sus elementos u otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo.

10. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa.

11. El exceso superior al 50 por 100 en los tiempos máximos de conducción o de conducción ininterrompida, así como la minoración superior a dicho porcentaje de los periodos de descanso obligatorio.

12. No llevar insertada la correspondiente hoja de registro o tarjeta del conductor en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, cuando ello resulte exigible, llevar insertada una hoja de registro sin haber anotado el nombre y apellidos del conductor, o llevar insertadas las hojas de registro o tarjetas correspondientes a otro conductor.

13. La carencia de hojas de registro del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso que exista la obligación de llevar en el vehículo.

14. La falsificación de hojas de registro, tarjetas de conductor y otros elementos o medios de control que exista la obligación de llevar en el vehículo, así como el falseamiento de su contenido o alteración de las menciones obligatorias de la hoja de registro o tarjeta del conductor.

15. La obtención de las autorizaciones precisas de conformidad con la presente ley y el acceso a la capacidad de infraestructura, mediante declaraciones falsas o por cualquier otro procedimiento irregular.

16. El falsejament de qualssevol documents comptables, estadístics o de control que l'empresa estiga obligada a portar, o de les dades que hi ha en estos.

17. La realització de servici públic de transport de viatgers per carretera quan es done alguna de les circumstàncies següents:

a) La falta d'exploració del servici pel mateix adjudicatari del servici, excepte els supòsits de col·laboració expressament permesos.

b) L'incompliment dels trànsits, l'itinerari, les expedicions o els punts de parada establida, quan no constituïska abandonament de la concessió en els termes assenyalats en l'apartat 6 d'este article.

c) Denegar la venda del títol de transport o l'accés al vehicle als qui l'hagueren adquirit, llevat que es donen circumstàncies legalment o reglamentàriament establides que ho justifiquen.

Especialment es considerarà inclòs en l'anterior circumstància impedir o dificultar l'accés o la utilització dels servicis de transport a persones amb discapacitat, fins i tot en el cas que no hi haja obligació que el vehicle estiga especialment adaptat per a això, sempre que, en este últim supòsit, les persones esmentades aporten els mitjans que els siguen necessaris per a accedir i abandonar el vehicle i instal·lar-se en una plaça ordinària.

d) La realització del servici transbordant injustificadament les persones durant el viatge.

e) La prestació de servicis de transport amb vehicles que incomplisquen les prescripcions tècniques sobre accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda que, en cada cas, els siguen d'aplicació.

f) L'incompliment del règim tarifari.

18. La realització de transports públics de viatgers d'ús específic quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) L'incompliment de les condicions bàsiques de seguretat.

b) En els transports d'ús específic d'escolars i de menors, la falta de plaça o seient per a cada menor, així com la inexistència de places properes a les portes de servici que siguen necessàries per a persones de mobilitat reduïda. Igualment, l'absència d'una persona major d'edat idònia, diferent del conductor, encarregada de l'atenció dels menors.

c) La realització de transport públic de viatgers per carretera d'ús específic amb incompliment de qualsevol de les condicions assenyalades en la corresponent autorització amb el caràcter d'essencials, quan l'incompliment mencionat no estiga expressament tipificat d'una altra manera en esta llei.

19. La realització de servici de transport de viatgers d'ús específic amb incompliment de qualsevol de les condicions assenyalades en la corresponent autorització o en la legislació vigent quan no estiga expressament tipificat d'una altra manera en esta llei.

20. La prestació dels servicis sense tindre el preceptiu certificat de seguretat, o en condicions que puguen afectar la seguretat de les persones o dels béns, amb greu incompliment de les normes o prescripcions tècniques.

21. L'incompliment de l'obligació de subscriure les assegurances que siguen preceptives d'acord amb la legislació vigent, així com la falta de vigència o la inexistència dels contractes d'assegurança obligatòria d'acord amb allò que s'ha establert en la legislació esmentada, o la seua insuficient cobertura per a garantir les responsabilitats derivades d'activitats que realitze l'empresa de transport.

22. L'arrendament de vehicles o la subcontractació dels servicis amb realització d'actuacions no amparades per esta llei.

23. L'incompliment de les normes establides per l'administrador de la infraestructura de transport, de tal manera que es produïsqen perturbacions en el trànsit.

24. La negativa o l'obstrucció a facilitar informació o a l'actuació dels servicis d'inspecció dels transports que impedisca l'exercici per estos de les funcions que, legalment o reglamentàriament, tinguen atribuïdes, així com la desatenció total o parcial a les instruccions o als requeriments dels membres dels servicis esmentats.

25. La comissió, en el termini d'un any, de dos o més infraccions greus sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma.

Article 98. Infraccions greus en relació amb els servicis de transport de viatgers

Es consideren infraccions greus en relació amb els servicis de transport de viatgers:

16. El falseamiento de cualesquiera documentos contables, estadísticos o de control que la empresa se encuentre obligada a llevar, o de los datos obrantes en los mismos.

17. La realización de servicio público de transporte de viajeros por carretera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La falta de explotación del servicio por el propio adjudicatario del servicio, salvo los supuestos de colaboración expresamente permitidos.

b) El incumplimiento de los tráficos, itinerario, expediciones o puntos de parada establecidos, cuando no constituya abandono de la concesión en los términos señalados en el apartado 6 de este artículo.

c) Denegar la venta de título de transporte o el acceso al vehículo a quienes lo hubieran adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo justifiquen.

Especialmente se considerará incluido en la anterior circunstancia impedir o dificultar el acceso o utilización de los servicios de transporte a personas con discapacidad, aun en el supuesto de que no exista obligación de que el vehículo se encuentre especialmente adaptado para ello, siempre que, en este último supuesto, dichas personas aporten los medios que les resulten precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria.

d) La realización del servicio transbordando injustificadamente a las personas durante el viaje.

e) La prestación de servicios de transporte con vehículos que incumplan las prescripciones técnicas sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicación.

f) El incumplimiento del régimen tarifario.

18. La realización de transportes públicos de viajeros de uso específico cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

a) El incumplimiento de las condiciones básicas de seguridad.

b) En los transportes de uso específico de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor, así como la inexistencia de plazas cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida. Igualmente, la ausencia de una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, encargada del cuidado de los menores.

c) La realización de transporte público de viajeros por carretera de uso específico incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la correspondiente autorización con el carácter de esenciales, cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley.

19. La realización de servicio de transporte de viajeros de uso específico incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la correspondiente autorización o en la legislación vigente cuando no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley.

20. La prestación de los servicios sin contar con el preceptivo certificado de seguridad, o en condiciones tales que puedan afectar a la seguridad de las personas o de los bienes, con grave incumplimiento de las normas o prescripciones técnicas.

21. El incumplimiento de la obligación de suscribir los seguros que resulten preceptivos conforme a la legislación vigente, así como la falta de vigencia o la inexistencia de los contratos de seguro obligatorios conforme a lo establecido en dicha legislación, o su insuficiente cobertura para garantizar las responsabilidades derivadas de actividades que realice la empresa de transporte.

22. El arrendamiento de vehículos o la subcontractación de los servicios realizando actuaciones no amparadas por esta ley.

23. El incumplimiento de las normas establecidas por el administrador de la infraestructura de transporte, de manera tal que se produzcan perturbaciones en el tráfico.

24. La negativa u obstrucción a facilitar información o a la actuación de los servicios de inspección de los transportes que impida el ejercicio por éstos de las funciones que, legal o reglamentariamente, tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a las instrucciones o requerimientos de los miembros de dichos servicios.

25. La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones graves sancionadas mediante resolución administrativa firme.

Artículo 98. Infracciones graves en relación con los servicios de transporte de viajeros

Se consideran infracciones graves en relación con los servicios de transporte de viajeros:

1. La realització de servici públic de transport de viatgers per carretera quan es done alguna de les circumstàncies següents:

a) No disposar del nombre mínim de vehicles o l'incompliment per estos de les condicions exigides en el contracte.

b) No prestar els servicis suplementaris oferits pel contractista i arrellegats en el contracte.

c) Incumplir l'obligació de transport gratuït de l'equipatge dels viatgers en els supòsits i fins al límit en què això siga obligatori.

d) Vendre un nombre de places per vehicle superior al de les autoritzades en el contracte.

e) Realitzar servici públic de transport de viatgers incomplint qualsevol de les condicions assenyalades en el contracte o l'autorització amb el caràcter d'essencials, quan l'incompliment mencionat no estiga expressament tipificat d'una altra manera en esta llei.

f) La utilització, per part de la prestació de servicis públics de transport o servicis de transport per a viatgers d'ús específic, de vehicles amb els elements i/o els mecanismes per a permetre l'accés a les persones amb mobilitat reduïda que estiguen avariats.

2. L'incompliment de les condicions imposades als titulars de les autoritzacions o d'altres títols habilitants o de les resolucions dictades per la conselleria competent en matèria de transport terrestre, quan no constituïsquen infracció molt greu.

3. L'arrendament de vehicles amb conductor amb incompliment del que estableix l'autorització.

4. La interrupció injustificada del servici.

5. La prestació de servicis públics de transport amb utilització de la mediació de persones físiques o jurídiques no autoritzades per a la mediació mencionada.

6. La realització o convivència en activitats de mediació no autoritzades o en la venda de bitllets per a servicis de transports de viatgers en locals o establiments públics destinats a altres fins. En este supòsit la responsabilitat correspondrà al titular de la indústria o del servici a què estiga destinat el local.

7. L'incompliment del règim tarifari contractual o reglamentàriament establert, llevat que per tractar-se d'un servici públic de transport de viatgers haja de considerar-se com a molt greu.

8. El reiterat incompliment injustificat superior a 15 minuts dels horaris d'eixida en les capçaleres de les línies de servicis públics de transports de viatgers.

9. La carencia, la falta de formalitats reglamentàriament exigides en la documentació de control, estadística o comptable l'emplenament de la qual siga obligatòria, així com l'ocultació o la falta de conservació d'esta i demora injustificada de la posada en coneixement o la falta de comunicació del seu contingut a l'administració, quan no siguen infraccions molt greus.

10. L'inadequat funcionament imputable al transportista de l'aparell de control dels temps de conducció i descans, del limitador de velocitat o els seus elements o d'altres instruments o mitjans de control que tinga l'obligació de portar instal·lats en el vehicle, quan no haja de ser qualificada com a molt greu de conformitat amb el que estableix l'article 97.8, o no passar la revisió periòdica d'estos en els terminis i forma legalment o reglamentàriament establits.

11. L'exces superior al 20% en els temps màxims de conducció o de conducció ininterrompuda, així com la minoració superior al percentatge esmentat en els períodes de descans establits, llevat que el mencionat excés o defecte haja de ser considerat infracció molt greu, de conformitat amb el que estableix l'article 97.

12. La utilització d'un mateix full de registre durant diverses jornades quan això haguera donat lloc a la superposició de registres que impedisquen la seua lectura.

13. L'incompliment per part del conductor de l'obligació de realitzar per si mateix determinades entrades manuals o anotacions en l'aparell de control dels temps de conducció i descans o en els fulls de registre, en aquells supòsits en què esta obligació estiga reglamentàriament establida, llevat que haja de qualificar-se com a molt greu de conformitat amb el que estableix l'article 97 o com a lleu per donar-se les circumstàncies previstes en l'article 99.

14. La utilització en l'aparell de control dels temps de conducció i descans de més d'un full de registre durant una mateixa jornada per la mateixa persona, excepte quan es canvie de vehicle i l'hora de registre

1. La realización de servicio público de transporte de viajeros por carretera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) No disponer del número mínimo de vehículos o el incumplimiento por éstos de las condiciones exigidas en el contrato.

b) No prestar los servicios suplementarios ofertados por el contratista y recogidos en el contrato.

c) Incumplir la obligación de transporte gratuito del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio.

d) Vender un número de plazas por vehículo superior al de las autorizadas en el contrato.

e) Realizar servicio público de transporte de viajeros incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en el contrato o autorización con el carácter de esenciales, cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley.

f) La utilización, por parte de la prestación de servicios públicos de transporte o servicios de transporte para viajeros de uso específico, de vehículos con los elementos y los mecanismos para permitir el acceso a las personas con movilidad reducida que estén avariados.

2. El incumplimiento de las condiciones impuestas a los titulares de las autorizaciones o de otros títulos habilitantes o de las resoluciones dictadas por la Conselleria competente en materia de transporte terrestre, cuando no constituyan infracción muy grave.

3. El arrendamiento de vehículos con conductor incumpliendo lo establecido en la autorización.

4. La interrupción injustificada del servicio.

5. La prestación de servicios públicos de transporte utilizando la mediación de personas físicas o jurídicas no autorizadas para dicha mediación.

6. La realización o convivencia en actividades de mediación no autorizadas o en la venta de billetes para servicios de transportes de viajeros en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. En este supuesto la responsabilidad correspondrá al titular de la industria o servicio al que esté destinado el local.

7. El incumplimiento del régimen tarifario contractual o reglamentariamente establecido, salvo que por tratarse de un servicio público de transporte de viajeros deba considerarse como muy grave.

8. El reiterado incumplimiento injustificado superior a 15 minutos de los horarios de salida en las cabeceras de las líneas de servicios públicos de transportes de viajeros.

9. La carencia, falta de formalidades reglamentariamente exigidas en la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimiento resulte obligatoria, así como la ocultación o falta de conservación de la misma y demora injustificada de la puesta en conocimiento o la falta de comunicación de su contenido a la administración, cuando no resulten infracciones muy graves.

10. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del aparato de control de los tiempos de conducción y descanso, del limitador de velocidad o sus elementos u otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, cuando no haya de ser calificada como muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 97.8, o no pasar la revisión periódica de los mismos en los plazos y forma legal o reglamentariamente establecidos.

11. El exceso superior al 20% en los tiempos máximos de conducción o de conducción ininterrompida, así como la minoración superior a dicho porcentaje en los periodos de descanso establecidos, salvo que dicho exceso o defecto deba ser considerado infracción muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 97.

12. La utilización de una misma hoja de registro durante varias jornadas cuando ello hubiera dado lugar a la superposición de registros que impidan su lectura.

13. El incumplimiento por parte del conductor de la obligación de realizar por si mismo determinadas entradas manuales o anotaciones en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso o en las hojas de registro, en aquellos supuestos en que tal obligación se encuentre reglamentariamente establecida, salvo que deba calificarse como muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 97 o como leve por darse las circunstancias previstas en el artículo 99.

14. La utilización en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso de más de una hoja de registro durante una misma jornada por la misma persona, salvo cuando se cambie de vehículo y

utilitzada en l'aparell del primer vehicle no estiga homologada per a la seua utilització en el segon.

15. La utilització per part de l'arrendatari de vehicles industrials arrendats amb conductor o sense portar a bord el contracte d'arrendament o una còpia d'este, o portar-lo sense emplenar, així com la falta de tota l'altra documentació que siga obligatòria per a acreditar la utilització correcta del vehicle.

16. L'obstrucció que dificulte greument l'actuació dels serveis d'inspecció quan no concórrega algun dels supòsits que, d'acord amb allò que s'ha assenyalat en l'apartat 24 de l'article anterior, implicarien que l'obstrucció mencionada haguera de ser qualificada com a infracció molt greu.

17. La carencia no significativa de fulls de registre o de dades registrades en l'aparell de control dels temps de conducció i descans o en les targetes dels conductors que tinga obligació de conservar en la seu de l'empresa a disposició de l'administració.

18. La no-utilització de la capacitat per a circular per les vies adjudicada per l'administració ferroviària de la Generalitat en cas d'infraestructura congestionada, per causes imputables a l'empresa de transport.

19. L'incompliment de les condicions de qualitat i regularitat en què han de prestar-se els serveis, el dels requisits establits en adjudicar-se la capacitat, o el de les instruccions operatives i de prestació del servei emanades de l'administració de transport de la Generalitat, quan l'incompliment esmentat no constituïssa infracció molt greu.

20. La utilització de vehicles i la resta d'elements de transport sense complir les normes i els requisits tècnics que per raons de seguretat hagen de tindre.

21. La contractació del transport amb transportistes o intermediaris que no estiguen degudament autoritzats.

22. L'incompliment de totes les obligacions formals que s'imposen als qui realitzen les activitats regulades en esta llei en garantia dels drets dels consumidors i usuaris.

23. La comissió, en el termini d'un any, de dos o més infraccions lleus.

24. Les conductes arreplegades en l'article anterior quan les circumstàncies que concórreguen en la seua comissió no pertorben la seguretat de les persones, dels béns o del trànsit, en els termes que s'establixen reglamentàriament.

Article 99. Infraccions lleus en relació amb els serveis de transport de viatgers

1. Constituïxen infraccions lleus qualssevol violacions de les normes contingudes en esta llei en matèria de serveis de transport públic que, no estant tipificades com a infraccions molt greus o greus, afecten el règim d'obligacions de les entitats que realitzen activitats de transport o de les persones usuàries, o a les infraestructures de transport.

2. En qualsevol cas, es consideren constitutives d'infracció lleu en relació amb els serveis de transport de viatgers les conductes següents:

a) L'incompliment en els transports interurbans de viatgers contractats per plaça amb pagament individual de l'obligació d'expedir títols de transport, de les normes establides per al seu despatx o devolució, així com expedir-los sense les mencions essencials.

b) La realització de serveis de transports sense portar a bord del vehicle la documentació formal que acredite la possibilitat legal de prestar-los o que siga exigible per a la determinació de la classe de transport que s'està realitzant, llevat que la infracció mencionada haja de ser qualificada com a molt greu o greu d'acord amb el que estableixen els articles precedents.

c) La realització de serveis públics de transport de viatgers amb incompliment del calendari establert.

d) La realització de transports públics de viatgers d'ús específic amb incompliment de l'itinerari, el calendari, l'horari, les expedicions, els punts de parada o algun dels requisits establits en la corresponent autorització d'ús específic, sempre que no siga una acció greu o molt greu.

Així mateix, en el transport d'escolars i menors, l'incompliment de les obligacions sobre parada de vehicles en el centre escolar i accés i

la hora de registre utilitzada en el aparato del primer vehicle no se encuentre homologada para su utilización en el segundo.

15. La utilización por parte del arrendatario de vehículos industriales arrendados con o sin conductor sin llevar a bordo el contrato de arrendamiento o una copia del mismo, o llevarlo sin cumplimentar, así como la falta de cuanta otra documentación resulte obligatoria para acreditar la correcta utilización del vehículo.

16. La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los servicios de inspección cuando no concorra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado en el apartado 24 del artículo anterior, implicarían que dicha obstrucción debiera ser calificada como infracción muy grave.

17. La carencia no significativa de hojas de registro o de datos registrados en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar en la sede de la empresa a disposición de la administración.

18. La no utilización de capacidad para circular por las vías adjudicadas por la administración ferroviaria de la Generalitat en caso de infraestructura congestionada, por causas imputables a la empresa de transporte.

19. El incumplimiento de las condiciones de calidad y regularidad en que deben prestarse los servicios, el de los requisitos establecidos al adjudicarse la capacidad, o el de las instrucciones operativas y de prestación del servicio emanadas de la administración de transporte de la Generalitat, cuando dicho incumplimiento no constituya infracción muy grave.

20. La utilización de vehículos y demás elementos de transporte sin cumplir las normas y los requisitos técnicos que por razones de seguridad deban reunir.

21. La contratación del transporte con transportistas o intermediarios que no se hallen debidamente autorizados.

22. El incumplimiento de cuantas obligaciones formales se impongan a quienes realicen las actividades reguladas en esta ley en garantía de los derechos de los consumidores y usuarios.

23. La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones leves.

24. Las conductas recogidas en el artículo anterior cuando las circunstancias que concurren en su comisión no perturben la seguridad de las personas, de los bienes o del tráfico, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 99. Infracciones leves en relación con los servicios de transporte de viajeros

1. Constituyen infracciones leves cualesquiera violaciones de las normas contenidas en esta ley en materia de servicios de transporte público que, no estando tipificadas como infracciones muy graves o graves, afecten al régimen de obligaciones de las entidades que realicen actividades de transporte o de las personas usuarias, o a las infraestructuras de transporte.

2. En todo caso, se consideran constitutivas de infracción leve en relación con los servicios de transporte de viajeros las siguientes conductas:

a) El incumplimiento en los transportes interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual de la obligación de expedir títulos de transporte, de las normas establecidas para su despacho o devolución, así como expedirlos sin las menciones esenciales.

b) La realización de servicios de transportes sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes.

c) La realización de servicios públicos de transporte de viajeros incumpliendo el calendario establecido.

d) La realización de transportes públicos de viajeros de uso específico incumpliendo el itinerario, calendario, horario, expediciones, puntos de parada o alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente autorización de uso específico, siempre que no sea una acción grave o muy grave.

Asimismo, en el transporte de escolares y menores, el incumplimiento de las obligaciones sobre parada de vehículos en el centro esco-

abandonament dels vehicles en els termes regulats en les normes sobre seguretat en esta classe de transports.

e) El tracte desconsiderat de paraula o obra amb les persones que utilitzen els serveis de transport per part del personal de l'empresa en el transport de viatgers.

f) En el transport escolar i de menors, l'incompliment de l'obligació d'exigir l'entitat contractant al transportista els documents o els justificants que, d'acord amb les normes que regulen la seguretat en els transports esmentats, li haja d'exigir.

g) La realització de l'activitat d'arrendament de vehicles amb conductor amb vehicles que porten publicitat o signes externs identificatius, excepte en els supòsits reglamentàriament exceptuats.

h) L'entrada dels vehicles dedicats a l'arrendament amb conductor del lloc en què habitualment estiguen guardats o estacionats sense portar a bord el full de ruta o portar-lo sense emplenar, excepte els supòsits exceptuats reglamentàriament. No s'apreciarà esta infracció quan esta concorra amb l'establida en l'article anterior.

i) La falta de comunicació de qualsevulla dada o circumstància que tinga obligació d'informar de l'administració, llevat que la infracció esmentada haja de ser qualificada com a greu.

j) L'exces en els temps màxims de conducció o de la conducció ininterrompuda, així com la minoració dels períodes de descans o pausa establits, llevat que haja de ser considerat infracció greu o molt greu.

k) La utilització de fulls de registre no homologats o que siguen incompatibles amb l'aparell de control utilitzat, així com la utilització d'una targeta de conductor caducada.

l) L'incompliment per part del conductor de l'obligació de realitzar per si mateix determinades entrades manuals o anotacions en l'aparell de control dels temps de conducció i descans o en els fulls de registre, en aquells supòsits en què esta obligació estiga reglamentàriament establida, quan, no obstant no haver-se realitzat les anotacions oportunes, siga possible deduir, bé del mateix aparell de control o dels fulls de registre immediatament anteriors i posteriors, quin haguera d'haver sigut el seu contingut.

m) La carencia dels preceptius ròtols o avisos d'obligada exhibició per a coneixement del públic usuari.

n) La realització de servici públic de transport de viatgers per carretera o transport públic de viatgers d'ús específic incomplint qualsevol de les condicions assenyalades en l'autorització sense el caràcter d'essencials, quan l'incompliment mencionat no estiga expressament tipificat d'una altra manera en esta llei.

o) La carencia dels distintius o els ròtols exigits per la normativa vigent, relatius a la naturalesa o al tipus de transport autoritzat que cal realitzar, portar-los en lloc no visible o en condicions que dificulten la seua percepció, utilitzar-los de forma inadequada o portar en lloc visible del vehicle el distintiu corresponent a un àmbit territorial o classe de transport per a la realització del qual no estiga facultat pel necessari títol habilitant.

p) La carencia de canvi de moneda metàl·lica o bitllets fins a la quantitat que, si és el cas, estiga reglamentàriament determinada.

q) L'incompliment pels usuaris de les obligacions que els corresponguen, d'acord amb les regles d'utilització del servici, llevat que les normes en què es continguen les regles esmentades consideren expressament el seu incompliment com a infracció greu.

En qualsevol cas, es considerarà constitutiu de la infracció tipificada en este apartat l'incompliment per les persones usuàries dels transports de viatgers de les prohibicions següents:

1.¹ Impedir o forçar l'obertura o el tancament de les portes d'accés als vehicles.

2.¹¹ Manipular els mecanismes d'obertura o tancament de les portes d'accés al vehicle o de qualsevol dels seus compartiments previstos per al seu accionament exclusiu pel personal de l'empresa transportista.

3.¹ Fer ús sense causa justificada de qualsevol dels mecanismes de seguretat o socors instal·lats en el vehicle per a casos d'emergència.

4.¹ Abandonar el vehicle o accedir a este fora de les parades, si és el cas, establides a l'efecte, excepte causa justificada.

5.⁶ Realitzar, sense causa justificada, qualsevol acte susceptible de distraure l'atenció del conductor o entorpir la seua labor quan el vehicle estiga en marxa.

lar y acceso y abandono de los vehículos en los términos regulados en las normas sobre seguridad en esta clase de transportes.

e) El trato desconsiderado de palabra u obra con las personas que utilicen los servicios de transporte por parte del personal de la empresa en el transporte de viajeros.

f) En el transporte escolar y de menores, el incumplimiento de la obligación de exigir la entidad contratante al transportista los documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dichos transportes, deba exigirle.

g) La realización de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor con vehículos que lleven publicidad o signos externos identificativos, salvo en los supuestos reglamentariamente exceptuados.

h) La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del lugar en que habitualmente se encuentran guardados o estacionados sin llevar a bordo la hoja de ruta o llevándola sin cumplimentar, salvo los supuestos exceptuados reglamentariamente. No se apreciará esta infracción cuando la misma concorra con la establecida en el artículo anterior.

i) La falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que exista obligación de poner en conocimiento de la administración, salvo que dicha infracción deba ser calificada como grave.

j) El exceso en los tiempos máximos de conducción o de la conducción ininterrompida, así como la minoración de los períodos de descanso o pausa establecidos, salvo que deba ser considerado infracción grave o muy grave.

k) La utilización de hojas de registro no homologadas o que resulten incompatibles con el aparato de control utilizado, así como la utilización de una tarjeta de conductor caducada.

l) El incumplimiento por parte del conductor de la obligación de realizar por sí mismo determinadas entradas manuales o anotaciones en el aparato de control de los tiempos de conducción y descanso o en las hojas de registro, en aquellos supuestos en que tal obligación se encuentre reglamentariamente establecida, cuando, no obstante no haberse realizado las anotaciones oportunas, resulte posible deducir, bien del propio aparato de control o de las hojas de registro inmediatamente anteriores y posteriores, cual debiera haber sido su contenido.

m) La carencia de los preceptivos rótulos o avisos de obligada exhibición para conocimiento del público usuario.

n) La realización de servicio público de transporte de viajeros por carretera o transporte público de viajeros de uso específico incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la autorización sin el carácter de esenciales, cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley.

o) La carencia de los distintivos o rótulos exigidos por la normativa vigente, relativos a la naturaleza o al tipo de transporte autorizado a realizar, llevarlos en lugar no visible o en condiciones que dificulten su percepción, utilizarlos de forma inadecuada o llevar en lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte para cuya realización no se halle facultado por el necesario título habilitante.

p) La carencia de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que, en su caso, se encuentre reglamentariamente determinada.

q) El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan, conforme a las reglas de utilización del servicio, salvo que las normas en que se contengan dichas reglas consideren expresamente su incumplimiento como infracción grave.

En todo caso, se considerará constitutivo de la infracción tipificada en este apartado el incumplimiento por las personas usuarias de los transportes de viajeros de las siguientes prohibiciones:

1.^o Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los vehículos.

2.^o Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso al vehículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento exclusivo por el personal de la empresa transportista.

3.^o Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.

4.^o Abandonar el vehículo o acceder a éste fuera de las paradas en su caso establecidas al efecto, salvo causa justificada.

5.^o Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.

6.ª Viatjar en llocs diferents dels habilitats per a això.
7.ª Fumar en els vehicles i en llocs diferents dels habilitats amb este fi en estacions de transport en els termes que resulten de la normativa específica sobre la matèria.

8.ª Viatjar sense títol de transport o amb títol que siga insuficient en funció de les característiques del viatge i condicions d'utilització previstes en la corresponent concessió o autorització, així com l'ús indegut del títol que es posseïssa.

9.ª Tota acció injustificada que pugua implicar deteriorament o causar brutícia en els vehicles o les estacions de transport.

10.ª Realitzar accions que impliquen perill per a la integritat física de les altres persones o que suposen el deteriorament del material dels vehicles o de les infraestructures.

r) La realització del transport amb vehicles aliens sobre els quals no se tinguen les condicions de disponibilitat legalment exigibles, així com utilitzar per al transport vehicles arrendats a altres transportistes o utilitzar la col·laboració d'estos fora dels supòsits o incomplint les condicions legalment establides, llevat que haja de ser considerat infracció molt greu. En idèntica infracció incorreran les empreses que actuen com a col·laboradors, amb incompliment de les obligacions que els afecten.

s) Qualsevol de les infraccions previstes en l'article anterior quan, per la seua naturalesa, ocasió o circumstàncies, no haja de ser qualificada com a greu, i s'haurà de justificar l'existència de les circumstàncies mencionades i motivar-se la resolució corresponent.

Article 100. Infraccions a la regulació del servei de taxi

1. Es consideraran infraccions molt greus a la regulació del servei de taxi:

a) La realització del servei de taxi sense el preceptiu títol habilitant.

b) La realització de servicis públics de transport de viatgers amb automòbils de turisme fora de l'àrea de prestació del servei i no tindre autorització específica per a això.

c) La falsificació dels distintius o les senyalitzacions que foren exigibles per a la prestació del servei de taxi.

d) La manipulació del taxímetre o dels seus elements, o d'altres instruments de control que siga obligatori portar en el vehicle, destinada a modificar el seu funcionament normal o modificar els seus mesuraments.

e) Conduir el vehicle havent ingerit begudes alcohòliques en taxes superiors a les establides en la legislació sobre seguretat viària, i, en qualsevol cas, la conducció sota els efectes d'estupeficients, psicotròpics, estimulants i qualsevol altra substància d'efecte anàleg. La prestació de servicis en condicions que puguen afectar la seguretat de les persones per comportar perill greu i directe per a estes.

f) Retindre qualsevol objecte abandonat en el vehicle sense donar compte d'això a l'autoritat competent.

g) L'incompliment del règim tarifari establert reglamentàriament, comés de forma intencionada.

h) L'arrendament, la cessió o el traspàs de l'explotació de les llicències i dels vehicles adscrits a estes.

2. Es consideraran infraccions greus a la regulació del servei de taxi:

a) L'incompliment de les condicions de l'autorització, quan no haja de qualificar-se com a molt greu.

b) L'incompliment del règim tarifari, quan no haja de qualificar-se com a molt greu.

c) No atendre sense causa justificada la sol·licitud d'un usuari estant de servei.

d) Realitzar la prestació del servei amb un vehicle d'antiguitat superior a l'autoritzada per la present llei.

e) No tindre el preceptiu document en què han de formalitzar-se les reclamacions de les persones usuàries o negar o obstaculitzar la seua disposició al públic, així com l'ocultació o la demora injustificada en la posada en coneixement de l'administració de les reclamacions o les queixes consignades en aquell d'acord amb el que reglamentàriament es determine.

f) L'incompliment del règim d'horari i descansos establert.

g) La iniciació de servicis fora de l'àmbit territorial de l'autorització.

6.º Viajar en lugares distintos a los habilitados para ello.

7.º Fumar en los vehículos y en lugares distintos a los habilitados a tal fin en estaciones de transporte en los términos que resulten de la normativa específica sobre la materia.

8.º Viajar sin título de transporte o con título que resulte insuficiente en función de las características del viaje y condiciones de utilización previstas en la correspondiente concesión o autorización, así como el uso indebido del título que se posea.

9.º Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad en los vehículos o estaciones de transporte.

10.º Realizar acciones que impliquen peligro para la integridad física de las demás personas o que supongan el deterioro del material de los vehículos o de las infraestructuras.

r) La realización del transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a otros transportistas o utilizar la colaboración de éstos fuera de los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerado infracción muy grave. En idéntica infracción incurrirán las empresas que actúen como colaboradores, incumpliendo las obligaciones que les afecten.

s) Cualquiera de las infracciones previstes en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.

Artículo 100. Infracciones a la regulación del servicio de taxi

1. Se considerarán infracciones muy graves a la regulación del servicio de taxi:

a) La realización del servicio de taxi careciendo del preceptivo título habilitante.

b) La realización de servicios públicos de transporte de viajeros en automóviles de turismo fuera del área de prestación del servicio y careciendo de autorización específica para ello.

c) La falsificación de los distintivos o señalizaciones que fueran exigibles para la prestación del servicio de taxi.

d) La manipulación del taxímetro o de sus elementos, o de otros instrumentos de control que sea obligatorio llevar en el vehículo, destinada a modificar su funcionamiento normal o modificar sus mediciones.

e) Conducir el vehículo habiendo ingerido bebidas alcohólicas en tasas superiores a las establecidas en la legislación sobre seguridad vial, y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupeficientes, psicotròpicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efecto análogo. La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas.

f) Retener cualquier objeto abandonado en el vehículo sin dar cuenta de ello a la autoridad competente.

g) El incumplimiento del régimen tarifario establecido reglamentariamente, cometido de forma intencionada.

h) El arriendo, cesión o traspaso de la explotación de las licencias y de los vehículos afectos a las mismas.

2. Se considerarán infracciones graves a la regulación del servicio de taxi:

a) El incumplimiento de las condiciones de la autorización, cuando no deba calificarse como muy grave.

b) El incumplimiento del régimen tarifario, cuando no deba calificarse como muy grave.

c) No atender sin causa justificada a la solicitud de un usuario estando de servicio.

d) Realizar la prestación del servicio con un vehículo de antigüedad superior a la autorizada por la presente ley.

e) Carecer del preceptivo documento en el que deben formalizarse las reclamaciones de las personas usuarias o negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada en la puesta en conocimiento de la administración de las reclamaciones o quejas consignadas en aquel de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

f) El incumplimiento del régimen de horario y descansos establecido.

g) La iniciación de servicios fuera del ámbito territorial de la autorización.

h) Qualsevol de les infraccions previstes en l'article anterior, quan per la seua naturalesa, ocasió o circumstància no haja de ser qualificada com a molt greu.

i) Incumplir l'obligació de transport de l'equipatge dels viatgers en els supòsits i fins al límit en què això siga obligatori.

j) L'alteració o la inadequada utilització dels distintius o les senyalitzacions que foren exigibles per a la prestació del servei de taxi.

k) El cobrament individual.

l) L'inadequat funcionament, imputable al titular del taxi, del taxímetre, dels mòduls o de qualsevol altre instrument que s'haja de portar instal·lat en el vehicle, quan no haja de ser qualificada com a molt greu, o no passar la revisió periòdica d'estos en els terminis i en la forma legalment o reglamentàriament establits.

m) El tracte vexatori a les persones que reben el servei.

n) Publicitar-se com a taxi sense autorització.

o) Incumplir les prescripcions que puguen establir-se relatives a l'exhibició de publicitat en els vehicles.

3. Es consideren infraccions lleus a la regulació del servei de taxi:

a) Realitzar serveis sense portar a bord del vehicle la documentació que acredite la possibilitat formal de prestar el servei.

b) Incumplir els terminis previstos per a realitzar actuacions administratives (visat, etc.).

c) No portar en lloc visible del vehicle els distintius, els rètols, els avisos o els documents d'obligada exhibició per a coneixement del públic usuari o portar-los en condicions que en dificulten la percepció, així com la seua utilització de forma inadequada.

d) L'incompliment pels qui utilitzen el servei de les obligacions que els corresponen reglamentàriament.

e) No tindre canvi de moneda metàl·lica o bitllets fins a la quantitat que estiga reglamentàriament determinada.

f) Descuït en la neteja personal o exterior i interior del vehicle.

g) Donar origen a escàndol públic amb motiu del servei.

Article 101. Infraccions en relació amb la compatibilitat de les infraestructures de transport amb l'entorn

1. Constitueixen infraccions molt greus en matèria de compatibilitat de les infraestructures amb l'entorn:

a) La realització d'obres o activitats no permeses en la zona de domini públic o en les zones de protecció de les infraestructures de transport, sense tindre la preceptiva autorització, quan afecten la seguretat del trànsit.

b) El deteriorament o la destrucció de qualsevol obra o instal·lació, la sostracció de qualsevol element de la infraestructura de transport que afecte al funcionament d'esta o estiga directament relacionat amb la seguretat del trànsit, o la modificació intencionada de les seues característiques.

c) El llançament o el dipòsit d'objectes en qualsevol punt de les infraestructures i els seus veïns i instal·lacions annexes o al pas de vehicles i, en general, qualsevol acte que pugua representar un perill greu per a la seguretat del transport, els seus usuaris, els mitjans o les instal·lacions de qualsevol tipus.

d) La comissió, en el termini d'un any, de dos o més infraccions greus sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma.

2. Constitueixen infraccions greus en matèria de compatibilitat de les infraestructures de transport amb l'entorn:

a) La realització d'obres o activitats no permeses en les zones de domini públic, protecció o reserva sense tindre la preceptiva autorització, quan estos comportaments no constituïsquen infracció molt greu.

b) La destrucció, el deteriorament o l'alteració de qualsevol obra, instal·lació o element de les infraestructures de transport directament relacionat amb l'ordenació, l'orientació i la seguretat de la circulació o la modificació intencionada de les seues característiques o situació, quan estos comportaments no constituïsquen infracció molt greu.

Article 102. Altres infraccions

1. Serà considerada infracció greu la careència de pla de mobilitat en els supòsits en què siga necessari, així com en particular l'inici de les activitats o dels usos residencials en els àmbits subjectes a l'obligació esmentada, així com l'atorgament de les autoritzacions administratives habilitants per al desenvolupament d'estos usos.

h) Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave.

i) Incumplir la obligación de transporte del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio.

j) La alteración o inadecuada utilización de los distintivos o señalizaciones que fueran exigibles para la prestación del servicio de taxi.

k) El cobro individual.

l) El inadecuado funcionamiento, imputable al titular del taxi, del taxímetro, de los módulos o de cualquier otro instrumento que se tenga que llevar instalado en el vehículo, cuando no haya de ser calificada como muy grave, o no pasar la revisión periódica de los mismos en los plazos y forma legal o reglamentariamente establecidos.

m) El trato vejatorio a las personas que reciben el servicio.

n) Publicitarse como taxi careciendo de autorización.

o) Incumplir las prescripciones que puedan establecerse relativas a la exhibición de publicidad en los vehículos.

3. Se consideran infracciones leves a la regulación del servicio de taxi:

a) Realizar servicios sin llevar a bordo del vehículo la documentación que acredite la posibilidad formal de prestar el servicio.

b) Incumplir los plazos previstos para realizar actuaciones administrativas (visado, etc.).

c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos, rótulos, avisos o documentos de obligada exhibición para conocimiento del público usuario o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como su utilización de forma inadecuada.

d) El incumplimiento por quienes utilicen el servicio de las obligaciones que les correspondan reglamentariamente.

e) Carecer de cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que se encuentre reglamentariamente determinada.

f) Descuido en el aseo personal o exterior e interior del vehículo.

g) Dar origen a escándalo público con motivo del servicio.

Artículo 101. Infracciones en relación con la compatibilidad de las infraestructuras de transporte con el entorno

1. Constituyen infracciones muy graves en materia de compatibilidad de las infraestructuras con el entorno:

a) La realización de obras o actividades no permitidas en la zona de dominio público o en las zonas de protección de las infraestructuras de transporte, sin contar con la preceptiva autorización, cuando afecten a la seguridad del tráfico.

b) El deterioro o la destrucción de cualquier obra o instalación, la sustracción de cualquier elemento de la infraestructura de transporte que afecte al funcionamiento de la misma o esté directamente relacionado con la seguridad del tráfico, o la modificación intencionada de sus características.

c) El lanzamiento o depósito de objetos en cualquier punto de las infraestructuras y sus aledaños e instalaciones anejas o al paso de vehículos y, en general, cualquier acto que pueda representar un peligro grave para la seguridad del transporte, sus usuarios, los medios o las instalaciones de todo tipo.

d) La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones graves sancionadas mediante resolución administrativa firme.

2. Constituyen infracciones graves en materia de compatibilidad de las infraestructuras de transporte con el entorno:

a) La realización de obras o actividades no permitidas en las zonas de dominio público, protección o reserva sin contar con la preceptiva autorización, cuando tales comportamientos no constituyan infracción muy grave.

b) La destrucción, el deterioro o la alteración de cualquier obra, instalación o elemento de las infraestructuras de transporte directamente relacionado con la ordenación, la orientación y la seguridad de la circulación o la modificación intencionada de sus características o situación, cuando tales comportamientos no constituyan infracción muy grave.

Artículo 102. Otras infracciones

1. Será considerada infracción grave la carencia de plan de movilidad en los supuestos en los que resulte necesario, así como en particular el inicio de las actividades o usos residenciales en los ámbitos sujetos a dicha obligación, así como el otorgamiento de las autorizaciones administrativas habilitantes para el desarrollo de tales usos.

2. Es considerarà igualment infracció greu la vulneració dels elements essencials dels referits plans de mobilitat, i s'entenen com a essencials els que siguen identificats com a tals en els documents mencionats.

3. Es considerarà infracció greu la inexistència de reserva per a l'estacionament de bicicletes en habitatges, excepte en els supòsits d'autopromoció en els quals es considerarà infracció lleu.

4. Es consideraran infraccions lleus la vulneració d'aspectes no essencials dels plans de mobilitat.

5. La comissió, en el termini d'un any, de dos o més infraccions lleus sancionades mitjançant una resolució administrativa ferma serà considerada infracció greu.

6. Les actuacions d'empreses o particulars que danyen o alteren la funcionalitat de la resta d'infraestructures previstes en esta llei es classificaran de la mateixa manera que les que tinguen com a objecte les infraestructures de transport.

CAPÍTOL III Sancions

Article 103. Sancions

1. La quantia de les sancions que s'imposen es graduarà d'acord amb els factors següents:

- La repercussió social de la infracció i el perill per a la vida i salut de les persones, la seguretat de les coses i el medi ambient.
- La importància del dany o deteriorament causat, si és el cas.
- La intencionalitat en la comissió de la infracció.
- El grau de participació del sancionat i el benefici per este obtingut.

e) La comissió, en el període dels dotze mesos anterior al fet infractor, d'una altra infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma en via administrativa.

f) La circumstància d'haver procedit l'infractor, per iniciativa pròpia, a remeiar els efectes perniciosos de la infracció.

2. La graduació de les sancions, sense superar les establertes per als mateixos conceptes en la normativa estatal, es farà d'acord amb les regles i dins dels límits següents:

a) Se sancionaran amb advertència o multa de fins a 1.000 euros les infraccions classificades com a lleus. En el cas de no apreciació de reincidència, l'import de les sancions se situarà entre 0 i 400 euros. Amb 1.000 euros seran sancionades les infraccions en què s'aprecie reincidència per la comissió de dos o més faltes en el període d'un any.

b) Se sancionaran amb multes compreses entre els 1.001 a 2.000 euros les infraccions classificades com a greus.

c) Se sancionaran amb multa de 2.001 a 6.000 euros les infraccions classificades com a molt greus.

d) Se sancionaran amb multa de 6.001 a 18.000 euros les infraccions assenyalades en els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 i 24 de l'article 97 quan el responsable d'estes ja haguera sigut sancionat, mitjançant una resolució que pose fi a la via administrativa, per la comissió de qualsevol altra infracció molt greu de les previstes en esta llei en els dotze mesos anteriors.

3. La comissió d'una infracció molt greu podrà comportar la revocació o suspensió del contracte, concessió administrativa o títol habilitant si estiguera emès per un òrgan o entitat de la Generalitat, i la conseqüent inhabilitació temporal per a l'exercici de l'activitat per un període màxim d'un any en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com, si és el cas, el precintat del vehicle o de la maquinària i del material rodador amb què s'haja realitzat l'activitat infractora. La imposició, per resolució definitiva, d'una nova sanció per la comissió d'una infracció molt greu en els dotze mesos següents a la de la inicial, portarà annexa la revocació de l'autorització o el títol habilitant de l'empresa de transport emès per un òrgan o entitat de la Generalitat. En el còmput del referit termini no es tindran en compte els períodes en què no haja sigut possible realitzar l'activitat per haver sigut temporalment retirada la corresponent autorització o el títol habilitant.

4. La comissió d'una infracció lleu en relació amb la regulació del servei de taxi podrà portar annexa la suspensió temporal de la llicència durant un termini de quinze dies, en les greus de tres a sis mesos, i en les molt greus de fins a un any.

2. Se considerarà igualment infracció grave la vulneració de los elementos esenciales de los referidos planes de movilidad, entendiéndose como esenciales los que sean identificados como tales en los mencionados documentos.

3. Se considerará infracción grave la inexistencia de reserva para el estacionamiento de bicicletas en viviendas, salvo en los supuestos de autopromoción en los que se considerará infracción leve.

4. Se considerarán infracciones leves la vulneración de aspectos no esenciales de los planes de movilidad.

5. La comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones leves sancionadas mediante resolución administrativa firme será considerada infracción grave.

6. Las actuaciones de empresas o particulares que dañen o alteren la funcionalidad del resto de infraestructuras previstas en esta ley se clasificarán de igual manera que las que tengan por objeto las infraestructuras de transporte.

CAPÍTULO III Sanciones

Artículo 103. Sanciones

1. La cuantía de las sanciones que se impongan se graduará de acuerdo con los siguientes factores:

- La repercusión social de la infracción y el peligro para la vida y salud de las personas, la seguridad de las cosas y el medio ambiente.
- La importancia del daño o deterioro causado, en su caso.
- La intencionalidad en la comisión de la infracción.
- El grado de participación del sancionado y el beneficio por él obtenido.

e) La comisión, en el periodo de los doce meses anterior al hecho infractor, de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

f) La circunstancia de haber procedido el infractor, por propia iniciativa, a remediar los efectos perniciosos de la infracción.

2. La graduación de las sanciones, sin superar las establecidas para los mismos conceptos en la normativa estatal, se realizará conforme a las reglas y dentro de los límites siguientes:

a) Se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 1.000 euros las infracciones clasificadas como leves. En el caso de no apreciación de reincidencia, el importe de las sanciones se situará entre 0 y 400 euros. Con 1.000 euros serán sancionadas las infracciones en las que se aprecie reincidencia por la comisión de dos o más faltas en el periodo de un año.

b) Se sancionarán con multas comprendidas entre los 1.001 a 2.000 euros las infracciones clasificadas como graves.

c) Se sancionarán con multa de 2.001 a 6.000 euros las infracciones clasificadas como muy graves.

d) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones señaladas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 y 24 del artículo 97 cuando el responsable de las mismas ya hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en esta Ley en los doce meses anteriores.

3. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la revocación o suspensión del contrato, concesión administrativa o título habilitante si estuviere emitido por un órgano o entidad de la Generalitat, y la conseqüente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo de un año en el ámbito de la Comunitat Valenciana, así como, en su caso, el precintado del vehicle o de la maquinària y del material rodante con el que se haya realizado la actividad infractora. La imposició, per resolució definitiva, de una nueva sanció per la comissió de una infracció molt greu en los doce meses siguientes a la de la inicial, llevará aneja la revocación de la autorización o título habilitante de la empresa de transporte emitido por un órgano o entidad de la Generalitat. En el cómputo del referido plazo no se tendrán en cuenta los periodos en que no haya sido posible realizar la actividad por haber sido temporalmente retirada la correspondiente autorización o título habilitante.

4. La comisión de una infracción leve en relación con la regulación del servicio de taxi podrá llevar aneja la suspensión temporal de la licencia durante un plazo de quince días, en las graves de tres a seis meses, y en las muy graves de hasta un año.

5. Podrà ordenar-se la immobilització d'un vehicle quan siguen detectades en carretera conductes infractores en què concórreguen circumstàncies que puguen comportar perill per a la seguretat.

En els supòsits d'immobilització de vehicles que transporten viatgers, i a fi que estos patisquen la menor perturbació possible, serà responsabilitat del transportista el vehicle del qual haja sigut immobilitzat buscar els mitjans alternatius necessaris per a fer arribar als viatgers a la seua destinació. Si no ho fa, els mitjans esmentats podran ser establits per l'administració. Les despeses que genere l'adopció d'estes mesures seran, en qualsevol cas, a càrrec del transportista. Si es negara a satisfer-les, quedarà immobilitzat el vehicle fins que aquelles foren satisfetes, encara que hagueren desaparegut les causes de la infracció.

6. La imposició de les sancions que, si és el cas, corresponguen serà independent de la possible obligació d'indemnitzar els danys i els perjudicats causats.

7. En tots aquells supòsits en què l'interessat decidisca voluntàriament fer efectiva la sanció abans que transcorreguen els quinze dies següents a la notificació de l'expedient sancionador, la quantia pecuniària de la sanció inicialment proposada es reduirà en un 25 per 100.

El pagament de la sanció pecuniària amb anterioritat a què se dicte la resolució sancionadora equivaldrà a l'acabament del procediment. En estos casos l'interessat podrà interposar idèntics recursos a què li hagueren correspost en el cas que el procediment haguera acabat de forma ordinària mitjançant una resolució expressa.

8. Amb caràcter general, quan, com a conseqüència de la infracció, s'obtinga un benefici quantificable, la multa podrà incrementar-se fins al triple del benefici obtingut.

Article 104. Inhabilitació de l'infractor per reincidència i requeriment per a l'emesa de deficiències

La comissió de dos o més infraccions de les ressenyades en els apartats 1, 2, 3, 5 i 6 de l'article 97 en l'espai d'un any comportarà la inhabilitació de l'infractor durant un període de tres anys, a la Comunitat Valenciana, per a ser titular de qualsevol classe de contracte, autorització o llicència habilitant per a l'exercici de l'activitat de transport o de qualsevol de les seues activitats auxiliars i complementàries o formar part del consell d'administració o òrgan equivalent d'una empresa que siga titular d'estos contractes, autoritzacions o llicències. Durant el període mencionat, el que ha sigut inhabilitat així tampoc podrà aportar la seua capacitat professional a cap empresa transportista o d'activitat auxiliar i complementària del transport, a la Comunitat Valenciana.

La inhabilitació mencionada comportarà la caducitat i la pèrdua de la validesa de tots els contractes, les autoritzacions i les llicències, emesos per un òrgan o entitat de la Generalitat, que fóra titular l'empresa infractora, amb caràcter definitiu.

Perquè es produïska el supòsit de reincidència assenyalat en este article, les sancions tingudes en compte hauran d'haver sigut imposades mitjançant una resolució ferma que pose fi a la via administrativa. El període d'inhabilitació començarà a comptar des de l'endemà de la notificació de l'última d'estes resolucions.

Article 105. Altres efectes de les sancions

1. Quan les sancions imposades mitjançant una resolució que pose fi a la via administrativa no siguen satisfetes en període voluntari, es podrà procedir, si el vehicle de què es tracte haguera quedat immobilitzat durant la tramitació de l'expedient, a la seua venda en pública subhasta, en la forma que reglamentàriament s'establisca, i els diners obtinguts es destinaran al pagament de l'import de la sanció, a les despeses originades per la immobilització i la subhasta, com també a les despeses que es pogueren haver produït com a conseqüència de mesures cautelars. El sobrant, si n'hi ha, quedarà a la disposició de la persona denunciada.

2. La firmeza de les sancions en via administrativa en relació amb els supòsits d'edificació o la realització d'altres activitats que modifiquen l'estat inicial de les propietats en les zones de domini públic, protecció i reserva, comportarà la necessitat de demolició de l'executat indegudament i la restauració de l'entorn al seu estat inicial. En el cas que no es produïska esta demolició i restauració, podrà ser executada per l'administrador d'infraestructures a càrrec dels sancionats.

5. Podrà ordenarse la inmovilización de un vehículo cuando sean detectadas en carretera conductas infractoras en las que concurren circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad.

En los supuestos de inmovilización de vehículos que transporten viajeros, y a fin de que éstos sufran la menor perturbación posible, será responsabilidad del transportista cuyo vehículo haya sido inmovilizado buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar a los viajeros a su destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la administración. Los gastos que genere la adopción de tales medidas serán, en todo caso, de cuenta del transportista. Si se negara a satisfacerlos, quedará inmovilizado el vehículo hasta que aquellos fueran satisfechos, aunque hubieran desaparecido las causas de la infracción.

6. La imposición de las sanciones que en su caso correspondan será independiente de la posible obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.

7. En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los quince días siguientes a la notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por 100.

El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución sancionadora equivaldrá a la terminación del procedimiento. En estos casos el interesado podrá interponer idénticos recursos a los que le hubieran correspondido en el supuesto de que el procedimiento hubiese terminado de forma ordinaria mediante resolución expresa.

8. Con carácter general, cuando, como consecuencia de la infracción, se obtenga un beneficio cuantificable, la multa podrá incrementar-se hasta el triple del beneficio obtenido.

Artículo 104. Inhabilitación del infractor por reincidencia y requerimiento para la subsanación de deficiencias

La comisión de dos o más infracciones de las reseñadas en los apartados 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 97 en el espacio de un año conllevará la inhabilitación del infractor durante un período de tres años, en la Comunitat Valenciana, para ser titular de cualquier clase de contrato, autorización o licencia habilitante para el ejercicio de la actividad de transporte o de cualquiera de sus actividades auxiliares y complementarias o formar parte del consejo de administración u órgano equivalente de una empresa que sea titular de tales contratos, autorizaciones o licencias. Durante dicho período tampoco podrá el así inhabilitado aportar su capacitación profesional a ninguna empresa transportista o de actividad auxiliar y complementaria del transporte, en la Comunitat Valenciana.

La mencionada inhabilitación llevará aparejada la caducidad y pérdida de la validez de cuantos contratos, autorizaciones y licencias emitidos por un órgano o entidad de la Generalitat fuese titular la empresa infractora, con carácter definitivo.

Para que se produzca el supuesto de reincidencia señalado en este artículo, las sanciones tenidas en cuenta deberán haber sido impuestas mediante resolución firme que ponga fin a la vía administrativa. El período de inhabilitación comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se hubiese notificado la última de estas resoluciones.

Artículo 105. Otros efectos de las sanciones

1. Cuando las sanciones impuestas mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa no sean satisfechas en período voluntario, se podrá proceder, si el vehículo de que se trate hubiera quedado inmovilizado durante la tramitación del expediente, a su venta en pública subasta, en la forma que reglamentariamente se establezca, quedando el dinero obtenido afecto al pago del importe de la sanción, de los gastos originados por la inmovilización y la subasta, así como de los gastos que pudieran haberse producido como consecuencia de medidas cautelares. El sobrante, si lo hubiere, quedará a disposición de la persona denunciada.

2. La firmeza de las sanciones en vía administrativa en relación con los supuestos de edificación o la realización de otras actividades que modifiquen el estado inicial de las propiedades en las zonas de dominio público, protección y reserva, conllevará la necesidad de demolición de lo indebidamente ejecutado y la restauración del entorno en su estado inicial. En el caso de que no se produzca tal demolición y restauración, podrá ser ejecutada por el administrador de infraestructuras a costa de los sancionados.

3. En els casos en què la seguretat del transport així ho requirisca, l'administració podrà executar d'ofici i de manera immediata les demolicions assenyalades en el punt anterior abans de la resolució de l'expedient sancionador, amb independència de les indemnitzacions que procediren en el cas que resolt l'expedient mencionat no es concloguera esta necessitat de demolició.

4. En els casos en què com a conseqüència de la conclusió del procés sancionador procedirà l'extinció de l'autorització o el contracte en virtut del qual es presta el servei de transports, l'administració podrà optar per requerir el prestador perquè pose a la seua disposició els mitjans materials necessaris per a la continuïtat del servei quan això siga imprescindible, durant el termini que permeta l'adopció d'altres solucions alternatives per part de l'administració. En este supòsit el sancionat tindrà dret a la indemnització que procedisca per l'ús d'estos mitjans materials, d'acord amb la legislació aplicable.

Article 106. Multes coercitives

Amb independència de les sancions que corresponguen, l'autoritat competent podrà imposar multes coercitives quan prosseguisca la conducta infractora i no s'atenga el requeriment de cessament d'esta, i se'ls reiterarà cada espai de temps que siga suficient per a complir el que ordena. Les multes coercitives no excediran, cada una d'estes, del deu per cent de la sanció fixada per a la infracció comesa.

Article 107. Competència per a la imposició de sancions

1. Quan la competència en el procediment la tinga la conselleria competent en matèria de transports, correspondrà la imposició de les sancions per infraccions lleus i greus al director general que tinga la competència en transports. Les sancions per infraccions molt greus seran imposades pel conseller competent en matèria de transports.

2. Quan la competència en el procediment corresponga a altres ens de la Generalitat, correspondrà la imposició de les sancions a l'òrgan que es determine en la seua regulació pròpia, excepte en el cas de les sancions molt greus que seran imposades per la direcció de l'ens competent.

3. Quan la competència en el procediment la tinga l'ajuntament, correspondrà la imposició de les sancions a l'alcalde.

4. En el cas d'operadors de transport que no tinguen el caràcter d'entitat pública, una vegada instruït l'expedient es traslladarà a l'administració competent a fi que siga resolt d'acord amb les competències assenyalades en els punts anteriors.

Article 108. Procediment sancionador i mesures provisionals

1. Sense perjudi del que establix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la normativa de desplegament, el procediment sancionador s'iniciarà sempre d'ofici per l'administració o entitat competent, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'orde superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia.

La denúncia haurà d'expressar la identitat de la persona o de les persones que les presenten, el relat dels fets que pogueren constituir infracció i la data de la seua comissió i, quan siga possible, la identificació dels presumptes infractors.

2. Amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, es podran realitzar actuacions prèvies a fi de determinar si concurren circumstàncies que justifiquen esta iniciació. En especial, estes actuacions s'orientaran a fixar, amb la màxima precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la persona o les persones que pogueren ser responsables i les circumstàncies rellevants que concórreguen en els uns i els altres.

3. Una vegada acordada la iniciació del procediment sancionador, l'expedient es notificarà al presumpte o als presumptes infractors, que disposaran d'un termini de quinze dies, des de la data de la notificació, per a aportar tantes al·legacions, documents o informacions com consideren convenientes i, si és el cas, proposar una prova amb concreció dels mitjans que pretenguen valdre's. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini per a això, la persona encarregada d'instruir l'assumpte podrà acordar l'obertura d'un període de prova.

3. En los casos en los que la seguridad del transporte así lo requiera, la administración podrá ejecutar de oficio y de manera inmediata las demoliciones señaladas en el punto anterior antes de la resolución del expediente sancionador, con independencia de las indemnizaciones que procedieran en caso de que resuelto dicho expediente no se concluyera tal necesidad de demolición.

4. En los casos en los que como consecuencia de la conclusión del proceso sancionador procediera la extinción de la autorización o contrato en virtud del cual se presta el servicio de transportes, la administración podrá optar por requerir al prestador para que ponga a su disposición los medios materiales necesarios para la continuidad del servicio cuando ello resulte imprescindible, durante el plazo que permita la adopción de otras soluciones alternativas por parte de la administración. En este supuesto el sancionado tendrá derecho a la indemnización que proceda por el uso de tales medios materiales, de acuerdo con la legislación aplicable.

Artículo 106. Multas coercitivas

Con independencia de las sanciones que correspondan, la autoridad competente podrá imponer multas coercitivas cuando prosiga la conducta infractora y no se atienda el requerimiento de cese de la misma, reiterándolos cada lapso de tiempo que sea suficiente para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas no excederán, cada una de ellas, del diez por ciento de la sanción fijada para la infracción cometida.

Artículo 107. Competencia para la imposición de sanciones

1. Cuando la competencia en el procedimiento la ostente la conselleria competente en materia de transportes, correspondrá la imposición de las sanciones por infracciones leves y graves al director general que tenga la competencia en transportes. Las sanciones por infracciones muy graves serán impuestas por el conseller competente en materia de transportes.

2. Cuando la competencia en el procedimiento corresponda a otros entes de la Generalitat, correspondrá la imposición de las sanciones al órgano que se determine en su regulación propia, salvo en el caso de las sanciones muy graves que serán impuestas por la dirección del ente competente.

3. Cuando la competencia en el procedimiento la ostente el ayuntamiento, correspondrá la imposición de las sanciones al alcalde.

4. En el caso de operadores de transporte que no tengan el carácter de entidad pública, una vez instruido el expediente se dará traslado a la administración competente a fin de que sea resuelto de acuerdo con las competencias señaladas en los puntos anteriores.

Artículo 108. Procedimiento sancionador y medidas provisionales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo, el procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio por la administración o entidad competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.

La denuncia deberá expresar la identidad de la persona o personas que las presenten, el relato de los hechos que pudieran constituir infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos infractores.

2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a fijar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurren en unos y otros.

3. Una vez acordada la iniciación del procedimiento sancionador, el expediente se notificará al presunto o presuntos infractores, que dispondrán de un plazo de quince días, desde la fecha de la notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo para ello, la persona encargada de instruir el asunto podrá acordar la apertura de un período de prueba.

4. La proposta de resolució es notificarà als interessats, i se'ls concedirà un termini de quinze dies, des de la notificació, per a formular al·legacions i presentar els documents i les informacions que consideren pertinents, davant de la persona encarregada d'instruir el procediment sancionador, el qual, a la vista de les al·legacions i dels documents presentats, emetrà un informe i remetrà les actuacions a l'òrgan competent per a la imposició de la sanció que corresponga.

5. Abans de dictar una resolució, l'òrgan competent per a resoldre podrà decidir, mitjançant un acord motivat, la realització de les actuacions complementàries indispensables per a resoldre el procediment que, en qualsevol cas, hauran de tindre lloc en un termini no superior a quinze dies. El termini per a resoldre el procediment quedarà suspès fins a l'acabament d'estes.

6. En el termini d'un mes des de la recepció de la proposta de resolució i dels documents, les al·legacions i les informacions que hi ha en el procediment, l'òrgan competent per a resoldre dictarà una resolució motivada, que haurà de ser notificada als interessats.

Si transcorregut un any des de la iniciació del procediment sancionador no s'haguera notificat als interessats la resolució que li pose fi, es produirà la seua caducitat. En este cas, l'òrgan competent per a resoldre emetrà, a sol·licitud de l'interessat, un certificat en què conste que ha caducat el procediment i que s'ha procedit a l'arxivament de les actuacions.

Les resolucions que posen fi a la via administrativa seran immediatament executives.

Article 109. Mesures urgents i provisionals

1. Abans de la iniciació del procediment sancionador, l'òrgan competent podrà, d'ofici o a instàncies de part, adoptar les mesures que corresponguen, en els casos d'urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats. Estes hauran de ser confirmades, modificades o deixades sense efecte per mitjà de l'acord d'iniciació del referit procediment, que haurà d'efectuar-se dins dels trenta dies següents a la seua adopció, i que podrà ser objecte del recurs que procedisca.

2. Així mateix, iniciat el procediment sancionador, l'òrgan competent per a imposar la sanció corresponent podrà adoptar, d'ofici o a instàncies de part, les mesures provisionals que crega oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que poguera dictar i el bon fi del procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció, i garantir les exigències dels interessos generals.

3. En qualsevol cas, les mesures provisionals quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment en el termini assenyalat o quan l'acord d'iniciació no continga un pronunciament exprés sobre estes.

4. Les mesures de caràcter provisional, que hauran de ser proporcionals quant a la seua intensitat i condicions als objectius que es pretenen garantir, podran consistir en la suspensió temporal d'activitats i la prestació de fiances, en la clausura temporal de les infraestructures afectades, en la retirada de material rodador o en la suspensió temporal de servicis per raons de sanitat, higiene o seguretat.

En cap cas es podran adoptar mesures provisionals que puguen causar perjudici de difícil o impossible reparació als interessats o que impliquen violació de drets emparats per esta llei.

5. Les mesures provisionals podran ser deixades sense efecte o modificades durant la tramitació del procediment sancionador, d'ofici o a instàncies de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seua adopció.

En qualsevol cas, s'extingiran amb l'eficàcia de la resolució que pose fi al procediment sancionador.

Article 110. Coordinació administrativa i acció subsidiària de la Generalitat

1. Les administracions i entitats competents en l'aplicació del règim sancionador a la Comunitat Valenciana mantindran un registre comú de les sancions fermes en via administrativa només als efectes del desenvolupament de les seues pròpies competències, i, si és el cas, per a l'aplicació dels agreujants per reiteració previstos en la present llei i els altres punts que siguen convenients de cara a la instrucció dels expedients.

2. En aquells casos en què la conselleria competent en matèria de transports tinguera coneixement de la possible existència de fets que

4. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de quince días, desde la notificación, para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, ante la persona encargada de instruir el procedimiento sancionador, quien, a la vista de las alegaciones y documentos presentados, emitirá informe y remitirá lo actuado al órgano competente para la imposición de la sanción que corresponda.

5. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento que, en todo caso, deberán tener lugar en un plazo no superior a quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las mismas.

6. En el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta de resolución y de los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento, el órgano competente para resolver dictará resolución motivada, que deberá ser notificada a los interesados.

Si transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento sancionador no se hubiere notificado a los interesados la resolución que le ponga fin, se producirá su caducidad. En tal caso, el órgano competente para resolver emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y que se ha procedido al archivo de las actuaciones.

Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas.

Artículo 109. Medidas urgentes y provisionales

1. Antes de la iniciación del procedimiento sancionador, el órgano competente podrá, de oficio o a instancia de parte, adoptar las medidas que correspondan, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados. Estas deberán ser confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto mediante el acuerdo de iniciación del referido procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a su adopción, y que podrá ser objeto del recurso que proceda.

2. Asimismo, iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para imponer la sanción correspondiente podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, y garantizar las exigencias de los intereses generales.

3. En todo caso, las medidas provisionales quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo señalado o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

4. Las medidas de carácter provisional, que deberán ser proporcionales en cuanto a su intensidad y condiciones a los objetivos que se pretenden garantizar, podrán consistir en la suspensión temporal de actividades y la prestación de fianzas, en la clausura temporal de las infraestructuras afectadas, en la retirada de material rodante o en la suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.

En ningún caso se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por esta ley.

5. Las medidas provisionales podrán ser dejadas sin efecto o modificadas durante la tramitación del procedimiento sancionador, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador.

Artículo 110. Coordinación administrativa y acción subsidiaria de la Generalitat

1. Las administraciones y entidades competentes en la aplicación del régimen sancionador en la Comunitat Valenciana mantendrán un registro común de las sanciones firmes en via administrativa a los solos efectos del desarrollo de sus propias competencias, y en su caso para la aplicación de los agravantes por reiteración previstos en la presente ley y los demás extremos que resulten convenientes para la instrucción de los expedientes.

2. En aquellos casos en los que la conselleria competente en materia de transportes tuviera conocimiento de la posible existencia de hechos

pogueren ser constitutius d'infraccions greus o molt greus, requerirà l'entitat competent perquè iniciï l'expedient en el termini de sis mesos, transcorreguts els quals iniciarà la seua tramitació de manera subsidiària, i incloure-hi, si és el cas, la imposició de la sanció corresponent i la resta d'efectes que establix esta llei. En el supòsit esmentat el personal de l'entitat o l'administració a què haguera correspost la instrucció de l'expedient haurà de facilitar tota la informació que siga requerida, i en cas contrari es podrà incórrer en les responsabilitats que corresponguen. El termini de sis mesos assenyalats anteriorment es descomptarà de l'aplicable a l'efecte de prescripció.

Article 111. Prescripció

1. Les infraccions regulades en esta llei prescriuran: les molt greus als tres anys, les greus als dos anys, i les lleus a l'any.

El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar des del dia en què la infracció s'haguera comès. Interrumpirà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment sancionador. El termini de prescripció tornarà a córrer si l'expedient sancionador estiguera paratitzat durant més de tres mesos per causa no imputable al presumpte responsable.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys, i les imposades per faltes lleus a l'any.

El termini de prescripció de les sancions començarà a computar des de l'endemà d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interrumpirà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i tornarà a córrer el termini si aquell està paratitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera. Canvi de denominació de l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana

1. A partir de la data d'entrada en vigor d'esta llei, l'Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana passa a denominar-se Agència Valenciana de Mobilitat.

2. Les funcions que en matèria de servicis públics de transport s'assignen a cada una de les direccions tècniques de l'entitat esmentada en la seua normativa de constitució s'entenen esteses als corresponents àmbits provincials.

3. En el termini d'un any es produirà el trasllat a l'òrgan mencionat dels expedients administratius que, en matèria de servicis regulars de viatgers, desenvolupen els servicis propis de la Generalitat, corresponent a estos servicis fins a la data mencionada la seua tramitació.

Segona. Adscripció d'infraestructures a l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat

1. S'adscriuen a l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat la totalitat de les obres d'infraestructures de transport que es troben en execució per part de la Generalitat i els sols en què es desenvolupen, i s'entenen com a tals aquelles en què conclouga la tramitació administrativa dels corresponents expedients de construcció després de l'entrada en vigor d'esta llei.

2. Des del moment d'entrada en vigor d'esta llei, l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat exercirà en estos trams la totalitat de competències demaniales i patrimonials, així com les relatives al règim de compatibilitat amb l'entorn. La resta de les funcions que li corresponguen s'exerciran després de la conclusió de les obres i abans de la seua posada en servicis.

3. En el termini de dos anys, i per mitjà del corresponent catàleg aprovat per orde del conseller competent en matèria de transports, es procedirà a l'adscripció, a l'efecte de la seua administració, i, si és el cas, al canvi de titularitat, de la resta de trams del sistema de transport de la Comunitat Valenciana, excepte en aquells en què per raó d'interés públic s'establisca excepcionalment una altra fórmula de gestió.

que pudieran ser constitutivos de infracciones graves o muy graves, requerirá a la entidad competente para que inicie el expediente en el plazo de seis meses, transcurridos los cuales iniciará su tramitación de manera subsidiaria, incluyendo en su caso la imposición de la sanción correspondiente y demás efectos previstos en esta ley. En dicho supuesto el personal de la entidad o administración a la que hubiera correspondido la instrucción del expediente deberá facilitar toda la información que sea requerida, pudiendo en caso contrario incurrir en las responsabilidades que correspondan. El plazo de seis meses antes señalado se descontará del aplicable a los efectos de prescripción.

Artículo 111. Prescripción

1. Las infracciones reguladas en esta ley prescribirán: las muy graves a los tres años, las graves a los dos años, y las leves al año.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. El plazo de prescripción volverá a correr si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de tres meses por causa no imputable al presunto responsable.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiriera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a correr el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Cambio de denominación de la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana

1. A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana pasa a denominarse Agencia Valenciana de Movilidad.

2. Las funciones que en materia de servicios públicos de transporte se asignan a cada una de las direcciones técnicas de dicha entidad en su normativa de constitución se entienden extendidas a los correspondientes ámbitos provinciales.

3. En el plazo de un año se producirá el traslado a dicho órgano de los expedientes administrativos que, en materia de servicios regulares de viajeros, desarrollan los servicios propios de la Generalitat, correspondiendo a tales servicios hasta dicha fecha su tramitación.

Segunda. Adscripción de infraestructuras al Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat

1. Se adscriben al Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat la totalidad de las obras de infraestructuras de transporte que se encuentren en ejecución por parte de la Generalitat y los suelos en las que se desarrollen, entendiéndose como tales aquellas en las que concluya la tramitación administrativa de los correspondientes expedientes de construcción con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

2. Desde el momento de entrada en vigor de esta ley, el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat ejercerá en tales tramos la totalidad de competencias demaniales y patrimoniales, así como las relativas al régimen de compatibilidad con el entorno. El resto de las funciones que le correspondan se ejercerán tras la conclusión de las obras y antes de su puesta en servicio.

3. En el plazo de dos años, y mediante el correspondiente catálogo aprobado por orden del conseller competente en materia de transportes, se procederá a la adscripción, a los efectos de su administración, y en su caso al cambio de titularidad, del resto de tramos del sistema de transporte de la Comunitat Valenciana, salvo en aquellos en que por razón de interés público se establezca excepcionalmente otra fórmula de gestión.

Tercera. Constitució del Fòrum de Mobilitat de la Comunitat Valenciana

En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'esta llei es constituirà el Fòrum de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Quarta. Regulació dels centres d'atenció al públic en els serveis de taxi

En el termini màxim d'un any, i mitjançant una orde del conseller competent en transport, es regularan els centres d'atenció al públic en els serveis de taxi, i es fixarà en la norma mencionada el termini a partir del qual les centrals de telefonada preexistents s'han d'adequar a la nova normativa.

Cinquena. Aplicació de la llei al sistema viari de la Comunitat Valenciana

El que estableixen les seccions primera i segona del capítol II del títol III de la present llei s'aplicarà a la xarxa bàsica i local del sistema viari de la Comunitat Valenciana inclòs en l'àmbit de la Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat, de Carreteres de la Comunitat Valenciana, en la mesura que no s'opose al que estableix esta.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Plans de mobilitat en actuacions iniciades

1. No serà obligatòria la formulació de plans de mobilitat junt amb els plans generals quan estos ja hagen iniciat el tràmit d'informació pública, amb independència de la necessitat de la seua incorporació ulterior en els supòsits que estableix esta llei.

2. No serà obligatòria la formulació de plans de mobilitat en les implantacions rellevants d'usos residencials que disposen de pla parcial sotmés a informació pública o en una fase ulterior de tramitació, ni en aquelles activitats que, en la data d'entrada en vigor, ja hagen sol·licitat la llicència corresponent.

Segona. Concessions vigents de serveis públics regulars

1. Els serveis públics regulars per carretera prestats per mitjà de concessió administrativa vigent a l'entrada en vigor d'esta llei continuaran mantenint-ne la vigència fins al final del termini de la concessió mencionada.

2. En el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor de la present llei, l'administració competent nomenarà el director de la concessió i en el mateix termini es formularà el document de condicions concretes de prestació del servei de transports on s'arregleran les característiques de la prestació que en el moment mencionat corresponga d'acord amb les autoritzacions donades en este sentit per l'administració concedent.

3. En aquells casos en què la prestació dels serveis de transport s'haja d'efectuar amb compensació econòmica de l'administració, el contracte de concessió de servei públic regular de viatgers es transformarà en un contracte de servei públic de transports dels que estableix esta llei, sense que això altere ni els drets i les obligacions prèviament existents, ni el termini concessional, ni cap dels altres elements substancials de la concessió primitiva.

Tercera. Autoritzacions de taxi

1. En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor de la present llei, els municipis menors de 20.000 habitants que no estiguen integrats en una àrea de prestació conjunta del servei de taxi traslladaran a l'Agència Valenciana de Mobilitat la totalitat dels expedients corresponents a les llicències de taxi existents. Una vegada rebuts estos expedients, l'Agència Valenciana de Mobilitat exercirà les competències que en esta llei se li assignen.

2. En ocasió del tràmit de visat de l'autorització VT, se substituirà la llicència de taxi atorgada pels ajuntaments a què es refereix el punt anterior per autoritzacions de conformitat amb la present llei. Fins a la data esmentada la llicència preexistent habilitarà a tots els efectes per a la prestació del servei de taxi.

3. Fins que no es regule un altre procediment distint, per a la creació de les àrees de prestació conjunta s'aplicarà el que estableix el Decret

Tercera. Constitució del Foro de Movilidad de la Comunitat Valenciana

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley se constituirá el Foro de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

Quarta. Regulación de los centros de atención al público en los servicios de taxi

En el plazo máximo de un año, y mediante orden del conseller competente en transporte, se regularán los centros de atención al público en los servicios de taxi, fijándose en dicha norma el plazo a partir del cual las centrales de llamada preexistentes deben adecuarse a la nueva normativa.

Quinta. Aplicación de la ley al sistema viario de la Comunitat Valenciana

Lo dispuesto en las secciones primera y segunda del capítulo II del título III de la presente ley será de aplicación a la Red Básica y Local del sistema viario de la Comunitat Valenciana incluido en el ámbito de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, en la medida que no se oponga a lo establecido en la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Planes de movilidad en actuaciones iniciadas

1. No será obligatoria la formulación de planes de movilidad junto con los planes generales cuando éstos ya hayan iniciado el trámite de información pública, con independencia de la necesidad de su incorporación ulterior en los supuestos previstos en esta ley.

2. No será obligatoria la formulación de planes de movilidad en las implantaciones relevantes de usos residenciales que cuenten con plan parcial sometido a información pública o en una fase ulterior de tramitación, ni en aquellas actividades que en la fecha de entrada en vigor ya hayan solicitado la correspondiente licencia.

Segunda. Concesiones vigentes de servicios públicos regulares

1. Los servicios públicos regulares por carretera prestados mediante concesión administrativa vigente a la entrada en vigor de esta ley seguirán manteniendo su vigencia hasta el final del plazo de dicha concesión.

2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la administración competente nombrará el director de la concesión y en el mismo plazo se formulará el documento de condiciones concretas de prestación del servicio de transportes recogiendo las características de la prestación que en dicho momento corresponda de acuerdo con las autorizaciones dadas en tal sentido por la administración concedente.

3. En aquellos casos en los que la prestación de los servicios de transporte deba efectuarse con compensación económica de la administración, el contrato de concesión de servicio público regular de viajeros se transformará en un contrato de servicio público de transportes de los previstos en esta ley, sin que ello altere ni los derechos y obligaciones previamente existentes, ni el plazo concessional, ni ninguno de los otros elementos sustanciales de la concesión primitiva.

Tercera. Autorizaciones de taxi

1. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, los municipios de menos de 20.000 habitantes que no estén integrados en una área de prestación conjunta del servicio de taxi trasladarán a la Agencia Valenciana de Movilidad la totalidad de los expedientes correspondientes a las licencias de taxi existentes. Una vez recibidos tales expedientes, la Agencia Valenciana de Movilidad ejercerá las competencias que en esta ley se le asignan.

2. Con ocasión del trámite de visado de la autorización VT, se sustituirá la licencia de taxi otorgada por los ayuntamientos a que se refiere el punto anterior por autorizaciones conformes a la presente ley. Hasta dicha fecha la licencia preexistente habilitará a todos los efectos para la prestación del servicio de taxi.

3. En tanto no se regule otro procedimiento distinto, para la creación de las áreas de prestación conjunta será de aplicación lo dispuesto por

18/1985, de 23 de febrer, del Consell, en tot el que no s'opose al que establix esta llei.

4. Mentre no es desenvolupen reglamentàriament els requisits i la forma d'obtenció de la capacitat professional, el carnet del taxi serà considerat com a tal als efectes oportuns.

5. Els expedients instruits per a l'atorgament de les autoritzacions que es troben en fase de tramitació a l'entrada en vigor de la present llei s'hauran d'ajustar al que establix esta.

6. El nombre total d'autoritzacions o de llicències de les persones titulars de més d'una autorització o llicència existents a l'entrada en vigor d'esta llei computaran a l'efecte dels límits establits en l'article 46.

Quarta. Expedients iniciats en matèria d'infraestructures i autoritzacions

1. Els expedients en matèria d'infraestructures, zones de reserva i, si és el cas, la seua corresponent ordenació, la tramitació dels quals estiga iniciada en la data d'entrada en vigor d'esta llei, culminaran la seua tramitació d'acord amb el que establix esta.

2. Les autoritzacions concedides en les zones de domini públic i protecció no caducades abans de l'entrada en vigor d'esta llei s'entendran plenament vigents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions d'inferior o del mateix rang que s'oposen al que establix la present disposició. Supletòriament, i fins a l'entrada en vigor del reglament de desplegament d'esta llei, s'aplicaran la resta de disposicions aplicables en matèria de mobilitat, mentre no s'oposen a la present llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa

Es faculta al Consell per a dictar les disposicions reglamentàries i les normes tècniques per al desenvolupament i l'aplicació d'esta llei.

Segona. Entrada en vigor

Esta llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 1 d'abril de 2011

El president de la generalitat
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

el Decreto 18/1985, de 23 de febrero, del Consell, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en esta ley.

4. En tanto en cuanto no se desarrollen reglamentariamente los requisitos y forma de obtención de la capacitación profesional, el carnet del taxi será considerado como tal a los efectos oportunos.

5. Los expedientes instruidos para el otorgamiento de las autorizaciones que se encuentren en fase de tramitación a la entrada en vigor de la presente ley deberán ajustarse a lo dispuesto en la misma.

6. El número total de autorizaciones o licencias de las personas titulares de más de una autorización o licencia existentes a la entrada en vigor de esta ley computarán a los efectos de los límites establecidos en el artículo 46.

Cuarta. Expedientes iniciados en materia de infraestructuras y autorizaciones

1. Los expedientes en materia de infraestructuras, zonas de reserva y, en su caso, su correspondiente ordenación, cuya tramitación se encuentre iniciada a la fecha de entrada en vigor de esta ley, culminarán su tramitación de acuerdo con lo previsto en la misma.

2. Las autorizaciones concedidas en las zonas de dominio público y protección no caducadas antes de la entrada en vigor de esta ley se entenderán plenamente vigentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo dispuesto en la presente disposición. Supletoriamente, y hasta la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de esta ley, se aplicarán las restantes disposiciones aplicables en materia de movilidad, en tanto no se opongan a la presente ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa

Se faculta al Consell para dictar las disposiciones reglamentarias y las normas técnicas para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Segunda. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*.

Por tanto, ordene que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta ley.

Valencia, 1 de abril de 2011

El president de la generalitat
FRANCISCO CAMPS ORTIZ